Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

Boletín



Versión pública de las recomendaciones emitidas en 2015

Mayo - Agosto

2015

Índice

Presentación 1
Recomendación 9 2
Recomendación 10 59
Recomendación 11 84
Recomendación 12 101
Recomendación 13 118
Recomendación 14 151
Recomendación 15 180
Recomendación 16 218
Recomendación 17 270
Recomendación 18 293
Recomendación 19 314
Recomendación 20 354
Recomendación 21 374

Presentación

Ponemos a la opinión pública la versión electrónica de nuestro órgano oficial de difusión del "Boletín de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas", concentrando íntegramente las Recomendaciones emitidas dentro del periodo Mayo-Agosto del presente año, dicha resoluciones se dirigieron a diversas autoridades que por acción u omisión transgredieron derechos humanos de particulares y cuyas bases se cimentaron mediante evidencias obtenidas en el desempeño de sus funciones o que constaron de manera fehaciente en los expediente de queja respectivos, Recomendaciones con fundamentos jurídicamente sólidos desde una perspectiva del derecho interno y a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado Mexicano.

Las Recomendaciones comprendidas dentro del referido periodo representan un efecto de la atribución de este Organismo para procurar la defensa de los derechos humanos por parte de todas las autoridades y servidores públicos que actúen en el ámbito del Estado donde éste tiene el deber de restablecer, si es posible, los derechos conculcados y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones a los derechos humanos de los particulares que fueron víctimas de actos irregulares, ilegales, infundados, etcétera.

Resulta importante enfatizar que este compendio representa la esencia y naturaleza de los derechos humanos donde la dignidad es el eje rector de los derechos humanos dentro de cualquier sociedad democrática y libre, el respeto de ésta no sólo representa la abstención del Estado de efectuar conductas que vulneren derechos fundamentales, sino que también tiene la obligación de establecer medidas para proteger a los individuos de conductas ejercidas por particulares o servidores públicos en detrimento a éstos derechos garantizando su libre y pleno ejercicio por mandato constitucional.

Así pues, el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En consecuencia, deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Queja núm.: 197/2013
Quejoso: ******
Resolución: Recomendación**:** 09/2015

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil quince.

Visto para resolver en definitiva el expediente de queja al rubro citado, promovido por el **C. ******,**en representación de su hijo ******, quien denunció actos presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a Elementos de la Policía Estatal y Policía Ministerial del Estado, autoridades con residencia en esta ciudad, los cuales fueron calificados como Violación del **Derecho a la Integridad Personal, Derecho a la Privacidad, Derecho a la Libertad Personal** y **Derecho a la Propiedad;** una vez agotado nuestro procedimiento este Organismo procede a emitir la siguiente resolución tomando en consideración los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, recepcionó el día 22 de noviembre del 2013, la queja por comparecencia presentada por el **C. ******,** quien denunció:

> *"[…]Que el día de hoy 22 de noviembre del presente año, aproximadamente a las 11:30 horas, yo me encontraba en mi domicilio señalado líneas atrás, acompañado de mi hijo ******, de 26 años de edad, así mismo se encontraba mi esposa ****** y mi nieta de nombre ******, nos encontrábamos almorzando, terminando de tomar sus alimentos mi hijo se levantó y manifestó que acudiría a ver a su esposa, quien vive a unos metros de mi domicilio, al pasar unos minutos mi hijo regresó corriendo y metió a rastras a mi domicilio, escuchando yo momentos antes 3 o 4 detonaciones de arma de fuego, ante esa situación yo ayudé a mi hijo para que se refugiara y yo procedí a esconderme para refugiarme de los disparos, de la parte de afuera de mi domicilio se escucharon gritos diciendo que saliera o que iban a ingresar y que lo iban a sacar, sin mencionar nombres, solo decían que sacaran al muchacho, yo salí de donde me encontraba y observé que en la calle había muchos agentes de la Policía Ministerial del Estado, así como elementos del Ejército Mexicano, y elementos de la Policía Estatal, yo pregunté que porque le habían disparado a mi hijo y que*

había hecho, y no recordando si fue un elemento del ejército o un policía estatal, me respondió que mi hijo se había bajado de una camioneta blanca que estaba ahí abandonada, sin pedirme permiso un agente de la Policía Ministerial ingresó a mi propiedad y del piso recogió aproximadamente 3 casquillos y se salió, después escuché que elementos de las corporaciones antes mencionadas, le gritaban a mi nieta que sacara al muchacho o que se iban a meter por él, al no haber respuesta, todos se metieron a mi domicilio y como no lo encontraron ahí, ya que por temor mi hijo se había ido a otros domicilios de los vecinos, los policías se fueron hasta donde se encontraba y lo sacaron a golpes, pegándole con pies y manos en diferentes partes del cuerpo, observando que mi hijo se encontraba sangrando de la frente, de un brazo, así como de la pierna, observando además que elementos de la Policía Estatal lo traían sujetando y ellos lo subieron a una patrulla, la cual no alcancé a ver que corporación pertenecía, así como tampoco las placas o el número económico, retirándose del lugar, ante esa situación el suscrito me dirigí a este Organismo [...]"

2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo cual se admitió a trámite, radicándose bajo número 197/2013, y se acordó solicitar a la autoridad señalada como responsable, un informe relacionado con los hechos materia de la presente queja.

3. Mediante oficio número PME 0061, de fecha 11 de diciembre del 2013, el Lic. ******, Comandante de la Policía Ministerial del Estado, informó:

*"[…]que NO SON CIERTOS los hechos que se les imputan a los Agentes de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en esta ciudad capital, por parte del referido quejoso el C. ******, en agravio de su hijo ******. Sobre el particular, me permito informar a usted que haciendo una búsqueda en la base de datos y libros de esta corporación y en la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador en esta ciudad en turno, en el momento de los presentes hechos, no se encontró ningún registro en donde haya sido detenido el C. ******, y en ningún momento algún elemento lo detuvo, ni lo lesionó, ni hubo allanamiento de morada ni mucho menos daño en propiedad [...]"*

4. De igual manera se recibió oficio 007314, de fecha 30 de diciembre de 2014 proveniente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado en el cual se informa:

"…me permito informar a Usted, que no son ciertos los actos denunciados en la queja antes mencionado, ya que las acciones realizadas por los integrantes de la Policía Estatal Acreditable fueron apegadas a derecho, tal y como se aprecia en los documentos que se anexan al presente.

4.1 Así mismo, a través del oficio anteriormente mencionado, el Lic. ******, Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, remitió el parte informativo rendido al Agente ****** del Ministerio Público Investigador de esta ciudad, por los Agentes de la Policía Estatal Acreditable, el cual consiste en:

*"[…] Por medio del presente, nos permitimos hacer de su conocimiento de hechos probablemente constitutivos de delito, ocurridos en esta ciudad el día de hoy, ya que al estar realizando nuestros servicios de vigilancia, a bordo de las unidades de la Policía Estatal, se recibió una llamada del Centro de Análisis haciéndonos del conocimiento que unas personas del sexo masculino estaban sacando cosas de un domicilio, al parecer abandonado, y subiéndolas a una camioneta CARAVAN color blanca, con placas extranjeras, llamada que fue realizada por el velador del Fraccionamiento Lomas de Guadalupe, y que dichos actos se estaban cometiendo exactamente en el domicilio ubicado en ******. Una vez que se recibió dicho reporte, procedimos a trasladarnos al fraccionamiento ******, con la finalidad de verificar los datos reportados, logrando ubicar la camioneta en la Avenida Española, a la altura de las oficinas de SEDESOL, comenzando a darle seguimiento discreto, logrando identificar que a bordo de la misma efectivamente se encontraban dos personas del sexo masculino, quienes comenzaron a circular por varias calles y avenidas aledañas de la colonia unidad modelo; y es el caso que al circular por la calle Doctores de dicha colonia, arribaron más elementos policiales en apoyo, por lo que se procedió a marcarles el alto, haciendo caso omiso y emprendieron la huida, abandonando el vehículo en el que circulaban exactamente en la esquina que hacen las calles Bachilleres y Doctores de la colonia Unidad Modelo. Acto seguido los elementos de la Policía Estatal Acreditable procedimos a darles persecución vía terrestre, logrando darle alcance a uno de ellos a escasos diez metros del vehículo del cual habían descendido en la acera de la calle Bachilleres, persona que fue detenida por el Policía "A" ******, mismo que manifestó llamarse ******, quien venía manejando la unidad; al mismo tiempo la segunda persona que descendió de la camioneta corrió hacia la siguiente esquina, brincándose la barda de una casa, y huyendo por las azoteas, el cual, fue alcanzado por el Policía "A" ******, persona que responde al nombre de ******. Por tal motivo, y al estar ante una probable conducta delictiva cometida los dos sujetos antes mencionados, se procedió a detenerlos para hacer la puesta a*

*disposición ante la autoridad ministerial correspondiente. Por lo que en este acto dejamos a su disposición a quienes dijeron llamarse ****** de 33 años de edad y ****** de 40 años de edad. UNA CAMIONETA MARCA DODGE TIPO CARAVAN VOYAGUER, COLOR BLANCA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN ******, PARTICULARES DEL ESTADO DE TEXAS, ESTADOS UNIDOS Y CON NÚMERO DE SERIE ****** [...]"*

5. La información rendida por las autoridades presuntamente responsables fue notificada al quejos para que expresara lo que a su interés convenga, y por considerar necesario, mediante acuerdo de fecha 15 de enero del presente año, y con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a esta Institución, se declaró la apertura de un periodo probatorio por el plazo de diez días hábiles.

6. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron las siguientes probanzas:

6.1. Pruebas aportadas por la autoridad:

6.1.1. Oficio número 000129, de fecha 25 de febrero del presente año, mediante el cual la Lic. ******, Directora de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, le informa al Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública, el inicio del procedimiento administrativo de investigación ******, derivado de la denuncia que presentara el C. ******.

6.1.2. Mediante oficio 1171, del 3 de marzo del presente año, el Lic. ******, Agente ****** del Ministerio Público Investigador de esta ciudad, remitió copia certificada de todo lo actuado dentro de la Averiguación Previa número ******, instruida en contra de los CC. ******y******, en la que se emitió acuerdo de reserva de fecha 7 de enero del 2014, ya que los datos son insuficientes para acreditar el cuerpo del delito de robo.

6.1.3. Mediante oficio 000152/2014, fechado el 28 de febrero del 2014, el Lic. ******, Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó que se radicó el procedimiento administrativo número ******, en contra de los CC. ******, ******, ******y******, Policías "A" adscrito a la Dirección de Investigaciones.

6.1.4. Oficio 000100/SSP/CDP/DIR/14, de fecha 3 de marzo del presente año, firmado por la Lic. ******, Secretaria del Consejo de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual remitió copia

certificada de lo actuado dentro del procedimiento administrativo ******, iniciado en contra de ******, ******, ****** y ******, Policías "A" adscritos a la Dirección de Investigaciones, dependientes de la Coordinación General de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable.

6.1.5. A través del Oficio 772/2014, fechado el 6 de marzo del año en curso, el Lic. ******, Agente ****** del Ministerio Público Investigador de esta ciudad, remitió copia certificada de las actuaciones de la Averiguación Previa Penal ******, por el delito de LESIONES Y EL QUE RESULTE en contra de ******, ****** y ******, Elementos de la Policía Estatal Acreditable, en agravio de ****** y ******.

6.2. Pruebas obtenidas por este Organismo:

6.2.1.Constancia elaborada por personal de este Organismo en fecha 22 de noviembre del 2013, en la que se asentó, que se puso a la vista al C. ******, el libro en el que aparecen las fotografías, nombre y cargos de los Agentes de la Policía Ministerial del Estado, identificando al C. ******, quien aparece con el cargo de Comandante, y quien fue uno de los elementos que se presentó en su domicilio, ingresando al mismo y recogió los casquillos.

6.2.2. Declaración informativa recabada ala menor ******, quien manifestó:

> *"[…]Que el día de hoy 22 de noviembre del presente año, siendo aproximadamente las 11:55 horas, yo me encontraba en mi domicilio, antes descrito, en compañía de mi abuelita de nombre ****** y mi abuelito ****** y mi papá ******, y acabábamos de almorzar, y mi papá fue por una hermanita al kínder y en un lapso de 5 a 10 minutos se escucharon gritos y después balazos en la calle, posteriormente observé a mi papá que venía corriendo y detrás de él venía una persona que traía puesto un chaleco negro con unas iníciales en la espalda, camisa blanca, cachucha con una estrella, pantalón de mezclilla, armado* ***a quien identifico como una persona que le disparó varias veces a mi papá****, incrustándose algunas de las balas en el sillón de la sala, en el corredor de la casa y de algunos objetos que estaban en el patio, metiéndose mi papá al corredor logrando meterse hasta la casa y ya estaba herido de una pierna, el supuesto oficial me gritaba que sacara a mi papá a la chingada, que si no se iban a meter por él, yo le contesté al sujeto que me metería para hablarle a mi papá, pero cuando volví a salir ya se habían introducido varios oficiales vestidos como la persona que le disparó a mi papá, también armados, quienes recogieron todos los casquillos de las balas que habían disparado, y trasculcaron los dos closets y toda la*

casa, al momento llegaron federales y soldados quienes agarraron a mi papá, y lo sacaron los federales, quienes lo golpearon y lo subieron a una patrulla de la policía estatal, al parecer era la 0403 […]".

6.2.3. Declaración informativa de fecha 22 de noviembre del 2013, recabada a la C. ******, quien señaló lo siguiente:

*"[…] que el día de hoy aproximadamente a las 12:30 la suscrita me dirigía a mi domicilio caminando y antes de llegar a la esquina de la calle observé que el joven ****** iba saliendo de su domicilio, observando a tres personas que se bajaron de unos vehículos particulares, ya que no traían logotipo de ninguna corporación policial, siendo estos un carro blanco y otro también blanco pero con unas franjas de color gris, los cuales se dirigieron al muchacho con palabras altisonantes, diciéndole "con que aquí andas", por lo que la suscrita seguí caminando y escuché que uno de ellos dijo que le dispararan, escuchando tres disparos, y ya luego observé que el muchacho se iba arrastrando a su domicilio; quiero señalar que no pasaron ni diez minutos cuando ya estaba lleno de policías el lugar, tanto militares, como ministeriales y policías estatales, de igual forma, las personas que le dispararon al joven****** continuaron en el lugar, de hecho estaban sobre el portón de la casa de ******, así como los vehículos ahí estaban estacionados afuera de dicho domicilio. También observé que muchos policías se metieron a la casa de ****** y me percaté que los policías estatales fueron los que sacaron al muchacho herido y se lo llevaron en una patrulla. Deseo manifestar que yo acababa de salir de mi domicilio ya que iba a la tienda Su Bodega, a comprar un jabón, y no me tardé casi nada porque dicha tienda está como a dos cuadras y media del domicilio del joven que refiero, y cuando iba a la tienda observé que había cuatro camionetas de soldados por la calle Bachilleres estacionados a una cuadra y media aproximadamente de la casa de ******, sin saber qué estaban haciendo, y hasta les pregunté si podía pasar y me manifestaron que sí, y ya de regreso sucedieron los hechos que acabo de narrar […]".*

6.2.4. Declaración informativa recabada a la C. ******, quien en relación a los hechos señaló:

*"[…] Que el día de hoy 22 de noviembre del año que transcurre, aproximadamente a las 11:00 horas, me encontraba en mi domicilio acompañada de mi esposo ******, ****** y mi nieta ******, levantándose mi hijo y manifestando que en un momento regresaba, al paso de unos minutos se escuchó un ruido y salimos a ver que sucedía, observando a mi hijo que presentaba una lesión en la pierna y diciendo mi hijo que*

ya le habían dado, yo les dije a mis familiares que se metieran a la casa para refugiarse, al paso de unos 5 minutos salía ver que sucedía, llegando hasta la puerta de mi domicilio y observando a elementos de la policía, desconociendo a qué corporación pertenecía, pero andaban vestidos de azul, yo les pregunté que porque le habían disparado a mi hijo, respondiéndome dichos elementos que porque se había bajado de una camioneta, a lo que yo les dije que eso no era posible ya que mi hijo iba saliendo ya que acababa de terminar de almorzar, y me pedían que lo entregara yo les dije a mi nieta que fuera a buscar a su papá para entregarlo, regresando y diciéndome que no estaba, y que lo tenían en la calle detenido, observando que lo subieron a una camioneta los policías vestidos de azul desconociendo la corporación, después que se retiraron con mi hijo observé a unos elementos que andaban en el interior de nuestra propiedad, con unos perros ingresaron al terreno si solicitarle permiso a nadie, después ingresaron a la casa y revisaron el closet, así como todas nuestras pertenencias, después se salieron, mi esposo les pidió que se retiraran y se retiraron del lugar, yo le manifesté a mi esposo que había visto un casquillo tirado, respondiéndome mi esposo que si, pero se había metido un policía el cual lo había recogido y se lo había llevado, en ese momento observé que una ventana tenía el vidrio dañado. Nos salimos de la casa y regresamos al pasar de unas horas y nos encontramos dos casquillos tirados, observando en el interior del domicilio que se encontraba un orificio en la pared de la sala […]".

6.2.5. Obra constancia en autos de fecha 22 de noviembre del 2013, en la que personal de este Organismo asentó textualmente:

*"[…] Que siendo las 20:00 horas, comparece ante este Organismo la C. ******, quien refirió que su esposo ******, fue lesionado por parte de agentes de la Policía Ministerial y que a consecuencia de ello se encuentra internado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que al intentar verlo, les ha sido impedido, ya que el mismo se encuentra custodiado por parte de agentes de la Policía Ministerial, los cuales les impiden el acceso refiriendo que acudan a la Agencia ******, ya que tienen indicaciones de no dejarlos pasar; por tal motivo, intenté comunicarme a la referida Agencia Investigadora, sin embargo, nadie atendió mi llamada; así mismo, me comuniqué a la Dirección de la Policía Ministerial del Estado, con el titular el LIC. ******, a quien le solicité la intervención, a efecto de que los elementos comisionados en la custodia del C. ****** permitieran el acceso a sus familiares, a lo que informó que en esos casos la función de los elementos sería únicamente custodiar al detenido y vigilarlo para que no se dé a la fuga; que desconocía tal situación, sin embargo, se contactaría con los elementos y giraría las indicaciones necesarias a efecto de que*

*no mantuvieran incomunicado al detenido; siendo las 20:30 horas recibí llamada telefónica del Director de la Policía Ministerial, quien me comunicó que habiendo indagado respecto al asunto planteado se percató de que elementos de esa corporación no tienen asignada la custodia del C. ******, sino que, los hechos en los que resultó lesionado se suscitaron con elementos de la Policía Estatal, por lo que muy probablemente dicha corporación tendría asignada la custodia del detenido; en virtud a lo informado, siendo aproximadamente las 20:45 horas procedí a comunicarme vía telefónica a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, siendo atendida por el LIC. ******, Coordinador General de Operación Policial, a quien posterior a plantearle la inconformidad de la C. ******, informó ya haber girado instrucciones para que los elementos que tienen asignada la custodia del detenido permitan el acceso a sus familiares; así mismo, informó que aún no es puesto a disposición del Agente Primero del Ministerio Público Investigador, ya que estaban en espera de una valoración médica por parte de personal del Seguro Social, la cual al parecer está por obtenerse y por realizarse la puesta a disposición; y que por esa razón aún tienen asignada su custodia elementos de esa corporación; circunstancias que fueron informadas a la compareciente, quien vía telefónica solicitó a un familiar que se encontraba en el Seguro Social, que intentara entrar con el detenido y minutos después le informaron por el mismo medio que ya lo dejaron pasar y entrevistarse con el C. ******; por lo que la C. ******, agradeció la atención prestada; informando también que el día de hoy su suegro acudió a la Agencia Primera a intentar presentar la denuncia por las lesiones de su esposo, sin embargo, no se la recibieron; señalando que toda vez que ya es tarde el día de mañana ella intentaría interponerla y en caso de tener problema alguno comparecería de nueva cuenta ante esta Comisión […]".*

6.2.6. Constancia de fecha 16 de diciembre del 2013, elaborada por personal de este Organismo, en la cual se asentó:

*"[…] Que estando constituido en hora y fecha señalada en el domicilio del señor ******, quejoso dentro del expediente número ******, esto con el fin de que me informara donde pudiera localizar a su hijo ******, así mismo, realizar una inspección ocular donde refiere había perforaciones de arma de fuego, así como también si derivado de estos hechos interpusieron alguna denuncia penal; por lo que al entrevistarme con el señor ****** argumentó que aquí tenía a su hijo convaleciente de una herida en la pierna, lo cual me invitó a pasar a su casa, por lo que me entrevisté con el joven ******, informándome dicha persona que hasta este momento no ha acudido a interponer denuncia por temor a represalia, más sin embargo, refirió que la*

*denuncia que le fue imputada fue ante la Agencia ****** del Ministerio Público Investigador, con el número ******, que al parecer por robo domiciliario, lo cual salió por reserva de ley; así mismo refirió que también en Asuntos Internos del Complejo de Seguridad Pública Estatal también se lleva una queja en contra de los servidores públicos, lo cual identifiqué a uno de ellos por medio de la computadora de apellido Urbina; por último, hace referencia que deslinda de responsabilidad en los hechos tanto a los Agentes de la Policía Ministerial como también a los del Ejército, ya que de ellos no tiene nada que imputarle sobre los hechos que le sucedieron, ya que según él investigó los que le dispararon y realizaron las heridas que hoy presenta, así como de la detención eran agentes de la Policía Estatal de Investigación, ya que es aparte de los de operativo; por lo que se le dio vista personalmente del informe rendido por el Lic. ******, Comandante de la Policía Ministerial del Estado, de fecha 11 de diciembre del 2013, mediante oficio PME0061, así mismo, solicita que esta queja se retenga momentáneamente ya que según en la Secretaría de Seguridad lo iban a apoyar en los gastos y si ve que no le ayudan informará a este Organismo […]".*

7. Una vez concluido el periodo probatorio, el expediente quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis se desprenden las siguientes:

C O N C L U S I O N E S

I. Este Organismo es competente para conocer la queja planteada por el C. ******, por tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a servidores públicos que prestan sus servicios dentro del territorio de nuestro Estado, lo anterior en plena observancia de lo dispuesto por los numerales 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, III y IV y 28 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

II. Analizado la narración del escrito de queja presentada por el C. ******, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas en adelante identificada sólo como "la Comisión (CODHET)", desprendió la comisión de presuntas violaciones a los derechos humanos en perjuicio de su hijoel **C.******** consistentes en la vulneración de su ***derecho a la integridad personal, el derecho a la privacidad, el derecho a la propiedad y el derecho humano a libertad personal***. Posteriormente, una vez que se analizaron los hechos y todas las evidencias que obran en el Expediente N° ****** de fecha 22 de noviembre de 2013 sustanciado ante este Organismo, tiene como acreditadas las siguientes vulneraciones a los derechos fundamentales, cometidas por **elementos de la**

Policía Estatal Acreditable bajo el mando de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado:

Del C. **********;

1. Derecho humano a libertad personal
2. Derecho a la integridad personal
3. Derecho a la dignidad humana
4. Derecho a la privacidad

Del**C. ********;

1. Derecho a la privacidad
2. Derecho de propiedad

Del **C. ********;

1. Derecho humano a libertad personal
2. Derecho a la integridad personal
3. Derecho a la privacidad

Por otro lado, debe señalarse que si bien el quejoso señaló a elementos de la policía ministerial que operan bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, esta Comisión (CODHET) logro establecer elementos suficientes para no tenerla como autoridad responsable en la presente resolución, toda vez que no se encontró participación de esta tanto en la detención como en la persecución del señor ****** el 22 de noviembre de 2013.

III. En primer término se analizará las violaciones a los derechos humanos del C. ******, tomando en cuenta que todos los derechos anteriormente señalados se encuentran reconocidos en los siguientes ordenamientos jurídicos:

FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA

1. **Derecho humano a libertad personal**

EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Artículo 1o.

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 14.
[…]
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.
[…]

Artículo 16.
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
[…]
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del

Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.
[…].

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS[1]:

Artículo 9
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

[1]Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 16 de diciembre de 1966. Vinculación de México: 23 de marzo de 1976. Adhesión. Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976.

LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS[2]:

> **Artículo 7**.
> Derecho a la Libertad Personal
> 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
> 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por lasConstituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
> 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
> 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
> 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
> 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
> 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

2. Derecho a la integridad personal y 3. Derecho a la dignidad humana.

EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

[2] Conocido como: "Pacto de San José". Depositario: OEA. Lugar de adopción: San José, Costa Rica. Fecha de adopción: 22 de noviembre de 1969. Vinculación de México: 24 de marzo de 1981, adhesión. Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981.

Articulo 1
[…]
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 19.
[…]
Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

Artículo 20.
[…]
A. De los principios generales:

I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS:

Artículo 7
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Artículo 10
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;
b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.
3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los

adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS:

Artículo 5.
Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
(…)
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

4. Derecho a la privacidad

EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Artículo 6o.
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS:

Artículo 17
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS:

Artículo 11.
Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

5. Derecho a la propiedad

EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Artículo 16.
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
[…].

IV. Por lo que respecta a la vulneración del **DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL** del C. ******, esta Comisión (CODHET) estima que su tutela debe ser la más amplia posible, de acuerdo a la norma jurídica positiva que mejor la garantice, únicamente pudiéndose limitar excepcionalmente, de acuerdo a los controles de constitucionalidad y convencionalidad, es decir, a partir del estricto cumplimiento de requisitos y garantías de forma mínima a favor de la persona, ya que de lo contrario, se estará ante una detención o privación de la libertad personal prohibida.

En relación al caso concreto acontecido el 22 de noviembre de 2013y en el cual se detuvo e hirió con arma de fuego al C. ****** por parte de elementos de la Policía Estatal Acreditable, esta Comisión (CODHET) considera que si se materializa la figura de la **DETENCIÓN ILEGAL y ARBITRARIA** dado que de las constancias que obran en el expediente N° ******, se advirtieron una serie de inconsistencias en el proceder de la autoridad policial, contradicciones en sus

declaraciones rendidas ante este Organismo y otras instancias, así como otra suma de evidencias que llevan a emitir esta conclusión. Antes de esgrimir los argumentos que llevaron a la Comisión (CODHET) a realizar esta determinación se estima necesario realizar las siguientes observaciones de relevancia fundamental para este y otros casos en los que se puedan ver involucrados elementos de los cuerpos de seguridad pública estatal.

Del informe justificado que se le solicitó a la Secretaria de Seguridad Pública identificado como Oficio Número 007314 recibido el 9 de enero de 2014, la autoridad responsable (Secretaria de Seguridad Pública Estatal) le contesto a este Organismos que los actos llevados a cabo por los elementos de la Policía Estatal Acreditable no eran ciertos y expreso con toda contundencia lo siguiente:

> "[…]las acciones realizadas por los integrantes de la Policía Estatal Acreditable fueron apegadas a derecho, tal como se aprecia en los documentos que anexan" a ese escrito.

Adicionalmente a este informe, la Autoridad envió otros documentos entre los que destaca el ***Parte Informativo Policial*** rendido al C. Agente ****** Investigador del Ministerio Público del Fuero Común, en el cual se soporta el informe para afirmar que su proceder estuvo apegado a derecho. Sin embargo, esta Comisión (CODHET) advierte su poca minuciosidad e incluso su irregular elaboración respecto a los hechos acontecidos el 22 de noviembre de 2013, toda vez que en ningún momento se mencionan las causas suficientes que motivaron a los policías a concluir que podían detener a una persona por alegada flagrancia y que desencadenaron graves consecuencias tanto para el señor ****** como para el resto de su familia, ya que esta se encontraba en el interior de la casa al momento de realizar los disparos uno de los elementos policiales.

En dicho *parte informativo policial* no se hace mención del uso de armas de fuego por parte de los policías, ni de la herida causada a la hoy víctima, *produciéndole un orificio de salida en la cara anterior interna de tercio inferior del muslo derecho de forma romboidal de 9 centímetros x 8 centímetros en su ángulo superior y 10 centímetros en su ángulo inferior*, *con pérdida de piel y tejido celular subcutáneo,* lo cual se expresó en la queja del mismo 22 de noviembre presentada por el padre de la hoy víctima, a la vez que quedó asentada en el dictamen realizado por el Perito Médico Forense de este Organismo de fecha 18 de diciembre y en el informe expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social de fecha 22 de noviembre, ambos de 2013 y que obran en el expediente de queja N° ******.

Si bien es cierto que la autoridad ministerial registró en la ratificación del parte informativo policial el uso de armas de fuego y la lesión causada al señor ******, también lo es que para esta Comisión (CODEHT) se tuvo que asentaren el documento original que fue realizado por los tres policías involucrados en la detención, y no esperar a hacerlo después, sobre todo tomando en cuenta que lo que ahí se señala, referente asu participación en la detención no se modificó sustancialmente en la diligencia de ratificación del parte informativo ante la autoridad ministerial, y por lo cual esta Comisión (CODHET) no lo estima adecuado para los fines que persigue este tipo de documentos.

En este orden de ideas, la Secretaria de Seguridad Pública del Estado debe tomar en cuenta que a través de la correcta elaboración de una figura como el **Parte Informativo Policial** se cumple en buena medida con las obligaciones previstas en el artículo 1, tercer párrafo de la Constitución mexicana y que a continuación se reproduce:

> "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley".

Esto, ya que a la luz de estos informes se registran los hechos que eventualmente contribuyen a crear la ***verdad histórica*** en caso de que se lleguen a presentar procesos y/o procedimientos por violaciones de derechos humanos imputables a agentes del Estado (autoridades y/o servidores públicos). Además se tiene que entender que por principio, los órganos constitucionalmente autónomos de vigilancia, como lo es esta Comisión (CODHET), no debería enfrentar obstáculos como la postura de las autoridades consistentes en la negación automática de las acciones u omisiones presuntamente violatorios de derechos fundamentales, sin antes hacer un ejercicio previo sobre su posible responsabilidad en ellos, máxime cuando la negación automática se basa en documentos o registros de los cuales no se ha reglamentado adecuadamente y/o protocolizado su elaboración, tal es el caso de los ***partes informativos policiales.***

Si bien la Comisión (CODHET) observa que esta figura se encuentra prevista en los artículos 52 a 53 del Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas del Estado y mencionada en el Reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública y el Reglamento del Desarrollo Policial de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, a juicio de esta resultan insuficientes tanto en su reglamentación como en su implementación

efectiva. Del caso en comento y en relación a los artículos 52 y 53 del Reglamento de las corporaciones policiales preventivas del Estado[3],se desprenden diferentes obligaciones que para esta Organismo fueron incumplidas o por su carencia de especificación provocaron omisiones, en primer término, estos artículos refieren a que los informes y partes de novedades deben estar firmados por los titulares de las corporaciones o jefes policiales, no obstante esto no se puede apreciar en el *parte informativo policial* rendido al C. Agente Primero Investigador del Ministerio Público de Fuero Común de 22 de noviembre de 2013, ya que en el solo aparecen los nombres de los tres policía involucrados en la detención, identificados como Policías Estatales Acreditables y bajo sus respectivos nombres apareciendo únicamente la denominación Policía "A". En este sentido, si bien la Comisión (CODHET) *per se* no ve mal que todos los policías involucrados directamente en la detención expresen los hechos desde su individual perspectiva y de acuerdo a su

[3]ARTÍCULO 52.- Los mandos de las corporaciones, deberán rendir diariamente a su superior, un parte de novedades en el que se detallen las acciones de vigilancia, patrullaje y cualesquiera otra de carácter policial que se hayan realizado por el personal bajo su mando. Igualmente procederán, cuando se efectúen operativos especiales, autónomos o en coordinación con otras autoridades.
Los partes de novedades deberán redactarse en máquina de escribir o en computadora, debiendo contener una relación sucinta de los hechos a que se refieren y la descripción del lugar, nombre, apellido, edad, ocupación y domicilio del o los participantes y testigos, indicando si se detuvo a persona alguna o se aseguraron objetos, documentos, armas o cualesquiera otro instrumento relacionado con los mismos; así como los demás datos que haya sido posible recabar.
Los titulares de las corporaciones, están obligados a referir en los partes de novedades, todo hecho constitutivo de delito, infracciones administrativas, violaciones al bando de policía y buen gobierno, y cualquiera otro acontecimiento, siniestro o desastre que perturbe el orden público o la seguridad de la población.
En caso de que no se haya registrado evento alguno, rendirán parte sin novedad.
ARTÍCULO 53.-
Los informes y partes de novedades que rindan los titulares de las corporaciones y demás jefes policíacos, deberán estar debidamente firmados por éstos, los cuales podrán presentarlos directamente a la superioridad o transmitirlos a través de correo electrónico o faX. En los casos de excepción, a través de teléfono o del sistema de radio comunicación, por la urgencia o la gravedad del hecho, debiendo ratificarse éstos por escrito en cuanto sea posible.

participación concreta en ellos, lo cual totalmente no ocurrió de ese modo ya que los policías lo hicieron en conjunto, lo cierto, es que en este caso no se cumple en rigor con una disposición expresa que regula su elaboración y que a la letra dispone:*"los informes y partes de novedades deberán estar firmados por los titulares de las corporaciones o jefes policíacos".* Por otro lado, se prevé que los partes informativos sean si bien "**sucintos",** también "**detallados"** con respecto a las acciones realizadas de vigilancia, patrullaje y cualquier otra de carácter policial, sin embargo, en el caso concreto esto no fue así.

No obstante estas consideraciones de relevancia fundamental para futuras actuaciones de la autoridad, estas irregularidades quedan minimizadas por los testimonios de los tres policías involucrados en la detención del 22 de noviembre de 2013y que firmaron el mencionado *parte informativo policial*(C. ******, C. ****** y C. ******), pues señalan en sus declaraciones informativas de 13 de enero de 2014 dentro del Procedimiento Administrativo ******lo siguiente:

Policía ****;**

> Por otra parte, **aunque aparece el nombre mío en el parte informativo** mediante el cual se hizo la detención de los ciudadanos ****** y ********yo no fui quien ordenó la detención de ellos**, […] después de eso ya estando en las instalaciones de este complejo **mi superior nos indicó que pasáramos para firmar la puesta a disposición la cual no realizamos ninguno de los tres que la firmamos ya que la puesta a disposición fue elaborada por uno de los licenciados de la secretaria** y **nosotros únicamente la firmamos**, la cual **después ratificamos antela Agencia del Ministerio Publico Investigador** […].

Policía ****;**

> Por otra parte, aunque aparece el nombre mí en el parte informativo mediante el cual se hizo la detención de los ciudadanos ****** y ********yo no fui quien ordenó la detención de ellos,** [….] después de eso ya estando en las instalaciones de este complejo el Director de investigaciones de la Policía Estatal dijo que como nosotros tres éramos los que habíamos ubicado primero la camioneta y llegado al lugar de los hechos que pasáramos para firmar la puesta a disposición pero esa puesta a disposición **nadie de nosotros tres la hicimos**, ya que la elaboro el licenciado Emilio de la Oficina del Secretario **y nosotros tres únicamente la firmamos, la cual después ratificamos ante la Agencia del Ministerio Público Investigador** […]

> […] aunque señalamos que nosotros accionamos nuestras armas para repeler la agresión deseo aclarar que nos referíamos en general es decir porque únicamente quien acciono el arma fue ****** y como él es parte del grupo de la Dirección de Investigaciones así se asentó, mas no significa que yo y mis compañeros […] hayamos accionado nuestras armas en contra de ****** […]
> […] aunado a ello más porque a ******__yo no lo había visto antes incluso no lo vi que anduviera arriba de la Camioneta Voyager que fue asegurada__ y puesta a disposición de la Agencia del Ministerio Publico Investigador, __como lo señale él iba pasando por el lugar de los hechos.__

Policía ****;**

> Por otra parte aunque aparece el nombre mío en el parte informativo mediante el cual se hizo la detención de los ciudadanos ****** y ******__yo no fui quien ordenó la detención de ellos,__ [….] después de eso ya estando en las instalaciones de este complejo el director de investigaciones de la Policía Estatal dijo que como nosotros tres éramos los que habíamos ubicado primero la camioneta y llegado al lugar de los hechos que pasáramos para firmar la puesta a disposición **pero esa puesta a disposición nadie de nosotros tres la hicimos,** ya que la elaboro el Licenciado ****** de la Oficina de Secretario y **nosotros tres únicamente firmamos, la cual después ratificamos ante la Agencia** del Ministerio Público, pero en la diligencia de ratificación aunque señalamos que accionamos nuestras armas para repeler la agresión deseo aclarar que nos referíamos en general […].

Es decir, estas declaraciones además de respaldar el argumento que ha venido sosteniendo la Comisión (CODHET) en cuanto a la insuficiente reglamentación, protocolización y existencia de mecanismos de supervisión efectivos para la elaboración de figuras tan importantes como los *partes informativos policiales*, revelan las graves consecuencias que puede generar la aplicación de criterios equivocados por parte de las autoridades policiales, al detener a una persona y posteriormente ponerla a disposición del Ministerio Público (una autoridad distinta) proporcionándole esta clase de informes oficiales(el cual, en el caso concreto tenía el aval de la Secretaria de Seguridad Pública)y en donde se asienta sin la más mínima conciencia y/o consideración afirmaciones que hasta ese momento son la verdad histórica que va a constituir el soporte para que otras autoridades que no tienen por qué desconfiar *per se*de ellas, van a utilizar para restringir legítimamente el derecho humano a la libertad personal.

Ahora bien, para esta Comisión (CODHET) existe una detención arbitraria e ilegal toda vez que solo de lo sostenido en el *informe justificado*(*identificado Oficio No. 0002524)* y otros documentos como el mencionado *Parte informativo policial* del 22 de noviembre de 2013 con sus vicios e irregularidades, no se logra configurar la alegada flagrancia, ya que los Policías a juicio de este Organismo no reunieron los suficientes medios de convicción toda vez que aun cuando se les reportaron vía radio hechos probablemente constitutivos del delito de robo, en ningún momento se establece que ellos tuviesen conocimiento directo de esos hechos, además se afirma que se logró ubicar la camioneta en la que supuestamente viajaban los sujetos responsables, versión que no es homogénea entre las declaraciones posteriores y las rendidas en el multicitado Parte Informativo policial. Máxime y en el entiendo que delas declaraciones realizadas ante este Organismo se establecen dudas sobre la presencia del señor ****** en los hechos descritos por el *informe policial*. En ese tenor, en las declaraciones informativas de 30 de enero y 13 de febrero de 2013 se deja claro este punto:

Policía **** (30 de enero de 2013);**

> […] donde por el radio […] escuchamos que reportaban una camioneta blanca cerrada, al parecer tipo Voyager, esa camioneta presuntamente se reportaba que estaba cometiendo robo presuntamente en una colonia, por lo que al momento de que pasábamos vimos la camioneta que al parecer se reportaba, […] ahí fue donde los esperamos que descendieran de la camioneta las personas que la tripulaban, así mismo pidiendo apoyo a nuestros compañeros del área de investigación, nosotros nos esperamos a que llegara el apoyo en un carro azul, a un costado de la calle, así mismo, observando, alrededor de unos minutos llego el apoyo unos compañeros en un carro Aveo, color gris plata, en ese momento venia una persona caminando por la banqueta, a lo que mis compañeros descendieron del vehículo y se identificaron, y le ordenaron con comandos verbales diciéndole que se detuviera, a lo que hizo caso omiso, se le siguió y fue ahí cuando un compañero de nombre ****** empezó a disparar, […].

Policía **** (30 de enero de 2013);**

> Que el 22 de noviembre del año de 2013, me encontraba realizando un recorrido de vigilancia, nos reportaron vía radio matra que una camioneta estaba robando en el fracc. ******, diciéndonos las características de la camioneta, íbamos por enfrente de SEDESOL y vimos que la camioneta iba hacia los fraccionamientos ubicados tras las oficinas de SEDESOL, y así

nosotros comenzamos a seguirlos a distancia y de manera discreta por alrededor de tiempo 30 minutos, y la camioneta se detuvo en la colonia Bertha de la Avellano,
[…] estábamos en la esquina viendo, y vimos que una persona del sexo masculino se bajó de la camioneta y se introdujo en la casa de la esquina, en eso llegaron mis compañeros y el hoy lesionado estaba por fuera de la puerta de la camioneta, y los compañeros que llegaron se bajaron del vehículo le apuntaron y le dijeron que se detuviera, pero la persona comenzó a caminar hacia tras, y uno de mis compañeros, no recuerdo quien dijo que disparara, y la persona empezó a correr hacia su casa, y en ese rato yo estaba en la esquina donde estaba parada la camioneta, y observé que mi compañero ****** disparo al hoy lesionado de 4 a 6 detonaciones, […]

Policía **** (13 de febrero de 2013);**

[…] escuchamos un llamado del Centro de Análisis donde se reportaba que se estaba llevando un robo en el Fraccionamiento ******, […] dichas personas tripulaban una camioneta Voyaguer blanca, con placas de circulación americanas y en el parabrisas trasero teníaun signo de venta, con un numero de celular, a lo cual nos dirigimos y exactamente frente a las oficinas de SEDESOL logramos observar dicha camioneta que contaba con la características, […] y cuando se dirigía hacia la colonia Bertha Del Avellano, donde les seguimos, para posteriormente estacionarse donde ahora se es el domicilio de una de las personas que venían manejando este vehículo, donde descendió y se introdujo a su domicilio, posteriormente pedimos el apoyo a nuestra unidad de investigación […].
[…] posteriormente unos compañeros que se transportaban en un vehículo de marca Aveodonde descendió ****** para cuestionar al joven y así poder revisarlo, donde anteriormente se identificó como Policía Estatal Acreditable, dicha persona hizo caso omiso y se echó a correr para posteriormente accionar su arma sobre esta persona donde yo y mi compañero solamente participamos en el seguimiento de la camioneta Voyaguer blanca, donde nos retiramos 20 minutos después del evento […].

Es decir, a través de estas declaraciones podemos observarun cambio respecto a las afirmaciones categóricas realizadas por los policías en un primer momento,que a la postre se van tornando en testimonios dubitativosy contradictorios.Esto último sobre todo en lo referente al papel desempeñado por el Señor ****** en los hechos del 22 de noviembre de 2013. Adicionalmente estas declaraciones nos permiten dimensionar el conocimiento directo que los *policías*

tuvieron de la presunta comisión de los actos delictivos que después utilizarían para justificar su comportamiento de alegada "*FLAGRANCIA*".

En este sentido, la flagrancia es una figura constitucional (artículo 16) que se encuentra prevista en diferentes ordenamientos normativos secundarios que la desarrollan de la siguiente manera:

Código de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas

> **Artículo 177.** Detención en caso de flagrancia
> 1. Cualquier persona podrá detener a quien sorprendiere en delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio Público.
> 2. Los agentes policiales estarán obligados a detener a quienes sorprendieren en la comisión de un delito. En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán ponerla de inmediato, bajo responsabilidad, a disposición del Ministerio Público.
> […]
> **Artículo 178.** Supuestos de flagrancia
> Se entiende que hay delito flagrante cuando:
> a) La persona es sorprendida en el momento de estarlo cometiendo; o
> b) Inmediatamente después de cometerlo, es perseguido materialmente o se le encuentren objetos o indicios que hagan presumir fundadamente que acaba de intervenir en un delito**,** así mismo, cuando la persona es señalada por la víctima, un testigo presencial de los hechos o quien hubiere participado con ella en la comisión del delito.

Código Nacional de Procedimientos Penales:

> **Artículo 146**. Supuestos de flagrancia
> Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:
> I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o
> II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que:
> a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o
> b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo.
> Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y

cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización.

Por otro lado, la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con respecto a la *flagrancia* lo siguiente:

Época: Décima Época
Registro: 2006476
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CC/2014 (10a.)
Página: 545

FLAGRANCIA. LA DETENCIÓN DE UNA PERSONA SIN EL CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL QUE REGULA AQUELLA FIGURA, DEBE CONSIDERARSE ARBITRARIA.

El artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la siguiente descripción: "Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del ministerio público. Existirá un registro inmediato de la detención.". Por su parte, los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén como requisitos para que la detención de una persona sea válida que: 1. Sus causas y condiciones estén fijadas de antemano en la Constitución y en la ley; 2. Prohibición de la detención arbitraria; 3. La persona detenida debe ser informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de los cargos formulados contra ella; 4. La persona detenida será llevada sin demora ante la autoridad competente que verifique la legalidad de la detención; 5. Se ordene su libertad si la detención fue ilegal o arbitraria.

Amparo en revisión 703/2012. 6 de noviembre de 2013. Cinco votos por la concesión del amparo de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Mayoría de tres votos por el amparo liso y llano de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y

Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: José Alberto Mosqueda Velázquez.

Época: Décima Época
Registro: 2006477
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: 1a. CCI/2014 (10a.)
Página: 545

FLAGRANCIA. LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL SON LA INVALIDEZ DE LA DETENCIÓN DE LA PERSONA Y DE LOS DATOS DE PRUEBA OBTENIDOS DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN AQUÉLLA.

La limitación al derecho humano de libertad personal es de carácter excepcionalísimo y su escrutinio del más estricto rigor; por ello, cuando se aduzca flagrancia, debe acreditarse que hubo elementos objetivos y razonables para justificar válidamente la afectación a la libertad y seguridad personal. Ello es así, en principio, porque toda persona tiene no sólo la legítima expectativa sino el derecho a no ser molestada por la autoridad, salvo por causas justificadas. Por su parte, la autoridad tiene la posibilidad de hacer indagaciones bajo el marco jurídico y conforme a las atribuciones que legalmente justifiquen su proceder. Sin embargo, no puede justificarse constitucionalmente que bajo pretexto de cumplirse con cuestiones de aducida legalidad, se actúe de manera arbitraria, lo cual debe ponderarse bajo un estándar de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida empleada. De ahí que si la detención de una persona, por aducida flagrancia, no se da bajo el respeto irrestricto del sistema constitucional y convencional, es decir, a partir del estricto cumplimiento de los requisitos y garantías establecidos de forma mínima a favor de la persona que sufrió la detención, ésta será considerada como arbitraria, al estar prohibida tanto a nivel nacional como internacional. Las consecuencias y efectos de la vulneración a lo anterior son la invalidez legal de la propia detención, así como de los datos de prueba obtenidos de forma directa e inmediata con motivo de la misma; esto conforme además a los principios de debido proceso y obtención de prueba lícita.

Amparo en revisión 703/2012. 6 de noviembre de 2013. Cinco votos por la concesión del amparo de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de

> Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Mayoría de tres votos por el amparo liso y llano de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: José Alberto Mosqueda Velázquez.

Por lo tanto, una de las condiciones para que se pueda invocar la flagrancia es la existencia necesaria de que se sorprenda a quien se encuentra delinquiendo, lo cual en el caso concreto no ocurrió, pues como se ha podido advertir las versiones de los policías fueron contradictorias hasta el punto de llegar a desmentirse y declarar que ellos no habían visto que el señor ****** anduviera manejando la camioneta (declaraciones informativas deC. ******, C. ****** y C. ****** vertidas en el Procedimiento Administrativo ******).

Por otro lado, también se puede apreciar por los numerarles anteriormente citados que la flagrancia se puede encuadrar en el supuesto que inmediatamente después de que se comete el delito se persiga materialmente al delincuente o se le encuentren objetos o indicios que hagan presumir fundadamente que acaba de intervenir en él, no obstante en el caso concreto esto tampoco fue así ya que en ningún momento los policías mostraron habilidades de investigación para requisar y encontrar elementos de prueba que acreditara la comisión del delito presuntamente reportado y en consecuencia procedieran a su arresto legítimo. Esto además teniendo en cuanta que dentro de la Averiguación Previa Penal ******en la que se dictó la libertad bajo reservas de ley(7 de enero de 2014) no hubo ofendido, lo cual además deja en entredicho la labor investigativa y de inteligencia que los cuerpos de seguridad deben llevar a cabo.

La prohibición de la detención arbitraria, implica que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que aun calificados de legales puedan reputarse como incompatibles con el resto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles,

o faltos de proporcionalidad. En este sentido, toda restricción a la libertad debe ser legal y no arbitraria, es decir, razonable, previsible y proporcionada, de ahí que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos requisitos se aplican no sólo a las medidas que afectan a la libertad, sino también a las normas de derecho interno que autorizan su privación. Lo cual no ocurrió en el caso concreto pues adicionalmente se hirió al señor ****** y se puso en grave riesgo a sus familiares, ya que no solo se le disparo a él, sino sobre la casa del C. ****** (padre), en la cual se encontraba la C. ****** menor de edad (hija) y la C. ****** (madre) del Señor ******. Por lo que a juicio de esta Comisión (CODHET) no existió una análisis de razonabilidad, previsibilidad o proporcionalidad por parte de los Policías Estatales Acreditables.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al análisis a realizar en la determinación de la arbitrariedad de una detención ha estipulado la necesidad de realizar un examen de varios aspectos de la detención, los cuales son la compatibilidad con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; la idoneidad de la medida; su necesidad, y su proporcionalidad. En concreto la Corte determinó lo siguiente:

> […] no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan a efecto de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido, entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto; por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. **Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que**

permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención[4].

Por estas razones la Comisión (CODHET) reitera la existencia de una violación al derecho humano a la libertad personal del señor ****** por la detención ilegal y arbitraria de la que fue víctima a manos de los miembros de Policías Estatales Acreditables bajo la responsabilidad de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal.

V. Por lo que respecta al **DERECHO HUMANO A LA INTEGRIDAD PERSONAL** conculcado en contra del señor ******, este Organismos estima acreditada la responsabilidad de los elementos de la Policía Estatal Acreditable por haber realizado su detención de forma ilegal y arbitraria. En primer término esta Comisión (CODHET) advierte entre todo el material probatorio que obra en el expediente ****** y que se encuentra relacionado con la vulneración de este derecho, las siguientes de valor fundamental:

En la constancia de 30 de enero de 2014 realizada por este Organismo se asentó:

> […] me refirieron los agentes de la Policía Estatal Acreditable ******, ******que anteriormente había acudido con el quejoso para llegar a un acuerdo económico para la reparación de los gastos de su hijo, aceptando el quejoso; por lo que están de acuerdo en llegar a un arreglo conciliatorio con las partes; aunque argumentaron que tanto ellos como su compañero ****** solamente participaron en las indagatorias mas no en la persecución, y que el único que intervino y realizo los disparos fue su compañero de nombre ****** quien no firmo el parte, pero que también está dispuesto a apoyar al quejoso, por lo que en estos días iban a hablar nuevamente con el señor ****** y llegar a un arreglo económico, concluyo.

[4] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21, párr. 93. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 128, Caso YvonNeptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 98 y Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187. párr. 62.

De este documento se desprende la confirmación ante este Organismo del reconocimiento por parte de los policías en cuanto a su cuestionado proceder durante la detención y persecución del señor ******el 22 de noviembre de 2013, la Comisión(CODHET) advierte que este acercamiento conciliatorio se respalda con las constancias de 16 de diciembre de 2013 y 12 de febrero 2014, y la entiende como la voluntad de la autoridad para reconocer su responsabilidad en los hechos descritos por el señor ******.Aunque lo que es de destacar es su postura para no hacerlo antes y con mayor premura tomando en cuenta la poca fiabilidad del Parte Informativo Policial y lo que esta comisión ya ha expresado respecto al tema.

De la declaración informativa a cargo de ****** rendida en el Procedimiento Administrativo ******* en la cual se señala lo siguiente:

> […] El viernes 22 de noviembre del año 2013 en curso aproximadamente a las 12:30 o 12:40 horas me encontraba trabajando en recorrido en la ciudad, bajo el mando del encargado de la célula ******, andábamos a bordo de un vehículo Tsuru color gris, placas circulación ****** cuando escuchamos una llamada de C.A. (Centro de Análisis) de esta Secretaria de Seguridad Pública donde reportaban "una camioneta Voyager Chrysler blanca con números y signos de venta en las ventanas, estaba robando una casa y que andaban robando una casa". […].
> […] por lo que yo y mis compañeros nos identificamos como Policías Estatales, […] en ese momento el señor que ahora se llama ******estaba abriendo la camioneta Voyager blanca que nuestros compañeros nos habían señalado, el otro que ahora sé que se llama ****** se metió a sus domicilio, después ****** se echó a correr por lo que mis compañeros de nombre ****** y ****** y el de la voz tratamos de darle alcance corriendo detrás del yendo mi compañero ****** al frente, y al dar la vuelta en la esquina se escuchan dos detonaciones de manera consecutiva de arma de fuego, y al dar la vuelta en la esquina veo sobre la banqueta a mi compañero ****** tirado en el piso, por lo que asumí que el señor ****** traía una arma de fuego y quien fue quien la acciono en contra de ****** por lo que en ese momento procedí a hacer tres detonaciones con mi arma de cargo la cual es una tipo Bereta calibre .223 en contra del señor ****** impactando uno de ellos en un refrigerador que estaba a fuera de la casa en la banqueta, el segundo de ellos no me percate en donde impacto y el tercero de ellos impacto a ****** al parecer en una pierna, en ese momento no me percate que mis compañeros accionaran sus armas de fuego de cargo […]

De esta declaración se destaca el reconocimiento del policía ******como accionante de su arma de fuego en contra del señor ******, así como de las circunstancias que envolvieron su persecución, herida y eventual detención ilegal y arbitraria. Por un lado, se esgrime que el señor ****** estaba *abriendo la puerta de la camioneta* reportada como la que presuntamente había participado en un robo, sin embargo, este señalamiento queda desmentido por el testimonio de los policías C. ******, C. ****** y C. ******al señalar dentro del Procedimiento Administrativo *****no solo la negación de la participación del Señor ****** en cuanto a que el venia en la camioneta, sino además que lo señalan como una persona que únicamente iba pasando por el lugar donde se había estacionado esta(adicionalmente se suman las declaraciones informativas de los Policías ****** y****** de 30 de enero de 2014 rendidas ante este Organismo).

Por lo tanto, no existía ninguna razón para que se le ordenara detenerse y por consiguiente al no hacerlo y correr, se procediera como lo hicieron los policías involucrados en su persecución (******,******y ******), máxime tomando en cuenta las circunstancias en las que se dieron los hechos, ya que estos policías no portaban uniforme como se señala en el Acuerdo para turnar al Consejo de Desarrollo Policial de fecha 4 de febrero de 2014 que se desprende del Procedimiento Administrativo ******:

> […] siendo en ese preciso instante que el integrante y presunto inculpado ******, sin razón legal alguna le ordeno al quejoso ****** que se detuviera, el cual por la acción se sintió amedrentado al observar a personas armadas, mismos que por pertenecer a la Dirección de Investigaciones de esta Secretaria, no portaban el uniforme tradicional de la Policía Estatal Acreditable, y fue por ese motivo que el ahora quejoso empezó a retroceder y decidió huir corriendo por pensar que se trataba de gente de la delincuencia organizada, […]

Por lo que respecta a las circunstancias que envolvieron el actuar del señor ****** esta Comisión (CODHET) concuerda con los argumentos anteriormente citados, toda vez que la atmosfera de inseguridad constituye un elemento para la desconfianza y miedo mostrados a la forma concreta de actuar por parte de los elementos de la policía. En este sentido, este Organismo estima que es un fenómeno que debe tornase en consideración para regular o protocolizar las labores de investigación y persecución de los delitos que realizan los cuerpos de Seguridad Pública, con la finalidad de que estas sean efectivas y no terminen en casos como el que se encuentra en comento.

Este Organismo también advierte que de la declaración del Policía ****** se desprende una problemática que consiste en la falta de regulación y/o protocolización del uso legítimo de la fuerza (armas de fuego) por parte de la Policía Estatal Acreditaba, ya que no se advierte un suficiente desarrollo normativo en los instrumentos que regulan su funcionamiento, por ejemplo en el caso del Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas del Estado en donde solo se hace referencia a este tema en el artículo 72 que dice "*los titulares de las dependencias instrumentaran un programa de actualización y adiestramiento en el manejo y uso de las armas*[5], más no se prevén disposiciones o principios que se deban seguir al momento de utilizarlas (criterios para el uso legítimo de la fuerza), además es un tópico que aparece con demasiada generalidad no solo en esta, sino en otros cuerpos normativos aplicables como el Reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública y el de Desarrollo Policial de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas.

En el caso concreto, del extracto de la declaración del Policía ******que anteriormente se citó, podemos advertir el razonamiento carente de todo parámetro mínimo exigido a los servidores públicos que tienen la legitimidad para portar y utilizar armas de fuego, ya que detonó su arma en repetidas ocasiones en contra del señor ****** y paralelamente asía el interior de la casa de sus padres, los cuales se encontraban ahí junto a la menor hija de este, poniendo en riesgo sus vidas y sólo por el hecho de presumir que le habían disparado a su compañero (******) y no por estimar que su vida se encontrara en riesgo. Además se dispara sin tomar en cuenta el fin perseguido, toda vez que de la declaración se desprende el reconocimiento de tres disparos de los cuales solo uno dio en el cuerpo del señor ******, otro en un refrigerador y el tercero manifestó ignorar donde impacto.

Esto sin tomar en cuenta que los testimonios de los compañeros del policía ****** relatan el haber escuchado más de tres detonaciones (declaraciones de ****** y ****** en el Procedimiento Administrativo******), y de la constancia de fecha 16 de diciembre de 2013 realizada por este Organismo sobre el lugar de los hechos, en la cual se advierte la existencia de dos detonaciones de arma de fuego sobre el mencionado refrigerador y no una como afirma el policía en su declaración. Además tampoco se advirtió por sus declaraciones que la hoy victima hubiere portado un arma o que una vez que se le detuvo este portara alguna.

[5] ARTÍCULO 72.- Los titulares de las dependencias, instrumentarán un programa de actualización y adiestramiento en el manejo y uso de las armas; para tal efecto, podrán disponer del armamento oficial y municiones bajo su resguardo

En este tenor, resulta oportuno mencionar los siguientes criterios de interpretación que ha emitido el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que resultan atinentes al caso concreto:

Época: Novena Época
Registro: 162995
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, Enero de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. LXIX/2010
Página: 61

SEGURIDAD PÚBLICA, FUERZA PÚBLICA Y ACTOS DE POLICÍA. LAS OMISIONES LEGISLATIVAS EN ESAS MATERIAS PROPICIAN POR SÍ MISMAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS.

La existencia de omisiones legislativas y reglamentarias en materia de actos de policía, fuerza pública y seguridad pública, propician por sí mismas condiciones de vulnerabilidad de los derechos humanos, particularmente del derecho a la protección de la vida y de la integridad personal (física y psicológica), pues conforme a estos derechos humanos, el Estado debe realizar acciones que coadyuven a su respeto y ejercicio, entre las que se encuentran aquellas de orden legislativo, reglamentario y protocolario. Consecuentemente, la ausencia de estas medidas normativas permite que la fuerza pública se ejerza irresponsablemente, lastrando el avance hacia una cultura policial democrática, sin apego a los derechos reconocidos en el derecho internacional a toda persona, y particularmente a las que son objeto de una acción policiaca, y que son recogidos y tutelados por la Constitución General de la República.

Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.

El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LXIX/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.

Época: Novena Época
Registro: 162990
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, Enero de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. LXVIII/2010
Página: 65

SEGURIDAD PÚBLICA. NO BASTA LA PREVISIÓN DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE RIJAN LA FUERZA PÚBLICA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS PARA NORMAR SU ACTIVIDAD, SINO QUE SU USO DEBE SER OBJETO DE DESARROLLO NORMATIVO A NIVEL LEGAL, REGLAMENTARIO Y PROTOCOLARIO.

Los principios constitucionales que rigen el ejercicio de la función de seguridad pública y el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos policiacos no bastan por sí mismos para considerar debidamente normadas esas actividades, pues aun reconociendo su importancia y jerarquía, son bases sobre las cuales debe construirse una serie de estructuras jurídicas, tanto a nivel legal como reglamentario y protocolario que detallen y den mayor contenido normativo al ejercicio del acto de policía, abarcando incluso el aspecto operativo de esa función pública, tramo en el que es más propensa la vulneración de los derechos de las personas. Dichos principios, por su propia naturaleza, no son reglas ni mucho menos detallan la manera en que una autoridad debe o puede actuar, sino que su contenido se conforma partiendo de una base común que dé cohesión y consistencia a la actuación de los tres órdenes de gobierno, debiendo desarrollarse hasta llegar a un punto en el que permitan a la autoridad operativa cumplir cabalmente su función.

Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías

individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.
El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LXVIII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.

Época: Novena Época
Registro: 162999
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, Enero de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. LVI/2010
Página: 58

SEGURIDAD PÚBLICA. EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO DE NECESIDAD EN EL USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS SE HACE POSIBLE A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS Y DE LA CAPACITACIÓN DE SUS AGENTES.

En la acción policial las circunstancias de facto con las que se enfrenta el agente del Estado, a veces vertiginosas, otras imprevisibles, conducen a que la valoración de la necesidad bajo la cual debe actuar aquél o la corporación policial no siempre pueda hacerse premeditadamente, sino que exigen la toma de decisiones súbitas, lo que refleja el grado de dificultad de la actividad referida y justifica la conveniencia de que se establezcan protocolos de actuación que permitan, en alguna medida, automatizar las reacciones del cuerpo policiaco y se capacite al agente para que sus respuestas a los estímulos externos sean legales y sólo las necesarias o proporcionales a su circunstancia.

Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.

El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LVI/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.

Época: Novena Época
Registro: 162997
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, Enero de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. LV/2010
Página: 59

SEGURIDAD PÚBLICA. EL USO DE ARMAS DE FUEGO POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS ES UNA ALTERNATIVA EXTREMA Y EXCEPCIONAL.

En razón de los principios constitucionales que rigen el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos policiacos y del criterio de razonabilidad a que está sujeto su ejercicio, así como de las limitaciones de naturaleza humanitaria, el uso de armas de fuego -dados los riesgos letales que conlleva- resulta una alternativa extrema y excepcional cuya utilización sólo es aceptable cuando los estímulos externos recibidos por el agente no dejan otra opción, ya sea para proteger la propia vida, la de terceros o prevenir o detener mayores daños; y aun así, procurando que no se ejerza de manera letal, como sugiere la Organización de las Naciones Unidas en el punto 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.

El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LV/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.

Época: Novena Época
Registro: 162996
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, Enero de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. LVIII/2010
Página: 60

SEGURIDAD PÚBLICA. ESTADIOS TEMPORALES PARA VERIFICAR LA REGULARIDAD DEL EJERCICIO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS.

La legitimidad del uso de la fuerza pública, así como el análisis de su verificación, en razón de los derechos humanos que asisten a las personas sobre las que se ejecuta una acción de fuerza por parte de los cuerpos policiacos, exigen diferenciar distintos momentos en su uso: primero, verificar la legitimidad de las causas que llevan a la intervención misma (contexto de hecho) y las acciones previas a ello (planeación y medidas alternativas); segundo, verificar la regularidad de la intervención en sí misma (ejecución); y tercero, analizar las acciones estatales tomadas luego de haber intervenido con fuerza pública; medidas que, en atención a los deberes positivos que imponen al Estado los derechos humanos, son exigibles a quien la usó, en razón de la transparencia y rendición de cuentas a que está sujeta la actividad estatal.

Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.
El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LVIII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.

Época: Novena Época
Registro: 162994

Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, Enero de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. LIII/2010
Página: 61

SEGURIDAD PÚBLICA. LA RAZONABILIDAD EN EL USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS EXIGE LA VERIFICACIÓN DE SU LEGALIDAD.

La legalidad en el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos policiacos es un principio exigido por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer los principios rectores de la función de seguridad pública y también es un elemento necesario para analizar la razonabilidad en el uso de la fuerza. Desde esta última perspectiva, la verificación de la legalidad en el uso de la fuerza pública requiere que: 1) Encuentre fundamento en una norma jurídica preestablecida, constitucional o legal, pudiendo estar complementada por normas reglamentarias e inclusive protocolarias, a fin de que con base en lo dispuesto se actúe cuando la normativa respectiva lo autorice, tomando en cuenta que la naturaleza y riesgos que implica esa actividad para los derechos humanos de los civiles tornan necesaria la existencia de directrices en la ley conforme a las cuales los agentes del Estado hagan uso de la fuerza pública, especialmente de la letal; 2) La autoridad que haga uso de ella sea la autorizada por la ley para hacerlo; y, 3) El fin perseguido con su uso sea lícito, legítimo y constitucionalmente admisible. Esto es, se trata de una valoración particular del caso que puede involucrar variables de orden fáctico y que comprende tanto la verificación de la legalidad de la causa bajo la cual se justificaría la acción de uso de la fuerza pública como los objetivos con ella perseguidos. Así, en tanto el fin perseguido por la acción encuadre en el marco de las facultades y deberes del Estado, la acción policiaca y el uso de la fuerza podrán ser constitucionalmente disponibles para cumplir con su función auxiliar de aquél.

Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías

individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.
El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LIII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.

Época: Novena Época
Registro: 162993
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, Enero de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. LIV/2010
Página: 62

SEGURIDAD PÚBLICA. LA RAZONABILIDAD EN EL USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS EXIGE LA VERIFICACIÓN DE SU NECESIDAD.

La necesidad es un elemento indispensable para analizar la razonabilidad en el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos policiacos. Desde esta perspectiva, la verificación de la necesidad, como parte del análisis de razonabilidad del uso de la fuerza pública, implica evaluar si la medida es necesaria según sean las circunstancias de facto y para el cumplimiento de los fines perseguidos por el Estado, por supuesto, avalados por la norma jurídica. Así, la necesidad de un acto de esta naturaleza implica que exista vinculación entre el fin y el medio utilizado, pues la forma y el grado de fuerza con que se ejecute debe ser, luego de la respectiva y previa valoración de las alternativas disponibles, la que se debió haber considerado pertinente e instrumental para cumplir los fines inmediatos y mediatos que se persiguen con la acción. Más todavía, dado que se trata del terreno de aplicación de fuerza (por ser en sí mismo restrictivo), para que una intervención de ésta pueda ser válidamente considerada como necesaria, debe estar precedida por acciones o medidas pacíficas que hayan resultado inexitosas, inútiles y/o ineficaces para el logro de los fines perseguidos por el Estado. En consecuencia, la fuerza es necesaria cuando las alternativas que la excluyen fueron agotadas y no dieron resultados, máxime que la necesidad de la

acción de fuerza se determina en función de las respuestas que el agente (o la corporación) deba ir dando a los estímulos externos que reciba. Así, la valoración de la necesidad del uso de la fuerza supone también diferenciar técnicas, armas y niveles de fuerza, según las circunstancias lo vayan justificando, ya sea para aumentar o para disminuir el grado de intervención.

Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.
El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LIV/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.

Época: Novena Época
Registro: 162992
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, Enero de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. LVII/2010
Página: 63

SEGURIDAD PÚBLICA. LA RAZONABILIDAD EN EL USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS EXIGE LA VERIFICACIÓN DE SU PROPORCIONALIDAD.

La proporcionalidad es un elemento necesario para analizar la razonabilidad en el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos policiacos. Desde esta perspectiva, la verificación de la proporcionalidad, como parte del análisis de su razonabilidad, se distiende en diversas vertientes: por un lado, exige que la fuerza guarde relación con las circunstancias de facto presentes, como son las características del sujeto (objeto) de la acción, ya sea individual o plural, tales como su peligrosidad, las características de su comportamiento ya conocidas y la resistencia u oposición que presente; por otro, implica un deber de guardar conformidad, no sólo

con el objetivo por ejecutar, sino con aquellos otros que, en aras del respeto a los derechos de las personas, deben cuidarse en ese tipo de acciones, como son la prevención de otros o mayores brotes de ilegalidad, fuerza o violencia. Asimismo, la proporcionalidad en el uso de la fuerza pública también está referida a la elección del medio y modo utilizados para llevarla a cabo (el medio reputado necesario), lo que implica que debe utilizarse en la medida en que se cause el menor daño posible, tanto a los sujetos objeto de la acción como a la comunidad en general y, bajo ese parámetro, lo demás será un exceso.

Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.
El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LVII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.

Época: Novena Época
Registro: 162991
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, Enero de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. LIX/2010
Página: 64

SEGURIDAD PÚBLICA. LA VALORACIÓN ACERCA DE LA REGULARIDAD EN EL USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS EN UNO DE LOS ESTADIOS TEMPORALES DE SU ANÁLISIS ES INDEPENDIENTE DE LA QUE SE HAGA EN LOS OTROS.

Los diferentes estadios temporales (intervención y planeación de la intervención, ejecución y acciones posteriores) del uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos policiacos están vinculados entre sí y son temporalmente consecuentes, pero cada uno de ellos justifica y

> exige un análisis por separado, porque quienes intervienen en ellos son autoridades y agentes del Estado con distintas responsabilidades; porque los derechos y deberes que deben guardarse van adquiriendo matices distintos en la evolución de los hechos y sobre todo porque la legitimidad y regularidad en uno de ellos no determina la de los demás. Así, por ejemplo, podrá reputarse como legítima una acción de fuerza pública por estar justificadas las circunstancias para la intervención policial, pero eso no significa que la manera en que se ejecute y/o que las acciones seguidas a la intervención de fuerza hayan sido legítimas y legales. Por lo anterior, cuando se valoran la legitimidad y regularidad constitucional del uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos, estos estadios deben analizarse por separado y ha de considerarse que el resultado de uno de esos ejercicios individuales no condiciona necesariamente el de los demás, aun cuando el resultado de la valoración de uno pueda impactar o trascender a la valoración final o general de la acción del Estado.
>
> Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.
> El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LIX/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.

De tal suerte que hasta este momento el máximo y ultimo interprete de la Constitución, ya ha venido estableciendo una serie de criterios respecto a este tema (uso de la fuerza y/o armas de fuego) y consecuentemente para que estos sean tomados en cuenta no solo por los órganos jurisdiccionales de todo el país, sino por las autoridades que están al frente del funcionamiento, organización y regulación de los Cuerpos de Seguridad Pública.

Por estas razones la Comisión (CODHET) estima acreditada la vulneración del derecho humano a la integridad física del señor ******, atribuible a las actuaciones indebidas de diversos elementos de la Policía Estatal Acreditable, los cuales dependen de la mencionada Secretaria.

VI. Por lo que se refiere a los derechos humanos consistentes en la **DIGNIDAD HUMANA** y el **DERECHO A LA PRIVACIDAD,** este Organismo también los considera lesionados a la luz de los siguientes argumentos.

En primer término, se parte de la base que la detención del señor ****** fue arbitraria e ilegal, resultando herido en una de sus piernas y colocando a su familia en una situación de riesgo, ya que se hizo mal uso de la fuerza pública al accionar un arma de fuego injustificadamente. En esta lógica, la Comisión (CODHET) advierte con preocupación el trato que se le dio al señor ******, toda vez que al ser detenido y evidenciando una herida de bala en la pierna derecha, cuya característica fue la perdida de piel y tejido celular subcutáneo que origino una lesión entre los 8 y 10 centímetros de diámetro. Los Policías Estatales Acreditables tomaron la decisión de trasladarlo en la parte trasera de una camioneta policial para que recibiera atención médica, lo cual se colige con las declaraciones de:

******

> […] y observando a elementos de la policía, desconociendo a qué corporación pertenecía, pero andaban vestidos de azul, yo les pregunté que porque le habían disparado a mi hijo, respondiéndome dichos elementos que porque se había bajado de una camioneta, a lo que yo les dije que eso no era posible ya que mi hijo iba saliendo ya que acababa de terminar de almorzar, y me pedían que lo entregara yo les dije a mi nieta que fuera a buscar a su papá para entregarlo, regresando y diciéndome que no estaba, **y que lo tenían en la calle detenido, observando que lo subieron a una camioneta los policías vestidos de azul desconociendo la corporación**, después que se retiraron con mi hijo observé a unos elementos que andaban en el interior de nuestra propiedad […]

Policía ****** (declaración testimonial Procedimiento Administrativo******):

> […]y los elementos de la Federal fueron los que lograron la detención del señor ****** y vi que se lo entregaron a mi compañero ******, y **vi que después lo subieron a la caja de una de las camionetas habilitadas como patrullas de la Policía Estatal Acreditable** de esta Secretaria, […]

En este sentido, sorprende la estrategia tan poco práctica como indolente respecto al sufrimiento de una persona que ha recibido una herida de bala, de haber decidido no llamar o solicitar asistencia de una ambulancia con la finalidad

de atender en el lugar de los hechos al señor ******, sino trasladarlo en un vehículo policial carente de la asistencia medica calificada para contener el sangrado de dicha herida y muchísimo menos en la parte trasera de una *camioneta*, pues ese hecho en sí mismo, constituye para este Organismo de Protección de Derechos Humanos un trato degradante y lesivo de la dignidad humana cuando el origen de la detención fue ilegal y arbitraria, ya sea por ineficiencia de la autoridad o erro en su preceder.

Debe precisarse que en ningún momento la autoridad acredita ante esta Institución la existencia de circunstancias que pudiesen justificar la premura con la que actuaron los Elementos de la Policía Estatal Acreditable, omitiendo llamar una ambulancia para que le dieran atención médica al quejoso, ya que del informe y el parte informativo policial en ningún momento se deduce que la zona o las circunstancias importaran riesgo para los policías, máxime porque de las declaraciones realizadas ante este Organismo se precisa que no solo llegaron al lugar de los hechos policías estatales, sino además elementos de la Policía Federal y Soldados. Por lo tanto, se entiende que el área esta resguardada y no representaba peligro.

En este orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado con respecto al derecho a la dignidad humana lo siguiente:

> Época: Décima Época
> Registro: 2007731
> Instancia: Primera Sala
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
> Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I
> Materia(s): Constitucional
> Tesis: 1a. CCCLIV/2014 (10a.)
> Página: 602
>
> **DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA.**
>
> La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o.,

último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada.

Amparo directo en revisión 1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Sorprende la actitud que se infiere por los policía involucrados en el caso concreto, puesto que no se respetó la *presunción de inocencia*, ya que el trato que se le dio a la hoy victima parte de una lógica en la que se asume la culpabilidad y donde la labor del policía consiste en*detener para investigar y no investigara para detener*. En este tenor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido que no respetar la *presunción de inocencia* es violatorio del derecho al trato digno, ya que no importan las conductas que hayan motivado la privación de la libertad este debe de respetarse.[6]

Ahora bien, en segundo término se estima que existió una vulneración del Derecho a la Privacidad porque el señor ****** fue atacado en repetidas ocasiones con arma de fuego ya estando en el interior de la casa de su padre el C.

[6] Tesis Aislada (Constitucional), Pleno, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Página: 26.

****** y en donde se ha acreditado para este Organismo que hacia vida familiar, en ese sentido:

> La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido en varias tesis a los rasgos característicos de la noción de lo "privado". Así, lo ha relacionado con: […];el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; […]; las actividades de las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; […] Por otro lado, el derecho a la vida privada (o intimidad) está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, […]
> […] los organismos internacionales han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros derechos, […] como la inviolabilidaddel domicilio.
> […] A un nivel más concreto, la misma idea puede describirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás no las invadan sin su consentimiento. En un sentido amplio, entonces, la protección constitucional de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada y las injerencias de los demás, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos: el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, […] el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, [...] [7]
>
> Época: Novena Época
> Registro: 168889
> Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
> Tomo XXVIII, Septiembre de 2008
> Materia(s): Civil
> Tesis: I.3o.C.697 C
> Página: 1302

[7] Tesis Aislada (Constitucional), Primera Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Página: 277.

INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. CONCEPTO Y EXCEPCIONES.

La inviolabilidad del domicilio es el derecho fundamental que permite disfrutar de la vivienda sin interrupciones ilegítimas y permite desarrollar la vida privada sin ser objeto de molestias. En este sentido, es el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima; motivo por el que no sólo es objeto de protección el espacio físico, sino lo que en él se encuentra, lo que supone una protección a la vivienda y a la vida privada. La Constitución señala de manera limitativa las excepciones a este derecho, a saber: órdenes de cateo, visitas domiciliarias y la provisión a favor de militares en tiempo de guerra.

Amparo en revisión 73/2008. 6 de mayo de 2008. Mayoría de votos. Disidente: Neófito López Ramos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Erick Fernando Cano Figueroa.

Época: Novena Época
Registro: 171779
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVI, Agosto de 2007
Materia(s): Penal
Tesis: 1a. L/2007
Página: 363

DOMICILIO. SU CONCEPTO EN MATERIA PENAL.

El concepto de domicilio a que se refiere la garantía de inviolabilidad de éste, contenida en el párrafo primero, en relación con el octavo, del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende tanto el lugar en el que una persona establece su residencia habitual (elemento objetivo), como todo aquel espacio en el que desarrolla actos y formas de vida calificados como privados (elemento subjetivo).Sin embargo, dicho concepto en materia penal es más amplio, pues también incluye cualquier localización o establecimiento de la persona de naturaleza accidental y transitoria en donde lleve a cabo actos comprendidos dentro de su esfera privada. Ello es así, en virtud de que si bien el primer párrafo del citado precepto

> constitucional alude al término "domicilio", el octavo sólo señala "lugar", debiendo entenderse por éste, el domicilio en el que el gobernado de algún modo se asienta y realiza actos relativos a su privacidad o intimidad.
>
> Contradicción de tesis 75/2004-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 17 de enero de 2007. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Por lo tanto, y a la luz de lo que ya se ha acreditado con respecto a las condiciones en las que se llevó acabo la detención del señor ******se estima vulnerado este derecho, toda vez que aun cuando la hoy víctima se encontraba ya en la casa de sus padres se le siguió disparando tal como se advierte de las declaraciones de los Policías y la constancia de hechos realizada por este Organismo de fecha 16 de diciembre de 2013 en la que se registran múltiples detonaciones hacia el interior de la casa del señor ******.

Además en relación a estos acontecimientos también se estiman acreditados las violaciones a los **DERECHOS HUMANOS A LA PRIVACIDAD Y EL DE PROPIEDAD** pertenecientes al señor **********, ya que no solo recibió los efectos de las intromisiones a su vida privada pues también se encontraba en la casa al momento de los disparos, sino que en este caso se coaligo con la intromisión ilegal a su domicilio, primero, cuando dispararon hacia el interior de su propiedad y después, cuando se metieron a buscar a su hijo herido. Si bien es cierto que los policías han negado el haberse introducido al domicilio, y aparentemente no hay contradicciones en ese punto, es de notar que de las pruebas testimoniales ofrecidas por el quejoso, si se desprende esta conclusión.

Testimonios vertidos ante este Organismos:

C. ******:

> […] metiéndose mi papá al corredor logrando meterse hasta la casa y ya estaba herido de una pierna, el supuesto oficial me gritaba que sacara a mi papá a la chingada, que si no se iban a meter por él, yo le contesté al sujeto que me metería para hablarle a mi papá, pero cuando volví a salir ya se

habían introducido varios oficiales vestidos como la persona que le disparó a mi papá, también armados, quienes recogieron todos los casquillos de las balas que habían disparado, y trasculcaron los dos closets y toda la casa, **al momento llegaron federales y soldados quienes agarraron a mi papá, y lo sacaron los federales, quienes lo golpearon y lo subieron a una patrulla de la policía estatal**,[…]

C. ******:

[…], después escuché que elementos de las corporaciones antes mencionadas, le gritaban a mi nieta que sacara al muchacho o que se iban a meter por él, al no haber respuesta, todos se metieron a mi domicilio y como no lo encontraron ahí, ya que por temor mi hijo se había ido a otros domicilios de los vecinos, los policías se fueron hasta donde se encontraba y lo sacaron a golpes, pegándole con pies y manos en diferentes partes del cuerpo, observando que mi hijo se encontraba sangrando de la frente, de un brazo, así como de la pierna, **observando además que elementos de la Policía Estatal lo traían sujetando y ellos lo subieron a una patrulla, la cual no alcancé a ver que corporación pertenecía**, así como tampoco las placas o el número económico, retirándose del lugar, ante esa situación el suscrito me dirigí a este Organismo [...]"

C. ******

[…] y observando a elementos de la policía, desconociendo a qué corporación pertenecía, pero andaban vestidos de azul, yo les pregunté que porque le habían disparado a mi hijo, respondiéndome dichos elementos que porque se había bajado de una camioneta, a lo que yo les dije que eso no era posible ya que mi hijo iba saliendo ya que acababa de terminar de almorzar, y me pedían que lo entregara yo les dije a mi nieta que fuera a buscar a su papá para entregarlo, regresando y diciéndome que no estaba, **y que lo tenían en la calle detenido, observando que lo subieron a una camioneta los policías vestidos de azul desconociendo la corporación**, después que se retiraron con mi hijo observé a unos elementos que andaban en el interior de nuestra propiedad […]

C. ******

[…] las personas que le dispararon al joven ****** continuaron en el lugar, de hecho estaban sobre el portón de la casa de ******, así como los vehículos ahí estaban estacionados afuera de dicho domicilio. También observé que

> muchos policías se metieron a la casa de ****** y me percaté que los policías estatales fueron los que sacaron al muchacho herido y se lo llevaron en una patrulla. Deseo manifestar que yo acababa de salir de mi domicilio ya que iba a la tienda Su Bodega, a comprar un jabón, y no me tardé casi nada porque dicha tienda está como a dos cuadras y media del domicilio del joven que refiero, y cuando iba a la tienda observé que había cuatro camionetas de soldados por la calle Bachilleres estacionados a una cuadra y media aproximadamente de la casa de ******, […]

.

Además de las declaraciones vertidas en el Procedimiento Administrativo ****** por los Policías C. ****** y C. ****** se manifiesta con respecto al **C. ******, señalado como el presuntos cómplice de ****** en el reporte de robo, *un patrón de conducta que no puede dejarse de lado por las implicaciones que tiene para el caso concreto de* ******, ya que ambas detenciones ocurrieron derivado de los mismos hechos:

Policías C. ****** y C. ******;

> […] y los compañeros de operatividad **se metieron a la casa de la persona que momentos traía la camioneta el cual ahora sé que se llama ****** y realizaron la detención de él,** pero en el momento de la detención de él no vi que fuera golpeado por los elementos de operatividad, nose el momento en el cual el haya recibido las lesiones que presenta y que están asentados en la Averiguación Previa […]

De tal suerte que para esta Comisión (CODHET) se tiene como válidos los testimonios de ******, ****** y ****** en lo relativo a la intromisión de elementos de la Policía Estatal Acreditable en la propiedad del señor ******.

VII. Por otro lado, este Organismo estima necesario pronunciarse sobre las vulneraciones cometidas al señor**********, toda vez que de lo actuado también se desprende su configuración como víctima de acuerdo al artículo 27 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y lograron identificar los siguientes derechos violentados:

- Derecho a la libertad personal
- Derecho a la integridad física
- Derecho a la vida privada

En primer término se tiene como acreditada la vulneración del **derecho a la libertad persona** toda vez que el señor ****** fue detenido sobre la misma base empleada para detener a C. ****** y por lo tanto, esta no puede estimarse encuadrada en los supuestos de la alegada *flagrancia*, esto es así porque en el parte informativo policial también se señalaba al señor ******.Además debe recordarse que de las declaraciones policiales anteriormente citadas se desprende la afirmación de una detención ilegal y arbitraria pues no solo no existiendo flagrancia, los Policías Estatales Acreditables procedieron a introducirse a la casa de su tía y detenerle ahí (página 67).

Ahora bien, se deben tener en cuenta los argumentos vertidos para justificar la **violación del derecho a la privacidad** del señor ******, ya que estas circunstancias en parte igualmente se materializan en el caso del **C. ******** pues fue detenido en un lugar (casa de su tía) donde desarrollaba vida familiar (declaración de 23 de noviembre de 2013 vertida en la Averiguación Previa ******). Por lo tanto, al haber invadido el domicilio de su tía para detenerlo, los elementos de la Policía Estatal Acreditable no solo violentaron su derecho a la libertad personal sino el de privacidad (criterios interpretativos aplicables en la página62 a 64).

Por lo que, se refiere al **derecho humano a la integridad física,** si bien esta víctima no sufrió heridas de armas de fuego, también es cierto que de las constancias que obran en el expediente ****** se deprende en el certificado médico y de integridad física de 22 de noviembre de 2013 lo siguiente:

> […] Extremidades: presenta equimosis de reciente aparición en cara anterior de hombro izquierdo y equimosis con forma redondeada en cara posterior de pierna derecha.

Las equimosis son también conocidas como moretones o traumas producidos por golpes que causan generalmente amoratamiento, sin embargo, en el caso concreto estos son atribuibles a elementos de la Policía Estatal Acreditable que llevaron a cabo la detención, dado que es obligación del Estado resguardar la seguridad de toda persona que está bajo su custodia, máxime cuando lo que se desprende de las declaraciones vertidas en el Procedimiento Administrativo ****** es la manifestación de que los Policías C. ******, C. ****** y C. ****** manifiestan:

> […] “en el momento de la detención ellos no vieron que fuera golpeado por lo que desconocen cómo pudieron aparecer eso golpes después”, […].

Por lo tanto, los policías que le ponen a disposición de la autoridad competente (Ministerio Público) no manifiestan que tiene esas lesiones o golpes en

el *parte informativo policial*, por ende tampoco las justifican y en consecuencia permiten inferir que las lesiones aparecieron entre la detención y la puesta a disposición ante la autoridad ministerial, lo que solo deja como responsable a la Policía pues esta tiene la obligación de resguardar la integridad física y psíquica de las personas una vez que estas se encuentran bajo su custodia (desde la detención). En este sentido, la interpretación del Poder Judicial Federal se ha mostrado ilustrativa al señalar:

> Época: Décima Época
> Registro: 2005682
> Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
> Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III
> Materia(s): Constitucional, Penal
> Tesis: XXI.1o.P.A.4 P (10a.)
> Página: 2355
>
> **DETENCIÓN DE UNA PERSONA POR LA POLICÍA. CUANDO AQUÉLLA PRESENTA LESIONES EN SU CUERPO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA CONOCER LA CAUSA QUE LAS ORIGINÓ RECAE EN EL ESTADO Y NO EN EL PARTICULAR AFECTADO.**
>
> La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios orientadores en el sentido de que el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia (Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141). Por lo que existe la presunción de considerar responsable al Estado por las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales, si las autoridades no han realizado una investigación seria de los hechos seguida del procesamiento de los que aparezcan como responsables de tales conductas (Caso "Niños de la Calle", Villagrán Morales y otros vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63). Estos criterios dan pauta objetiva para considerar que la carga de la prueba para conocer la causa que originó las lesiones que presenta en su cuerpo una persona que fue detenida por la policía, recae en el Estado y no en los particulares afectados; sobre todo, si a

esos criterios se les relaciona directamente con los principios de presunción de inocencia -que implica que el justiciable no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, pues en él no recae la carga de probar su inocencia, sino más bien, es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la responsabilidad del imputado-; y, pro homine o pro personae -que implica efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales del ser humano-.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 144/2013. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretario: Ernesto Fernández Rodríguez.
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Por tal motivo, al no haber dado la autoridad una explicación lógica de como aparecieron esas lesiones en el detenido y tomando en cuenta las actuaciones de los Policías Estatales Acreditables que generaron la DETENCIÓN ARBITRARIA E ILEGAL tanto de este cómo de ******, este Organismo estima acreditada la vulneración del derecho humano a la integridad personal del señor**********, cometida por miembros de la citada corporación policial y que se encuentra bajo la responsabilidad de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal.

VIII. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Fracción II, 42, 43, 48 y 49 de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este Organismo, así como los numerales 63 fracción V, del Reglamento Interno. Se emite **RECOMENDACIÓN** al SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, como superior jerárquico de los elementos de la Policía Estatal Acreditable involucrada en las violaciones a los derechos humanos de las siguientes víctimas a las que se les reconoce con esa calidad:

C. ****;**

- Derecho a la libertad personal
- Derecho a la integridad física
- Derecho a la dignidad humana

- Derecho a la vida privada

C. ****;**

- Derecho a la Propiedad
- Derecho a la vida privada

C. ****;**

- Derecho a la libertad personal
- Derecho a la integridad física
- Derecho a la vida privada

Adicionalmente, la Comisión (CODHET) estima necesario reconocer como victimas indirectas a ****** (madre), ****** (hija) y ****** (esposa) de ******, ya que sufrieron los efectos de los hechos acontecidos el 22 de noviembre de 2013.

Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de la CODHET y28, 29 y demás relativos previstos en laLey de Protección a las Víctimas para el Estado de Tamaulipas, toda persona víctima de violaciones de derechos humanos tiene el derecho a una reparación integral, en este sentido, la Comisión (CODHET) determina:

R E C O M E N D A R

PRIMERA: La Secretaria de Seguridad Pública del Estado ordenara a los Elementos de la Policía Estatal Acreditable actuar con estricto apego a derecho, evitando en todo momento la realización de detenciones ilegales o arbitrarias, el uso de la fuerza con armas de fuego sin causa justificada y la intromisión ilegal a domicilios particulares.

SEGUNDA: Como medidas de no repetición. Se le pide a la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTTADO informe de los mecanismos de supervisión para detectar la comisión de malas prácticas en la elaboración de los **Partes Informativos Policiales**, así como la generación de protocolos o regulaciones que permitan establecer criterios objetivos para la elaboración de este tipo de documentos oficiales. Ya que si bien el tema es abordado por algunos cuerpos normativos vigentes, lo cierto es que a la luz de lo argumentado en esta resolución se estima que es insuficiente. Bajo esta perspectiva, también debe crear los mecanismos de supervisión efectivos que

garanticen la emisión adecuada de estos documentos e informarle a este Organismos de Protección de Derechos Humanos.

TERCERA: Adicionalmente, se recomienda la implementación de una intensa y periódica capacitación en materia de *derechos humanosy susesquemas de restricción legítima*.Toda vez que para esta Comisión (CODHET), los Cuerpos de Seguridad Pública deben estar sometidos a un constante régimen de profesionalización con la finalidad de detectar a los elementos más capaces para realizar una tarea tan delicada como trascendente para los derechos fundamentales de las personas.

CUARTA: Por otro lado, también se recomienda la elaboración de Protocolos o bien, el desarrollo reglamentario de figuras como el ***uso de la fuerzapública*** a través de **armas de fuego**,ya que para este Organismo y a la luz de lo expresado en la presente resolución se advierte la imperiosa necesidad de llevarlo a cabo. Finalmente, se estima necesario aclarar que la capacitación en materia de derechos fundamentales debe dirigirse no solo a los elementos policiales, sino también a los miembros administrativos de los Órganos de Supervisión que diseñan, crean e instrumentan las políticas o programas de combate y prevención en materia de seguridad pública.

QUINTA:A fin de reparar las violaciones concretas a los derechos humanos que se cometieron en perjuicio de las víctimas, se estima necesario se proceda gestionar la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios derivados de los hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2013 y las conclusiones esgrimidas por esta Comisión (CODHET). Por otro lado, se deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la atención victimológica integral a los familiares y allegados de los C. ******, C. ****** y C. ******, en los términos de la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado. Sobre todo en lo referente al señor****** quien recibió una herida de bala en la pierna derecha y su hija menor de edad que atestiguo los hechos de la detención arbitraria e ilegal cometida por elementos de la Policía Estatal Acreditable.

Dése vista a la Dirección General del Instituto de Atención a Víctimas del Delito de la presente resolución, para que de acuerdo a su competencia se proceda conforme a lo establecido en la ley anteriormente descrita.

SEXTA: Gire instrucciones a su Órgano de Control Interno a fin se informe a esta Comisión (CODHET) sobre el resultado del Procedimientos Administrativo ****** instruido en contra de los policías C. ******, C. ******, ******,

******, ****** y ****** a fin de conocer cuál fue la determinación definitiva de esa instancia.

SÉPTIMA: Gire instrucciones para que se colabore con los procedimientos derivados de la Averiguación Previa Penal ****** instruida en la Agencia ***** del Ministerio Público Investigador de la Procuraduría General de Justica del Estado en contra de los Policías Estatales Acreditables ******,******, ******.

De conformidad con el artículo 49 de la Ley de esta Comisión, es procedente requerir a las autoridades recomendadas para que, dentro de un plazo de diez días hábiles, informen sobre la aceptación de esta recomendación y, en su caso, remitan dentro de los quince días siguientes las pruebas relativas a su cumplimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma establecida.

Así lo formuló el C. Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Doctor José Ramiro Roel Paulín, y aprueba y emite el C. Doctor José Martín García Martínez, Presidente de esta Comisión, en términos del artículo 22 fracción VII, 24 fracción VI, inciso c) y d) de la Ley que regula el funcionamiento de este Organismo, así como el 22 fracción VII, 26 y 69 fracción V de su Reglamento.

_____
Dr. José Martín García Martínez
Presidente

_____
Dr. José Ramiro Roel Paulín
Secretario Técnico

Proyectó

_____
Mtro. Orlando Javier Rosado Barrera
Visitador Adjunto

EXPEDIENTE N°: **169/2014**

QUEJOSA: ******** en representación de ****** y ******.**

RESOLUCION: Recomendación 010/2015

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil quince.

Visto para resolver el expediente número 169/2014 motivado por la **C. ******,** en representación de ****** y ******, en contra de actos presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a elementos de la Policía Estatal, los cuales fueron calificados como allanamiento de morada, detención arbitraria, robo y tortura; agotado que fue el procedimiento, este Organismo procede a emitir resolución tomando en consideración los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, radicó el 30 de mayo del 2014, la queja presentada por la **C. ******,** quien denunció lo siguiente:

*"Que solicito la intervención de esta Comisión toda vez que el día de ayer aproximadamente a las 3:30 de la tarde, elementos de la Policía Estatal sin autorización alguna entraron a mi domicilio antes señalado, los cuales iban a bordo de dos patrullas de la Policía Estatal, la 636 y 638 y una suburban blanca, ingresando como diez elementos a mi casa con lujo de violencia, y se llevaron a mi esposo ******, de 19 años de edad, al cual lo golpearon frente a la suscrita, subiéndolo a una patrulla, sin saber a cuál, ya que a las personas que nos encontrábamos en el domicilio nos metieron para no darnos cuenta; así mismo, hago mención que los elementos antes señalados, nos robaron dinero, dos celulares, uno mío y otro de mi papá que ya no sirve, así una cámara digital. De igual forma, tales servidores públicos, se llevaron al menor ******, los cuales en este momento se encuentran detenidos en las celdas de la Policía Ministerial y están muy golpeados, por lo que solicito que personal de esta Comisión se constituya en las celdas de dicha corporación a fin de que se dé fe de los golpes que presentan los antes señalados, ya que hasta el momento no se le ha*

brindado atención médica, ni tampoco nos permiten verlos, solamente los pude ver rápidamente hace un rato y me percaté que está muy golpeado".

2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo cual se admitió a trámite, radicándose con el número 169/2014, y se acordó solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe justificado, relacionado con los hechos denunciados, así como la exhibición de la documentación que se hubiera integrado sobre el caso.

3. Mediante oficio SSP/DJAIP/DADH/000690/2014, de fecha 18 de junio del 2014, el C. Lic. ******, Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, rindió el informe correspondiente, en el que refirió que no existe antecedente o documentación alguna relacionada con la detención de las personas que se mencionan en la presente queja.

4. Dentro del procedimiento se desahogaron las siguientes probanzas:

4.1. Pruebas obtenidas por esta Comisión.

4.1.1. Constancia de fecha 29 de mayo del año próximo pasado, elaborada por personal de esta Comisión, en la cual se asentó lo siguiente:

*"Que me constituí en las celdas de la Policía Ministerial del Estado y entrevisté al detenido ****** en relación con la petición de la C. ****** y manifestó que el día de ayer ala 1:00 p.m. fue detenido en la casa de su suegro ubicada en la colonia *****, yo me acababa de salir de bañar y los policías estatales se metieron a la casa de ahí me sacaron diciéndome o acusándome que tenía droga, lo cual es falso ya que yo trabajo con mi suegro ******; del lugar de mi detención me llevaron al OXXO que está por donde está el cuerudo, por el libramiento Naciones Unidas y posteriormente a la Cruz Roja en donde me hicieron un dictamen pero en ese entonces, no tenía ningún golpe y después me llevaron a unas oficinas por el Recinto Ferial en donde me metieron a un cuarto con aire acondicionado muy frío y me mojaron, dejándome el bóxer ya cada rato me golpeaban, me tenían amarrado de las manos y vendado de la cabeza, me tablearon, me dieron toques eléctricos con una chicharra, los policías eran hombres y mujeres y nos dijeron que eran estatales del grupo de Inteligencia; asimismo, nos*

*manifestaban que eran de un cartel, que del golfo y me torturaban para que dijera que yo conocía a gente pero yo no se a quien y querían que dijera que yo traía un carro negro pero eso es falso, también detuvieron conmigo a ****** y lo golpearon. Hasta el día de hoy aproximadamente a las 7 de la mañana me trajeron a estas celdas en donde no he tenido ningún problema, me han tratado muy bien, han dejado que mi familia entre a verme y me han dado alimento, solamente los Estatales los cuales nos amenazaron de muerte que si hablábamos nos van a matar en donde nos encuentren, por lo que temo por mi vida y solicito su intervención".*

4.1.2. Documental consistente en dictamen médico previo de integridad física del C. ******, emitido por el Dr. ******, Perito Médico Forense adscrito a este Organismo de Derechos Humanos, el cual presenta: heritema y edema en región malar en ambos lados de la cara; equimosis en flanco derecho del abdomen; equimosis situadas en tercio medio de ambas piernas; equimosis en regiones glúteas; excoriaciones dermoepidérmicas de 1 y 2 centímetros en rodilla izquierda y derecha.

4.1.3. Siete placas fotográficas, donde se aprecian las lesiones que presentara el C. ******.

4.1.4. Declaración informativa del C. ******, quien refirió lo siguiente:

*"…el día de ayer aproximadamente a las 2:30 p.m. cuando me encontraba en casa de un amigo de nombre ****** en la colonia 2 de Octubre fui detenido por elementos de la Policía Estatal los cuales me llevaron a unas oficinas por la Torre Nueva, en donde nos vendaron de los ojos golpeándome en todo mi cuerpo esposado de mis manos, me pegaban con el puño, con un palo no se exactamente cuantos eran alrededor de unos quince elementos, dejándome en ese lugar todo el día y toda la noche pegándome asimismo fuertemente en la nariz lo que ocasionó que me saliera mucha sangre, y con el palo me pegaban en la nuca, en el estómago y las costillas, dejándome en un cuarto de baño en el piso toda la noche, así mismo me daban chicharrazos en todo el cuerpo. El día de hoy a las 6:00 de la mañana me trasladaron a este lugar, en donde me han tratado muy bien, aún no he rendido declaración en el Ministerio Público y mi madre ****** ya ha venido a darme de comer. Deseo agregar que al C. ******. observé como le pegaban los estatales así como al suscrito para que declaráramos que teníamos personas secuestradas, armas, diciéndome a mi los policías que pusiéramos algo chido si no nos llevarían con la contra para que nos mataran, sin saber a qué se referían. También con puras palabras*

altisonantes nos amenazaban con una pistola en la cabeza, me le metían en la boca, en el cuello y estómago, diciéndome que me iban a matar si no decía lo que ellos querían y con la coleta del arma me pegaron en mi pie derecho y ya que tenían una lesión se subían en mi pie y me pateaban".

4.1.5. Documental consistente en dictamen médico previo de integridad física del C. ******, emitido por el Dr. ******, Perito Médico Forense adscrito a este Organismo de Derechos Humanos, el cual presenta: equimosis de 8 centímetros de diámetro situada en la región pectoral derecha; equimosis situado en la región del epigastrio; equimosis lineal situada en la región posterior del cuello; equimosis y edema en región maleolar (tobillo) del pie derecho; tres excoriaciones dermoepidérmicas de 4, 5 y 2 centímetros de longitud situada en cara anterior tercio medio del muslo derecho; equimosis lineales en región glútea derecha e izquierda".

4.1.6. Seis placas fotográficas, donde se aprecian las lesiones que presentara el C. ******.

4.1.7. Documental consistente en constancia elaborada por personal de esta Comisión, en la cual se asentó lo siguiente:

*"Que me comuniqué al Juzgado de Justicia para Adolescentes con al finalidad de que me fuera proporcionado el número del procedimiento especial que se le instruye al menor ******, mismo que fuera consignado por la Agencia del Ministerio Público Investigador para la Atención a Conductas Antisociales cometidas por Adolescentes bajo el número *****, informándome el Lic. *****, Secretario de Acuerdos que efectivamente el procedimiento especial que se le lleva a dicho joven es el ******, mismo que actualmente goza de su libertad, informándome el servidor público que para cualquier información al respecto dentro del procedimiento está a disposición en este Juzgado ya que no se están enviando copias a ninguna dependencia".*

4.1.8. Mediante oficio número SSP/DAI/DS/******/14, la Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos Internos, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó que en relación con los presentes hechos se inició el procedimiento administrativo de investigación número ******.

4.1.9. Declaración informativa del C. ******, elemento de la Policía Estatal Acreditable, quien señaló lo siguiente:

*"Que el día 28 de mayo del presente año, entre 3:00 y 4:00 de la tarde, anduvimos en un recorrido de vigilancia a bordo de las unidades ****** y ******, en compañía de varios compañeros, entre ellos ****** y ******, en la colonia 2 de octubre Huerta San Javier, percatándonos que había dos personas del sexo masculino, en actitud sospechosa, marcándoles el alto, ignorando la orden, dándose a la fuga, y uno de mis compañeros que iban atrás de la unidad, se dio cuenta que tiraron unas bolsas, a uno de ellos se le aseguró, y el otro alcanzó a brincar una barda en un solar, logrando su detención dentro del mismo, los paquetes que tiraron contenían marihuana, se les preguntó por qué habían corrido, contestando que por miedo, revisándoles sus celulares, en el cual uno de ellos traía información de labores del halconeo, decomisándoles los celulares por la información que traía, poniéndose a disposición del Agente del Ministerio Público, los celulares y los detenidos, preguntándoles su domicilio, y una vez que lo proporcionaron nos dirigimos hacia el mismo afuera del domicilio, se encontraba una persona del sexo masculino, quien manifestó ser el papá de dos personas del sexo femenino que se encontraban dentro del domicilio, pero que él ya no vivía ahí, que solamente había ido a visitarlos, preguntándoles sobre si conocía a los detenidos contestando que sí, que uno de ellos era la pareja de su hija y el otro era un amigo de él, y que momentos antes de la detención habían salido del domicilio, informándole al señor el motivo de la detención, diciéndonos que si se les había encontrado las bolsas de marihuana a las dos personas, que adelante que era nuestro trabajo, haciéndole una revisión corporal al señor, encontrándole una cámara fotográfica profesional en un maletín que traía el señor en le motocicleta, refiriéndonos la hija, que era de ella y que la ocupaba para su escuela, pidiéndole que nos mostrara la factura, por lo que una vez que lo hizo, se le hizo entrega de dicha cámara, trasladando a los detenidos a la Cruz Roja, para que les realizaran el certificado médico, llevándolos a las oficinas del Complejo Estatal de Seguridad Pública para elaborar la puesta disposición. Quiero hacer mención que en uno de los mensajes que traían en el celular uno de los detenidos, al parecer el menor de edad, decía que ya estaban cansados de las autoridades y que iban a ir a nuestras oficinas a realizar un atentado".*

4.1.10. Declaración informativa del C. ******, elemento de la Policía Estatal Acreditable, quien manifestó lo siguiente:

"Que al andar en un rondín de vigilancia en una de las colonias del sector sur por la salida Mante, serían aproximadamente entre 2 ó 3 de la tarde, se observó a dos jóvenes del sexo masculino en actitud sospechosa con celulares y que al ver nuestra presencia optaron por correr, por lo que fuimos

por ellos, uno de ellos brincó una barda, pero logrando darles alcance a ambos, la detención fue en una de las calles de esa colonia y no dentro de ningún domicilio, creo suponer que probablemente por ahí habitaban los jóvenes cerca de la detención, ya que se acercaron familiares de uno de ellos, al parecer el papá y una de la esposa o hermana del otro detenido, en la revisión de celulares se le encontró mensajes amenazantes hacia la corporación Estatal, quiero manifestar que cuando los 2 jóvenes vieron nuestra presencia antes de su detención, en la huída, tiraron una bolsa plástica la cual contenía sustancias nocivas (marihuana o cocaína), en ningún momento fueron golpeados dichos sujetos, al contrario fueron llevados a la Cruz Roja para su valoración médica, uno de ellos presentaba algunos tallones en su cuerpo debido a que al subirse a la barda en el trayecto de la huida se lesionó, ya que con nosotros no opusieron resistencia en la detención que realizamos a los dos jóvenes, ahí se encontraban presentes el padre de uno de ellos y la esposa o hermano del otro, lo que quiere decir que toda la revisión se hizo enfrente de ellos, sobre el dinero que argumentó la quejosa en ningún momento se les robó, ya que en ningún momento nos introdujimos al domicilio de ellos, los celulares que refiere, esos los pusimos a disposición del Ministerio Público, sobre la cámara digital que refiere, en ningún momento se les decomisó, solamente se revisó y se les hizo entrega al señor padre de uno de ellos, por lo que una vez detenidos se llevó como antes manifesté a la Cruz Roja para posteriormente ponerlos a disposición del Ministerio Público".

4.1.11. Declaración informativa del C. ******, elemento de la Policía Estatal Acreditable, quien refirió lo siguiente:

*"Que el día 28 de mayo del presente año, aproximadamente como a las 3:30 de la tarde, andaba a bordo de las unidades ****** y ******, en un recorrido de vigilancia, ingresando a la colonia Huerta San Javier, y en una calle que no recuerdo el nombre observamos a dos personas del sexo masculino, quienes se encontraban en actitud sospechosa, cuando nos vieron quisieron correr, marcándoles el alto para realizarles una revisión, y en lugar de aceptar, corrieron, aventando unas bolsas de plástico color negra que traían en las manos, dándole alcance a uno de ellos y el otro quiso brincar una barda, por lo que un compañero alcanzó a agarrar del pantalón, realizándoles una revisión corporal, encontrándoles unas bolsitas que contenían droga, revisándoles el celular y traían mensajes del halconeo llegando a un domicilio en la misma colonia, donde supuestamente vivía uno de los detenidos, y afuera estaba un señor en una moto con dos maletas negras, en una traía tarjetas de cobranza y en la otra traía una cámara profesional de fotografías, preguntándole que qué estaba haciendo en ese domicilio, contestando que ahí vivía, preguntándole si conocía a los detenidos, respondió que uno era su yerno, que cuando le preguntamos de quien era la cámara contestó que era de su hija, mandándole hablar a la muchacha para corroborar que fuera cierto, sacando una factura en la cual*

acreditaba el tipo, modelo y el nombre de la cámara, y efectivamente era de ella, entregándosela en sus manos, después de eso el señor preguntó el motivo de la detención, diciéndole el motivo, y que por ese delito iban a ser procesados, contestando que si estaba cometiendo un delito, que hiciéramos nuestro trabajo, trasladándolos a la Cruz Roja, para que les realizaran una certificación médica, posteriormente nos dirigimos hacia las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública, para elaborar la puesta a disposición y ya posteriormente se puso a disposición del Ministerio Público Investigador los detenidos, la droga y los celulares. Quiero mencionar que unos de los celulares traía un mensaje muy importante, ya que mencionaban que "querían apoyo para ir a reventar a los estatales porque ya lo tenían cansado". Haciendo la aclaración que nunca nos introducimos al interior del domicilio, ya que como ya lo mencioné nos entrevistamos afuera con el señor que ahí se encontraba para que nos dijera si efectivamente ahí vivía uno de los detenidos".

4.1.12. Constancia de fecha 9 de diciembre del 2014, elaborada por personal de este Organismo, en la cual se asentó lo que enseguida se transcribe:

*"Que me comuniqué a la Agencia ****** del Ministerio Público Investigador, siendo atendida la llamada por el oficial ministerial licenciado ******, mismo que se le solicitó la información respecto de que si ya tenía o contaba con el número de Averiguación Previa derivado de los hechos narrados por la quejosa ****** en representación de su esposo ****** y del menor ****** en contra de los elementos de la Policía Estatal Acreditable, por lo que fui informado por dicho servidor público que efectivamente ya habían dado inicio la Indagatoria Penal Nº ******/2014, misma que se encuentra en trámite".*

4.1.13. Constancia de fecha 12 de diciembre del año próximo pasado, elaborada por personal de esta Comisión, en la cual se asentó:

*"Que me constituí en hora y fecha señalada, a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en el área de la Dirección de Asuntos Internos, esto con la finalidad de entrevistarme con la licenciada ******, Directora de dicha área, esto con el fin de que me informara el estado actual del procedimiento administrativo número ******, por lo que me informó que todavía se encontraba en trámite".*

Una vez concluido el periodo probatorio, el expediente quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis se desprenden las siguientes:

C O N C L U S I O N E S

I. Este Organismo es competente para conocer la queja planteada por la **C. ******,** por tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a servidores públicos estatales, al tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

II. Analizado la narración del escrito de queja presentada por la C. ******, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas en adelante identificada sólo como "la Comisión (CODHET)", desprendió la comisión de presunta violaciones a los derechos humanos consistentes en el derecho a la integridad y libertad personal. Posteriormente, una vez que se analizaron los hechos y todas las evidencias que obran en el **Expediente N° 169/2014** de fecha 29 de mayo de 2014 sustanciado ante este Organismo, se tienen como acreditadas la vulneración de los derechos humanos a la integridad y libertad personal de los C.C. ****** y ****** cometida por elementos de la **Policía Estatal Acreditable** bajo la responsabilidad de la **Secretaria de Seguridad Púbica del Estado.**

FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA

3. Derecho humano a libertad personal

EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

> **Artículo 1o.**
> En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse

ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 14.

[…]
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.
[…]

Artículo 16.

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
[…]
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.
[…].

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS[8]:

Artículo 9
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS[9]:

Artículo 7.
Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

[8] Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 16 de diciembre de 1966. Vinculación de México: 23 de marzo de 1976. Adhesión. Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976.

[9] Conocido como: "Pacto de San José". Depositario: OEA. Lugar de adopción: San José, Costa Rica. Fecha de adopción: 22 de noviembre de 1969. Vinculación de México: 24 de marzo de 1981, adhesión. Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

4. Derecho a la integridad personal

EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Artículo 19.
[…]
Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

Artículo 20.
[…]
A. De los principios generales:

I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS:

Artículo 7
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Artículo 10
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;
b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.
3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS:

Artículo 5.
Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
(…)
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

III. Esta Comisión (CODHET) estima que las vulneraciones a los derechos humanos de los C.C. ********** y ********** se tiene como acreditadas, toda vez que

la autoridad (Secretaria de Seguridad Pública) no niega en el **INFORME** los actos u omisiones imputadas en su contra mediante el oficio 3039/2014, en dicho oficio se le hizo saber los agravios que la C. ****** señaló en su escrito de queja y además se le indico lo previsto en el artículo 36 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y que a la letra dice:

> En el informe que rinda la autoridad o servidor público señalado como presunto responsable deberá precisar si son ciertos o no los actos u omisiones que se le imputan y expresar los antecedentes, motivaciones y fundamentos que sirvieron de base para su actuación, así como los demás elementos que estime pertinentes.
> La falta de presentación del informe o de la documentación que los apoye, así como el retraso injustificado en su entrega, además de la responsabilidad correspondiente, establecerá la presunción de ser ciertos los actos u omisiones que se reclaman, salvo prueba en contrario.

No obstante, mediante el oficio SSP/DJAIP/DADH/000690/2014 (de fecha de 18 de junio de 2014), la Secretaria de Seguridad Pública remitió a este Organismo un INFORME que además de omitir negar expresamente los actos u omisiones imputadas, tampoco envía información relacionada al caso concreto, limitándose a señalar:

> *[…] que no existe antecedente o documentación alguna relacionada con la detención de las personas que se mencionan en la presente queja.*

En este sentido, la presunta ignorancia de la autoridad en relación a dicha detención se contrasta a la luz de lo manifestado por la señora ****** que pudo identificar las patrullas en las que se transportaban los policías que participaron en dicha detención. Ante esta situación, la Comisión (CODHET) le solicitó a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado los nombres de los policías que manejaban dichas patrullas, a lo que la autoridad contesto (oficio No. SSP/SSOP/2127/2014):

> […] me permito informar lo siguiente:
> Que los Elementos que tripulaban dichas patrullas son: ******, Policía A encargado de grupo, ******, Policía A y ******, Policía A) **de acuerdo**

a la puesta a disposición que nos proporcionara el Director de investigación de la Policía Estatal Acreditable.

Por lo tanto, esto implica que la autoridad tenía conocimiento de los hechos, o al menos que si indagaba un poco más, iba a estar en aptitud para responder eficientemente a lo que se le solicitaba en el oficio *3039/2014* (Informe), sin embargo, pese a tener una obligación constitucional y legal decidió ser omisa o lo que es peor, no colaborar.

Lo anterior se refuerza porque el oficio *3039/2014* dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado tiene fecha de recibido de ***4 de junio de 2014*** y la contestación se hizo el ***18 de junio del mismo año,*** por lo tanto, la autoridad tuvo *catorce días* para poder allegarse de información y dar correcto cumplimiento a sus obligaciones.

Además, de las diligencias que ha realizado esta Comisión (CODHET) se desprende que los C.C. ****** y ****** fueron puestos a disposición del Ministerio Público (declaraciones policiales y oficio de 6 de mayo de 2014) y posteriormente fueron consignados a un juez especializado en materia de justicia para adolescentes (10 de junio de 2014), en estas diligencias se observa que fueron Policías Estatales Acreditables los que pusieron a disposición a dichas personas. Por lo tanto, la detención si existió y tenía que constar para la Secretaria de Seguridad Pública y en consecuencia poder estar en condiciones de colaborar con las investigaciones de la Comisión (CODHET).

En este sentido, ya que dicha detención existió y la autoridad responsable fue omisa en negar las acciones u omisiones imputadas (presuntas violaciones) por la quejosa. Este Organismo presume la veracidad de dichas vulneraciones (artículo 36 de la ley CODHET), lo cual reforzará tomando en cuenta otros medios de convicción que obran en el expediente de queja y que la Comisión (CODHET) pudo recabar.

Bajo esta perspectiva, de los testimonios vertidos por los policías que intervinieron en la detención, todos de fecha de 21 de agosto de 2014, destaca lo declarado por:

****** (Policía A):

> […] en **ningún momento fueron golpeados** dichos sujetos, al contrario fueron llevados a la Cruz roja para su valoración médica, uno de ellos presentaba algunos tallones en su cuerpo debido que al subirse a la barda en el trayecto de la huida se lesionó, **ya que con nosotros no opusieron resistencia en la detención que realizamos a los dos jóvene**s […]

En consecuencia, más allá de las lesiones que se manifiestan en este testimonio, es decir, los tallones del menor ****** aparentemente realizados al momento de saltar una barda y los cuales se cotejan con el dictamen médico de la Comisión (CODHET), los detenidos no deberían presentar más alteraciones físicas. Sin embargo, en dicho dictamen médico de fecha 29 de mayo de 2014 que se realizó en las celdas de la Policía Ministerial, se indicó la presencia de más lesiones:

Respecto al C. ********** (que no debía presentar lesiones) se dictamino (a las 16:00 horas) la presencia de:

> **Exploración física:**
> Presenta eritema y edema en región malar en ambos lados de la cara.
> Equimosis en flanco derecho del abdomen.
> Equimosis situada en el tercio medio de ambas piernas.
> Equimosis en regiones glúteas.
> Excoriaciones dermoepidérmicas de 1 y 2 centímetros en rodilla izquierda y derecha.
> **Conclusiones**
> **Primera**: Lesiones que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de 15 días.
> **Segunda**: Las lesiones no son autoinfringidas.
> **Tercera**: Las lesiones son contemporáneas a los hechos por los elementos que las constituyen como lo son el eritema, edema y las equimosis.

> **Cuarta**: las lesiones en comento fueron producidas con las manos, pies y objeto contuso sobre el cuerpo de la persona.

Respecto al C. ********** (a las 16:20 horas), que solo debía presentar un raspón en el pecho, se dictamino lo siguiente:

> **Exploración física:**
> Presenta equimosis de 8 centímetros de diámetro situada en la región pectoral derechos.
> Equimosis situado en la región del epigastrio.
> Equimosis lineal situada en la región posterior del cuello.
> Equimosis y edema en región maleolar (tobillo) del pie derecho.
> Tres excoriaciones dermoepidérmicas de 4, 5, y 2 centímetros de longitud situada en cara anterior tercio medio del muslo derecho.
> Equimosis lineales en región glútea derecha e izquierda.
> **Conclusiones**
> **Primera:** Lesiones que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de 15 días.
> **Segunda:** Las lesiones no son autoinfringidas.
> **Tercera:** las lesiones son contemporáneas a los hechos por los elementos que las constituyen como los son las equimosis y excoriaciones.
> **Cuarta:** Las lesiones en comento fueron producidas con las manos, pies y objeto contuso sobre el cuerpo de la persona.

Estos dictámenes, revelan la presencia de lesiones que no encuentran explicación a la luz de lo declarado por el Policía ****** (de 21 de agosto de 2014), ni de las escasas explicaciones que proporciona la Secretaria de Seguridad Pública en su informe (de fecha de 18 de junio de 2014). El hecho de haber manifestado la no existencia de violencia en dicha detención, más que las circunstancias señaladas en las que se lesiono ******, genera la duda sobre la autoría de dichas lesiones adicionales, pero además, porque son coincidentes con la mecánica que las produjo y que se describe por los afectados en sus declaraciones informativas rendidas ante esta Comisión (CODHET) en las que indican:

De ********** (29 de mayo de 2014).

> […] fui detenido por elementos de la Policía Estatal los cuales me llevaron a unas oficinas por la torre nueva, en donde nos vendaron de

> los ojos golpeándome en todo mi cuerpo esposado de mis manos, me pegaban con el puño, con un palo no sé exactamente cuántos eran alrededor de unos 15 elementos, […]

De ********** (29 de mayo de 2014).

> […] después me llevaron a unas oficinas por el recinto ferial en donde me metieron en un cuarto con aire acondicionado muy frio y me mojaron, dejándome en bóxer y a cada rato me golpeaban, me tenían amarrado de las manos y vendado de la cabeza, me tablearon, me dieron toques eléctricos con una chicharra, lo policías eran hombres y mujeres y nos dijeron que eran estatales del grupo de investigación, […]

Por lo que respecta a la responsabilidad de dichas lesiones, estas son atribuidas a la autoridad que toma en custodia a una persona ilesa, pero cuando sale de su esfera de control dicho estado es diferente, ya que ahora presenta alteraciones en su integridad personal (lesiones) que no son explicadas por la autoridad de manera lógica y coherente.

En el caso concreto, la autoridad policial no ofrece una explicación sobre la presencia de las lesiones. Aunado a esto, uno de los policías testificó que no hubo violencia en la detención aunque inexplicablemente estas fueron presentadas por los detenidos, pudiendo ser registradas por el dictamen médico que este Organismo realizo. En consecuencia, la Comisión (CODHET) entiende que las lesiones solo pudieron aparecer entre la detención y la puesta a disposición ante Ministerio Público, en este sentido, dado que esta institución hizo un dictamen de integridad física en las instalaciones de la ministerial y que de las declaraciones de los afectados se desprende su manifestación de haber recibido un buen trato en dichas instalaciones, se tienen como atribuidas a la Autoridad Policial.

Por lo tanto, los elementos de la Policía Estatal Acreditable fueron omisos en proporcionar resguardo y custodia efectiva a las personas

detenidas, sobre todo tomando en cuenta que uno de los imputados es menor de edad (******), en este sentido, existe responsabilidad porque no solo se omitiera dar el resguardo y custodia debida, sino porque obran en el expediente otros medios de convicción como: las acusaciones por parte de los jóvenes que señalan a la autoridad policial como autora de sus lesiones; el dictamen médico que realizó este Organismo en las instalaciones de la autoridad ministerial que señala la presencia de lesiones, no auto infringidas y cuya contemporaneidad es coincidente con los hechos descritos por los afectados; la negativa de la autoridad responsable (Secretaria de Seguridad Pública) a colaborar eficientemente con este Organismo, lo que provocó la actualización de tener como ciertos los actos u omisiones en virtud del artículo 36 de la ley que rige a esta institución y finalmente, el reconocimiento de los detenidos de no sufrir ningún daño durante su estancia en las instalaciones de la ministerial.

En esta misma línea de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en relaciona al caso concreto el siguiente criterio de interpretación:

> Época: Novena Época
> Registro: 163167
> Instancia: Pleno
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
> Tomo XXXIII, Enero de 2011
> Materia(s): Constitucional
> Tesis: P. LXIV/2010
> Página: 26
>
> **DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.**
>
> La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos

> reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos.
>
> Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.
> El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LXIV/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.

Adicionalmente, la interpretación del Poder Judicial Federal respecto a la responsabilidad de una autoridad que detiene a una persona también ha señalado:

> Época: Décima Época
> Registro: 2005682
> Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
> Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III
> Materia(s): Constitucional, Penal
> Tesis: XXI.1o.P.A.4 P (10a.)
> Página: 2355

DETENCIÓN DE UNA PERSONA POR LA POLICÍA. CUANDO AQUÉLLA PRESENTA LESIONES EN SU CUERPO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA CONOCER LA CAUSA QUE LAS ORIGINÓ RECAE EN EL ESTADO Y NO EN EL PARTICULAR AFECTADO.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios orientadores en el sentido de que el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia (Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141). Por lo que existe la presunción de considerar responsable al Estado por las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales, si las autoridades no han realizado una investigación seria de los hechos seguida del procesamiento de los que aparezcan como responsables de tales conductas (Caso "Niños de la Calle", Villagrán Morales y otros vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63). Estos criterios dan pauta objetiva para considerar que la carga de la prueba para conocer la causa que originó las lesiones que presenta en su cuerpo una persona que fue detenida por la policía, recae en el Estado y no en los particulares afectados; sobre todo, si a esos criterios se les relaciona directamente con los principios de presunción de inocencia -que implica que el justiciable no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, pues en él no recae la carga de probar su inocencia, sino más bien, es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la responsabilidad del imputado-; y, pro homine o pro personae -que implica efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales del ser humano-.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 144/2013. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretario: Ernesto Fernández Rodríguez.

IV. Por lo tanto, esta Comisión (CODHET) encuentra acreditada la vulneración del derecho humano a la integridad personal de los C. C. ****** y ******,

cometidas por elementos de la Policía Estatal Acreditable bajo la responsabilidad de la Secretaria de Seguridad Pública.

Bajo esta misma línea, también se acredita la violación del derecho humano a la libertad personal por considerarla como arbitraria, ya que al existir lesiones en los detenidos que son atribuibles a los elementos de la Policía Estatal Acreditable esta figura se actualiza.

La prohibición de la detención arbitraria implica que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que aun calificados de legales puedan reputarse como incompatibles con el resto a los derechos fundamentales del individuo, ya que se traducen entre otras cosas, como irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad. En este sentido, toda restricción a la libertad debe ser legal y no arbitraria, es decir, razonable, previsible y proporcionada, de ahí que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos requisitos se aplican no sólo a las medidas que afectan a la libertad, sino también a las normas de derecho interno que autorizan su privación.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al análisis a realizar en la determinación de la arbitrariedad de una detención ha estipulado la necesidad de hacer un examen de varios aspectos de la detención, los cuales son la compatibilidad con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; la idoneidad de la medida; su necesidad, y su proporcionalidad. En concreto, se ha determinado que:

> […] no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan a efecto de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha

> reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido, entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto; por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención[10].

En el caso concreto, existieron vulneraciones a la integridad personal de los sujetos detenidos (derecho reconocido por la Convención Americana) que para esta Comisión (CODHET) quedan atribuidos a los elementos de la Policial Estatal por sus omisiones y/o acciones. Además, debe señalarse que aun cuando existió una detención amparada presuntamente en la figura de la flagrancia, lo cierto, es que la autoridad responsable (Secretaria de Seguridad Pública) no envió los documentos que soportaran el proceder de los Policías en el marco de esta figura. Por lo tanto, a la luz de la presunción de tener como ciertas las acciones y omisiones imputadas a la autoridad, la flagrancia se tiene como no acreditada y la detención se asume no solo como arbitraria sino también como ilegal.

[10] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21, párr. 93. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 128, Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 98 y Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187. párr. 62.

Adicionalmente, debe destacarse el tema de las detenciones motivadas por la denominada ***actitud sospechosa****,* ya que de las declaraciones vertidas ante este Organismo por los tres policías que intervinieron en la detención de los quejosos, estos manifestaron que el origen de su actuación fue motivada por esta causa (declaraciones del 21 de agosto de 2014), al respecto la Comisión (CODHET) comparte el criterio sostenido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Recomendación General Número 2 sobre la Práctica de las Detenciones Arbitrarias de fecha 19 de junio de 2001 en el que se señala:

> *Al respecto, también cabe precisar que no obstante que las autoridades de la policía preventiva tengan precisamente dichas facultades (prevención del delito), esto tampoco les permite detener a persona alguna por encontrarse en* ***"actitud sospechosa" y/o "marcado nerviosismo";*** *siendo que tienen el deber de proteger los derechos y garantías fundamentales de las personas, particularmente de aquéllas en cuyo arresto o detención intervengan, o que estén bajo su custodia, debiendo tener en todo momento, una apreciación clara de sus responsabilidades y limitaciones relativas a la detención de estos transgresores, para lo cual deben guiarse únicamente por la conducta de las personas y nunca por su apariencia, tanto al ocuparse de quienes violan la ley como al tratar con quienes la respetan. […]*
>
> *En relación con las actitudes* ***"sospechosas" y/o "marcado nerviosismo",*** *no se puede concluir que dichas conductas sean la evidencia por la cual los elementos policíacos tengan noticia de un delito, y en esta virtud no se puede señalar que los agentes de referencia puedan legalmente proceder a detener a cualquier persona porque se encontraba en la comisión de un flagrante delito, o a realizarle una revisión corporal. Lo anterior, atenta contra los principios de seguridad jurídica y legalidad previstos en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, independientemente del resultado que se obtenga de la revisión efectuada.*
>
> *Es decir, desde el punto de vista jurídico, las detenciones arbitrarias no encuentran asidero legal porque son contrarias al principio de inocencia; se detiene para confirmar una sospecha y no para determinar quién es el probable responsable de haber cometido un delito. Las detenciones ilegales constituyen una inversión de este ininculcable principio y derecho fundamental.*

En este contexto resulta irrelevante si, como consecuencia de la revisión corporal, los agentes de la Policía Judicial encuentran o no algún objeto del delito, pues la trasgresión a los derechos fundamentales y a las garantías constitucionales enunciadas, se consumó cuando se dio la detención sin fundamento legal.

Por otro lado, este Organismo de Protección de Derechos Humanos condena toda conducta delictiva que lesione los intereses de terceros o de la sociedad en su conjunto, sin embargo, de ninguna manera se puede avalar que las autoridades y/o servidores públicos combatan dichas conductas fuera del marco constitucional y legal en materia de derechos humanos.

Finalmente, la Comisión (CODHET) se estima imposibilitada para pronunciarse por la vulneración del derecho humano a la propiedad (allanamiento y el robo), toda vez que carece de suficientes elementos que se coaliguen con la presunción de tener como ciertas las violaciones descritas en el escrito de queja.

V. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Fracción II, 42, 43, 48 y 49 de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este Organismo, así como los numerales 63 fracción V, del Reglamento Interno. Se emite **RECOMENDACIÓN** al **Secretario de Seguridad Pública** como superior jerárquico de los elementos de la **Policía Estatal Acreditable** por haber incurrido en la vulneración de los derechos humanos a la integridad y libertad personal de los C.C. ****** y ******. Además, se invoca los artículos 48 de la Ley de la CODHET, 28, 29 y demás relativos previstos en la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Tamaulipas, en la cual se prevé que toda persona víctima de violaciones de derechos humanos tiene el derecho a una reparación integral, en este sentido, la Comisión (CODHET) determina:

R E C O M E N D A R

AL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.

PRIMERA: A fin de reparar la violaciones concretas a los derechos humanos que se cometieron en perjuicio de las hoy víctimas, se estima necesario que se proceda a la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios derivados de los hechos ocurridos el 28 de mayo de 2014 en el cual, resultaron lesionados los C.C. ****** y ******, además de ser detenidos de forma arbitraria e ilegalmente por elementos de la Policía Estatal Acreditable.

SEGUNDA: Como medidas de no repetición. Se le pide a la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO fortalezca sus procesos de capacitación en materia de detenciones, dirigidos a todos los elementos policiales que se encuentran bajo su mando. Además, se le pide instruya a los responsables de todas sus áreas y/o instancias dependientes de esta, la obligación legal que se tiene para colaborar eficientemente con este Organismo y sus investigaciones. En este sentido, se recomienda la implementación de una intensa capacitación en materia obligaciones derivadas de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y su Reglamente interno, así como de sus objeto y fin.

TERCERO: Se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la atención victimológica integral a las víctimas, así como a la C. ****** esposa del C. ****** en los términos de la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado.

CUARTO: Se informe la resolución definitiva que adopte la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública, desprendida del Procedimiento Administrativo ****** interpuestas contra los policías que participaron en la detención de los C.C. ****** y ******.

Considerando que de los presentes hechos se advierten la posible configuración de algún ilícito penal, dese vista de la presente resolución al C. Procurador General de Justicia del Estado, para los efectos conducentes

Dése vista a la Dirección General del Instituto de Atención a Víctimas del Delito de la presente resolución, para que de acuerdo a su competencia se proceda conforme a lo establecido en la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con el artículo 49 de la Ley de esta Comisión, es procedente requerir a la autoridad recomendada para que, dentro de un plazo de diez días hábiles, informen sobre la aceptación de esta recomendación y, en su caso, remitan dentro de los quince días siguientes las pruebas relativas a su cumplimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma establecida.

Así lo formuló el C. Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Doctor José Ramiro Roel Paulín, y aprueba y emite el C. Doctor José Martín García Martínez, Presidente de esta Comisión, en términos del artículo 22 fracción VII, 24 fracción VI, inciso c) y d), de la Ley que regula el funcionamiento de este Organismo, así como el 22 fracción VII, 26 y 69 fracción V de su Reglamento.

_____

Dr. José Martín García Martínez
Presidente

_____

Dr. José Ramiro Roel Paulín
Secretario Técnico

Proyectó

_____

Mtro. Orlando Javier Rosado Barrera
Visitador Adjunto

QUEJA NÚM.: 120/2014-M
QUEJOSA: ****
RESOLUCIÓN: RECOMENDACIÓN NO.: 011/2015

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los doce días del mes de mayo del año dos mil quince.

Visto para resolver en definitiva el expediente número 120/2014-M, iniciado con motivo de la queja presentada por la C. ******, ante la Delegación Regional con sede en Matamoros, Tamaulipas, mediante el cual denunciara Incumplimiento de la Función Pública en la Procuración de Justicia, por parte de la Agencia ****** del Ministerio Público de Protección a la Familia con sede en esa ciudad fronteriza; y una vez agotado el procedimiento, se resuelve de conformidad con los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, por conducto de su Delegación Regional en Matamoros, Tamaulipas, recibió el escrito de queja presentado por la C. ******, en el cual expuso lo siguiente:

> "…que el C. Juez Primero de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, le cedió la custodia a mi hijo******, de su menor hija dictándose para tal efecto las reglas de
>
> convivencia para que la C. ****** madre de mi menor nieta pudiera convivir con ella, el caso es que el día tres de enero del presente año, se llevó a su hija pero ya nunca regresó, motivo por el cual mi hijo******, acudió a la Agencia Primera del Ministerio Público de Protección a la Familia a presentar la denuncia en contra de la C. ******, y del señor ******, quien es su actual pareja, por tal efecto se integró el acta circunstanciada número ******/2014 en contra de estas dos personas en su momento mi hijo presentó ante la mencionada Fiscalía Investigadora copia de la resolución incidental dictada en fecha diecisiete de diciembre del año dos mil trece, por el Juez ****** de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, relativo correspondiente al despacho número 02/2010 y en cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo número ******/2012, promovido por mi hijo, así

> mismo ofreció como prueba que se recaben las declaraciones testimoniales de los CC ******, las cuales ya fueron recabadas, también en fecha veinticuatro de mayo de año en curso, proporcionó a la mencionada Representación Social la dirección actual en donde puede ser localizada ******, el cual se encuentra ubicado en el ****** en los Estados Unidos de América, sin embargo hasta el día de hoy la Fiscal Investigadora no ha hecho nada al respecto e inclusive hace aproximadamente un mes acudimos a la mencionada Agencia ****** del Ministerio Público de Protección a la Familia y nos entrevistamos con la C. ****** de la cual desconozco sus apellidos, pero nos informó que el expediente ya se había reservado y que ya no podían hacer más en virtud de que mi menor nieta se encontraba en Estados Unidos, a lo que respondimos que ya se la habían proporcionado datos suficientes para su localización pero insistió que ellos ya no podían hacer nada porque mi menor nieta se encuentra en Estados Unidos, motivo por el cual presento la queja en contra de la Agencia ****** del Ministerio Público de Protección a la Familia de esta ciudad y solicito de este Organismo investiguen los presentes hechos…"

2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo cual se admitió a trámite, radicándose bajo número 120/2014-M y se acordó solicitar a la autoridad señalada como responsable, rindiera un informe justificado, relacionado con los hechos denunciados, así como la exhibición de toda la documentación que se hubiera integrado sobre el caso.

3. Mediante oficio número 2641/2014, de fecha 17 de diciembre del año próximo pasado, la C. LIC****** Agente ****** del Ministerio Público de Protección a la Familia con sede en Matamoros, Tamaulipas, rindió el informe solicitado en los términos siguientes:

> "…le comunico a usted, que no son ciertos los actos u omisiones que se imputan a esa Autoridad por parte de la quejosa; con motivo de la queja de la ahora ofendida, toda vez que los datos proporcionados por la misma del Acta circunstanciada número ******/2014, no corresponden con los hechos mencionados por la ahora ofendida…"

4. El informe rendido por la autoridad señalada como responsable fue notificado al quejoso para que expresara lo que a su interés conviniere, y por considerarse necesario, con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a esta Comisión, se declaró la apertura de un periodo probatorio por el plazo de diez días hábiles.

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron las siguientes probanzas:

5.1. Pruebas aportadas por la quejosa:

5.1.1. Escrito de fecha 23 de febrero del presente año, signado por la C. ******, en el que expone lo siguiente:

> "…que por medio del presente escrito vengo a manifestar en relación al informe rendido por la C. Agente del Ministerio Público de Protección a la Familia de esta ciudad. Lo cual lo hago de la siguiente manera, en efecto mi hijo******, acudió ante la instancia de procuración de justicia, que dicho sea de paso ejerce el monopolio de la acción penal, a interponer querella en contra de ******, quien de una manera ilegal sustrajo a mi nieta ******, para llevársela a los Estados Unidos de Norteamérica, dentro de la indagatoria penal se aportaron los elementos constitutivos del cuerpo del delito, así como la plena responsabilidad de los indiciados que se refiere en dicha indagatoria, ahora bien conocedores de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas no investiga, es decir, le deja toda la carga de la investigación al ciudadano, en esa razón me di a la tarea de investigar por propia cuenta la dirección en donde tenía sustraída a mi nieta, lo que puse de conocimiento a la autoridad investigadora, pero cual fue la sorpresa cuando se me notifica que no se puede mandar citar a los presuntos responsables toda vez de que viven en los Estados Unidos de Norte América, es decir, la justicia mexicana no alcanza a ningún ciudadano norteamericano, es lo que quiso decirnos dicha autoridad investigadora, siendo esto suficiente para que el delito cometido por estas personas quedara en LA TOTAL IMPUNIDAD. Esto me llena de temor el solo pensar que cualquier extranjero pueda cometer un delito en México y refugiarse en los Estados Unidos y así de esa manera las autoridades mexicanas no pueden alcanzarlos para hacerlos pagar los delitos cometidos en contra de los ciudadanos mexicanos, quizás esto solo se de en el ámbito del Estado de Tamaulipas. Ahora bien se que mi nieta ******, está sufriendo por

que la única vez que pude comunicarme con ella se escuchaba temerosa y me decía que hablara con el Juez para que se regresara a México y yo le pedía a mi nieta que le dijera a la señora ****** que la regresara y mi nieta me decía que ella ****** no quería, como lo acredito con el CD que contiene la grabación de esa llamada. NO ES CIERTO que la titular de esa Agencia Investigadora diga que no le pedimos audiencia, contrario a lo manifestado por ella tanto la suscrita como mi hijo ******, acudimos a pedir que nos atendiera, cosa que nunca sucedió nos atendía su secretaria oficial, quien nunca nos resolvió nada tan solo nos decía "LO VOY A CONSULTAR CON LA TITULAR" "YO LE COMENTO A LA TITULAR", para su conocimiento señor delegado en esta ciudad los Agentes del Ministerio Público Investigadores como los Jueces son personas que no dan la cara a la ciudadanía a quienes nos cortan nuestro derecho a audiencia. Por último me permito manifestar que las personas de procuración de justicia deben de tener un perfil profesional y tener experiencia en los tramites de persecución de delito, buscar alternativas como accionar tratados internacionales, convenios internacionales, a efecto de que personas que cometan delitos en el Estado de Tamaulipas, y que huyan o sean de ciudadanía americana pueden comparecer ante la justicia mexicana, a efecto de que respondan por los delitos que cometan en el Estado y que no queden en la impunidad dichos delitos. Considero que la LIC. ****** lo único que pretende con dicho informe es justificar el no hacer nada para lograr el castigo a los presuntos responsables y que mi nieta sea restituida al seno de su familia. Así las cosas están en nuestro Estado. No debe pasar desapercibido que se violan los derechos más elementales de mi nieta consistente en seguridad jurídica y de procuración y de administración de justicia contemplados en los artículos 14, 16, 17, 20 y 21 de nuestra Carta Magna.- Por lo anteriormente expuesto solicito se me tenga por presentada por medio de este escrito haciendo mis manifestaciones en contra del informe rendido por la Agente del Ministerio Público a la Familia de esta ciudad, ofreciendo el CD que contiene una llamada de la menor. Todo lo anterior para los efectos legales a que haya lugar…"

5.2. Pruebas obtenidas por este Organismo:

5.2.1. Constancia de fecha 05 de febrero del presente año, elaborada por personal de este Organismo en la que se asentó lo siguiente:

"… que el suscrito Lic. ******, Visitador Adjunto me comuniqué vía telefónica con la C. ******, de generales conocidos dentro del expediente de queja número 120/14-M, con la finalidad de informarle que debe presentarse en esta Delegación Regional

para darle vista del informe de autoridad, siendo la llamada enviada a buzón…"

5.2.2. Declaración informativa recabada a la C. ******, en la que señaló lo siguiente:

"…que en relación al informe rendido por la C. LIC. ******, Agente ****** del Ministerio Público de Protección a la Familia de esta ciudad, mediante oficio número 2641/2014 de fecha 17 de diciembre del año próximo pasado, es mi deseo manifestar: Que como es posible que la Agencia del Ministerio Público de Protección a la Familia, no pueda hacer nada para que regresen a mi menor nieta, si se le está aportando la dirección en donde se encuentra, los derechos de mi nieta fueron violados dos veces pues en una de las convivencias que tuvo la C. ****** con mi nieta la cruzó a Estados Unidos de América, aún cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores se lo había impedido, por suerte esa vez si regresó a mi menor nieta, pero la última vez ya no la regresó, además quiero señalar que mi menor nieta no quiere estar con ella por los malos tratos y porque no le da los cuidados necesarios; de igual manera deseo señalar que me he presentado en repetidas ocasiones para darle seguimiento a la denuncia en la Agencia del Ministerio Público de Protección a la Familia, en donde solo me comentan que necesitan una dirección en esta ciudad, la cual es imposible proporcionarles ya que no se encuentran en esta ciudad, además la última vez que me constituí en dicha Fiscalía me comentó que iba a analizar mi expediente, pero hasta el momento no he sabido de algún avance…"

5.3. Pruebas aportadas por la autoridad señalada como responsable:

5.3.1. Oficio número 00/2014, de fecha 16 de diciembre del año próximo pasado, a través del cual la C. ******, Agente del Ministerio Público de Protección a la Famita, informa lo siguiente:

"…le comunico a usted que no son ciertos los actos u omisiones que se imputan a esta autoridad por parte de la quejosa, como ya se informó; no obstante me permito indicar, que al realizar una búsqueda en el sistema de cómputo con que cuenta esta autoridad, fue localizado el expediente número A.C.00******/2014,

> la cual se dio inicio ante esta Fiscalía con fecha 24 de enero del año en curso, fue ratificada la denuncia por escrito por parte del ciudadano ******, por el delito de SUSTRACCIÓN Y RETENCIÓN DE MENORES POR LOS PADRES en contra de ****** en el cual obra agregado en autos resolución incidental de fecha 17 de diciembre del año dos mil trece, sobre restitución de la menor ******, en la cual se decretan reglas de convivencia, así mismo con fecha nueve de abril el año en curso, se recepcionan las testimoniales a cargo de ******, ahora si bien es cierto con fecha veinticuatro de mayo del presente año, el ahora ofendido ******, mediante escrito de promoción proporciona el domicilio de la ahora probable responsable ******, cierto es que dicho domicilio se localiza con el número ****** EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sin proporcionar algún otro domicilio en esta ciudad, por lo que se realizan diversas diligencias dentro del expediente de mérito, no encontrándose hasta este momento elementos suficientes que ayuden a resolver en definitiva el mismo, para tal efecto me permito anexar copia certificada del expediente A.C.0******/2014, para su mayor ilustración; así mismo quiero hacer mención que hasta el momento el ahora ofendido no ha solicitado audiencia o entrevista con la suscrita para informarle sobre el trámite de su denuncia…”

6. Una vez concluido el periodo probatorio, el expediente quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis se desprenden las siguientes:

C O N C L U S I O N E S

PRIMERA. Este Organismo es competente para conocer la queja planteada por la C. ******, por tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a una autoridad estatal, al tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDA. La queja interpuesta por la C. ******, la hizo consistir en Incumplimiento de la Función Pública en la Procuración de Justicia, por parte de la Agencia ****** del Ministerio Público de Protección a la Familia con sede en Matamoros, Tamaulipas.

TERCERA. La C. ****** señaló que a su hijo ****** le fue cedida la custodia de su menor hija, por parte del Juez ****** de lo Familiar de Matamoros, Tamaulipas; que dicho Juez dictó las reglas de convivencia de la menor con su madre C. ******; que dicha persona y su pareja C. ****** en fecha 3 de enero de 2014 se llevaron a la menor a Estados Unidos y no la regresaron, motivo por el cual su hijo ****** interpuso la denuncia ante la Agencia Primera del Ministerio Público de Protección a la Familia, donde se radicó como Acta Circunstanciada ******/2014, que a pesar de que su hijo aportó las pruebas testimoniales, documentales y la dirección de los denunciados la Ministerio Público no hacía nada, e incluso, ya había reservado el expediente.

Al respecto, la LIC. ******, Agente ****** del Ministerio Público de Protección a la Familia de Matamoros, Tamaulipas, informó que al realizar una revisión en el sistema de cómputo de esa Fiscalía fue localizada la Acta Circunstanciada 0******/2014, con motivo a la denuncia del C. ******, por el delito de sustracción y retención de menores por los padres, en contra de la C. ******, dentro de la cual, el ofendido proporcionó el domicilio de la probable responsable en Estados Unidos de Norteamérica, sin embargo, no proporcionó domicilio en esa ciudad; que se realizaron diversas diligencias dentro del expediente pero no se han encontrado elementos suficientes para resolverlo.

Así mismo, obra agregado a las constancias del expediente de queja copia certificada de las actuaciones practicadas dentro del Acta Circunstanciada ******/2014, de la que se desprende que en fecha 1 de abril de 2014, el ofendido C. ******, allegó copia certificada de la sentencia dictada dentro del expediente 0******/2010, correspondiente al procedimiento para la restitución de la menor solicitada por la C. ******, ante el Juez ****** de Primera Instancia de lo Familiar en

Matamoros, Tamaulipas, en la que se determinó que no procedió la solicitud de restitución de la menor ******; denegándose la misma, y determinando que la menor debe permanecer al lado de su padre ******, ya que ya se encontraba integrada a su nuevo medio, con su padre y abuelos paternos, decretándose las reglas definitivas de convivencia de la menor con su madre. De igual forma, fueron aportadas por parte del ofendido las declaraciones testimoniales de los CC. ******, y en fecha 24 de mayo de 2014, el ofendido aportó el domicilio en que habitan las personas denunciadas (ubicado en los Estados Unidos de Norteamérica); no obstante ello, se desprende que la representante social acordó improcedente lo solicitado, toda vez que el lugar donde se encuentra el probable responsable no se encuentra dentro de su jurisdicción; además que en fecha 19 de agosto de 2014, se emitió acuerdo de archivo del Acta Circunstanciada; por lo que resulta evidente que la Titular de la Agencia ****** del Ministerio Público de Protección a la Familia ******ha incurrido en actos violatorios de derechos humanos en agravio del C. ******, al acordar el archivo del expediente, en fecha 19 de agosto de 2014, no obstante que el denunciante aportara las probanzas necesarias, así como, la dirección de los probables responsables, y si bien, la funcionaria pública arguye que el domicilio proporcionado por el ofendido es de Estados Unidos, y que se omitió aportar domicilio en esa ciudad; se omitió hacer uso de los mecanismos previstos por los artículos 55 y 56 del Código de Procedimientos Penales en nuestro Estado, y requerir por las vías diplomáticas correspondientes las declaraciones de los probables responsables; y con su actuación, la funcionaria pública señalada como responsable atenta contra el derecho humano del acceso a la justicia pronta y expedita, esto es así, pues del contraste entre lo denunciado y la "investigación" realizada por el Fiscal aquí denunciado, resulta evidente que no cumplió con la obligación de realizar una investigación seria y efectiva, al omitir elevar a categoría de averiguación previa el acta circunstanciada, y agotar los medios a su alcance para esclarecer los hechos denunciados; empero, contrario a ello, se dictó el archivo del acta, conculcando el derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 Constitucional, conforme lo dispone la siguiente tesis jurisprudencial:

"9a. Época

Semanario Judicial de la federación y su Gaceta
Tomo XXXIII
Enero de 2011
Pág. 25.

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS CONSTITUYEN UNA OBLIGACIÓN PROPIA DEL ESTADO QUE DEBE REALIZARSE DE FORMA SERIA, EFICAZ Y EFECTIVA*. El derecho de acceso a la justicia previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está referido a la función jurisdiccional desarrollada por los tribunales, pero también debe entenderse vinculado, particularmente en el caso de la justicia penal, con la investigación y persecución de los delitos, función asignada al Ministerio Público conforme a los artículos 21 y 102, apartado A, constitucionales, pues tal prerrogativa tiene como presupuesto lógico, en una relación de interdependencia, la efectiva investigación de los delitos. Esta obligación de investigar y perseguir los actos delictuosos debe asumirse por el Estado como una obligación propia y no como un mero trámite, ni su avance debe quedar a la gestión de los particulares afectados o de sus familiares, sino que realmente debe tratarse de una investigación seria, imparcial y efectiva, utilizando todos los medios legales disponibles que permitan la persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, sanción a los responsables de los hechos, especialmente cuando están involucrados agentes estatales. Ello es así, porque en el respeto a los derechos fundamentales, particularmente los relativos a la vida y a la integridad física, el Estado debe asumir una conducta activa y decidida para prevenir su vulneración, a través de las acciones legislativas, administrativas y judiciales necesarias, además de acometer lo necesario para que, en caso de ser vulnerados, las conductas respectivas puedan ser sancionadas."*

Cabe mencionar que la función del Ministerio Público de investigar y perseguir los delitos no es ajena a la garantía de pronta expedición de justicia, pues al ser ésta una fase previa a la propiamente jurisdiccional, debe regirse bajo el principio de eficiencia contenido en el articulo 17º de nuestra Constitución Federal, que le exige que emita sus resoluciones de manera ***pronta***, completa e imparcial y gratuita.

Así también, debe considerarse que al existir una disposición judicial dictada tomando como base principal el principio superior del menor contemplado en el artículo 4 Constitucional, determinando que la menor ****** debe permanecer

al lado de su padre; y al no realizarse por parte de la Fiscal de mérito las acciones necesarias a efecto de cumplimentar tal disposición judicial, se transgrede el principio superior de la menor, contemplado en el artículo 4° Constitucional, que establece:

> "Artículo 4.- El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. […]En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. […] El estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez."

Así mismo, la Convención Americana sobre los Derechos del Niño, establece:

> "Artículo 3.-1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.- 2. Los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la Ley y, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas…"

Así también, tal principio se encuentra contemplado en la Ley de los Derechos de los Niños y Niñas del Estado de Tamaulipas, que dispone:

> **"ARTÍCULO 4º.-** Son principios rectores en la observancia, interpretación y aplicación de la Ley los siguientes:
> **I.- <u>El de interés superior que implica dar prioridad al bienestar de las niñas y niños ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio.</u>**
> Este principio orientará la actuación de las autoridades competentes encargadas de las acciones de defensa y representación jurídica; así como las de asistencia, provisión, prevención, protección y participación de las niñas y niños, en la ejecución de las siguientes acciones:

Consecuentemente, se acredita que la LIC. ******, Agente ******del Ministerio Público de Protección a la Familia de Matamoros, Tamaulipas, vulnera con su actuar las siguientes disposiciones:

LEY DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS PARA ESTADO DE TAMAULIPAS:
"De los Derechos de las Víctimas y de los Ofendidos
ARTICULO 6.
Toda víctima u ofendido tiene derecho a:
A) En materia jurídica: [...]
VII. Ser objeto de una ágil atención a sus denuncias o querellas, y a que se practiquen todas las diligencias necesarias con el propósito de que se le procure justicia pronta, completa y gratuita;
VIII. Acceder a todas las previsiones procesales establecidas en la legislación, para un efectivo y expedito esclarecimiento de los hechos que se investigan y las que prosigan hasta la conclusión final del expediente que al efecto se integre, así como lo correspondiente a la reparación del daño;
XVI. Disfrutar de todas las medidas preventivas para salvaguardar sus derechos, así como de los beneficios que en su favor establezcan esta ley y demás disposiciones legales;…
ARTICULO 16.
1. Los agentes del Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales velarán por el respeto y efectivo ejercicio de los derechos de los ofendidos y de las víctimas de los delitos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en general, los órdenes jurídicos nacional y estatal."

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY:
"Artículo 1*.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en concordancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión."*
"Artículo 2*.- En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las personas"*

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS:

"ARTICULO 47.- *Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales:*

I.- Cumplir con la máxima diligencia, el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; [...]

XXI.- Cumplir con cualquiera disposición jurídica relacionada con el servicio público.
XXII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos."

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS:
"ARTICULO 33.- *Son atribuciones del Agente del Ministerio Público Investigador, además de las previstas por los artículos 3° y 32 de la Ley Orgánica, las siguientes:*
I.- *Investigar el delito del fuero común, con exclusión del delito electoral, iniciando la averiguación previa penal y ejecutando las diligencias a fin de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado;*

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS:

"ARTÍCULO 7°.- *Al Ministerio Público del Estado le compete el ejercicio de las siguientes atribuciones:*
I. *La función de seguridad pública relativa a la investigación y persecución de los delitos, que comprende:*
A) *En la etapa de la averiguación previa:*

1. *Recibir denuncias o querellas sobre hechos que pudieran constituir delito, atendiendo en todo momento las previsiones para los adolescentes dispuestas en la legislación aplicable;*
2. *Desarrollar la investigación de los delitos con el auxilio de la Policía Investigadora y Policía Ministerial, que estarán bajo su mando inmediato y conducción, de los servicios periciales y de otras instituciones policiales estatales, municipales y federales, en términos de los convenios de colaboración para la investigación de los delitos respectivos y lo previsto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado;*
3. *Practicar las diligencias necesarias para acreditar el hecho delictuoso y la probable responsabilidad del indiciado, así como el monto del daño causado; […]"*

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS:

"ARTICULO 2.- *El ejercicio de la acción penal ante los tribunales es facultad exclusiva del Ministerio Público. A éste y a la policía ministerial a su mando incumbe la persecución de los delitos.*

ARTICULO 3.- **El Ministerio Público, en el ejercicio de su acción persecutora y en la etapa de averiguación previa, deberá:**

I.- *Recibir denuncias, acusaciones o querellas, sobre hechos que puedan constituir delitos;*

II**.- Recabar las pruebas para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los participantes;**

ARTICULO 106*.- Al iniciar el procedimiento el Ministerio Público o la Policía Ministerial, se trasladarán y darán fe de las cosas y de las personas a quienes hubiera afectado el hecho delictuoso y tomarán los datos de los que lo hayan presenciado, procurando que declaren a la mayor brevedad posible, pudiendo elaborar en su caso croquis y tomar fotografías.*

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE:

"Artículo XVIII.- *Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos..."*

Los actos irregulares ya señalados, además son violatorios a lo establecido en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos el cual a la letra dice: "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley". Del cual se desprenden las Directrices Sobre la Función de los Fiscales aprobadas por el Congreso de las Naciones Unidas Sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente adoptado por México, celebrado en La Habana, Cuba, mediante el cual se busca crear condiciones ideales para que pueda mantenerse la justicia y estimularse el respeto a los derechos humanos contribuyendo a un sistema penal justo y equitativo, y a un acceso más eficaz a la justicia para la víctima del delito, y en consecuencia al efectivo resarcimiento del daños, dichas directrices mencionan en sus artículos 11, 12, 13 inciso b) y d) lo siguiente: "Artículo 11. Los fiscales desempeñarán un papel activo en el procedimiento penal, incluida la iniciación del procedimiento y, cuando así lo autorice la ley o se ajuste a la práctica local, en la

investigación de delitos, la supervisión de la legalidad de esas investigaciones, la supervisión de la ejecución de fallos judiciales y el ejercicio de otras funciones como representantes del interés público.". Artículo 12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respeto y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal". "Artículo 13. En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales: […] b) Protegerán el interés público, actuarán con objetividad, tendrán debidamente en cuenta la situación del sospechoso. D) Considerarán las opiniones e inquietudes de las víctimas cuando se vean afectados sus intereses personales y asegurarán que se informe a las víctimas de sus derechos con arreglo a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y el Abuso de Poder.

Es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la responsabilidad del Estado consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente; sin embargo, también lo es que el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero y 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, prevén la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado, para lo cual el Estado deberá de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

Así mismo, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que todas las autoridades deben prevenir, investigar,

sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, dado, que al respecto precisa:

> ***"Artículo 1o. […]***
> *Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia,* ***el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos,*** *en los términos que establezca la ley.*

De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los Estados tienen la obligación de investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos reconocidos en la Convención; tal criterio se encuentra sustentado en la sentencia dictada en el caso Rosendo Cantú y otra contra México, en la que se asienta:

> *"175.* ***La Corte reitera que la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención****. El deber de investigar es una obligación de medios, y no de resultado. Sin embargo, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. A la luz de ese deber,* ***una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva****. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles, y orientada a la determinación de la verdad."*

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado lo procedente es emitir **RECOMENDACIÓN** al Procurador General de Justicia del Estado, que se sirva ordenar a quien corresponda, realizar cuando menos las siguientes medidas:

1. Provea lo conducente a efecto de regularizar la investigación que se realiza dentro del Acta Circunstanciada ******, radicada ante la Agencia ******del

Ministerio Público de Protección a la Familia de Matamoros, Tamaulipas; en su caso, hacer uso de las vías diplomáticas correspondientes, y a la brevedad, se emita la resolución que conforme a derecho proceda.

2. Gire instrucciones a la LIC. ******, Agente ******del Ministerio Público de Protección a la Familia, de Matamoros, Tamaulipas, a fin de que proceda a ajustar su actuación al marco jurídico legal y con estricto respeto a los derechos humanos, priorizando el principio superior del niño, contemplado en el artículo 4 Constitucional.

3. Se sirva proveer lo conducente para que a través de las instancias correspondientes se determine la responsabilidad que le resulte a la LIC. ******, Agente ******del Ministerio Público de Protección a la Familia, de Matamoros, Tamaulipas, con motivo de la integración del Acta Circunstanciada 0******/2014.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 Apartado B de la Constitución General de la República, 41 fracción II, 42, 48 y 49 de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este Organismo, así como los numerales 63 fracción V y 68 del Reglamento Interno, se emiten al Procurador General de Justicia del Estado las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA. Provea lo conducente a efecto de regularizar la investigación que se realiza dentro del Acta Circunstanciada 0******/2014, radicada ante la Agencia ******del Ministerio Público de Protección a la Familia de Matamoros, Tamaulipas; en su caso, hacer uso de las vías diplomáticas correspondientes, y a la brevedad, se emita la resolución que conforme a derecho proceda.

SEGUNDA. Gire instrucciones a la LIC. ******, Agente ******del Ministerio Público de Protección a la Familia, de Matamoros, Tamaulipas, a fin de

que proceda a ajustar su actuación al marco jurídico legal y con estricto respeto a los derechos humanos, priorizando el principio superior del niño, contemplado en el artículo 4 Constitucional.

TERCERA. Se sirva proveer lo conducente para que a través de las instancias correspondientes se determine la responsabilidad que le resulte a la LIC. ******, Agente ******del Ministerio Público de Protección a la Familia, de Matamoros, Tamaulipas, con motivo de la integración del Acta Circunstanciada 0******/2014.

De conformidad con el artículo 49 de la Ley de esta Comisión, es procedente requerir a la autoridad recomendada para que, dentro de un plazo de diez días hábiles, informe si es de aceptarse la recomendación formulada y, en su caso, remita dentro de los quince días siguientes las pruebas relativas a su cumplimiento.

Así lo formuló el C. Doctor José Ramiro Roel Paulín, Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, y aprueba y emite el C. Doctor José Martín García Martínez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 22 fracción VII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

Dr. José Martín García Martínez
Presidente

Revisó:

Dr. José Ramiro Roel Paulín
Secretario Técnico

Proyectó:

Lic. Sandra De la Rosa Guerrero
Visitadora Adjunta
L´SDRG/rpg*

QUEJA N°: 067/13-T
QUEJOSO: **********
AUTORIDAD: TRÁNSITO MUNICIPAL DE CD. ***, TAMAULIPAS.**
RECLAMACIÓN: VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA
RESOLUCIÓN: RECOMENDACIÓN No. 012/2015

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecinueve de mayo de dos mil quince.

VISTO para resolver el expediente número 067/2013-T, iniciado con motivo de la queja presentada por el C. **********, en contra de actos presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a agentes de Tránsito Municipal de ciudad ******, Tamaulipas, los que ante la Delegación Regional ******, se calificaron como violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; una vez agotado el procedimiento, se resuelve de conformidad con los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, por conducto de la Delegación Regional ******, recepcionó queja del C. ******, por los siguientes hechos:

> *"… El día **** de ****** del año en curso, siendo aproximadamente 10:00 y 10:30 horas aproximadamente, el suscrito circulaba sobre la calle **********, siendo en ese momento en el que un vehículo de transporte público de los denominados taxi, se detiene intempestivamente a levantar un pasajero, por lo que el suscrito ya no alcanzó a enfrenar, razón por la que lo colisiono por la parte posterior del taxi, siendo en ese momento que mientras observamos el golpe, llegó una patrulla con dos peritos, mismos que nos solicitaron que los acompañáramos a la Dirección de Tránsito, por lo que posteriormente una vez ya estando en las oficinas de peritos y al permanecer la situación sin que haya habido un arreglo entre el suscrito y la otra parte, los peritos me dicen que se va a consignar la unidad y que por lo tanto no puedo llevarme mi vehículo, siendo en eso que el suscrito me opongo a esa situación toda vez que si se sigue una averiguación ante la agencia del Ministerio Público el suscrito comparecería directamente ahí, razón por la que el suscrito intento llevarme mi*

vehículo, situación que impiden varios oficiales de tránsito, mismos que se me vienen encima e impiden que mueva el vehículo, diciéndome que van a llamar a la policía estatal a fin de que me remitan a la barandilla municipal, …"

2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, radicándose con el número 067/13-T, y se acordó solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe, relacionado con los hechos denunciados, así como la documentación que se hubiera integrado sobre el caso.

3. Mediante oficio número ****** de fecha ******, la Contralora Municipal del Ayuntamiento de ciudad ******, Tamaulipas, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad presuntamente responsable, rindió un informe en relación a los hechos que dice:

*"… que esta Contraloría, en fecha ****** recibió queja y/o Denuncia a nombre del C. **********, por lo que se radicó Procedimiento Administrativo bajo el numeral ******, mismo que actualmente se encuentra en Proceso."*

4. Con una copia del informe rendido por la autoridad señalada como responsable, se dio vista a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera, y en el mismo acto se ordenó la apertura de un período probatorio consistente en diez días hábiles, circunstancia que se hizo del conocimiento a las partes por si fuera el caso que desearan aportar alguna prueba de su intención.

5. Pruebas desahogadas en el procedimiento.

5.1. Mediante oficio número ********* de fecha ********, el Director Jurídico del R. Ayuntamiento de ciudad ******, Tamaulipas, remite informe de fecha *********, signado por el Director de Tránsito y Vialidad; así como el Parte de Accidentes ******, suscrito por el Perito de Tránsito ******, que dicen lo siguiente:

> ***Oficio No. ******de fecha *********:*** *"… En fecha ******, a las 11:00 horas se registró un hecho vial (choque) en la calle **********, en el que intervinieron los vehículos* ***No. 1*** *MARCA **, MODELO ***, TIPO ******, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN ******, DEL ESTADO DE ******, CONDUCIDO POR EL C. ****** y el vehículo* ***No. 2*** *MARCA *****, MODELO *****, TIPO ****, PLACAS DE CIRCULACIÓN ***** DEL ESTADO DE *****; dicho accidente quedó registrado en el parte de accidente número ******, en el que, según el peritaje elaborado por el C. ******, Perito Vial adscrito a esta Dirección de Tránsito y Vialidad, resultara responsable el vehículo número 1 conducido por el quejoso, sin que éste aceptara la responsabilidad del mismo, ocasionando que ambos conductores no llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños, motivo por el cual fue puesto a disposición de la agencia del ministerio público en turno, tanto los hechos (parte de accidente número ******) como el vehículo responsable (no. 1). No omito informar que la Dirección de Tránsito y Vialidad no puede hacer entrega de vehículos que se encuentran a disposición de una autoridad, sin la orden de liberación girada por la misma."*
>
> ***PARTE DE ACCIDENTES *******.*** *"… HECHOS: TRANSITABA EL VEHÍCULO UNO DE ORIENTE A PONIENTE CON DIRECCIÓN A LA CALLE ******, EN TANGENTE A NIVEL DE DOS CARRILES CON CIRCULACIÓN EN UN SOLO SENTIDO, SIN RAYAS DELIMITADORAS DE LOS MISMOS, SUPERFICIE DE RODAMIENTOS COMPUESTA DE CONCRETO, MANEJANDO SU CONDUCTOR SIN GUARDAR DISTANCIA DE SEGURIDAD DE VEHICULO QUE LE PRECEDE EN LA MARCHA, LO QUE ORIGINÓ CHOCARA SU PARTE FRONTAL CONTRA LA PARTE POSTERIOR DEL VEHICULO QUE LE PRECEDÍA EN LA MARCHA, QUEDANDO FINALMENTE AMBOS VEHICULOS EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE. …"*

5.2. Copia de la Boleta de Infracción de fecha ** de *** de **, con número de Folio ******, a nombre del conductor ******, expedida por la Dirección de Tránsito y Vialidad de ciudad ******, Tamaulipas.

5.3. Copia del Servicio de Gruas ******, con número de folio ******, al servicio de Tránsito de ciudad ******, Tamaulipas.

5.4. Declaración informativa de ******, Oficial Perito de Tránsito adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad de ciudad ******, Tamaulipas, quien en relación a los hechos manifestó:

> *"… en primer lugar deseo expresar que efectivamente en la fecha que señala el hoy quejoso el suscrito acudí al lugar que hace referencia con la finalidad de atender un accidente en el cual participó dicha persona el quejoso quien había impactado por alcance en la parte trasera a un del transporte público, por lo que únicamente se acudió a fin de realizar el levantamiento del peritaje vial y de acuerdo a las circunstancias una vez concluida dicha diligencia se les invitó a las partes involucradas a que acudieran a las oficinas de tránsito para darles las causales del origen del accidente en base al reglamento de tránsito, por lo que estando ya en oficinas de tránsito de ciudad *****, Tam., y transcurriendo un espacio de tiempo de aproximadamente 30 minutos cuando se concluye el peritaje en mención inmediatamente se le hace saber al hoy quejoso que en base al artículo 73 del reglamento de tránsito el causante del accidente sería él al no guardar la distancia de seguridad entre el vehículo que conducía y el que iba delante de él en este caso el de transporte público, al decirle el resultado el hoy quejoso éste se molesta y empieza a decir que él no iba a pagar nada, por lo que se le informa que al no llegar a un acuerdo las partes involucradas en un accidente vial, el vehículo responsable se pone a disposición del Agente del Ministerio Público en turno, a lo cual refirió dirigiéndose a mi persona señalando que el suscrito estaba loco y que él se llevaría su vehículo quisiera yo o no, a lo cual sale de la oficina de peritos e ingresa sin autorización ni consentimiento alguno a los patios de la dirección de tránsito de Ciudad ****, Tam., donde se encontraba su vehículo siendo este una camioneta ****, subiéndose a esta y la enciende intentando llevársela, por lo que el suscrito me paré enfrente diciéndole que se detuviera al ver tal situación mis compañeros atravesaron una patrulla de ingeniería vial unidad ** a la salida del estacionamiento para evitar que se diera a la fuga, estando el oficial de patio, asimismo en ese momento llega mi compañero perito de tránsito ******, al brindarme apoyo y hacer la labor de convencimiento con el Ciudadano a fin de que éste entrara en razón y no complicara más su situación legal por los daños ocasionados al vehículo de transporte público y lo que pretendía realizar estando dialogando con el hoy quejoso el cual al ver que no*

*podía salir del estacionamiento éste optó por descender de la camioneta no sin antes solicitar nuestros nombres manifestando que no sabíamos con quién nos habíamos metido y que no nos la íbamos acabar, cerrando su vehículo y quedándose en dicho estacionamiento de tránsito, por lo que dicho asunto al no haber ningún acuerdo entre las partes involucradas en el accidente se procede a poner de conocimiento al ministerio público en turno y se pone a su disposición el vehículo responsable para conocimiento agregando el peritaje realizado con referencia a los hechos de tránsito sucedido en fecha ****** aproximadamente a las 11:00 horas de esa fecha, quiero señalar que en ningún momento se violentaron los derechos humanos del quejoso y que solo se actuó de conformidad a los lineamientos que regulan el reglamento de tránsito, …"*

5.5. Declaración informativa del C. ******, Agente Perito Vial adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad de ciudad ********, Tamaulipas, quien en relación a los hechos manifestó:

*"… que acudí junto con mi compañero ****** al lugar del accidente el cual se encuentra descrito en el parte correspondiente adjuntando a la presente queja, por lo que mi compañero ****** desciende de la Unidad **** entrevistándose con los conductores involucrados hago mención que el suscrito me quedé en el interior de la unidad observando como mi compañero estaba dialogando con dichos conductores, por lo que se procedió a trasladarlos a la Dirección de Tránsito de ciudad *****, Tamaulipas, quedándome el suscrito en los patios subiendo mi compañero con los conductores a la oficina, posteriormente a los diez minutos aproximadamente me percato que el conductor el que ahora sé que se llama ******, hoy quejoso, entraba apresuradamente y sin permiso del encargo del área de patio subiéndose a su unidad y encendiéndola para retirarse por lo que la unidad 13 se atraviesa en la puerta de salida y el compañero ***** se coloca del lado del conductor y el suscrito del lado del copiloto observando que hacía caso omiso a las indicaciones de mi compañero por lo que el suscrito le indiqué al hoy quejoso que hiciera caso y atendiera la situación ya que al no llegar a un acuerdo con la otra parte se tendría que quedar la unidad y ponerla a disposición del Agente del Ministerio Público ya que es el procedimiento legal ante un percance vial por lo que volteó a mirarme y en un tono molesto y prepotente me pidió mi nombre apuntándolo en una hoja y con su mano derecha agarró un libro mostrándome que era el código de procedimientos penales procediendo a golpearlo contra la palma de la mano izquierda diciéndonos a ambos peritos yo soy licenciado no saben con quien se están metiendo, procediendo a apagar el vehículo, descendiendo de*

la unidad lo cerró y se retiró no sin antes inferir palabras altisonantes hacia nuestra persona, …"

5.6. Mediante oficio número ***** de fecha **********, el Secretario de la Contraloría Municipal de ciudad *****, Tamaulipas, informó:

*"… que la ********, quien fungía como Contralor Municipal de la Administración que concluyó en Septiembre del año ***, dictó un acuerdo de reserva en fecha ******, dentro del expediente administrativo ******, promovido por el C.******, anexo copia del expediente administrativo que obra en los archivos de esta Contraloría Municipal."*

5.7. Mediante oficio número ****** de fecha ******, la Agente ****** del Ministerio Público Investigador de ciudad ******, Tamaulipas, informó lo siguiente:

*"… que en esta Representación Social a mi cargo en fecha ******, se recibió el oficio signado por el C. Director de Tránsito y Vialidad de Ciudad ******, Tamaulipas, mediante el cual remite original del PARTE DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO número ******, de fecha ******, así mismo pone a disposición de esta Autoridad el Vehículo ****** MARCA ***, TIPO *****, MODELO ****, COLOR *****, CON NÚMERO DE SERIE ******** CON PLACAS DE CIRCULACIÓN ****** DEL ESTADO DE ******, depositado en las instalaciones del Mesón Municipal de esta Ciudad, iniciándose el ACTA CIRCUNSTANCIADA número ******, dentro del cual se ordenaron y se desahogaron las siguientes diligencias: En fecha ****** , se lleva a cabo la diligencia de Ratificación del Parte de Accidente a cargo del C. *******, Perito Vial de la Dirección de Tránsito y Vialidad. En fecha ****** se lleva a cabo la diligencia de Fe ministerial del vehículo puesto a disposición de esta Autoridad. En fecha ****** del mismo año se recibe en constancia el oficio número ******, signado por el C. ********, Perito en Identificación de Vehículos Automotores, mediante el cual remite Dictamen Pericial de Identificación Vehicular. En fecha ****** se recepciona el escrito de promoción signado por el C. ******, mediante el cual solicita la devolución del vehículo de su propiedad, compareciendo ante esta Autoridad en fecha Diecisiete de Septiembre del mismo año y ante la presencia ministerial ratifica el escrito de cuenta y exhibe documentos con los cuales acredita la propiedad de dicho vehículo, por lo que en misma fecha ******, se acuerda girar oficio al C. Delegado Regional de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Zona ******, a fin de solicitar que autorice la devolución del vehículo referido con anterioridad. En fecha ****** mismo año, se recibe en constancia el Oficio número ******, en fecha ******, signado por el Ciudadano LIC. **********. Encargado de Servicios Periciales Unidad *******, mediante*

*el cual remite Dictamen Pericial de Valuación, emitido por el Ciudadano Ingeniero ******, Perito Auxiliar del Departamento de Dictámenes Diversos de esa Dependencia. En fecha ****** se recepciona en constancia el oficio número ******, signado por el Ciudadano ******. Delegado Regional de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Zona ******, mediante el cual autoriza la devolución del vehículo al que se ha venido haciendo alusión. En misma fecha ****** esta Fiscalía acuerda la devolución del vehículo ****** MARCA ******, TIPO ******, MODELO ******, COLOR ******, CON NUMERO DE SERIE ******, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN ****** DEL ESTADO DE ******, a su propietario ******, y giró atento oficio al C. Director General de Tránsito y Vialidad y/o Encargado del Mesón Municipal de esta Ciudad, a fin de que ordene a quien corresponda realice la devolución de dicha unidad motriz. En esta misma fecha ****** comparece ante esta Autoridad el C. *******, quien ante la presencia ministerial recibe de conformidad el oficio de devolución de vehículo en calidad de depositario ministerial. Por lo que una vez que fueron analizadas todas y cada de las constancias y diligencias ministeriales que integran la presente indagatoria penal y toda vez que dentro de autos no obra denuncia y/o querella alguna en contra del C. ******, esta Fiscalía en fecha ****** acuerda el ARCHIVO DE ACTA CIRCUNSTANCIADA; por lo que estado actual de la presente indagatoria penal es el de ARCHIVADA, adjuntando al presente copia debidamente certificada de la indagatoria penal para su mayor conocimiento e ilustración."*

6. Una vez agotado el período probatorio, el expediente quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis se obtuvieron las siguientes:

C O N C L U S I O N E S

Primera. *"Competencia".* Este Organismo es competente para conocer la queja presentada por el C. ******, por tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorias de derechos humanos imputados a servidores públicos que actúan en el ámbito del estado, al tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

Segunda. ***"Causales de improcedencia."*** Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia de esta vía, ya sea que lo hagan valer las partes o que este organismo lo advierta de oficio; en ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio, se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza.

Tercera. ***"Precisión de los actos".*** La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación de derechos humanos que estimó pertinentes y manifestó básicamente lo siguiente: *"…el suscrito circulaba sobre la calle ****** entre las calles ******, siendo en ese momento en el que un vehículo de transporte público de los denominados taxi, se detiene intempestivamente a levantar un pasajero, por lo que el suscrito ya no alcanzó a enfrenar, razón por la que lo colisionó por la parte posterior del taxi, siendo en ese momento que mientras observamos el golpe, llegó una patrulla con dos peritos, mismos que nos solicitaron que los acompañáramos a la Dirección de Tránsito, por lo que posteriormente una vez ya estando en las oficinas de peritos y al permanecer la situación sin que haya habido un arreglo entre el suscrito y la otra parte, los peritos me dicen que se va a consignar la unidad y que por lo tanto no puedo llevarme mi vehículo, siendo en eso que el suscrito me opongo a esa situación toda vez que si se sigue una averiguación ante la agencia del Ministerio Público el suscrito comparecería directamente ahí, razón por la que el suscrito intento llevarme mi vehículo, situación que impiden varios oficiales de tránsito, mismos que se me vienen encima e impiden que mueva el vehículo, diciéndome que van a llamar a la policía estatal a fin de que me remitan a la barandilla municipal, …"*

Cuarta. Es importante mencionar que atento al contenido del reclamo principal, se exhortó a la autoridad señalada como responsable para que rindiera un informe sobre los actos reclamados, precisando el Director de Tránsito y Vialidad ciudad ******, Tamaulipas, *"… se registró un hecho vial (choque) en la calle ******

*entre ****** de esta Ciudad, en el que intervinieron los vehículos **No. 1** MARCA ******, MODELO ******, TIPO ******, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN ******, DEL ESTADO DE ******, CONDUCIDO POR EL C. ****** y el vehículo **No. 2** MARCA ******, MODELO ******, TIPO ATOS, PLACAS DE CIRCULACIÓN ********DEL ESTADO DE *******; […] ocasionando que ambos conductores no llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños, motivo por el cual fue puesto a disposición de la agencia del ministerio público en turno, tanto los hechos (parte de accidente número ******) como el vehículo responsable (no. 1) …"*

En esa línea de investigación, a su vez, se recepcionó la declaración informativa del Oficial Perito de Tránsito adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad de ciudad ******, Tamaulipas, ******, quien al respecto manifestó "…*al decirle el resultado el hoy quejoso éste se molesta y empieza a decir que él no iba a pagar nada, por lo que se le informa que al no llegar a un acuerdo las partes involucradas en un accidente vial, el vehículo responsable se pone a disposición del Agente del Ministerio Público en turno, … se procede a poner de conocimiento al ministerio público en turno y se pone a su disposición el vehículo responsable para conocimiento agregando el peritaje realizado con referencia a los hechos de tránsito sucedido en fecha ****** aproximadamente a las 11:00 horas de esa fecha,…"*

Del análisis de los antecedentes referidos en el presente documento y su valoración lógico-jurídica, resulta evidente que los funcionarios públicos involucrados cometieron irregularidades en su proceder, al haber dejado indebidamente a disposición de la Agencia ****** del Ministerio Público Investigador en ciudad ******, Tamaulipas, el vehículo propiedad del señor *****, que fue motivado por que participó en un accidente de tránsito, donde los participantes en el hecho no llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños.

En este contexto, es necesario advertir que en el parte de accidente levantado con motivo de estos hechos por la Dirección de Tránsito y Vialidad de ciudad ******, Tamaulipas, que obra agregado al sumario que nos ocupa, concluyó en su capítulo de OBSERVACIONES que en el hecho de tránsito se infringió el artículo 73 del Reglamento de Tránsito vigente en el Estado, que dice:

> ***"Artículo 73.-****Todo conductor en tránsito, deberá ir a una distancia mínima de 10 metros que garantice la detención oportuna, aun cuando el vehículo que le preceda, frene intempestivamente. Con lluvia, niebla o en camino de grava, la distancia deberá doblarse; por el contrario, en vías congestionadas por el tráfico, y que además no se transite a más de 20 kilómetros por hora, la distancia puede reducirse a la mitad.*

Atento a ello, esta Comisión de Derechos Humanos considera que el entonces Director General de Tránsito y Vialidad, actuó contrariando lo establecido por el artículo 204 del Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado de Tamaulipas, pues para que se reúnan los supuestos de ese precepto, es necesario que del percance vial se desprendan hechos que puedan ser constitutivos de delito de los que se persiguen de oficio.

> ***"Artículo 204.-*** *Es obligación de la Secretaría y sus Dependencias, poner a disposición del Ministerio Público de inmediato, a toda persona que incurra en hechos que puedan ser constitutivos de delito de los que se persiguen de oficio conforme a lo dispuesto en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas."*

Conclusión a la que se arriba, tomando en cuenta que en el parte de accidente elaborado por el Perito de Tránsito ******, no se establecen hechos que pudieran ser constitutivos de delito de los que se persiguen de oficio por la legislación sustantiva penal en la entidad, para proceder en esos términos, de acuerdo con el artículo 77 del citado ordenamiento, que previene:

> *"**Artículo 77**.- Se perseguirán, a petición de parte ofendida, los delitos culposos de lesiones y daños en propiedad ajena."*

Luego entonces, los hechos precisados en el parte de accidente, sólo eran perseguibles a petición de parte ofendida, por lo que, si no existía querella penal interpuesta en contra del aquí quejoso, lo correcto hubiera sido que se impusieran a los participantes del evento la multa correspondiente, más no a la retención de sus unidades que además fueron puestas a disposición de la autoridad investigadora de delitos.

En las condiciones apuntadas, es claro que no existe causa alguna que los exima de responsabilidad, motivo por el cual es procedente recomendar al Presidente Municipal de ciudad **********, Tamaulipas, valore la conducta de los agentes de tránsito responsables, para que en su caso, conforme a derecho, se les apliquen las medidas disciplinarias procedentes.

Sirve de fundamento para destacar que en el presente asunto se vulneraron derechos humanos contenidos en los siguientes instrumentos jurídicos internacionales:

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 6.

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 17.

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

Artículo 17

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley:
"Articulo 1*.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión."*
"Articulo 2.- *En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetaran y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las personas"*

Quinta. "*De la Reparación del daño"*. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, establecen como un derecho humano de las víctimas u ofendidos, la reparación del daño para asegurar de manera puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social, garantizando que en toda actuación desatinada, tenga derecho a una compensación por los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.

Aunado a lo anterior, es factible afirmar que la jurisprudencia interamericana también contempla que la reparación del daño ocasionada por la infracción de una obligación internacional, requiere, o bien su restitución, de ser posible, o bien determinar una serie de medidas para garantizar que se reparen las violaciones de derechos humanos, reguladas dichas medidas por el derecho internacional y no por el derecho interno de los Estados, el cual no las puede modificar, ni tampoco ser incumplidas alegando la existencia de éste.

De igual manera, los artículos 1, 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus partes conducentes establecen que todas las personas gozarán de los derechos humanos y de las garantías para su protección, por lo que las normas relativas a los mismos, deberán interpretarse no sólo conforme a dicha Constitución, sino también conforme a los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Por lo tanto, se contempla en los preceptos constitucionales que la responsabilidad del Estado será objetiva y directa por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, en atención a la hipótesis del respeto de los derechos humanos que todas las autoridades deben, y a su consecuencia por las violaciones a los mismos, que será su reparación.

> "***Artículo 1o.*** *En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.*
>
> *Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y*

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley […]".

*"**Artículo 109.** El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, […]".*

*"**Artículo 113**. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.*

Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. ***Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes***".

Los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, que sirven para orientar a esta Comisión a pronunciarse sobre las recomendaciones que se proponen, establecen que para que exista una reparación plena y efectiva en el caso de violaciones de derechos humanos, es necesario considerar las diversas formas que ésta puede tomar; a saber: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, establecen en su apartado 20 c), los daños materiales como una forma de indemnizar a la víctima de violaciones de derechos humanos.

"***20.*** *La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:*

a) El daño físico o mental;

b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;

c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;

d) Los perjuicios morales;

Sirve de apoyo además, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 257, Tomo 1, 10ª época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen:

"DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA.
Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, que los derechos humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental y los tratados internacionales suscritos por México, y que la interpretación de aquélla y de las disposiciones de derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las mejores condiciones para las personas. Asimismo, del párrafo tercero de dicho precepto destaca que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, lo cual conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas las personas por igual, con una visión interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y todo habrá de ser de

manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de aquéllos."

En congruencia de lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 3, 8, 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, **al Presidente Municipal de ciudad ******, Tamaulipas**, se emite la siguiente:

R e c o m e n d a c i ó n:

Primera. Gire sus instrucciones escritas a quien corresponda, para que, una copia de esta recomendación se agregue en el expediente personal del licenciado ******, quien fungía como Director de Tránsito y Vialidad en la fecha de los hechos.

Segunda. Se proceda a la devolución de las erogaciones económicas que el quejoso justifique haber realizado con motivo del irregular acto de autoridad.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, solicítese a la autoridad recomendada que dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la presente resolución, informe a este Organismo si acepta o no la recomendación formulada y, en su caso, enviar dentro de los 15 días siguientes las pruebas de que se ha iniciado su cumplimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

Así lo formuló el C. Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Doctor José Ramiro Roel Paulín, aprueba y emite el C. Doctor José Martín García Martínez, Presidente de esta Comisión.

Dr. José Martín García Martínez
Presidente

Dr. José Ramiro Roel Paulín
Secretario Técnico

Proyectó:

Lic. Octavio César González Ledesma
Coordinador de Seguimiento
de Recomendaciones.

L'OCGL/l'pgh.

Expediente No.: 10/2012

Quejosa: ******

Resolución: Recomendación No. 013/2015

ANR F-II

Ciudad Victoria**,** Tamaulipas, a veinticinco de mayo de dos mil quince.

Vistos los autos del expediente de queja citado al rubro, promovido por la C. ******en representación de su menor hija******., por actos presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a personal de la Escuela Primaria "******" en esta ciudad; los que analizados se calificaron como Violación a los Derechos del Niño y Malos Tratos, este Organismo procede a emitir resolución tomando en consideración los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. Esta Comisión, recibió el escrito de queja de la C. ******, quien expuso lo siguiente:

> ***"…1. Que comparezco en calidad de madre de la menor de nombre******, de 7 años de edad y misma que cursa actualmente el segundo grado "C" en la escuela primaria "******", en dicho grupo, la maestra que se encarga de impartir clases es la C.*** ******, ***en dicha escuela el horario que se tiene de las 08:00 a las 12:45 horas; la maestra mencionada le ha estado dando clases a mi hija desde que estaba en primer grado, por lo que ya existen varios problemas con la misma de ese tipo, en una ocasión, aproximadamente en el mes de mayo del año pasado, llegué por mi hija a la hora de salida y me percaté que mi hija tenía mojada su falda y su short y de inmediato mi hija me indicó que se había hechos de la "pipi" en el salón, al preguntarle el porque ella me indicó que porque la maestra no le había dado permiso, motivo por el cual acudí al salón de clase a hablar con la maestra para preguntarle el porqué no le había dado permiso a la niña y ella me contestó que "qué pena" que no se había dado cuenta, al mismo tiempo me dijo que ahí no era guardería, por lo que le dije a la maestras que mi***

hija toma mucha agua y por lo tanto necesita regularmente ir al baño, pidiéndole que la dejara ir al baño cuando se lo pidiera y quedé de acuerdo con ella, de dicha situación le hice del conocimiento a la directora la cual me dijo que iba a hablar con la maestra, pero no sucedió así nada más por lo que así quedaron las cosas.- 2. Actualmente que mi hija está en segundo grado, con la misma maestra ya había surgido un problema, toda vez que en una ocasión, la maestra no dejaba salir a mi hija a la hora de salida, ya que supuestamente estaban organizándose para una venta de cooperativa del día siguiente, pero no dejaba salir tampoco a ningún otro alumno, teniendo a todos los papás esperando mucho tiempo, por lo anterior, fui a pedirle a la directora me entregara a la niña y ésta acudió al salón y me la entregó, al día siguiente, al ir por mi hija, me comentó que la maestra le había dicho que la suscrita era una grosera, hablándole de una manera muy prepotente, les grita y los señala, dichas acciones no solo son contra mi hija si no contra los compañeros de ella también, trata mal a los niños en general.- 3. El día de ayer 18 de enero del año en curso acudí en forma normal por mi menor hija a la escuela y al llegar la persona que abre la puerta me dijo que me pasara por que había visto que mi hija andaba mojada de su ropa ya que el señor identifica a los padres y los hijos, por lo que me pase y vi en el salón de clases a mi hija que estaba sentada en el pupitre mojado y ella estaba también mojada de su ropa, por lo que al tocar el timbre salen los niños y cuestioné a mi menor hija que porqué estaba mojada y ella me dijo que se había hecho del baño porque le había pedido permiso a la maestra en dos ocasiones pero la primera vez no la volteó a ver y hasta la segunda ocasión la vio y le dio permiso pero ya mucho después y la niña no alcanzó a llegar al baño, motivo por el cual entré al salón a preguntarle a la maestra lo sucedido. Le comenté lo que me había dicho mi hija de que le había pedido permiso, y hasta la segunda ocasión le hizo caso, pero ya no alcanzaba ella a llegar al baño, por lo que la maestra me contestó que no se había dado cuenta, que si supo que alguien le había hablado pero como estaba revisando solo le dije que no sin ver quien era, manifestándome además dicha maestra que eso era problema de mi hija y que si no se podía aguantar que se pusiera pañal, eso me lo dijo burlándose y en presencia de varios padres de familia y de los niños del salón, por lo que yo le dije que porqué decía eso, que le hacía un daño a mi hija, porque los mismos compañeros se pueden burlar de ella, contestándome que yo no tenía que ir a decirle nada, que la niña se podía defender sola, por lo que yo le referí

que para eso me tenía a mi, insistiéndome la maestra de que no le había pasado nada a la niña, que no se iba a rozar ni nada, por lo que le manifesté que de eso ya tenía como dos horas que se había hecho del baño, que sí le podía suceder algo, no obstante la maestra continuó con su actitud diciéndome además de que si a la niña le picaba tanto que ya se fuera porque se me iba a rozar, al tiempo en que se reía, motivo por el cual me fui a buscar a la directora pero ésta no se encontraba, por lo anterior me llevé a mi hija.- 4. Siendo el día de hoy acudía a llevar a mi hija a la escuela y de paso ir ha hablar con la directora, pero resulta que la maestra de mi hija no fue a trabajar el día de hoy, motivo por el cual me fui a la dirección y hablé con la directora platicándole lo que había pasado ayer comentándome la directora que ya ha tenido muchas quejas de esa maestra pero que nadie ha formalizado nada, refiriendo que hablaría con la maestra pero hasta ahí quedó el asunto…". [sic]

El 25 de enero de 2012, la C. ****, amplió su queja, en los siguientes términos:**

*"…Quiero señalar que el día viernes 20 de enero del presente año, acudí a la escuela primaria "Profr******de esta ciudad, a una reunión de entrega de calificaciones con la maestra******, titular del 2º grado, grupo "C" y al comenzar la reunión dicha maestra ya estaba enterada de la denuncia que la suscrita había interpuesto ante este Organismo defensor de los derechos humanos, por tal motivo, comenzó a hacer comentarios sobre lo sucedido a mi menor hija en el salón de clases, diciendo que a ella no se le va asustar con merequetengues, que a ella nadie le va hacer nada ni mucho menos la van a sacar de ahí, contestándole la suscrita que ya eran dos ocasiones en las que no le permitía ir al baño a mi hija y que por tal razón ésta hacía sus necesidades fisiológicas en su ropa, diciéndome la maestra y las que le faltan con tremendo garrafón de agua que le trae como no se va hacer y burlándose delante de todos los padres de familia, contestándole yo que cómo podía ser tan insensible ante tal situación, que si no tenía hijos, dicha maestra nos dijo que si no nos gustaba que ahí estaba la puerta bien ancha y que había más escuelas que ella con un alumno que le quede a ella como quiera le pagan, diciéndole que eso era falso ya que en la Secretaría de Educación de Tamaulipas me habían informado que no era así, preguntándome la maestra que si había ido a la Secretaría de Educación diciéndole que si y que también había ido a Derechos Humanos, a pesar de ello, la maestra*

*******siguió con una conducta grosera y prepotente corriéndome tres veces, diciéndome retírese del salón señora, diciéndole que no, que yo iba porque me iban a dar las calificaciones de mi hija, quedándome en el salón; sin embargo, le entregó a todos los demás padres de familia las boletas de calificaciones de sus hijos, y como nunca nombró a mi hija, por tal situación le pregunté que faltaban las calificaciones de mi hija, diciéndome que no me las iba a entregar que fuera con la directora, sintiéndome humillada y discriminada por tal acto y actitud que tomo la maestra y con toda la pena e impotencia me levanté y fui con la directora a quien le expuse tal situación, diciéndome la directora que ella no tenía las calificaciones de mi hija, posteriormente la directora se entrevistó con la maestra a fin de solicitarle las calificaciones de mi hija, quiero señalar que estuve esperando aproximadamente 2 horas a fin de que me entregaran las calificaciones. Por otra parte, la directora me citó el día 23 de enero del presente año, a las 9:00 a.m., porque íbamos a tener una reunión con la C. Profesora******, Supervisora Escolar de la Zona ****** respecto a la situación de mi hija, acudiendo a la fecha y hora señaladas con antelación, comunicándome la directora que siempre no iba a ir la supervisora ya que el problema había salido a la luz pública, aproximadamente como a las 11:30 ó 12:00 horas, acudí a la Secretaría de Educación de Tamaulipas y me entrevisté con la C. Profesora******, Supervisora Escolar de la Zona ****** comentándole lo que me había dicho la Profesora******, directora del plantel, desmintiéndola y diciéndome que ella tenía que hacer su trabajo; quiero señalar que ese mismo día mi hija me comentó que la maestra les había dicho a sus compañeros: "…que la mamá de ****** es una mentirosa, esta diciendo mentiras, dice que yo golpeó a******., y fue con los derechos humanos entre otras cosas que le dijo", percatándome que mi hija tenía sus ojos llorosos e hinchados como si hubiera llorado, porque los niños ya no quieren jugar con ella, lo que considero que esto es debido a que la maestra los puso en su contra por los comentarios que les hizo. Quiero señalar que la profesora******, directora de la escuela de referencia, me citó nuevamente el día 24 de enero del año en curso, a las 8:00 a.m., con el objeto de que la suscrita me entrevistara con el licenciado del Jurídico a Nivel Regional, acudiendo en la fecha y hora señalada, entrevistándome con el servidor público de referencia a quien le informe todo lo sucedido con la maestra******, comentándome que él iba a investigar los hechos, informándome también que iba a ver quien era el problema si la niña o la maestra, contestándole que el problema no era mi hija sino la víctima y que la maestra ****** ha tomado represalias en contra de mi hija ya que antes no le ponía sellos y ahora le pone*

*varios sellos en una misma hoja. Como prueba de ello, anexo en este acto copia fotostática de trabajos realizados por mi menor hija, en los cuales se puede corroborar mi dicho. Por otra parte, ese día acudí a la hora del recreo a dejarle lonche a mi hija y me la encuentro cerca del portón y observó que se encuentra triste con los ojos llorosos y me dice mamá ya me quiero ir, me siento mal, por tal motivo, me entrevistó con la directora a quien le informe que me iba a llevar a la niña y posteriormente pasó a su salón de clases por la mochila y ahí se encuentra la maestra ******mal, sin verme me dice que esta bien, saliéndose inmediatamente del salón, posteriormente mi hija me comenta que su maestra le preguntó para qué te llamó la directora, qué te preguntó, siendo muy insistente la maestra al cuestionarla por lo que mi hija le dijo que le comentó a la directora que ella no la había dejado ir al baño y que por eso se hizo en su ropa, diciéndole que lo único que iba a pasar era que tus papás te van a cambiar de salón, aclarando que el día viernes 20 de enero del año que transcurre la directora mandó llamar a mi hija y la cuestionó sobre la situación sin que yo estuviera presente, considerando que se le está causando un daño emocional así mismo, se le está intimidando, por tal motivo, mi hija ya no quiere asistir a la escuela." [sic]*

2. Una vez analizado el contenido de la queja, se calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, se admitió a trámite, radicándose con el número 10/2012, se acordó solicitar al Secretario de Educación en Tamaulipas, ordenara a quien correspondiera remitiera a este Organismo, el informe justificado relacionado con los hechos denunciados, así como la exhibición de toda la documentación que se hubiera integrado sobre el caso; así mismo, con fundamento en el artículo 40 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se le solicitó la aplicación de medida cautelar, consistente en que instruyera a la Directora de la Escuela Primaria "****", a fin de que la profesora******, se abstuviera de causar actos que atentaran contra el adecuado desarrollo físico y emocional de la menor******, además de que se adoptaran las providencias correspondientes para que se evitara que los alumnos fueran objeto de burlas y malos tratos por parte de la citada profesora; misma que fue aceptada**

mediante oficio SET/DJEL/0****/2012 de 24 de enero de 2012, por la autoridad educativa.**

3. Mediante oficio sin número, la Profra. ******Directora de la Escuela Primaria "******", de esta ciudad, rindió el informe solicitado en los siguientes términos:

> *"…cabe hacer mención que en base al escrito de queja inicial que promoviera la C. ******, de fecha 19 de enero del 2012, y del cual me pusiera de mi conocimiento de manera oficial por conducto de la propia Secretaría de Educación, cuando ya la señora un día antes (19 de Enero del mismo año) me había comentado sobre el suceso acontecido el 18 de enero de tal año, el cual había ocurrido en el salón de clase de su hija (2° "C"), mas pongo del conocimiento que en tal momento, también me dio a entender que habría de ir ante esta comisión a poner del conocimiento de la supuesta conducta arbitraria de dicha maestra ****** según ella, de la cual me estaba poniendo de mi conocimiento; mas no de que unos momentos más nos visitaría reporteros de la televisión; más ya cuando terminó de ponerme al tanto de los acontecimientos del día anterior, me enseñó el escrito mencionado, el cual iba a promover al respecto, del cual pude apreciar con claridad el que lo traía dirigido al C. Lic. ******; presidente de tal comisión de Derechos Humanos. Día precisamente en el cual dicha maestra******, me había solicitado el no asistir a clases, dígase permiso por un día, para no asistir por supuestos motivos personales, pues según comentó, le urgía visitar la escuela de su hijo. Por lo tanto, en tal día, y al momento de de que se presenta dicho canal televisivo a nuestra Institución Educativa, así le informé a los reporteros de tal medio televisivo que nos visitaba; en cuanto a lo que me preguntaban; más referente a los hechos supuestamente acontecidos, les comenté, que para poder contestarles necesitaba hacer la respectiva investigación con dicha maestra y los niños; así como informarle a mi Autoridad inmediata superior, como lo es la Supervisora de nuestra zona Escolar.- Mas aclaro que en cuanto a lo que manifiesta referente a que me fue a visitar para informarme de los hechos, manifiesto el que esto lo fue hasta el día jueves 19 de enero, o sea un día posterior al de los hechos acontecidos en dicho salón de clase en fecha 18 de enero, más no el mismo día 18; o sea que, para cuando me informó de tales acontecimientos y de su intención de acudir ante su autoridad con su escrito de tal fecha 19 de Enero del 2012, la señora ya manifiesta en este, el que me está poniendo de mi conocimiento de tales acontecimientos en tal momento (ya lo traía hecho así).-*

*O sea, no aclara debidamente, el que lo hace en el mismo día 19 de Enero del 2012 y no el día 18 en que acontecieron los hechos de los que se queja.- Y esto lo mencionó y aclaro, pues ese mismo día 19 de enero, al ver lo que me exponía dicha señora, con el fin de tener el tiempo suficiente, y el propósito y deber de averiguar la verdad, le propongo y solicito me permita tratar el asunto el día lunes 23 de Enero, pues yo le avisaría el momento en el que ya hubiera podido la que suscribe contactar a mi autoridad superior (supervisora) y ponerla al tanto de los hechos a ésta, para así saber el conducto y vía idónea para tratar el asunto con la maestra, tómese en cuenta el que la maestra de tal grupo e implicada no asistió a laborar tal día, y en cuanto a ella, la señora******, el que todos los días asiste a nuestra Escuela, para atender a su menor hija, por lo tanto en cualquier momento de tal día lunes le podía yo avisar del momento que contactara a tal autoridad inmediata superior.- Al día siguiente, sin comentario alguno y aprovechando la hora del recreo, momento en el cual es de mi rutina procurar, sin dejar de estar al tanto del quehacer directivo que suscite, el estar al pendiente de dicho receso escolar y de la conducta de los niños en los niños; por lo tanto, con el fin y deber debido, y con mis propios medios, aprovechando el poco tiempo, me aboqué a indagar sobre la veracidad de tales hechos; primero con los alumnos, para posteriormente con el tiempo necesario, en compañía de mi autoridad superior avocarnos a solucionar tal conflicto, para el caso de que fuera cierto y en el sentido que resultara. Efectivamente en tal plan y con tal propósito, estando en el recreo, procuro indagar con los niños del salón y hasta con la misma niña, de los acontecimientos, no nada más lo sucedido el día 18 de Enero del 2012, si no también lo que acababa de suceder horas antes (en reunión que tuvo la maestra para entregar las calificaciones), cuando la misma señora, se presentó aproximadamente después de iniciar labores (8:00 hrs.) en la dirección, para exponerme el que la C. ******, se negaba a entregarle las calificaciones a su hija; por lo cual, me avoqué a prestar atención a su petición, cabe aclarar, que de por sí, yo debía estar presente en tal reunión, como lo hago en todas ellas, acontecer del cual me ponen del conocimiento previamente los maestros, o sea, cada vez que van a tener reunión, estas se programan, con el fin de que la que suscribe esté siempre presente en cada una de ellas, por lo tanto en ese preciso momento, ya de por sí yo me dirigía a dicha reunión; por lo que al momento que la señora ******me comenta tales sucesos, le expreso, el que no se preocupe que me espere en la Dirección, y que me encargo de traerle tales calificaciones.- Cuando llego a dicho salón, y comentarle lo expuesto por la señora******, la maestra******, aprovecha para expresarme el*

*que no tenía la calificación de tal bimestre de la menor******, que si le autorizaba para ponerle las mismas calificaciones del Bimestre Anterior a tal menor, ya que esta no había presentado los exámenes de tal Bimestre, ya que dicha menor había estado enferma y no había asistido a presentar dicho examen. A lo cual le expresé que sí, todo con el fin de que se solucionara en tal momento tal conflicto y además apoyar a la menor en tal falta de evaluación numeral. A partir de ese momento la maestra se avocó a elaborarle su boleta; y la que suscribe me la pasé con los demás padres de familia que todavía estaban dentro del salón; haciéndoles comentarios referentes a la Participación y compromiso que implica el estar en el programa de Escuelas de Calidad, el requerimiento de su participación en tal programa. Así también de la necesidad de que aplicaran más en la práctica y ejercicio de la lectura en sus casas con sus hijos, etc.- Después de cierto tiempo, y viendo el que la maestra ya tenía elaborada tal boleta, y al serme entrega esta, me despido de los padres, no sin antes Agradecerles su presencia a tal reunión, y me retiro de dicho salón. Acto seguido le entrego en la Dirección a la señora ****** la Boleta en Cuestión.- Para esa fecha, ya existía el compromiso, hecho el día anterior, con dicha señora, de que nos contactaríamos con la C. Supervisora el día lunes, para tratar lo acontecido el día miércoles 18 de enero (dos días antes).- Por lo cual me acuerdo el que tenía que investigar los sucesos; y repito me avoqué en la hora de recreo a contactar y preguntar a los niños, con la discreción debida, sobre los sucesos. Todo encaminado a eliminar una probable conducta de temor o inseguridad que pudiera afectar a tal menor; así como cualquier clase de rechazo que pudiera haberse generado o existir por parte de sus compañeritos.-Indagué con los niños, y efectivamente pregunté de la manera más sutil posible, y pasándolos a la Dirección de la Escuela a uno o dos menores de tal grupo, y en cierto momento, lo hice también con la menor hija de la señora ****** acontecer el realicé con la convicción de que era la mejor forma para lograr conocer una versión original y no influenciada por ningún medio, pues lo procuré, a mi real saber y entender de mi profesión, para procurar el darle confianza a los niños evitando presión de cualquier índole y con la firme intención de poder actuar en su debido momento de manera ecuánime e imparcial para los involucrados, y lograr una solución que redundara en beneficio de nuestra labor educativa, pero sobre todo en la cual no le afectara o mermara en nada en dicha menor en su desarrollo educativo.-Pero al parecer tal conducta de mi parte, y según veo en su escrito de ampliación de queja, le afectó en la persona y entender de sus propósitos educativos para con la menor a dicha madre de familia. De lo cual de antemano me disculpo, para el caso de que así lo sea, si dejar*

*de comentar, que en mi convicción y entender de mi labor educativa, para mi es una obligación, que dicho servicio educativo en nuestra escuela se preste de la forma más óptima, por lo tanto velar por dichos menores, y evitar en todo momento el que se generen conductas de rechazo, agresiones y demás entre los mismos.- El día lunes 23 de Enero del 2012, a las 8:00 hrs. Me avoqué a localizar a dicha supervisora, llamando a la oficina o Inspección, en donde se me informó por parte de la maestra******, Asesora Técnica Pedagógica de la misma, el que nuestra inspectora se encontraba en reunión en algún lugar de la ciudad, por lo cual no la podía localizar y que probablemente más tarde la podía contactar; acontecer el cual no pude. Pero en cuanto a la señora******, le comuniqué tal situación, y que lo más probable era que al día siguiente si lo lograría, lo cual se lo comunicaría de manera inmediata, tomando en cuenta que la señora todos los días asiste a nuestra escuela. Mas en esa mañana precisamente más tarde, se presentó en nuestra escuela un licenciado de apellido ******el cual manifestó el venir del Departamento Jurídico de Desarrollo Regional, y me solicitó si podía haber la posibilidad de contactarse con la C. Profesora******, así como con la señora******, pues su encomienda era avocarse a investigar los hechos por parte de tal departamento dependiente de la Secretaría de Educación. Acontecer el cual sí sucedió.- Fue hasta el día siguiente 25 de enero del mismo año 2012, en que en el transcurso de la mañana me habló la C. ******para comunicarme el que nos requerían en Secretaría de Educación, y que era de urgencia el que fuéramos. Lo cual así hice, y tal momento en el que en el Departamento de Educación Primaria se me puso del conocimiento con el escrito de fecha 19 de Enero del 2012 en mención, lo referente al primer acontecimiento en cuestión sucedido el 18 del mismo mes y año, ya narrado.- Mas posteriormente, se me hace llegar el oficio al cual se da contestación con la presente misiva que en calidad de informe le rindo.- Por mi parte he procurado, por el bien de la menor y a sugerencia previa con su madre, el cambiar de grupo a esta; pues la pasamos al Segundo Grado, Grupo "A", y a la fecha según se observa, se está avanzando y prosperando en el desempeño escolar de tal menor, así como en su autoestima." […]*

4. El informe rendido por la autoridad educativa fue notificado a la quejosa, para que expresara lo que a su interés conviniere, y por considerarse necesario,

con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a esta Institución, se declaró la apertura de un periodo probatorio por el plazo de diez días hábiles.

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron las siguientes probanzas.

5.1. Pruebas aportadas por la parte quejosa:

5.1.1. Copia fotostática de ocho hojas de ejercicios de la materia de matemáticas.

5.1.2. Copia fotostática de boleta de calificaciones del primer grado de la alumna******, de la Escuela Primaria "******".

5.1.3. Copia fotostática de una nota periodística, misma que no se aprecia el nombre del periódico, ni fecha de publicación, con el encabezado *EN PRIMARIA "******" denuncian "bullyng" contra niña a manos de su maestra".*

5.1.4. Copia fotostática de escrito de 7 de febrero de 2012, firmado por la C. ******dirigió a esta Comisión, quien en síntesis expone que intendentes de la Escuela Primaria "******", la trataron de mala manera y no le permitieron el acceso al citado plantel.

5.1.5. Copia fotostática de la evaluación del tercer bimestre de 2º grado, grupo "A" a nombre de la menor ****** observando las siguientes calificaciones: en la materia de Español 7.7, Matemáticas 9.3, Exploración de la Naturaleza y la Sociedad 9.5, Formación Cívica y Ética 10.

5.1.6. Cuaderno de la menor ****** de 2º grado, grupo “C”,

5.2. Pruebas aportadas por la autoridad educativa:

5.2.1. Oficio No. 33, de 20 de febrero de 2012, firmado por la C. Profra. ******, Supervisora Escolar No. …., dirigido a esta Comisión, mediante el cual hizo del conocimiento que solicitó a la directora del plantel educativo, instruyera a la Profra. ******, a fin de que se abstuviera de realizar actos que atentaran contra el desarrollo de los educandos y en especial de la menor******, así también refirió que dicha menor fue cambiada al 2 grado, grupo “A”.

5.3 Pruebas obtenidas por personal de este Organismo.

5.3.1 Declaración informativa de una madre de familia de la Escuela Primaria “******” de esta ciudad, quien expuso:

> “*Que el día 18 de enero de este año, yo acudí a la escuela primaria “Profr. ******, a recoger a mi hija, yo iba en compañía de la señora******, pues ella también iba a recoger a su hija, tal es el caso que cuando llegamos al portón del plantel el intendente le dice a ****** que pasara al salón de su hija por que la niña******., había tenido un problemita, y era que la niña estaba mojada, por lo cual ****** se dirige al grupo de 2° C, salón de******, y encuentra a la niña mojada de su ropa, preguntando que le había pasado y la niña le contesta que la maestra no la había dejado ir al baño, y ****** se dirige a la maestra******, entonces yo me quedo unos momentos platicando con la niña mientras ……. entra al salón a platicar con la maestra, después de unos 3 minutos aproximadamente, entré al salón por que escuché que estaban subiendo el tono de voz y escucho que la maestra ****** le dice a ****** “mire señora, yo soy maestra, y aquí no es guardería, para andar nada más yo sobre su hija, y pues si no le gusta, mándela acompañada”, todo esto se lo dijo con una risa burlona, delante de padres de familia y alumnos del mismo salón. Y le decía “si tanto le pican los orines, puesta llévesela, por que aquí nosotros no vamos a arreglar nada, el*

*accidente ya pasó", ……., le refería a la maestra, que eso no podía ser un accidente, pues la niña le había pedido permiso y ella se lo había negado, no era accidente. Cuando todo esto sucedía, yo observé que ****** estaba muy avergonzada, estaba sentadita, tratando de cubrirse en mi para que no la vieran, pues no quería que le dijeran nada o que se rieran de ella; por lo que******, al ver que nada se solucionada, sacó a la niña y se fueron a su casa. Solicito a este organismo se tomen las medidas necesarias para que se reserve mi identidad a efecto de prevenir cualquier represalia que pudiera cometerse en perjuicio de mi menor hija, por presentarme a declarar como testigo en los hechos expuestos por la señora******."*. [sic]

5.3.2. Constancia de 9 de febrero de 2012, en la cual se asentó:

*"…Que habiéndome comunicado vía telefónica con el Lic. ******., Encargado del Departamento de Quejas, Denuncias y Asuntos Jurídicos de la Dirección de Educación Primaria de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, a quien se le hizo del conocimiento la petición realizada por la C. ******, en relación al cambio de grupo de su menor hija******., quien cursa el segundo grado en la Escuela Primaria "******..", informándome que llevaría a cabo de manera inmediata las acciones necesarias para tal efecto". [sic]*

5.3.3. Declaración informativa de la menor …******., quien expuso:

*"…La maestra******, ha sido mi maestra desde el primer año, y yo me acuerdo que un día yo le pedí permiso de ir al baño y no me dejó por lo que yo me hice pipí en la ropa y cuando llegó mi mamá de nombre ****** y se enteró de lo que había pasado y entró al salón para platicar con la maestra y me acuerdo que la maestra le dijo a mi mamá que era una grosera.- Cuando yo paso a segundo año, me toca la misma maestra y me sucede otro accidente igual, pues yo le pedí permiso una vez de ir al baño y no me dejó, después cuando ya casi no aguantaba le volví a pedir permiso y si me dejó pero no alcancé a llegar y ya casi era hora de salida, mi mamá llegó y yo salí y ella me vio entonces mi mamá entró a hablar con la maestra y la maestra …… le dijo a mi mamá que cuando me había sucedido el accidente yo andaba como sin nada, que andaba parada y platicando y eso no es cierto, por que yo estaba sentada en el banco y no me paré para nada, por que me daba pena, entonces cuando mi mamá llegó yo me salí rápido para que nadie me viera y me senté en una banca y me tape con un suéter, mi mamá se*

*puso a platicar con la maestra y escuché que le dijo que me pusiera pañal si no quería batallar. Después de unos días la maestra estaba como molesta y me dijo delante de todos los niños que en lugar de andar con la cámara mi mamá se pusiera a lavar la ropa y doblarla, y me dijo que le dijera a mi mamá que ya se fuera aplacando, después de que la maestra dijo eso mis compañeros me dijeron a mi que todo era por mi culpa, y ellos casi no querían jugar conmigo y yo les dije que no era cierto lo que decía la maestra ****** También nos dijo a todos los niños que cuando fueran los de derechos humanos no dijeran de que ella nos da coscorrones por que si no eso lo iban a tomar como un delito, por que cuando alguno de mis compañeros hacían una broma y la maestra se enteraba les daba coscorrones, de los que me acuerdo son a ******Y******, ellos cuando se portaban mal, si les pegaban a las niñas o porque no trabajan, les daba coscorrones o los sacaba al patio para que les diera el sol, pero a mi nunca me pegó por que si no le hubiera dicho a mi mamá.- Un día la directora me mando hablar con una maestra para que fuera a la dirección y me acompañó una niña de nombre******, y cuando ya llegamos la directora me preguntó que había pasado ese día y yo le platiqué y cuando llegué a donde estaba la maestra ****** ella me preguntó que me había preguntado la directora y que era lo que yo había contestado y ya no me dijo nada.- Cuando la maestra ****** reviso mi cuaderno me puso que estaba incompleto y me revisó poniendo sellos feos como de oso acostado y dormido, otro de un cotorro y otro de una manzana fea que dice incompleto, y en el libro de carpeta me puso cuatro sellos juntos en una sola hoja en un mismo día, y estos últimos días que yo llevé mi cuaderno a revisar de una tarea que había hecho vi cuando a mi compañero ****** le revisó el cuaderno y le puso que estaba bien y completo y cuando revisó lo mío me puso 23 y un signo de interrogación y me puso sello de incompleto, de pronto la maestra empezó a revisarme más mis tareas pasadas que no había revisado y ponerme los sellitos en trabajos anteriores.- Ya por último quiero decir que desde el día jueves 9 de febrero, mi mamá me cambió de salón al segundo grado grupo A, con la maestra ****** y me siento bien, por que la maestra ******me trata bien y me dan ganas de trabajar con ella y ya tengo nuevas amigas." [sic]*

5.3.4. Declaración informativa del C. ******personal administrativo de la Escuela Primaria "******", en esta ciudad, quien refirió:

"*Que acudo a este Organismo, atendiendo el citatorio de fecha 13 de febrero para declarar en relación a los hechos motivo de la queja 10/12, iniciada con motivo de la queja presentada por la*

*C. ******, en la que deseo exponer: Por lo que respecta a lo que la señora ******refiere, deseo aclarar que yo solamente seguí la indicación de la Mtra. ******directora del plantel, en el sentido de que no dejara entrar a la señora ****** por las situaciones que se habían presentado con anterioridad con el personal de esa institución, toda vez que cuando la señora entra al plantel esta grabando con su celular, es verdad que ese día 07 de febrero, siendo la hora de recreo yo no la dejé entrar, pero nunca la agredí, y es falso que yo haya aventado el portón hacia ella, y también que le haya gritado o discriminado como ella lo manifiesta, además en ese momento había muchos padres de familia quienes se percataron de la situación y si las cosas hubieran sucedido así como ella lo refiere los padres de familia hubieran reaccionado contra mi, en ese momento sale la directora y se da cuenta de la situación y le pregunta a la señora ****** qué es lo que se le ofrece y ella dice que desea hablar con la señora******, por lo que la señora ******sale a platicar con la señora ****** hasta el portón, posteriormente me retiré del lugar, quedándose la señora ahí parada frente al portón, platicando con la señora ****** y sin saber que sucedió después". [sic]*

5.3.5. Declaración informativa de la C******personal administrativo de la Escuela Primaria "******", en esta ciudad, quien manifestó:

*"…Que acudo a este Organismo, atendiendo el citatorio de fecha 13 de febrero para declarar en relación a los hechos motivo de la queja 10/12, iniciada con motivo de la queja presentada por la C. ******, en la que deseo exponer: El día 07 de febrero del presente año siendo las 10:30 de la mañana llegó la señora******, como todos los días a dejarle el desayuno a la niña, se le permitió la entrada y se dirige al salón de la menor******, para eso la directora Mtra. ******nos manda llamar a los cinco intendentes y nos dijo que por favor estuviéramos al pendiente del portón pues no quería ver a ninguna madre de familia adentro de la escuela, para lo cual nos comisiona a mi compañero ****** y a mi, cuidar el portón, y cuando llega la señora, queriendo entrar otra vez a la escuela, le dije que me permitiera que le iba a hablar a la directora, pues no podía dejar pasar a ninguna madre de familia por seguridad, por lo que la señora ****** se molesta y pide hablar con la Presidenta de lo Sociedad de Padres de Familia, por lo que la señora ******iba llegando al plantel y se da cuenta de la situación, y me pregunta por qué no dejaba entrar a la señora ****** a la escuela y le dije que eran ordenes de la directora no dejar entrar a ninguna mamá, por lo que le sugerí a la señora ****** que ella entrara a hablar con la directora para saber si autorizaba la entrada de la*

*señora******, en ningún momento le grité, solo le hablé en un tono fuerte, pues así hablo yo, posteriormente entró a hablar con la directora y le autorizaron entrar cuando ella lo desee y necesite, siempre y cuando sea relacionado con la niña; por lo que respecta a la niña, yo en ningún momento he tenido algún problema con ella, pues en los momentos que he tenido oportunidad le he ayudado en lo que necesite". [sic]*

5.3.6. Declaración informativa de la C. ******, quien expuso:

*"Que acudo a este Organismo, atendiendo el citatorio de fecha 05 de marzo para declarar en relación a los hechos motivo de la queja 10/12, iniciada con motivo de la queja presentada por la C. ******, en la que deseo exponer: Deseo declarar que actualmente me desempeño como Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Primaria "******…", y por tal motivo tengo conocimiento de la queja planteada ante este Organismo por la C. ******, y por lo que respecta a los hechos a que hace referencia la señora sucedieron el día martes 07 de febrero, toda vez que estando yo dentro del plantel siendo alrededor de las 10:40 de la mañana, acude hasta donde estoy yo el intendente ****** a comentarme que una madre de familia estaba en el portón y deseaba hablar conmigo, por lo que de inmediato salgo y habiendo varios padres, pregunto quien era la persona que deseaba hablar conmigo por lo que la señora******, me aborda y me pregunta que en relación al escrito que me había entregado con anterioridad había alguna respuesta por parte de la supervisora a lo que yo le comento que no, y la invito a que pase al plantel para hablar un poco de lo sucedido, a lo que ella me comenta que la intendente ****** no la dejaba entrar a la escuela, por lo que yo me dirijo a la intendente y le pido que nos deje pasar y ella con voz alta y en tono de molestia nos dice que la señora ******no puede pasar por instrucciones de la directora, deteniendo con fuerza el portón para no darnos oportunidad de pasar, a lo que yo le refiero que cual es el motivo y la intendente ****** nos dice que es por que la señora ****** era una persona muy terca, conflictiva, que solo ingresaba a la escuela para ocasionar problemas, diciéndole todo esto a la señora ****** en tono de molestia y con la voz en tono alto, para lo que intercedí tratando de controlar un poco la situación pues la intendente ****** estaba en una postura un tanto agresiva o desesperada, para lo cual al no ver ningún cambio opté por dirigirme con la señora y le comenté que yo hablaría con la directora de la situación y vería que solución le podría dar, por lo que ingreso al plantel y hablo con la maestra ******y le comento que la señora******. desea ingresar a la escuela y a lo que ella*

*me responde que no hay autorización para eso, comentándome inicialmente que por motivos de seguridad y además por que unas horas antes la señora ****** había estado ahí en la escuela esperando a la maestra ****** y había estado grabando algunas cosas con su celular, a lo que yo le refiero a la directora que ese no es motivo para negarle el acceso a la madre de familia, pues en todo caso esta negativa se presta a malas interpretaciones y eso si derivaría a un problema, además comentándole de la forma grosera en que nos había tratando la intendente******, a lo que hizo caso omiso y por lo que se refiere a la señora …****** pues continuó en su postura por lo que yo salí de nueva cuenta al portón e hice del conocimiento de la madre de familia de la decisión de la directora para lo que la señora optó por retirarse un poco mas tranquila, pero consternada por el trato que había recibido por los intendentes y la negativa de acceso por parte de la directora." [sic]*

5.3.7. Declaración informativa de la C******maestra de la Escuela Primaria "******" en esta ciudad, quien señaló:

*"Primeramente deseo referir que actualmente soy maestra de Segundo grado grupo C de la Escuela Primaria******, y que por los hechos que refiere la señora ****** efectivamente fui maestra de su hija …******, desde el primer grado y aclaro que no es cierto que hayan existido problemas entre la madre de familia y la suscrita, ya que efectivamente una ocasión en primer año a …. le sucedió un pequeño accidente en el que se hizo "pipí" para lo cual en ese momento aclaro la niña no me había pedido permiso y por lo tanto no se lo negué, sino que ella se acerca a mi y me dice lo que había sucedido por lo que inmediatamente de mi celular hablo con la madre de familia y de manera rápida le informo del incidente, para lo que la señora ****** acude ya con un cambio de ropa y me pregunta si es mi deseo que se lleve a la niña, por lo que yo le refiero que es su criterio si desea dejarla conmigo o no, por lo que opta por dejármela hasta la hora de salida, además refiero que en ese momento hablo con la madre de familia y le pregunto que por qué la niña lleva un bote de agua tan grande a lo que me contesta que la niña esta acostumbrada a tomar mucho agua, por lo que yo le comento que si es así, para evitar que sucedan ese tipo de problemas a partir de ese momento la menor no me pida permiso de ir al baño, que cuando sienta la necesidad salga, sin haber por mi ningún problema, para lo que la madre acepta conformemente y la niña lo entiende muy bien; por lo que ese primer año transcurrió con normalidad sin existir ningún detalle o inconveniente con la madre o con la menor.- Ahora bien, por lo*

*que respecta al inicio del segundo año del ciclo escolar normal, deseo referir que aproximadamente por el mes de noviembre advierto que la menor ****** no acude a clases y se presenta la madre de familia a hablar conmigo en fechas de que yo estaba aplicando exámenes para evaluar el segundo bimestre y me refiere que la niña no acude por que estaba enferma de hepatitis, por lo que yo le hago del conocimiento que contara con todo el apoyo para esa evaluación y que me comprometía a hablar con la directora para comentarle de lo sucedido, por lo que la señora no tuvo ningún inconveniente en aceptar tal propuesta.- En día 18 de enero, de nueva cuenta sucede un incidente con******, pero deseo aclarar que siendo las 12:20 cuando es cambio de actividad con la maestra de inglés, me dirijo al escritorio y la niña se acerca conmigo y me pide permiso de salir al sanitario, para lo que yo le refiero que si, que se vaya y continúo con mis actividades cercanas a la hora de salida, por lo que ya sonando el timbre acuden varios padres de familia para comentar conmigo situaciones de una actividad que próximamente estaríamos realizando, y de pronto se presenta ante mi la señora ****** y en tono de voz fuerte me pregunta que es lo que sucedió con su hija******, desconociendo yo en ese momento a que se refería y ella me dice que el intendente en la entrada le comentó que su hija se había hecho pipí, a lo que yo le refiero que no me di cuenta, pues si le había dado permiso de salir a la niña y ella en ningún momento me comentó que le había sucedido ese accidente y que por tal motivo yo no estaba enterada y si lo hubiera estado inmediatamente le habría informado a ella, por lo que la señora frente a todos los padres que se encontraban en ese momento conmigo levantando la voz me dice que por que no ponía atención para cuidar a su hija, afirmando que yo no estaba debidamente preparada para estar frente al grupo, a lo que yo le contesto que no sabía por que era tanta su molestia, que no entendía por que el intendente no me había informado primeramente a mi, a lo que me refiere que el intendente le dijo que la niña tenía mas de una hora mojada y que le podía ocasionar alguna enfermedad de alergia o rozadura, afirmando delante de todos los padres que "conmigo no se puede", y que me había portado muy grosera, pero aclaro que la situación como la maneja la señora ******no sucedió así, pues la menor no tuvo ese incidente dentro del salón, por que si hubiera sido así yo me hubiera enterado y en ningún momento me porté grosera, además el tiempo que la niña estuvo sentada y según ella mojada en el banco, no fue evidente, pues algún otro niño se hubiera dado cuenta y me hubieran informado, además ****** en ningún momento estuvo cohibida, de esos 20 minutos que estuve trabajando con ellos.- En relación a lo que la señora refiere a la reunión de padres del día 20 de enero, la reunión*

*estaba programada a las 8:00 de la mañana y al llegar a la institución advierto que se encuentran presentes los medios de comunicación sin imaginar que se trataba de la queja presentada por la señora ******y al entrar a la dirección comento de la situación con la directora, motivo por el cual me entretengo alrededor de 15 o 20 minutos y al llegar al salón ya estaban los padres de familia esperándome con quienes me disculpo por la tardanza y les explico que había una queja en mi contra, y estando ella presente les refiriera que me sentía contrariada, e intempestivamente ella con la carpeta que traía en sus manos golpea el banco y grita "dígalo, diga que es por mi, que la tengo demandada en derechos humanos", y al mismo tiempo que invita a los papás que estaban presentes y les dice "ustedes también hagan lo mismo, no le tengan miedo", y ella continúa gritando "ya no la soporto", "me tiene harta" y más comentarios en un tono de voz elevado y muy molesta, a lo que yo le pido me permita continuar con la reunión, desarrollándose normalmente como se tenía programada, al momento de entregar las calificaciones a los padres, ella se da cuenta que no le entrego la de su hija y desde donde estaba sentada me grita "y la mía no me la va entregar" a lo que yo le refiero, que pasara a la dirección, esto en razón de que como ya lo mencioné anteriormente la niña por cuestión de salud no presentó ningún examen y como se le había comentado para apoyarla se le iban a tomar en cuenta las calificaciones del primer parcial, y por lo tanto la boleta estaba en la dirección. Por lo que se refiere a mi forma de calificar o revisar los trabajos que se realizan en clase o las tareas, deseo referir que se me está permitido trabajar con esos sellos para que el menor tenga conocimiento gráfico de cómo realizó su trabajo y a su vez los padres de familia estén enterados en caso de que el niño no terminara sus actividades por qué motivo no lo había hecho, por lo que refiere la señora que hay varios sellos en una sola hoja es por que al momento de poner el sello este no marcaba bien, y yo trato de volverlo a poner con el propósito de que esté legible y repito, es para que el alumno y los padres sepan por que no termino el trabajo.- Ahora bien, en relación a que la niña no quería trabajar en clase derivado de alguna situación directamente conmigo deseo aclarar que no es así, pues la niña trabajaba normalmente sin manifestar ninguna inconformidad y además deseo agregar que a la fecha todos los días después de la hora de recreo llega a mi salón a ver a sus compañeros y además se acerca hasta donde estoy sentada en el escritorio y me toca en señal de atención y se sonríe y le pregunto que anda haciendo y ella solo me dice "es que ando corriendo" e inmediatamente se va al patio o a su salón, situación que hago del conocimiento de este Organismo para hacer ver que entre la niña y yo siempre ha existido una*

cordialidad y un buen trato y ella se sigue acercando a mi con toda la confianza como su maestra aunque ella ya no esté en mi grupo." [sic]

5.3.8. Desahogo de vista de informe a cargo de la C******quien expuso:

*"En atención a lo informado en fecha 01 de marzo, por la Profra. ******directora de la Escuela Primaria "******, deseo referir lo siguiente: Deseo manifestar que referente a lo que la directora menciona, que el día 19 de enero, que me presenté con ella yo ya había acudido ante este Organismo, deseo aclarar que como se puede observar en mi escrito inicial de queja en la fecha 19 de enero a las 11:34, me fue recibido por esta comisión formalmente, por lo que aún no había interpuesto queja alguna en este organismo, por tal motivo ella miente en lo expuesto en su informe en mención, por que la hora en que yo estuve en el plantel fue de 8:00 a 8:30 de la mañana.- En el punto que ella menciona que en la reunión que tendríamos la directora, la supervisora y la suscrita en el plantel, ella refiere haberme comunicado que la supervisora ya no acudiría a la reunión, por tener otros compromisos, pero esa parte tampoco es cierta, pues lo que a mi me dijo fue que como ya se habían presentado los medios de comunicación en la escuela, la supervisora ya no iba a ir, y además ese mismo día yo me entrevisto con la supervisora en la secretaría y le comento de lo sucedido y ella desmiente lo dicho por la directora y me comenta que ella continuaría haciendo su trabajo.- En el párrafo que refiere que ella siempre está presente en las reuniones de padres de familia de cada salón, esto también es mentira.- Ahora bien, donde dice que ella siempre ha procurado por el bien de la niña, eso no es cierto, por que la actitud de la maestra de grupo nunca cambió, y es por tal motivo que me ví obligada a solicitar el cambio y no por la sugerencia de la directora.- En el párrafo donde dice "y a la fecha según se observa se está avanzando y prosperando en el desempeño escolar de tal menor así como en su autoestima", esto significa que la directora directamente está aceptando que en el anterior grupo mi Hija se encontraba muy reprimida, por tanto acoso de que era objeto por parte de la maestra.- Ya por último, refiero que en el párrafo de su informe donde menciona que se entrevistó con los niños del grupo de 2° C, para tener conocimiento de los hechos que sucedieron el día 18 de enero, así como los actos suscitados durante la reunión de padres en el salón de clases el día 20 de enero, no me queda claro, cual es la conclusión a la que ella llegó y lo que los niños le comentaron por que en su escrito ella no refiere nada de eso.-*

*Así mismo, deseo anexar copia fotostática simple de los exámenes correspondientes a la tercer evaluación bimestral de las materias de español, matemáticas y formación cívica y ética, aplicadas a mi hija******, ello a efecto de que se advierta el cambio en el rendimiento de mi menor hija, que anteriormente no tenía, por la presión de que era objeto por parte de la Maestra******, y por las observaciones de señalarle los errores en aspectos que la niña tenía correctamente contestados.- Es por tal motivo que deseo solicitar a este Organismo se continúe con la investigación de los hechos expuestos, para que se resuelva a la brevedad posible conforme a derecho corresponda". [sic]*

5.3.9. Constancia de diecinueve de abril de 2012, en la cual se asentó:

*"Que me constituí en hora y fecha señalada a la escuela primaria******" ubicado en …******.., de la colonia******, con el fin de solicitar a la Profra. ******, Directora de dicho plantel, su autorización para llevar a cabo una entrevista con los alumnos de 2do año, grupo "C"; lo anterior, para lograr la debida integración dentro del expediente de queja al rubro indicado; por lo que una vez que me fuera autorizado dicha diligencia por la citada servidora pública, me constituí al salón de clases en mención, cuestionándoles a los alumnos lo siguiente:*
*¿Cómo es la maestra******?. Contestando la mayoría de los alumnos que era buena.*
*¿La maestra ******…los ha tratado mal, o los ha agredido física o verbalmente? Respondiendo la mayoría de los alumnos que no, y que no ponía ningún tipo de castigos.*
*¿La maestra les ha negado el permiso de ir al baño en horas de clase? Respondiendo la mayoría que no, que siempre que solicitan permiso la maestra se los ha dado, haciendo mención algunos alumnos que hubo un caso donde una niña se hizo pipi en el salón, pero eso había sucedido porque no le había pedido permiso a la maestra, y que la niña ese día le echó la culpa a la maestra; por lo que el suscrito al escuchar que los alumnos tocaron ese punto, les cuestioné si la profesora le mencionó a la madre de dicha niña que le pusiera pañales, respondiendo la mayoría de ellos que de eso no se habían dado cuenta; refiriendo además que en otra ocasión un niño de nombre ****** se había hecho pipi y había llorado por ese incidente, pero que el niño no le avisó a la maestra…". [sic]*

6. Una vez agotado el procedimiento que nos ocupa, el expediente quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis se obtuvieron las siguientes:

C O N C L U S I O N E S

Primera. Este Organismo es competente para conocer la queja planteada por la C. ******en representación de su menor hija ****** pues se trata de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a unas servidoras públicas que prestan sus servicios dentro del territorio de nuestro estado, al tenor de lo dispuesto en los artículos 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

Segunda. No existe acreditada alguna causa de improcedencia.

Tercera. Reducido a una breve expresión, la quejosa se duele de lo siguiente;

a) Que su hija ******…, cursaba el 2º grado, grupo "C" en la Escuela Primaria "******" en esta ciudad; que la maestra de nombre******, no le dio permiso a su hija de ir al baño, por tal motivo, ésta hizo sus necesidades fisiológicas en su ropa; señaló que no era la primera vez que esto sucedía debido a que en primer grado, ocurrió lo mismo;

b) Que la maestra ******se dirigía hacia sus alumnos de una forma prepotente y los trataba mal, debido a que les gritaba y los evidenciaba, por ejemplo en una ocasión delante de los padres de familia y de los alumnos, dicha maestra comenzó a realizar comentarios de una forma burlona, grosera y prepotente sobre lo ocurrido a su hija y burlándose le manifestó que le pusiera pañal a su hija;

c) Señaló que su menor hija le comentó que su maestra le dijo a sus compañeros "******que la mamá de ******es una mentirosa, dice que yo golpeó a******". Por tal motivo, los niños ya no querían jugar con su hija;

d) Que dicha maestra como represalia le plasmó en los trabajos de su hija varios sellos negativos en una misma hoja de sus cuadernos y libros;

e) Que el 20 de enero de 2012, la C. Profesora******, Directora del citado plantel, cuestionó a su hija respecto a lo ocurrido; posteriormente la maestra ******le preguntó a su hija que qué había platicado con la Directora; lo que considera inadecuado debido a que ella no estuvo presente en la entrevista que sostuvo la Directora con su hija y que la maestra******. estaba intimidando a su hija. Por tal motivo, ésta ya no quería asistir a la escuela;

f) Mediante escrito de 7 de febrero de 2012, la quejosa, refiere que por instrucciones de la profesora******, Directora del plantel educativo en cita, personal de intendencia, no le permitieron la entrada al citado plantel, tratándola de una forma prepotente, grosera, agresiva y le gritaron.

Por razón de orden y para una mejor comprensión de esta resolución, los preindicados motivos de queja se analizarán en apartados separados, en el orden que se citan.

Cuarta. En lo atinente al **primero** de los motivos de queja, esta Comisión estima que no se acreditó fehaciente la violación de derechos humanos en análisis.

Si bien es cierto, obra en autos el testimonio de una madre de familia quien adujó que escuchó cuando la menor ****** comentó que la maestra no la había dejado ir al baño.

También lo es que tal manifestación carece de certeza por tratarse de un testimonio de oídas, es decir, no tuvo la percepción directa de los hechos materia de nuestra investigación, circunstancia que reduce su credibilidad; así mismo, de

la declaración de la menor ****** se advierte que refiere que en primer año y empezando segundo la maestra no la dejó ir al baño, luego sí, pero no alcanzó a llegar a dicho lugar; aunado a lo anterior, de los autos que conforman el expediente de queja se advierte que obra la declaración de la C. ******, maestra del 2º grado, grupo "C" de la Escuela Primaria "******" en esta ciudad, quien negó los hechos imputados en su contra por la C. ******y señaló que respecto a que la niña realizó sus necesidades en su ropa, tal situación la desconocía, aclaró que cuando la niña le pedía permiso de ir al baño siempre se lo otorgó e inclusive podía salir sin pedir permiso debido a que en primer año tuvo un accidente.

Así mismo, obra constancia de 19 de abril de 2012, elaborada por personal de este Organismo, en la cual se asentó que al cuestionar a los alumnos de 2º grado, grupo "C", refirieron que en una ocasión una niña se hizo pipi en el salón, porque no le pidió permiso a la maestra; sin embargo ésta le echó la culpa a la maestra.

Quinta. En cuanto al **segundo** motivo de queja, esta Comisión estima que no se acreditó fehaciente la violación de derechos humanos en análisis.

Al respecto, la C. Profra. ******…, negó los hechos imputados en su contra.

Así mismo, en entrevista con alumnos de 2º grado, grupo "C", se les preguntó respecto a cómo era su maestra******; si los trataba mal o los agredía física o verbalmente; se les cuestionó si la profesora le mencionó a una madre de familia que le pusiera pañales a su hija; se advierte que fueron coincidentes en responder que la maestra ****** era buena; no los agredía y no les ponía ningún tipo de castigos; respecto a la última pregunta respondieron que de eso no se dieron cuenta.

Sexta. En lo tocante al **tercero** motivo de queja, esta Comisión estima que no se acreditó fehacientemente la violación de derechos humanos en análisis.

Al respecto, la Profesora ****** negó los hechos imputados en su contra, desprendiéndose que lo expuesto por la quejosa corresponde a un testimonio de oídas, es decir, no tuvo la percepción directa de los hechos materia de nuestra investigación; así mismo, del contenido de la declaración de la menor ****** se advierte que en ningún momento señaló tal situación.

En esa tesitura y considerando que una vez analizadas todas y cada una de las constancias que integran el expediente que nos ocupa, se desprende que no existen elementos probatorios suficientes e idóneos que nos permitan acreditar de manera fehaciente que la servidora pública haya incurrido en los actos violatorios de derechos humanos que nos ocupa, analizadas en la conclusión **Cuarta, Quinta** y **Sexta** de la presente resolución; en ese contexto, se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 65 del Reglamento de la Ley de la comisión de derechos humanos cuyo texto a la letra dice:

> *"…Artículo 65. Los acuerdos de No Responsabilidad se expedirán después de haber concluido con el procedimiento de investigación de la queja y no se comprueben las violaciones de derechos humanos imputadas a una autoridad o servidor público, en los siguientes supuestos: II. Por no obtenerse los elementos probatorios para acreditar en forma fehaciente la violación de derechos humanos".*

De tal dispositivo, se desprende que nuestra legislación exige prueba fehaciente de la violación, pues otorga a la Comisión la obligación de investigar y a las partes el derecho de ofrecer pruebas, de ello, fácilmente se puede concluir que el sólo dicho de la quejosa y de su hija son insuficientes para dar por acreditada la existencia de la violación, pues considerar lo contrario, haría innecesario exigir pruebas fehacientes de la violación, o bien, investigarla o recabar pruebas oficiosamente o a instancia de parte.

En esa dirección, en términos de la fracción II del artículo 65 del reglamento de esta Comisión, en relación con los hechos antes señalados, se emite **ACUERDO**

DE NO RESPONSABILIDAD POR NO HABERSE ACREDITADO FEHACIENTEMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, en el entendido de que en términos del segundo párrafo de la precitada fracción y artículo, si posteriormente aparecieren y se allegaren nuevos datos o pruebas indubitables sobre los hechos afirmados en la queja se podrá ordenar la apertura de un nuevo expediente.

Séptima. En relación al **cuarto** motivo de queja, esta Comisión estima que es patente la violación a los derechos humanos en estudio.

Al respecto, la C. Profesora ****** aceptó que colocó varios sellos en los trabajos de la menor******, siendo contradictorio en cuanto a que pretendió justificar el haberlo hecho porque al momento de ponerlo no marcaba bien; sin embargo, esta Comisión considera que con esto, no se logra despertar el interés del alumno para que se esfuerce y cumpla con sus trabajos; sino por el contrario provoca que éste entre en un periodo de conflicto y estancamiento; lo que sin lugar a dudas causó un impacto emocional en la alumna ******

Octava. En cuanto al **quinto** motivo de queja, esta Comisión estima que es patente la violación a los derechos humanos en estudio.

Al respecto, la Profesora ****** aceptó que en la hora del recreo mandó llamar a la menor ****** para interrogarla respecto a los hechos denunciados por su madre e incluso refiere que esto lo hizo con otros alumnos.

En ese sentido, la menor ****** manifestó que la Directora la mandó llamar a la dirección y ahí le preguntó qué había pasado, platicándole lo sucedido; que la maestra ****** la cuestionó respecto a qué le había preguntado la directora y que había respondido. Con ello, se encuentra plenamente demostrado que las Profesoras ****** y ******interrogaron a la menor de referencia sin la presencia de sus padres o legítimos tutores, lo que significa una violación a los derechos de la menor; apartándose de los principios éticos y profesionales.

Por lo anterior, es pertinente señalar que las Profesoras ****** y******, Directora y entonces maestra de 2º grado, grupo "C" de la Escuela Primaria "******" con residencia en esta ciudad, con su conducta actuaron en contravención a lo establecido en el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, artículos 3 y 19 de la Convención de los Derechos del Niño, artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4 fracción I y artículo 5 fracción I inciso d) y fracción II incisos f) y g) de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños de Tamaulipas y 47 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado[11].

---

[11] ***Principio 2.*** *El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.*

Artículo 3. ***1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas, privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.***

Artículo 19. *1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.*

Artículo 3o. *[…]*

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Artículo 4º.- *Son principios rectores en la observancia, interpretación y aplicación de la Ley los siguientes:*

I.- *El de interés superior que implica dar prioridad al bienestar de las niñas y niños ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio.*

Artículo 5º.- *De manera enunciativa, más no limitativa, conforme a la presente Ley, las niñas y niños en Tamaulipas tienen los siguientes derechos:*

I.- *A la vida, integridad y dignidad:*

d).- *A ser respetado en su persona, en su integridad física, psicoemocional y sexual;*

II.- *A la identidad, certeza jurídica y familia:*

f).- *A emitir su opinión en los asuntos que le afecten, y ser escuchado, en los términos de la legislación aplicable, en todo procedimiento judicial o administrativo, ya sea directamente o por medio de representante;*

g).- *A recibir un trato digno y apropiado cuando sean víctimas de cualquier tipo de ilícito o cuando ellos mismos cometan infracciones; y*

Artículo 47. *"Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones*

Novena. En relación al **sexto** motivo de queja, esta Comisión estima que es patente la violación a los derechos humanos en estudio; ello se afirma así, pues de las pruebas recabadas de oficio por este Organismo, justifican que efectivamente como lo refiere la quejosa, la Directora Profesora ****** ordenó a personal de intendencia no le permitieran la entrada al citado plantel, que dichas personas la trataron de una forma prepotente, grosera y agresiva, esto se estima violatorio de los derechos humanos de la C. ******, lo que se demuestra con lo siguiente:

Declaración informativa de la C. ******, Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Primaria "******", quien refirió que el intendente de nombre ****** le comentó que una madre de familia estaba en el portón y deseaba hablar con ella, por lo que ella acudió al portón y la señora ****** le preguntó en relación a un escrito si había una respuesta por parte de la Supervisora, comentándole que no, invitándola a que pasara al plantel y ****** le dijo que la intendente ******no la dejaba entrar a la escuela, por lo que se dirigió con dicha intendente, pidiéndole la dejara pasar, dicha persona con voz alta y en tono de molestia le dijo que la señora ****** no podía pasar por instrucciones de la directora, deteniendo con fuerza el portón […] la intendente ******estaba en una postura un tanto agresiva o desesperada […] habló con la maestra******.., comentándole que la señora ****** deseaba ingresar a la escuela, respondiéndole que no había autorización para eso, comentándole que por motivos de seguridad […], diciéndole la forma grosera en que las había tratado la intendente ****** a lo que hizo caso omiso la Directora.

Sobre el particular, obra la declaración informativa del C. ******, personal administrativo de la Escuela Primaria "******", quien señaló "*que siguió la indicación*

---

que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales:

I.- Cumplir con la máxima diligencia, el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; V. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste.

de la Mtra. ******.., directora del plantel, […] no la dejé entrar pero nunca la agredí y es falso que haya aventado el portón hacía ella y también que le haya gritado o discriminado*".

Así mismo, el testimonio de la C. ******, quien refirió que la Directora les dijo que estuvieran al pendiente del portón pues no quería ver a ninguna madre de familia dentro de la escuela, comisionando a su compañero ****** y a ella, para cuidar el portón; cuando llegó la señora ****** queriendo entrar otra vez a la escuela, le dijo que le permitiera hablar con la directora, pues no podía dejar pasar a ninguna madre por seguridad, molestándose la señora ****** posteriormente llegó la señora ****** y le preguntó por qué no dejaba entrar a la señora******, contestándole que eran órdenes de la directora no dejar entrar a ninguna mamá, sugiriéndole a la señora ******que entrara hablar con la directora para que autorizara la entrada a la señora ****** en ningún momento le gritó, solo le habló en un tono fuerte porque así habla.

Al respecto, cabe apuntar que el argumento en relación a las medidas tomadas para garantizar la seguridad de la comunidad educativa son válidos; sin embargo, de la declaración de la C. ******…, se denota la predisposición hacia la aquí quejosa, lo que se confirma con la versión de los CC******y personal administrativo de la Escuela Primaria "******", los cuales señalaron la conducta inapropiada que afirman mostró la C. ******, una vez que solicitó el ingreso al plantel, argumentando que esto no era posible; sin embargo, de las actuaciones que conforman el presente expediente se advierte que la petición de la C. ******consistió en que se le permitiera la entrada para hablar con la C. ******, Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Primaria ""; sin haber obtenido una respuesta positiva, considerando que se excedieron en su proceder los CC. Profesora ******y ****** y personal administrativo, respectivamente, del plantel de referencia.

En ese tenor, al encontrarse plenamente acreditado que los CC. ******y******, aceptaron que no le permitió la entrada a la C. ******, bajo el argumento que fue por instrucciones de la Directora debido a la actitud que mostró la quejosa, motivo por el cual no dejaban entrar a persona ajena al plantel, se considera que resulta procedente solicitar al Secretario de Educación, ordene a quien corresponda, instruya a la profesora******, Directora de la Escuela Primaria "******" de esta ciudad, para que en lo subsecuente tome las medidas necesarias (priorizar diálogo con los padres de familia, flexibilidad con los mismos para atender cualquier situación de los menores educandos) con el objeto de evitar se realicen tratos inadecuados que restrinjan los derechos como padre de familia, puesto que no existe disposición alguna que les conceda facultades para el efecto de impedirles el acceso a las instalaciones del plantel, ajustándose a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la letra dice:

> ***"Artículo 47.-*** *Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que corresponda, según la naturaleza de la infracción en que incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales: I.- Cumplir con la máxima diligencia, el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio público o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo cargo o comisión".*

No pasa desapercibido para este Organismo, lo manifestado por la C. ******en el sentido de que la Profesora ****** no le entregó la boleta de calificaciones en el momento en que lo solicitó; sino que fue después de transcurrir aproximadamente 2 horas que por conducto de la Profesora******, Directora de la Escuela Primaria "******" le fue entregada la boleta de calificaciones de su menor hija …******.

Situación que se considera no debió presentarse, toda vez que, al existir la certeza de que la alumna estuvo enferma y no estuvo en posibilidades de presentar los exámenes, la maestra ****** debió haber prevenido dicha circunstancia con la Directora antes de negar la entrega de la boleta de calificaciones y señalar que el documento se encontraba en la dirección, para que la madre de familia tuviera

oportunidad de disipar sus inquietudes; esto nos conlleva a dos posturas; la maestra ****** de no acceder a la entrega del documento, y el de la madre de familia a que se atendiera su petición, la primera no encuentra justificación alguna, en tanto que la segunda tiene sustento en el derecho que le asiste al padre de familia como al propio alumno de verificar un resultado, que la normatividad invocada aplica en el supuesto que nos ocupa, por lo que se reitera a juicio de quien resuelve, que tal negativa fue una actitud inadecuada, que generó mayor inconformidad en la quejosa, y un ambiente hostil innecesario.

Décima. Tras haber afirmado las violaciones a los derechos humanos destacadas en las conclusiones **Séptima, Octava** y **Novena**, en que incurrieran las CC. Profesoras ****** y******, en agravio de la menor ****** y de la C. ******, y atendiendo la obligación en materia de Derechos Humanos, de prevenir, investigar, sancionar y **reparar las violaciones a los derechos humanos**. Por lo que, en atención a ello, es preciso solicitar se lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar la reparación del daño, que conforme a los estándares internacionales en la materia, debe ser, entre otras, adecuada a la gravedad de la violación y del daño sufrido. En consecuencia, atendiendo lo dispuesto en el artículo 48, de la ley de esta Comisión, que obliga a señalar las medidas procedentes para la efectiva restitución a los afectados de sus derechos fundamentales; deberá recomendarse al **Secretario de Educación del Estado**, que tome las medidas siguientes:

a) De así requerirlo la parte agraviada, sea valorada por un especialista, quien determinará si requiere de asistencia psicológica, y en su caso, el tipo y duración del tratamiento, lo anterior para que con base en dicha opinión se otorgue la atención psicológica que la menor pasiva necesite; en su caso, **reintegrar** a la quejosa, los gastos que haya erogado con motivo de los tratamientos médicos o terapéuticos otorgados a la menor que hubiera sido consecuencia de la violación a los derechos humanos aquí destacada;

b) Se dicten las medidas correctivas y disciplinarias que procedan conforme a derecho.

c) **<u>Se instruya</u>** a la profesora ****** Directora de la Escuela Primaria "******" de esta ciudad, para que en lo subsecuente tome las medidas necesarias (priorizar diálogo con los padres de familia, flexibilidad con los mismos para atender cualquier situación de los menores educandos) con el objeto de evitar se realicen tratos inadecuados que restrinjan los derechos como padre de familia, puesto que no existe disposición alguna que les conceda facultades para el efecto de impedirles el acceso a las instalaciones del plantel, ajustándose a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 Apartado B de la Constitución General de la República, 41, fracciones I y II; 42; 43; 46; 48; y, 49 de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este Organismo, así como los numerales 63, fracciones II y V; 65 fracción II; 68; 69; y, 70 de nuestro reglamento interno, se emite:

Al Secretario de Educación del Estado, como superior, la siguiente:

R E C O M E N D A C I O N

Primero. De así requerirlo la parte agraviada, sea valorada por un especialista, quien determinará si requiere de asistencia psicológica, y en su caso, el tipo y duración del tratamiento, lo anterior para que con base en dicha opinión se otorgue la atención psicológica que la menor pasiva necesite; en su caso, reintegrar a la quejosa, los gastos que haya erogado con motivo de los tratamientos médicos o terapéuticos otorgados a la menor que hubiera sido consecuencia de la violación a los derechos humanos aquí destacada.

Segundo. Se dicten las medidas correctivas y disciplinarias que procedan conforme a derecho.

Tercero. Se instruya a la profesora******, Directora de la Escuela Primaria "******" de esta ciudad, para que en lo subsecuente tome las medidas necesarias (priorizar diálogo con los padres de familia, flexibilidad con los mismos para atender cualquier situación de los menores educandos) con el objeto de evitar se realicen tratos inadecuados que restrinjan los derechos como padre de familia, puesto que no existe disposición alguna que les conceda facultades para el efecto de impedirles el acceso a las instalaciones del plantel, ajustándose a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En la inteligencia que de conformidad con el artículo 49 de la Ley de esta Comisión, se le solicita que en un plazo no mayor a diez días hábiles, informe sobre si acepta o no esta recomendación, y en su caso, remita dentro de los quince días siguientes las pruebas relativas a su cumplimiento.

Así mismo, se determina:

Único. En términos de la **Cuarta, Quinta y Sexta** conclusión, se dicta **ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD POR NO HABERSE ACREDITADO FEHACIENTEMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS** imputadas a la Profesora ……, maestra de la Escuela Primaria **"**……**",** en esta ciudad.

En el entendido de que, si posteriormente aparecieren y se allegaren nuevos datos o pruebas indubitables sobre los hechos afirmados en la queja se podrá ordenar la apertura de un nuevo expediente.

Comuníquese a la partes, y hágase saber a la quejosa que el artículo 52 de la Ley de esta Comisión, le otorga el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de reconsideración.

Así, en términos del artículo 22 fracción VII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; lo aprobó y emitió el Ciudadano José Martín García Martínez, Presidente de esta Comisión.

Dr. José Martín García Martínez
Presidente

Proyectó

Lic. Maura A. López López
Visitadora Adjunta

Vo. Bo.

Lic. Leticia Tavares Calderón
Primera Visitadora General

L´MALL.
Queja No. 10/2012.

EXPEDIENTE N°. 019/2014-SF

QUEJOSA: ******

RESOLUCIÓN: RECOMENDACIÓN N°. 014/2015

En ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, al primer día del mes de junio del año dos mil quince.

V I S T O para resolver en definitiva el expediente número 019/2014-SF, iniciado con motivo de la queja presentada por la **C.******, ante este Organismo, mediante la cual denunciara Incumplimiento de la Función Pública en la Procuración de Justicia, por parte del personal de la Agencia del Ministerio Público Investigador con residencia en San Fernando, Tamaulipas; este Organismo procede a emitir resolución de conformidad con los siguientes:

A N T E C E D E N T E S:

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, por conducto de su Delegación Regional con residencia en San Fernando, Tamaulipas, recibió queja por comparecencia de fecha 24 de octubre del 2014, presentada por la C.******, que manifestó lo que a continuación se transcribe:

> *"… Que en fecha 12 de junio del año 2012, hubo una fiesta familiar en mi casa, por el cumpleaños de mi hijo mayor, por lo que invitamos a nuestros vecinos ya que los conocíamos de mucho tiempo, sin embargo, durante la fiesta estaban tomando cerveza, y cuando estaban bailando, mi hijo menor de nombre ******, al parecer tuvo un problema con uno de los muchachos que había en la fiesta y comenzaron a golpearse, por lo que mis vecinos intervinieron para defender al otro muchacho, pero mi vecino de nombre ****** tomó a mi hijo de los brazos y su hijo quien también se llama ****** atacó a mi hijo con una navaja, quedando mi hijo tendido por lo que inmediatamente lo llevamos al Hospital General, sin embargo al llegar ya no presentaba signos vitales; que esa misma noche acudió la Policía Estatal a mi domicilio y mi otro hijo les dijo a los policías que las personas que le quitaron la vida a mi hijo estaban en la casa de a lado, pero los policías no quisieron detenerlos porque dijeron que no llevaban una orden de aprehensión; que al día siguiente por la mañana mis hijos acudieron a la Agencia del Ministerio Público Investigador y declararon, pero yo por el dolor que estaba sufriendo no acudí hasta unos meses después y desconozco cual es el*

*número del expediente, ya que nunca nos dieron algún documento, pero durante estos dos años hemos estado acudiendo a preguntar sobre el avance del caso, pero siempre nos decían que acudiéramos otro día, porque tenían mucho trabajo, o que el Agente no se encontraba, pero nunca nos dieron información sobre el expediente, ni salió una orden de aprehensión, aún y cuando mis hijos informaron los nombres de las personas que cometieron el homicidio quienes desde la noche de los hechos se fueron de la ciudad y tenemos conocimiento por familiares que viven en Matamoros y allá los han visto e incluso han venido a esta ciudad, ya que otros vecinos los han visto aquí; por lo anterior, solicito de su apoyo para que el homicidio de mi hijo no quede impune, ya que no es posible que después de tanto tiempo aún no se haya girado una orden de aprehensión; quiero agregar que cuando estaba de oficial secretario el Licenciado ******, fue la última vez que acudimos y lo que nos dijo fue que la orden de aprehensión no había salido porque todavía le faltaba meter un escrito, sin embargo, desconozco cuales sean las causas reales porque no conozco el procedimiento y el Lic. ******, solo decía que faltaba meter un escrito pero no se sobre que."*

2. Una vez analizado el contenido de la queja, se calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, y se admitió a trámite, procediendo a su radicación con el número 019/2014-SF, y se acordó solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe justificado, relacionado con los hechos denunciados, así como la exhibición de la documentación que se hubiera integrado sobre el caso.

3. Mediante oficio número 7098/2014, de fecha 19 de noviembre de 2014, el C. Licenciado ******, Agente del Ministerio Público Investigador ******, Tamaulipas, rindió el informe solicitado en el que expuso:

*"… En cuanto a las manifestaciones que realiza la ahora quejosa ******, en su escrito de fecha 24 de octubre del año en curso y que atribuye a esta autoridad; le manifiesto lo siguiente: En lo que refiere que con fecha 12 de junio del año 2012, hubo una fiesta familiar en su casa por el cumpleaños de su hijo mayor, etc. Y que al parecer su hijo de nombre ****** tuvo un problema con uno de los muchachos que había en la fiesta y comenzaron a golpearse, etc. Y que****** atacó a su hijo con una*

*navaja, etc. Y lo llevaron al Hospital General, sin embargo al llegar ya no presentaba signos vitales, es cierto ya que una vez que se efectuó una búsqueda en los libros de registro que se llevan en esta representación a mi cargo, se encontró la averiguación previa penal número ******, por lo que la misma desde este momento la tengo en estudio para estar en condiciones de determinar si se encuentra debidamente integrada para ejercitar acción penal en contra del C. ****** o quien resulte responsable y en su caso proceder de inmediato a llevar a cabo el desahogo de tantas o cuantas diligencias ministeriales que conforme a derecho sean necesarias para tal ejercicio de la acción penal, ya que para tal caso se debe proceder a verificar que se encuentren reunidos los requisitos que exige el artículo 16 de la Constitución General de la República, es decir, que se acrediten los elementos del cuerpo del delito en cuestión y que existan datos suficientes para hacer probable la presunta responsabilidad del o los autores de tal ilícito; ahora bien en lo que se refiere que en estos últimos dos años han estado acudiendo a preguntar sobre el avance del caso pero siempre nos decía que acudiéramos otro día porque tenían mucho trabajo, o que el Agente no se encontraba, pero nunca nos dieron información sobre el expediente, ni salió una orden de aprehensión aún y cuando mis hijos informaron los nombres de las personas que cometieron el homicidio quienes desde la noche de los hechos se fueron de la ciudad y tenemos conocimiento por familiares que viven en Matamoros y allá los han visto e incluso han venido a esta ciudad ya que otros vecinos también los han visto aquí, a lo anterior es de manifestarse que se debe aclarar en que fechas pasaron a la Agencia del Ministerio Público Investigador, ya que el suscrito desde que inicié como Ministerio Público Investigador nadie ha acudido a solicitar informes de la indagatoria previa penal a que he hecho referencia, ni mucho menos ha ido a solicitar que el suscrito le conceda audiencia, ya que a toda persona que acude la atiendo y se trata de darle solución a sus problemas en la medida de lo posible y de acuerdo a la carga de trabajo que existe en la Agencia del Ministerio Público Investigador a mi cargo y es el caso que el suscrito en mis tareas y diligencias o encargos que se me comisionan, solo es cuando me ausento de lo oficina, fuera de eso, ahí me encuentro despachando como es mi deber, ahora bien si la ahora quejosa tiene conocimiento del paradero del o los responsables debió haber acudido a poner en conocimiento de esta autoridad, ya que además es una obligación que tiene todo ciudadano de proporcionar todos los datos que tenga en su poder o tenga conocimiento, a fin de coadyuvar con la función del Ministerio Público y así se pueda castigar al o los responsables y los delitos no queden impunes, por lo que desde este momento se le solicita*

*a la quejosa de referencia proporcione a esta Representación Social toda la información con que cuente o cualquier dato o medio de prueba para la debida integración de la referida averiguación previa penal; en cuanto a que la última que acudió lo fue cuando estaba de oficial secretario el LIC. ******, se le pide que sea más precisa en la fecha, ya que refiere que este último les dijo que la orden de aprehensión no había salido porque todavía le faltaba meter un escrito, para estar en condiciones de citar al oficial secretario LIC. ******y aclarar tal manifestación. Ahora bien en lo que refiere a la medida cautelar de que el expediente sea consignado al Juzgado de Primera Instancia Mixto a la brevedad posible, es de manifestarse que esta autoridad tiene por obligación verificar que se encuentren reunidos los requisitos que establece el artículo 16 de nuestra Carta Magna, es decir si se encuentra acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del o los probables responsables, y una vez hecho lo anterior se procederá conforme a derecho, es decir si se reúnen los extremos de dicho artículo constitucional antes citado se ejercitará acción penal en forma inmediata y de acuerdo con la carga de trabajo de esta Representación Social y en caso de que aún no se encuentren reunidos dichos requisitos de ley, se ordenará la práctica de tantas o cuantas diligencias sean necesarias para lograr en su caso ejercitar acción penal conforme a la ley, comprometiéndome a remitir a usted copia certificada de la determinación que se decrete en dicha indagatoria previa penal."*

4. Una vez recibido el informe de referencia con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a esta Institución, se notificó a la quejosa ******y por considerarse procedente se declaró la apertura de un periodo probatorio por el plazo de diez días hábiles común a las partes.

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron las siguientes probanzas:

5.1. PRUEBAS OBTENIDAS POR ESTE ORGANISMO:

5.1.1. Comparecencia de fecha 3 de diciembre del 2014, recepcionada por personal de este Organismo en la que se asienta lo siguiente:

> *"… Que por una parte no estoy de acuerdo en el informe en relación a que menciona que se va a estudiar el expediente y determinar si se ejercita acción penal en contra de ******, ya que esa persona solamente estuvo en la fiesta y lo detuvieron, pero las personas que cometieron el homicidio fueron el señor ****** y su hijo quien no sé su nombre exacto porque le decían ******no se si llama ****** pero sus apellidos son ******; asimismo quiero manifestar que nunca hablamos con el Agente del Ministerio Público, porque la persona que nos atendía siempre era el LIC. *******y no recuerdo la fecha de la última vez que hablamos con él; asimismo quiero agregar que nos cansamos de estar acudiendo a la Agencia del Ministerio Público ya que el LIC. ******solo nos daba excusas y cuando nos enteramos que el ya no trabajaba en la Agencia del Ministerio Público, decidimos acudir a este Organismo para pedir ayuda y que se haga justicia."*

5.1.2. Constancia de fecha 04 de febrero del año 2015, elaborada por personal de este Organismo, la cual a continuación se transcribe:

> *"… Que me constituí en la Agencia Única del Ministerio Público Investigador de esta ciudad, entrevistándome con la C. LIC. ******, Oficial Secretario de dicha Agencia, a quien le mencioné que mediante oficio número 014/2015 de fecha 20 de enero del año en curso, le solicité por segunda ocasión copias fotostáticas de la averiguación previa penal número ******, mismas que hasta la fecha no había recibido, por lo que en ese momento me hizo entrega de las copias solicitadas; lo anterior, para ser anexadas al expediente de queja 019/2014-SF."*

5.1.3. Copias fotostáticas certificadas de la averiguación previa penal número ******, radicada en la Agencia Única del Ministerio Público Investigador ******, Tamaulipas, en contra de quien resulte responsable.

6. Una vez agotado el período probatorio, el expediente quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis se desprenden las siguientes:

C O N C L U S I O N E S:

I. Este Organismo es competente para conocer la queja planteada por el C.******, por tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a una autoridad estatal, al tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

II. De la queja interpuesta se desprenden señalamientos como *incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia,* atribuibles al titular de la **AGENCIA ÚNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR EN ******, TAMAULIPAS**. En efecto, una vez realizado el análisis de las constancias y pruebas que conforman el expediente de queja 019/2014-SF, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas en adelante referida solo como la Comisión (CODHET) encuentra suficientes elementos de convicción para pronunciarse por las actuaciones y/u omisiones violatorias de los derechos humanos de la señora ******, consistentes en los derechos de acceso a la justicia, legalidad y seguridad jurídica, así como relativos a las víctimas y ofendidos.

FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL

1) Derecho Humano al acceso a la justicia

EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

> ***Artículo 17****. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.*

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

Artículo 21. *La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.*
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
[…]

Artículo 102.
A.
Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad ***para que la impartición de justicia sea pronta y expedita;*** *pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.*

***Artículo 116**. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.*
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
[…]
*Las Constituciones de los Estados **garantizarán que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios** de autonomía, **eficiencia**, imparcialidad, **legalidad**, objetividad, **profesionalismo**, **responsabilidad** y **respeto a los derechos humanos**.*

EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS:

*ARTÍCULO 124.- **La institución del Ministerio Público representa los intereses de la sociedad** conforme a las atribuciones que le confiere esta Constitución y demás leyes.*

*Son atribuciones del **Ministerio Público**:*

I.- Ejercer la acción penal para el enjuiciamiento de los probables responsables de las conductas delictivas e intervenir durante los procedimientos penales y de justicia para adolescentes;
[…]
*VI.- **Velar por la exacta observancia de las leyes de interés general;***
[…]
*VIII.- La persecución ante los Tribunales de los delitos del orden común; y por lo mismo, a él le corresponde recibir las denuncias, acusaciones o querellas, tanto de las autoridades como de los particulares; **investigar los hechos objeto de las mismas**, ejercitar la acción penal contra los inculpados, **solicitando en su caso su aprehensión o comparecencia**; **allegar al proceso las pruebas que acrediten el cuerpo del delito y la responsabilidad de los acusados; impulsar la secuela del procedimiento**; y, en su oportunidad, pedir la aplicación de las penas que correspondan;*
[…]
***IX.- Cuidar que los juicios del orden penal se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita**;*
[…].

EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS[12]:

> *Artículo 8. Garantías Judiciales*
> ***1.*** *Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.[…]*

2) Derechos de las víctimas y/u ofendidos

EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

> ***Artículo 20.*** *En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:*
> *[...]*
>
> *B. De la víctima o del ofendido:*
>
> *I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;*
> *II.* ***Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.***
>
> ***Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa****;*
> *III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;*

3) Derecho a la legalidad y seguridad jurídica

[12] Conocido como: "Pacto de San José". Depositario: OEA. Lugar de adopción: San José, Costa Rica. Fecha de adopción: 22 de noviembre de 1969. Vinculación de México: 24 de marzo de 1981, adhesión. Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981.

EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

> ***Artículo 14. […]***
> *Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.*
> *[…]*
>
> ***Artículo 16.***
> *Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.*
> *[…]*

En este sentido, la Comisión (CODHET) sostiene esta determinación a la luz de las siguientes consideraciones:

III. En el escrito de queja presentado por la señora ****** de fecha 24 de octubre de 2014 se alega la inactividad por parte de la Agencia Única del Ministerio Público Investigador con residencia ******, Tamaulipas al integrar la Averiguación Previa Penal ****** iniciada en fecha 12 de junio de 2012 con motivo del homicidio de ****** (hijo de la quejosa).

Ahora bien, antes de abordar las irregularidades que observó la Comisión (CODHET) resulta de vital importancia señalar la actitud del titular de dicha Agencia frente a los procedimientos de investigación de este Organismo, en consecuencia, resulta necesario recordar que las autoridades están obligadas a colaborar con los procedimientos de esta institución no solo porque así lo prevea la ley (del artículo 58 al 53 de la Ley de la Comisión), sino porque existen un mandato constitucional (artículo 1) que a la letra señala:

> *Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no*

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley*.*

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En el caso concreto, sorprende la necesidad de haber tenido que formular un *recordatorio* a la **Agencia Única del Ministerio Público con residencia en ******, Tamaulipas** para que remitiera el INFORME DE AUTORIDAD (de fecha 11 de noviembre de 2014), el cual se recibió hasta el 20 de ese mes, no obstante, la solicitud se realizó el 27 de octubre de 2014 y la Agencia lo recibió el 28 de ese mes.

Adicionalmente, se debe mencionar que en él INFORME únicamente se expone el razonamiento del Agente del Ministerio Público (el Lic. ******) para justificar las actuaciones en dicha averiguación, pero en ningún momento las respaldan con elementos de convicción que sean útiles para sustentar su proceder (artículo 36 de la Ley de la Comisión [CODHET]), ante esta situación, este Organismo tuvo que solicitar la remisión (de fecha 8 de diciembre de 2014) de una copia certificada de la

Averiguación Previa Penal ****** en un término de tres días hábiles, sin embargo, aunque la Agencia recibió el oficio el 10 de diciembre de 2014, esta no las proporcionó hasta el 4 de febrero de 2015 y solo porque la Delegada Regional de este Organismo se apersonó en dicho ente público para pedirlas personalmente y lo cual se recoge en la constancia de fecha 4 de febrero de 2015 y que a la letra dice:

> *[…] Que me constituí en la Agencia Única del Ministerio Público Investigador de esta ciudad, entrevistándome con la C. LIC. ******, Oficial Secretario de dicha Agencia, a quien le mencioné que mediante oficio* ***número 014/2015 de fecha 20 de enero del año en curso,le solicité por segunda ocasión*** *copias fotostáticas de la averiguación previa penal número ******, mismas que hasta la fecha no había recibido, por lo que en ese momento me hizo entrega de las copias solicitadas; lo anterior, para ser anexadas al expediente de queja 019/2014-SF. […].*

Por lo tanto, es evidente que la autoridad no demostró una actitud adecuada para colaborar con esta Institución pues prolongo el tiempo para buscar soluciones a las afectaciones de la quejosa. En este sentido, deber tomarse en cuenta que la Comisión (CODHET) valora cuando la autoridad se allana a las pretensiones del afectado porque con ello, se acortan el tiempo en que se pueden dar soluciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo, si se consideran los casos en que la autoridad es claramente responsable pero con sus actitudes deciden agotar los términos legales sin aportar medios que sustenten sus actuaciones o justifiquen sus omisiones. Lo cual ocurrió en el caso concreto.

IV. En cuanto a la alegada dilación en la integración de la Averiguación Previa Penal ****** de fecha 12 de junio de 2012, esta Comisión (CODHET)advierte que si bien se dio inicio a una Averiguación en la fecha en comento, también hubo un periodo de tiempo en el cual no se realizaron diligencias a pesar que se tenían datos para llevarlas a cabo, destaca el lapso que transcurrió entre las declaraciones de ****** y ****** ambas de fecha **14 de junio de 2012** y el Acuerdo para solicitar orden de investigación de fecha **20 de noviembre de 2014**. Esto significa que hubo un periodo de inactividad equivalente a 2 años 3meses, lo cual *per se* constituye para este Organismo una clara omisión de la autoridad en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales.

Lo anterior se robustece con el contenido del INFORME de la autoridad en el que señala prácticamente la aceptación de la dilación:

> *"En cuanto a las manifestaciones que realiza la ahora quejosa ******, en su escrito de fecha 24 de octubre del año en curso y que atribuye a esta autoridad; le manifiesto lo siguiente: En lo que refiere que con fecha 12 de junio del año 2012, hubo una fiesta familiar en su casa por el cumpleaños de su hijo mayor, etc. Y que al parecer su hijo de nombre ****** tuvo un problema con uno de los muchachos que había en la fiesta y comenzaron a golpearse, etc. Y que****** atacó a su hijo con una navaja, etc. Y lo llevaron al Hospital General, sin embargo al llegar ya no presentaba signos vitales, es cierto* ***ya que una vez que se efectuó una búsqueda en los libros de registro que se llevan en esta representación a mi cargo, se encontró la averiguación previa penal número ******, por lo que la misma desde este momento la tengo en estudio para estar en condiciones de determinar si se encuentra debidamente integrada para ejercitar acción penal en contra del C. ****** o quien resulte responsable y en su caso proceder de inmediato a llevar a cabo el desahogo de tantas o cuantas diligencias ministeriales que conforme a derecho sean necesarias"****[…]*

Para este Organismo, es claro que el Agente no tenía conocimiento de este expediente ya que la fecha del INFORME de autoridad es del **19 de noviembre de 2014,** mientras que la fecha del Acuerdo en el que se reactivó la Averiguación tiene fecha de **20 de noviembre de 2014**. Es decir, fue a raíz de la intervención de la Comisión (CODHET) que se reactivó dicha averiguación.

Al respecto se enuncian las siguientes disposiciones legales vulneradas:

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

> ***ARTÍCULO 5°.-*** *Los servidores públicos que integran la Procuraduría regirán su actuación con base en los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.*
>
> ***ARTÍCULO 7°.-****Al Ministerio Público del Estado le compete el ejercicio de las siguientes atribuciones:*

I.- La función de seguridad pública relativa a la investigación y persecución de los delitos, que comprende:
A) En la etapa de la averiguación previa:
[…]
3. Practicar las diligencias necesarias para acreditar el hecho delictuoso y la probable responsabilidad del indiciado, así como el monto del daño causado;
[…]
7. Obtener elementos probatorios para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, y solicitar a los particulares la aportación voluntaria de los mismos y, en su caso, solicitar al órgano judicial la autorización u orden correspondiente para su obtención;
[…]
14. Garantizar los derechos de las víctimas y ofendidos, así como de los imputados, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables;

***ARTÍCULO 72**.- Las causas de responsabilidad de los Agentes del Ministerio Público, de la Policía Investigadora, de la Policía Ministerial y, en lo conducente, de los Peritos, serán las siguientes:*
I.- No cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público;
[…]
VI.- Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto;
[…]
VII.- Abstenerse en la averiguación previa de dictar o decretar los acuerdos o resoluciones que sean procedentes o hacerlo fuera de los términos legales, o dejar de realizar las acciones necesarias en los asuntos que sean de su conocimiento;

LEY DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS

CAPÍTULO III

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

ARTÍCULO 8.

1.- Los derechos de las víctimas previstos por la presente Ley son de carácter enunciativo y no limitativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de este cuerpo normativo, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.

2.- Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

I.- A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de delitos y de violaciones de los Derechos Humanos y a su reparación integral;

[…]

III.- A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que les fueron violados sus Derechos Humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones y de los derechos que en su favor contemplan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, así como en la legislación de la materia;

[…]

XXIII.- A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;

TÍTULO TERCERO

DEL ACCESO A LA JUSTICIA

CAPÍTULO ÚNICO

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

EN EL PROCESO PENAL

ARTÍCULO 21.

1.- Las víctimas tienen derecho a acceder a la justicia en los términos de la Constitución, de modo que se les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.

[…]

ARTÍCULO 22.

Para garantizar los derechos establecidos en el artículo precedente, los Poderes del Estado de Tamaulipas garantizarán a las víctimas el acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las normas previstas en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y en las Leyes Federales y Estatales.

ARTÍCULO 23.

Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, pero si no se personaran en el mismo, serán representadas por un Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos, ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS

TÍTULO SEGUNDO

DE LA AVERIGUACION PREVIA

REGLAS COMUNES

ARTÍCULO 103.-*El Ministerio Público y la Policía Ministerial, de acuerdo a las órdenes que reciba de aquel, están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que tengan conocimiento, excepto cuando éstos sólo se persigan a instancia de parte, si tal requisito no se ha satisfecho.*

Si el que inicia una investigación no tiene a su cargo la función de continuarla, dará cuenta inmediata al que corresponda legalmente practicarla.

ARTÍCULO 104.- *Sólo podrán perseguirse a petición de parte ofendida los delitos que así determina el Código Penal o, en su caso, las leyes especiales.*

[…]

En este sentido, el Código Penal no hace el señalamiento que refiere el artículo 104 del Código de Procedimientos Penales para el Estado (artículos 329 al 347) en relación con el delito de homicidio, por lo tanto, es clara la operancia de la oficiosidad en dicho caso y lo injustificado de los

argumentos que presenta la autoridad en su INFORME de fecha 19 de noviembre de 2014:

> *[…] ya que a toda persona que acude la atiendo y se trata de darle solución a sus problemas en la medida de lo posible y de acuerdo a la carga de trabajo que existe en la Agencia del Ministerio Público Investigador a mi cargo y es el caso que el suscrito en mis tareas y diligencias o encargos que se me comisionan, solo es cuando me ausento de lo oficina, fuera de eso, ahí me encuentro despachando como es mi deber**, ahora bien si la ahora quejosa tiene conocimiento del paradero del o los responsables debió haber acudido a poner en conocimiento de esta autoridad, ya que además es una obligación que tiene todo ciudadano de proporcionar todos los datos que tenga en su poder** o tenga conocimiento, a fin de coadyuvar con la función del Ministerio Público y así se pueda castigar al o los responsables y los delitos no queden impunes, por lo que desde este momento se le solicita a la quejosa de referencia proporcione a esta Representación Social toda la información con que cuente o cualquier dato o medio de prueba para la debida integración de la referida averiguación previa penal;[...]*

Bajo esta perspectiva, la Comisión (CODHET) observa que la autoridad pretende trasladar la responsabilidad de investigar al ofendido o víctima, sobretodo, si tomamos en cuenta que a pesar de que la quejosa (madre de la victima de homicidio)no declaró en un primer momento, sus hijos si lo hicieron y refirieron a dos personas (padre e hijo) de nombre ****** alias el ******, así como a su hijo de nombre ******,como responsables del homicidio de ******(hijo de la quejosa). Por lo tanto, el señalamiento del *probable responsable* y los datos de su ubicación se realizaron en su momento aunque la quejosa no rindiera su declaración desde el inicio, lo cual dejó al descubierto la obligación que tenía el Agente del Ministerio Público de investigar.

Por lo tanto, destaca el hecho que en ningún momento la Autoridad Ministerial acordó o giro instrucciones para llamar a comparecer o en su caso detener a las personas señaladas como responsables del hecho delictivo (****** *alias el* ****** *y su hijo* ******). Esto, a pesar que en el Parte Informativo Policial que se le rindió a la autoridad desde el **12 de junio de**

2012, se le informó que dichos sujetos participaron en la riña (detenido ******), además, posteriormente en fecha 13 de ese mismo mes y año, la C. ******(hermana de la victima de homicidio) los señaló como responsables, sin embargo, en el *acuerdo* que siguió a esa diligencia (reconocimiento de entrega de cadáver) en ningún momento se señaló actuación alguna relacionada con lo manifestado por la hermanan de la víctima.

En este punto, cabe señalar que dicho *acuerdo* guarda relación con las anteriores actuaciones que obran en la copia de la averiguación previa (secuencia de la numeración de fojas), sin embargo, este tiene la fecha de **7 de marzo de 2012**, lo cual es manifiestamente un error pues en dicha fecha aún no se iniciaba la averiguación. Lo relevante de esta situación radica en la omisión de la autoridad de solicitar por sus medios legales la presencia o detención de las personas señaladas numerosas veces como responsables, al menos tomando como referencia la fecha en que se reactivó el expediente (**20 de noviembre de 2014),** es decir, del 12 de junio de 2012 al 20 de noviembre del 2014 en la copia de la averiguación previa no obra un acuerdo o instrucción girada por la Autoridad Ministerial para solicitar la detención o comparecencia de las personas señaladas por los familiares como responsables.

Al respecto se enuncian las siguientes disposiciones legales vulneradas:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS

> ***ARTÍCULO 3.-*** *El Ministerio Público, en el ejercicio de su acción persecutora y en la etapa de averiguación previa, deberá:*
>
> *[…]*
>
> *IV.- Ordenar, en los casos a que se refiere el Artículo 107 de este Código, la detención o retención según el caso, y solicitar cuando proceda la orden de aprehensión.*
>
> ***ARTÍCULO 171****.- Para que el Juez pueda librar orden de aprehensión, se requiere:*
>
> *I.- Que el Ministerio Público la haya solicitado; y*
>
> *II.- Que se reúnan los requisitos fijados por el Artículo 16 de la Constitución Federal.*

V. Además, la autoridad debe tener en cuenta que la dilación en la integración de una Averiguación Previa Penal es un obstáculo para que las personas accedan a la justicia, incluso en el Nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado se contempla por el artículo 132, fracción VIII que es un derecho de las victimas u ofendidos consiste en "*Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas."* En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado en su **Recomendación General 16** sobre *el Plazo para resolver una Averiguación Previa*;

> *[…]*
> *En esta medida es necesario reconocer los plazos máximos para la integración de las averiguaciones previas integrados a la legislación adjetiva de estados tales como Chihuahua, Tabasco y Zacatecas, que han incluido que no puede ser mayor a dos meses, en caso de que el delito merezca pena máxima que no exceda de dos años de prisión, o de seis meses, si la pena excediere de ese tiempo.*
>
> *De igual forma los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Tlaxcala y Veracruz han dado pasos firmes en la transformación de sus sistemas jurídicos, incluyendo en ellos criterios que contribuyen a reducir la discrecionalidad en la actuación de los servidores públicos que laboran en las dependencias encargadas de la procuración de justicia de nuestro país, tal es el caso de la necesidad de concluir la averiguación previa lo antes posible, así como la de deslindar la responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron en la averiguación previa y determinar en qué casos se está en presencia de una inactividad; también se alude a que debe existir una revisión periódica de la averiguación previa por parte de funcionarios de alto rango para verificar si se han agotado todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos o bien se encuentra pendiente alguna.*
>
> *Es por ello, que esta Comisión Nacional considera oportuno insistir en la necesidad de establecer límites claros a las facultades del agente del Ministerio Público respecto del trámite que ha de dispensar a la averiguación previa, a partir de criterios que incorporen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual hace referencia a la fijación de un plazo razonable para el cierre de una investigación, que debe tomar en cuenta las siguientes circunstancias: a) la complejidad del asunto; b) la actividad*

procedimental de los interesados; c) la conducta de las autoridades investigadoras, principalmente de la policía judicial, científica, investigadora o ministerial; d) la afectación que genera el procedimiento en la situación jurídica del probable responsable, la víctima o el ofendido.

Es preciso reconocer que en algunos asuntos existe la necesidad de realizar pruebas prolongadas, de costosa, azarosa o tardía recaudación; que en ocasiones se presentan problemas severos en la apreciación jurídica o en la calificación de los hechos o lagunas en la legislación; sin embargo, lo anterior no obsta para justificar el incumplimiento de las formalidades que exige la ley en la investigación de cualquier delito.

La falta de resultados por parte de las instancias encargadas de la procuración de justicia del país no sólo obedece a la carga de trabajo, sino también a la ineficiencia o apatía de los responsables de la investigación, quienes en muchos de los casos se dedican a esperar que las víctimas aporten elementos que ayuden a integrar la averiguación previa, o que los peritos rindan sus dictámenes, sin que exista una verdadera labor de investigación en la que se realicen las diligencias mínimas necesarias.

[…]
Es importante señalar que para esta Comisión Nacional los agentes del Ministerio público, a fin de garantizar una adecuada procuración de justicia, deben cumplir en el desarrollo de su labor con las diligencias mínimas para: a) evitar la dilación en el trámite de la averiguación previa, de tal manera que no existan omisiones en la práctica de diligencia por los periodos prolongados, b) garantizar el desahogo de las diligencias de investigaciones necesarias para acreditar el delito y la probable responsabilidad del sujeto, c) preservar los indicios del delito a fin de asegurar que las líneas de investigación puedan agotarse, d) propiciar el desahogo de los análisis y dictámenes periciales, e) dictar las medidas de auxilio y protección a las víctimas del delito y a los testigos, f) garantizar el acceso a la justicia a las víctimas del delito mediante la eliminación de la práctica de elaborar actas circunstanciadas en lugar de averiguaciones previas, g) evitar enviar al archivo o a la reserva las averiguaciones previas si no se han agotado las líneas de investigación y h) propiciar una mayor elaboración de investigación por parte de los elementos de la policía que tengan a su cargo dicha función.

Los criterios anteriormente aludidos permitirán determinar los casos y circunstancias en las cuales la omisión del Ministerio Público implica que se vulneren los derechos humanos de las personas, en el caso de la víctima, el ofendido o incluso, el probable responsable; así como

determinar el grado de responsabilidad de los sujetos que intervienen durante la etapa de investigación de los delitos, en atención a las acciones u omisiones en las que incurran.

De ahí que sea posible afirmar que la investigación de los delitos y persecución de los probables responsables no puede diferirse en el tiempo de manera ilimitada, debido a que la imposibilidad material para obtener los elementos de prueba para acreditar la probable responsabilidad del sujeto se diluye conforme trascurre el tiempo, y es por ello que el límite de actuación de los servidores públicos se encuentra en la posibilidad real de allegarse nuevos elementos de juicio; de lo contrario, el mantener una investigación abierta después de trascurrido un plazo razonable puede arrojar información poco confiable sobre la eficacia con la que se desempeñan las instancias de procuración de justicia, sobre todo cuando el paso del tiempo es el principal enemigo de las investigaciones. Existe, por lo tanto, la necesidad de tener un control estricto de las actuaciones que realizan los distintos servidores públicos en torno a la averiguación previa, ya que omitir una diligencia o bien practicarla de forma inapropiada puede traer graves consecuencias en el desarrollo del procedimiento.

En consecuencia, para esta Comisión (CODHET) las acciones u omisiones realizadas por la autoridad se traducen en vulneraciones a los derechos humanos de acceso a la justicia, legalidad y seguridad jurídica, así como los relativos a la víctima u ofendido. Además, en dicha Recomendación General No 16, la CNDH recalca la incidencia que tiene una procuración de justicia dilata o retardad en los alcances efectivos de justiciabilidad para las víctimas del delito, la frase "*justicia retardada es justicia denegada"* ha sido un criterio sostenida por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanosa través de diversas sentencias adoptadas por la Corte Interamericana[13], que la propia Comisión Nacional ha adoptado en sus resoluciones.

[13]Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), **Recomendación General No. 16** sobre el Plazo para resolver una Averiguación Previa, México, 2009. […] En este mismo sentido, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al sostener la necesidad de que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia respeten un plazo razonable en la investigación y el formal procesamiento de los probables responsables de un delito, de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual ha sido expuesto en las sentencias de los casos: López

Adicionalmente, podemos mencionar los siguientes criterios de interpretación sostenido por Tribunales Colegiados de Circuito:

Época: Novena Época
Registro: 190495
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XIII, Enero de 2001
Materia(s): Administrativa
Tesis: XIII.2o.8 A
Página: 1748

MINISTERIO PÚBLICO. SU INACTIVIDAD AL NO INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS.

Del análisis integral de los artículos 8o., 16, 17 y 102-A de la Constitución Federal, así como del artículo 65 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, se desprende que la representación social debe proveer en un término de treinta días hábiles a la integración de la averiguación previa; por lo tanto, el órgano persecutor no está facultado para integrar la indagatoria en forma discrecional y cuando lo estime pertinente, pues conforme a dichos numerales la citada autoridad tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para la integración de la averiguación,

---

Álvarez vs. Honduras de fecha 1 de febrero de 2006; García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú de fecha 25 de noviembre de 2005, Tibi vs. Ecuador de fecha 07 de septiembre de 2004, caso Suárez Rosero vs. Ecuador, sentencia de 12 de noviembre de 1997, caso Acosta Calderón vs. Ecuador, sentencia de 24 de junio de 2005, los votos razonados del juez A.A. CançadoTrindade y del juez Sergio García Ramírez, en el caso López Álvarez vs. Honduras, del 1 de febrero de 2006, y el voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramirez en el Caso Tibi vs. Ecuador, del 7 de septiembre de 2004, en donde dicho tribunal determinó que la oportunidad de la tutela, corre el riesgo de ser inútil, ineficaz, ilusoria, si no llega a tiempo, en la inteligencia de que "llegar a tiempo" significa operar con máxima eficacia en la protección y mínima afectación de los derechos del individuo, prontitud que no es atropellamiento, irreflexión, ligereza. Esas estipulaciones acogen la preocupación que preside el aforismo "justicia retardada es justicia denegada". En los casos anteriormente señalados la Corte Interamericana explica la necesidad de que las autoridades actúen con diligencia, con el objeto de tutelar eficazmente los derechos humanos de víctimas, ofendidos y los probables responsables. […]

tan luego como tenga conocimiento de la posible existencia de un delito, así como, de no existir denuncia, dictar la reserva del expediente, o el no ejercicio de la acción, sin que se justifique su inactividad si del inicio de la indagatoria a la fecha de promoción del amparo, ha transcurrido un lapso mayor al señalado en el último ordenamiento legal aludido, lo cual implica violación de garantías.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Amparo en revisión 275/2000. Brígida Ernestina García López. 21 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Gómez Argüello. Secretaria: Ma. de los Ángeles Pombo Rosas.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, julio de 1999, página 884, tesis VIII.1o.32 A, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU INACTIVIDAD AL NO INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN EN BREVE TÉRMINO VIOLA GARANTÍAS.".

Época: Novena Época
Registro: 193732
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo X, Julio de 1999
Materia(s): Administrativa
Tesis: VIII.1o.32 A
Página: 884

MINISTERIO PÚBLICO. SU INACTIVIDAD AL NO INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN EN BREVE TÉRMINO VIOLA GARANTÍAS.

De un análisis integral y coherente de los artículos 8o., 16, 17, 21 y 102-A, de la Constitución, se desprende que la representación social debe proveer ***en breve término*** *a la integración de la averiguación previa. Por lo tanto no es posible sostener que como los artículos 123, 126, 133, 134 y 136 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Durango, no establecen un término específico para integrar la averiguación previa, el órgano persecutor puede integrar la indagatoria en forma discrecional y cuando lo estime pertinente; toda vez que, los mismos numerales contemplan la obligación del Ministerio Público de tomar todas las medidas necesarias para la integración de la averiguación, tan luego como tengan conocimiento de la posible existencia de un delito, así como de darle seguimiento a las denuncias que se presenten y allegarse todos los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos, dictando en uno u otro caso la reserva del expediente, el no ejercicio o la consignación. De lo que se infiere, que los artículos mencionados de la ley secundaria, siguen los lineamientos fijados en los artículos constitucionales en comento, por*

lo que no se justifica la inactividad del Ministerio Público, pues transcurrieron más de siete meses entre la fecha de presentación de la denuncia y la demanda de amparo, sin que existiera avance alguno en la averiguación, lo que como se ha demostrado implica violación de garantías.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Amparo en revisión 305/98. Abdón Gallegos Quiñones. 18 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Luz Patricia Hidalgo Córdova. Secretario: Gilberto Andrés Delgado Pedroza.
Nota: Por ejecutoria de fecha 16 de octubre de 2002, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 24/2002-PS en que participó el presente criterio.

Época: Décima Época
Registro: 2008230
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 14, Enero de 2015, Tomo II
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o. J/16 (10a.)
Página: 1691

SUBGARANTÍAS DE PRONTITUD, EFICACIA Y EXPEDITEZ CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SON PRIVATIVAS DEL ÁMBITO JUDICIAL, SINO QUE SU DIMENSIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA COMPRENDE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NO CONTENCIOSO SEGUIDOS ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO.

El artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En tales condiciones, debe estimarse que la observancia de las subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, no sólo resulta atribuible a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, sino que debe expandirse a todas las manifestaciones del poder público, como son los procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo. Ello es así, pues la eficacia de la autoridad administrativa presupone no sólo una sujeción irrestricta a los procedimientos señalados en la ley y los reglamentos, sino también

que su proceder no puede ser ajeno a la tutela del derecho de acceso a la jurisdicción en las vertientes señaladas, lo que, además, implica en un correcto ejercicio de la función pública, la adopción de medidas, actuaciones y decisiones eficaces, ágiles y respetuosas de los derechos de los administrados, razones por las que las citadas subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez no pueden ser privativas del ámbito judicial, sino que comprenden la producción de los actos administrativos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo en revisión 35/2013. Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 16 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros.
Amparo en revisión 37/2013. Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 7 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: Claudia Luz Hernández Sánchez.
Amparo en revisión 133/2014. Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y otros. 5 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Adam AzcorraPuc.
Amparo en revisión 191/2014. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y otro. 28 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz Torres.
Amparo en revisión 211/2014. Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y otro. 16 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Santiago Ermilo Aguilar Pavón.

En consecuencia, si bien es cierto que en el primer criterio se hace referencia a una legislación local distinta a la nuestra, lo cierto es que desde la interpretación de los artículos 8o., 16, 17 y 102-A constitucionales (Constitución Federal) se sostienen que el tiempo en que se debe integrar una averiguación previa no puede estar sujeta al arbitrio de la autoridad. Por otro lado, en el segundo criterio se establece con mayor claridad la idea o el

sentido que tienen las disposiciones constitucionales que regulan la labor de Ministerio Público (artículos 8o., 16, 17, 21 y 102-A, de la Constitución) en cuanto a la integración de la averiguación previa y el mandato de integrarla en ***breve término***, lo cual implica tener un cuidadoso equilibrio entre las circunstancias de tiempo que puede demandar un hecho delictivo específico para su debida integración y la inactividad de la autoridad ministerial.

Finalmente, la dilación no es únicamente lo que se advierte como irregular en el caso concreto, sino también la omisión de la autoridad investigadora (aquella que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal) para presentar una acusación de manera integral y eficiente de cara al Juez. Al respecto, podemos mencionar que si bien existe un acuerdo de inicio de Averiguación Previa (**de 12 de junio de2012**) que ordena se gire oficio al perito médico legista para que realice la necropsia de ley, lo cierto, es que en la copia certificada del expediente que se le remitió a este Organismo no obra dicho oficio, así como tampoco el dictamen de la necropsia. Bajo esta lógica, si tomamos como referencia sólo la fecha de la actuación que reactivó la Averiguación (**20 de noviembre de2014**), más de dos años después, preocupa a esta Comisión (CODHET) la ejecución de una necropsia exitosa con posterioridad y materialmente efectiva frente a la autoridad jurisdiccional.

En este sentido, la CNDH a través de su Recomendación95/1998 ha señalado:

> *[…]*
>
> *Asimismo, en la necropsia médico-legal se investigan lesiones o alteraciones anatomopaológicas, cuyo descubrimiento o comprobación sirven para ayudar al esclarecimiento de la causa de la muerte.* ***Ésta constituye una de las diligencias de mayor trascendencia dentro de la averiguación previa, en casos de probable homicidio****.*

Al respecto se enuncian las siguientes disposiciones legales vulneradas:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

ARTÍCULO 138.- *Si de las primeras diligencias se desprende que la muerte no se deba a un delito, no se practicará la autopsia y el Ministerio Público entregará el cadáver.*

En todos los demás casos será indispensable este requisito, con las excepciones que este Código señale.

ARTÍCULO 139.-*Cuando se trate de homicidio, además de la descripción que haga el que practique la diligencia, la harán también los peritos encargados de la autopsia del cadáver, expresando con minuciosidad el estado que guarda y las causas que originaron la muerte.*

Por lo tanto, se concluye que al no existir constancia o evidencia en la copia certificada de la Averiguación Previa Penal ****** sobre la realización de la necropsia, dicha autoridad ministerial no la realizó con lo que fue omisa en la correcta integración de dicha investigación.

VI. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Fracción II, 42, 43, 48 y 49 de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este Organismo, así como los numerales 63 fracción V, del Reglamento Interno. Se emite **RECOMENDACIÓN** a la **PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO** como superior jerárquico de la AGENCIA ÚNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS por las actuaciones y/u omisiones en la integración de la Averiguación Previa Penal ****** de fecha 12 de junio de 2012que vulneraron los derechos humanos de la señora ******, consistentes en acceso a la justicia, legalidad y seguridad jurídica, así como los relativos a las víctimas y ofendidos. Además, se invoca los artículos 48 de la Ley de la CODHET, 28,

29 y demás relativos previstos en la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Tamaulipas, en la cual se prevé que toda persona víctima de violaciones de derechos humanos tiene el derecho a una reparación integral, en este sentido, la Comisión (CODHET) determina:

R E C O M E N D A R

Al C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

PRIMERA: Se tenga como víctima de violación de derechos humanos a la señora ****** y sus hijos****** (víctima del delito), ******, ****** y ****** todos de apellido ******para los efectos conducentes.

SEGUNDA: Se gire instrucciones a la Agencia Única del Ministerio Público investigado con residencia en ******, Tamaulipas para que ajusten sus actuaciones a la norma y den celeridad a la integración de la Averiguación Previa Penal ****** de fecha 12 de junio de 2012.

TERCERA: Se gire instrucciones para que se investigue las actuaciones u omisiones que generaron dicha irregularidades en perjuicio de la quejosa.

CUARTA: Se estima necesaria la formulación de lineamientos tendientes a sistematizar la integración de las averiguaciones previas penales con la finalidad de introducir la figura de los *plazos razonables,* que si bien deben tomar en cuenta la complejidad de los casos concretos, también buscan erradicar las malas prácticas como la *inactividad de la investigación durante periodos prolongados.*

QUINTA: Provea lo necesario a fin de que se proporcione atención victimológica tanto a la señora ******, madre de ******como a sus hermanos de nombres******,****** y ****** todos de apellido ******, ya que durante el periodo que va del inicio de la averiguación previa en fecha 12 de junio de 2012 al Acuerdo que reactivo la investigación de fecha 20 de noviembre de 2014, no obra actuación que en su momento se les canalizara a las instituciones correspondientes para tal efecto.

SEXTA: Se adopten los controles pertinentes para supervisar que se cumplan las obligaciones constitucionales y legales durante el inicio, trámite y conclusión de las Averiguaciones Previas, procurando sobre todo evitar la dilación en la integración, así como las omisiones en la práctica de diligencias oportunas y necesarias.

Dése vista a la Dirección General del Instituto de Atención a Víctimas del Delito de la presente resolución, para que de acuerdo a su competencia se proceda conforme a lo establecido en la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con el artículo 49 de la Ley de esta Comisión, es procedente requerir a las autoridades recomendadas para que, dentro de un plazo de diez días hábiles, informen sobre la aceptación de esta recomendación y, en su caso, remitan dentro de los quince días siguientes las pruebas relativas a su cumplimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma establecida.

Así lo formuló y emite el C. Doctor José Martín García Martínez, Presidente de esta Comisión, en términos del artículo 22, fracción VII de la Ley que regula el funcionamiento de este Organismo, así como el 23, fracción VII y 69, fracción V de su Reglamento.

_____
Dr. José Martín García Martínez
Presidente

Proyectó

_____
Mtro. Orlando Javier Rosado Barrera
Visitador Adjunto

L´OJRB/l´yicm

Expediente Núm.: 069/2014-L.

Quejoso: ******

Resolución: Recomendación N°. 015/2015

En ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, al primer día del mes de junio del año dos mil quince.

V I S T O para resolver en definitiva el expediente número 069/2014-L, iniciado con motivo de la queja presentada por el C. ********,** ante la Delegación Regional de este Organismo, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, mediante la cual denunciara IRREGULAR INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA E INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, por parte del Delegado Regional de Justicia del Primer Distrito Ministerial del Estado, Agente y Oficial Ministerial de la Agencia ****** del Ministerio Público Investigador, autoridades con residencia en esa ciudad fronteriza; este Organismo procede a emitir resolución de conformidad con los siguientes:

A N T E C E D E N T E S:

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, por conducto de su Delegación Regional ubicada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, recepcionó escrito de queja presentado por el C.******, en el que manifestara lo que a continuación se transcribe:

> "…que en fecha veintitrés de agosto del año dos mil trece presenté formal denuncia en contra de******, por el delito de LESIONES ante la Agencia ******del Ministerio Público Investigador en esta ciudad, radicándose la averiguación previa penal número ******/2013.- b) En el mes de Abril del año 2013 me presenté en el hospital general, ya que el seguro popular está dando ayuda para la operación de cataratas, y en el Hospital General me mandaron con la doctora******, a su consultorio y posteriormente me presenté en el consultorio ubicado en la Calle Álvaro Obregón No. ******, colonia Jardín, misma que me hizo una valoración, manifestándome que si tenía $3,000.00 (tres mil pesos), ella me operaría, así mismo el día 20 de mayo del año 2013, la Doctora me citó en el domicilio ubicado en la calle Ocampo ****** de la Colonia Madero donde se encuentra el

consultorio del Doctor******, a las dieciséis cuarenta horas aproximadamente me pasaron y la doctora me empezó a operar en el lapso de treinta minutos me empezó a doler los ojos y la Doctora me manifestó que la maquina con la que me estaba operando no la conocía, y que le iban a hablar al dueño de la maquina, retirándose del lugar donde nos encontrábamos y los diez minutos llegó un señor que se presentó como el Doctor******, mismo que continuó con la operación, tardándose como unos treinta minutos en la operación, regresando al tercer día y volvió a meterme al cubículo mismo que volvió a ponerme el láser, para posteriormente que terminó la operación me mandó con la doctora******, recetándome unas gotas y que con eso tenía y hasta el primero de julio del año 2013, me presenté con el Doctor******, ya que no miraba nada, manifestándome que tenía cataratas y que me tenía que operar, por lo cual pague la consulta, retirándome del lugar, posteriormente en fecha diecisiete de julio del año 2013 me hablaron por teléfono del consultorio del Doctor ******manifestándome que tenía cita a las doce del día y al llegar al consultorio habría tres patrullas de Estatales, lo cual se me hizo raro retirándome del lugar, por lo cual ya no regresé a dicho lugar.- c) en fecha dos de octubre del año 2013, se citó al C.******, para el desahogo de una diligencia de carácter ministerial, misma que se presentó a dicha diligencia, estando presentes un abogado de nombre Oscar Sepúlveda que acompañaba al Doctor******, levantándome una declaración informativa y en ningún momento estuvo el Fiscal ya que quien llevó a cabo la diligencia fue el Oficial Ministerial, así mismo como en todo momento hubo varias discusiones en el desahogo de dicha diligencia toda ve que el abogado Sepúlveda, intervenía mucho diciéndole al Doctor que declarara, ya que todo lo traía apuntado por el doctor para que no se olvidara, antes de que se cerrar la diligencia llegó el Fiscal Investigador ******, se acercó al escribiente y miró lo que había en la pantalla manifestándole que estaba mal la declaración ya que no podía ser declaración informativa que tenía que ser como Probable Responsable, y que no podía ser, manifestando que tenía que borrar todo y empezó a decirle al Doctor que si quería declarar o no, leyéndole sus derechos y posteriormente me preguntó que si podía cambiar la declaración por lo que le manifesté que hiciera lo que el quisiera ya que yo tenía grabad en audio toda la audiencia, diciéndome que el tenía la facultad de declararlo como informativa, así misio quiero agregar que en relación al Abogado ******ha estado interviniendo en varias diligencia sin estar nombrado dentro de la averiguación previa.- d) En fecha trece de febrero del presente año, se llevó a cabo una diligencia ante la Agencia del ministerio Público, de ampliación de declaración del probable responsable ******, donde hasta ese momento se nombró como abogado

defensor el Abogado ******Contreras, mismo que años anteriores perteneció a la Procuraduría General de Justicia, al final de la declaración se me dio el uso de la palabra donde solicité SE LE DIERA VISTA AL COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO. Posteriormente en varias ocasiones me presenté en compañía de mi esposa ******, a las oficinas de esa Fiscalía para informarme si ya se había remitido el oficio de lo que había solicitado manifestándome el Oficial Ministerial de nombre ******, que ya lo había enviado y que nada más estaban esperando la contestación, y que fue hasta el día de hoy tres de julio del actual que el oficio lo habían enviado el 22 de mayo y fue recibido el 23 de mayo del presente año, por lo cual fui engañado por el Oficial Ministerial durante tres meses.- e) Posteriormente en fecha cuatro de junio del presente año, se solicitó a la Ciudad de Monterrey Nuevo León, una colaboración a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, se gire correspondiente al director del hospital “La Carlota” área de la visión de la ciudad de Montemorelos, con la finalidad de que el mismo remita copia certificada del expediente clínico número 23789 del paciente ****** y una vez realizado lo anterior remita a la Fiscal dicha copia certificada, y hasta el día primero de julio del actual me percaté que se había remitido dicha colaboración, por lo cual a simple vista se nota la dilatación de dicha Averiguación Previa.- f) Así mismo, acudí con el Delegado Lic. ******, el día 23 de junio del año en curso, al expresarle mi inconformidad sobre el inciso c y todo lo demás que se integra en el expediente y por más que le explique los puntos de los que yo me quejo me dijo que él no veía ninguna irregularidad que hubieran cometido el LIC. ****** y el Lic. ******, tratando siempre de convencerme el C. Lic. ****** y el C. ******, de que no había ninguna irregularidad que pudiera afectarme, siendo que yo les explique que si las había y que tengo el temor que sean estrategias sucias del abogado defensor C. ******, el fiscal C. ****** y del C. Lic. ******, quien es Secretario Oficial de la Agencia ******de que estén coluidos para afectar mi averiguación así como el C. ****** que trato de convencerme que no era así, al hablar con el delgado Lic. ****** le expresé por segunda ocasión mi inconformidad con respeto a como se ha estado llevando a cabo la integración de la averiguación de la cual soy ofendido, expresándole en primer lugar por la audiencia que se llevó a cabo el 2 de octubre del 2013, en donde uno de los indiciados que lo es el Doc. ******, en donde se presenta con el abogado el C. ****** a dicha audiencia, al tomarle su declaración lo hacen como informativa siendo que desde la denuncia inicial él es uno de los indiciados, es el caso que el día ya antes mencionado al entrar a dicha audiencia en la cual solo estuvieron presentes el escribiente de nombre ******, el Lic. ****** que es el oficial ministerial, el Doc. *****, uno de los

indiciados, el Lic. ****** que es el abogado que acompañaba al Doc. ****** mismo que en todo momento estuvo interviniendo y diciéndole al doctor que era lo que tenía que declarar, mi esposa ****** y el de la voz, porque el C. Lic. ****** no llegó hasta minutos después y fue entonces que dijo que esa declaración estaba mal, puesto que el declarante era indiciado y que la declaración que le estaban tomando era informativa empezó a decir que borraría todo y empezaría de nuevo la declaración pero ahora como indiciado a lo que yo dije que hiciera lo que él quisiera que yo ya tenía grabado en audio todo la diligencia fue así que decidió dejarla como ya estaba, le expresé todo lo antes mencionado al Lic. ****** diciéndome que el no veía ninguna irregularidad ante este hecho y tratando de convencerme que el Lic. ****** no estaba mal, contestándole que como era posible que no viera que estaba mal siendo que llegado el momento en que esa averiguación se consignara y al llegar al juzgado el mismo juez podía decir que le habían violado los derechos humanos al doctor por la forma en que le tomaron su declaración y decir que lo engañaron porque no tenía abogado, siendo que el doctor en todo momento estuvo acompañado del abogado ****** mismo que en ningún momento se nombró aun cuando ha estado presente e interviniendo en las diligencias sin que el lic. ****** le llamara la atención así como el Lic. ****** oficial ministerial ya que esté es el que ha desarrollado la mayoría de las diligencias según sus propias palabras por órdenes del Lic. ******, siendo hasta el 13 de febrero del año en curso que el abogado ****** se nombra como abogado defensor del Doctor ****** y que todo lo antes mencionado podía afectarme en la averiguación, así como también hice de su conocimiento otras irregularidades que hay dentro de la averiguación como lo es el de la testigo ****** quien no esta conduciendo con la verdad y de lo cual le manifesté en una audiencia al Lic. ****** que diera vista a la oficialía de partes para que se le abriera una averiguación por el delito de falsedad en declaración y aún cuando el Lic. ****** tiene dos declaraciones de dicha persona donde se ve todas y cada una de las contradicciones así como dos declaraciones de dos testigos más que le prueban al Lic. ****** que efectivamente está persona está incurriendo en un delito al no declarar con la verdad, él simplemente dice que no hay pruebas de que así lo demuestren, lo antes expuesto lo tengo en grabación de audio.- Así mismo deseo manifestar que en dicha averiguación previa penal, desde que inició la misma no se ha llevado sigilo en la misma ya que en todo momento lo que he solicitado, siempre se retrasa dichas peticiones y no llegan, toda vez que no le dan el seguimiento al mismo.- Por lo anteriormente expuesto solicito muy atentamente lo siguiente: PRIMERO.- Se me tenga por presentada la QUEJA en contra de los CC. ******, Lic. ****** y ******, el primero

Delegado Regional, el segundo se desempeña como Agente ******del Ministerio Público Investigador y tercero como Oficial Ministerial en esta ciudad…"

2. Una vez analizado el contenido de la queja, se calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, y se procedió a su radicación con el número 069/2014-L, y se acordó solicitar a las autoridades señaladas como responsables un informe justificado, relacionado con los hechos denunciados, así como la exhibición de la documentación que se hubiera integrado sobre el caso.

3. Mediante oficio número AMPA/III/JL-6291/2014, de fecha 24 de julio del 2014, el C. LIC. ******, Delegado Regional del Primer Distrito Ministerial del Estado con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, rindió el informe solicitado en los términos siguientes:

"…en relación al apartado identificado como inciso A) de la queja que se acompaña al oficio referido me permito informarle que son ciertos los hechos que se detallan.- En relación al Inciso B), es menester aclarar que los hechos que se relatan vienen contenidos en la indagatoria ******/2013 iniciada por el delito de LESIONES en contra de los CC. ****** y *******, cometido en agravio del C. ******, y actualmente se encuentra en trámite ante el Agente ******del Ministerio Público Investigador.- Respecto al inciso C), a esta autoridad no le constan los hechos referidos, en virtud de tratarse de actuación de carácter ministerial, en el cual tuvieron injerencia únicamente las partes sujetas al acto litigioso que se ventila en dicha Agencia Investigadora, sin embargo en mi carácter de Superior Jerárquico, considere procedente solicitar al precitado Agente Investigador, Tarjeta Informativa respecto a las actuaciones ministeriales que han acontecido dentro de la indagatoria ******/2013, a efecto de verificar la preexistencia de dicha diligencia, en la cual efectivamente fue llevada a cabo por el Fiscal Investigador bajo los términos legales correspondientes; por lo cual en este acto me permito anexar al presente ocurso la Tarjeta Informativa solicitada.- En relación al inciso E) me permito informar que son ciertos los hechos que se relatan, sin embargo es menester aclarar que por lo que respecta al suscrito, en mi calidad de Delegado Regional, se tiene por recepcionado la colaboración de la cual se hace alusión en el inciso referido, por lo cual dicha colaboración fue remitida a la brevedad posible por mi conducto y dirigida al C. Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, colaboración que fue recepcionada por

dicha autoridad en fecha 05 de julio del presente año. Al respecto me permito anexar copia certificada de dicha colaboración a efecto de que se sirva verificar su contenido y los acuses correspondientes.- En relación al inciso F), es menester aclara que efectivamente el suscrito en diversas ocasiones ha tenido a bien atender personalmente al ofendido el C. ******, sin embargo atendiendo a la naturaleza de lo expuesto en el presente inciso se tiene la presunción por parte del quejoso de irregularidades en el procedimiento, máxime que ante dicha presunción, esta autoridad vigilara el cumplimiento de las actuaciones en mi carácter de superior jerárquico, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.- Por lo anteriormente expuesto solicito muy atentamente lo siguiente: PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma el presente informe.- **SEGUNDO.-** Tenerme por presentados los anexos que se acompañan a la presente y que consisten en: Tarjeta Informativa de las diligencias ministeriales que se han realizado en la indagatoria ******/2013, copia debidamente certificada de la colaboración ******/2014 y que sirvieron de base para la debida contestación al presente informe…"

4. Así mismo mediante oficio sin número, de fecha 18 de julio del 2014, el C. LIC. ******, Agente ******o del Ministerio Público Investigador con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, rindió el informe solicitado en los términos siguientes:

"…que no son ciertos los actos reclamados por el quejoso ******, ya que cuanto al inciso A) de su escrito de queja, refirió que efectivamente en fecha 23 de agosto del año 2013 esta representación social a mi cargo recibió el escrito de formal denuncia y/o querella presentada por el ahora quejoso en contra de los CC. ****** y ******, como probables responsables de la comisión del delito de LESIONES, por lo que se procedió al inicio la respectiva indagatoria previa penal, correspondiéndole el número ******/2013, así mismo por en cuanto hace al inciso b) de su escrito de cuenta refiero que efectivamente los hechos que se describen son los mismos que narra en su escrito de querella, así como en cuanto al inciso c) de su infundado escrito de queja manifiesto que como se aprecia en el expediente en comento, obra la diligencia de declaración informativa del C. DR. *****, de fecha 02 de octubre del año 2013, misma la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Coordinación Regional de Servicios Periciales en esta ciudad, mismas que se encuentran en la planta

baja del Edificio de Seguridad Pública de esta localidad, ello en virtud de que el ahora quejoso y ofendido es una persona discapacitada que se traslada en silla de ruedas, por lo que se le dificulta el ser subido por escaleras de este edificio, estando presente el prenombrado medico, quien se hacía acompañar del LIC. *****, a lo que el DR. ****** solicitó se le permitiera estar presente, por lo que al tratarse de una audiencia pública, se le permitió el acceso a la misma, en la inteligencia de que no podría realizar intervención alguna por carácter de la propia diligencia, así mismo en la diligencia en comento se encontraba presente el C. ******, así como su esposa la C. *******, misma diligencia al final de la cual obran las firmas del suscrito y del Fiscal Investigador, quienes fuimos presentes durante el desahogo de la diligencia, siendo que durante el desarrollo de esta el suscrito tenía que subir a las instalaciones de la Fiscalía a mi cargo para atender las diligencias programadas que se estaban llevando a cabo, y a atender a las personas que fueran llegando, para llo cual comisioné al LIC.******, para que prosiguiera con la declaración que se estaba llevando en la planta baja, misma a la cual de nuevo me apersoné para prestarle la debida atención que merecía, por en cuanto a lo que se hace mención en el inciso d) del escrito que nos ocupa refiero que efectivamente en fecha 13 de febrero del año en curso se llevo a cabo la diligencia de declaración de ampliación de probable responsable del C. ******, donde en uso de la voz del C. ******, solicito se le diera vista a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado, misma petición la cual fue debidamente acordada en tiempo y forma, pero debido a que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico requiere copia certificada de todas y cada una de las actuaciones que la integran, y aún y cuando dicho expediente consta de numerosas fojas, dichas fotocopias fueron sacadas a la brevedad posible para su envió, para que fuera esa comisión quien emitiera su opinión profesional respecto al caso en comento, más en ningún momento los ofendidos fueron engañados por el que suscribe o por el personal de esta H. Representación Social, ya que en las diversas ocasiones que la C. ******, y el C. ****** acuden a este representación social se les permite imponerse de los autos de la indagatoria en comento, en atención a la incapacidad física del ahora ofendido, aún y cuando estos últimamente se encuentran autorizados para oír y recibir notificaciones y cualquier duda o pregunta que tengan al respecto se les aclara para su conocimiento, por en cuanto a los narrado en el inciso e) de su justificado escrito de queja manifiesto que lo cierto es que dicha petición fue solicitada por el probable responsable el DR. ******, misma que fue acordada en tiempo y forma, siendo remitida primeramente de acuerdo a los convenios de colaboración al C. Delegado Regional del primer Distrito Ministerial del Estado, Lic.

******, para que por su conducto haga la solicitud al C. Procurador General de Justicia de nuestra Entidad Federativa, y este a su vez a su homologo del Estado de Nuevo León, requiriendo copia certificada del expediente clínico del hoy ofendido, por lo que no existe dilación alguna en la integración de la indagatoria y por en cuanto a lo que refiere en su inciso f) del escrito en cita refiero que lo único cierto es que efectivamente el suscrito fui llamado a la presencia del C. Delegado Regional del Primer Distrito Ministerial del Estado en esta ciudad, donde también se encontraba presente el ahora quejoso, quien expresó su inconformidad por las supuestas anomalías o irregularidades de las que se queja, a lo que presencia de este se le hizo saber que la integración de la averiguación previa en todo momento ha sido apegada a estricto derecho, ya que desde el inicio de la indagatoria hasta la última diligencia practicada hasta este momento ha sido llevadas a cabo con la honestidad, honradez y profesionalismo, que caracteriza a la institución y estrictamente apegadas a derecho, como en todas y cada una de las indagatorias que se ventilan en esta fiscalía investigadora a mi cargo, por lo que en ese orden de ideas es mi deseo manifestar que en ningún momento se han violentado los derechos humanos del ahora quejoso, así como tampoco se le han conculcado sus garantías individuales, ya que en la integración de la averiguación previa materia de la presente siempre ha sido apegada a estricto derecho, y todas y cada una de las peticiones hechas por las partes se han acordado en tiempo y forma como lo m arcan los ordenamientos que nos rigen, y lejos de encontrarnos en alguna irregularidad o dilación en la integración del expediente en cuestión, en cada una de las ocasiones que el quejoso envía a un familiar a solicitar se le atienda al C. ****** en la planta baja del Edificio de Seguridad Pública para preguntar por el curso legal del expediente en el que es ofendido, tanto el que suscribe el presente como el Oficial Ministerial le atendemos, dándole prioridad a las diligencias que se estén desarrollado y que habían sido previamente programadas, para no violentar garantías individuales que quienes intervienen en las mismas, incluso en las ocasiones que ha sido necesario se le ha atendido al quejoso en su vehículo, debido a que como ya se mencionó es una persona invalida que se encuentra en silla de ruedas, por lo que aún y cuando el que suscribe y el oficial Ministerial tenemos obligaciones que atender en las instalaciones de la Representación Social a mi cargo tenemos la atención de acudir al lugar hasta donde se encuentra el quejoso para escuchar sus dudas e incertidumbres y darle una aclaración y explicación de las mismas, por lo que ignoro el motivo por el cual tiene equivocas intuiciones que la indagatoria de la que es parte se esté llevando a cabo de forma irregular, y en cuanto al último

párrafo de su escrito de cuenta, las peticiones a las que alude como ya se mencionó siempre han sido acordadas en tiempo y forma por esta autoridad, por lo que no existe retraso alguno en la integración del expediente en cita, mismo dentro del cual en el momento procesal oportuno se emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda, por lo que me permito agregar copia certificada de todas y cada uno de los autos que componen la presente indagatoria previa penal para su mayor ilustración y surtan los efectos legales a que haya lugar…"

6. De igual manera, a través del oficio sin número, de fecha 18 de julio del 2014, el C. LIC. ******, Oficial Ministerial de la Agencia ******del Ministerio Público Investigador con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, rindió el informe solicitado en los términos siguientes:

"…que no son ciertos los actos reclamados por el quejoso ******, ya que cuanto al inciso a) de su escrito de queja, refiero que efectivamente en fecha 23 de agosto del año 2013 esta representación social recibió el escrito de formal denuncia y/o querella presentada por el ahora quejoso en contra de los CC. ****** y ******, como probables responsables de la comisión del delito de LESIONES, por lo que se procedió al inicio la respectiva indagatoria previa penal, correspondiéndole el número ******/2013, así mismo por en cuanto hace al inciso b) de su escrito de cuenta refiero que soy ajeno a los mismos pero los mismos son hechos narrados en su escrito de querella, así como en cuanto al inciso c) de su infundado escrito de queja manifiesto que como se aprecia en el expediente en comento, obra la diligencia de declaración informativa del C. DR. ******, misma la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Coordinación Regional de Servicios Periciales situada en la planta baja del Edificio de Seguridad Pública, estando presente el prenombrado médico, quien se hacía acompañar de su abogado, el LIC. ******, a lo que el DR. ****** solicitó se le permitiera estar presente, por lo que al tratarse de una audiencia pública, se le permitió el acceso a la misma, en la inteligencia de que no podría realizar intervención alguna por carácter de la propia diligencia, así mismo en la diligencia en comento se encontraba presente el propio ******, así como su esposa la C. ******, misma al final de la cual obran las firmas del suscrito y del Fiscal Investigador, quienes fuimos presentes durante el desahogo de la diligencia en comento, misma a la cual en distintas ocasiones fui comisionado por el LIC. ******, para que este atendiera las diligencias que habían sido previamente programadas, y que se estaban

llevando a cabo en las instalaciones de la Fiscalía ******Investigadora, situadas en la planta alta del Edificio de Seguridad Pública, por en cuanto a lo que se hace mención en el inciso d) del escrito que nos ocupa refiero que efectivamente en fecha 13 de febrero del año en curso se llevó a cabo la diligencia de declaración de ampliación de probable responsable del C. ******, donde en uso de la voz del C. ******, solicito se le diera vista a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado, misma petición la cual fue acordada en tiempo y forma, pero debido a que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico requiere copia certificada de todas y cada una de las actuaciones que la integran, y aún y cuando dicho expediente consta de numerosas fojas, dichas fotocopias fueron sacadas a la brevedad posible para su envió a dicha comisión, para que fuera esa comisión quien emitiera su opinión profesional respecto al caso en comento, más en ningún momento los ofendidos fueron engañados por el que suscribe, ya que en las distintas ocasiones que la C. ******, y el C. ****** acuden a este representación social se les permite imponerse de los autos de la indagatoria en comento, en razón de la incapacidad física del quejoso, aún y cuando estos últimamente se encuentran autorizados para oír y recibir notificaciones y cualquier duda o pregunta que tengan al respecto se les aclara para su conocimiento, por en cuanto a los narrado en el inciso e) de su justificado escrito de queja manifiesto que lo cierto es que dicha petición fue solicitada por el probable responsable el DR. ******, misma que fue acordada en tiempo y forma, remitiéndose primeramente de acuerdo a los convenios de colaboración al C. Delegado Regional del primer Distrito Ministerial del Estado, Lic. ******, para que por su conducto haga la solicitud al C. Procurador General de Justicia de nuestra Entidad Federativa, y este a su vez a su homologo del Estado de Nuevo León, requiriendo copia certificada del expediente clínico del hoy ofendido, por lo que no existe dilación alguna en la integración de la indagatoria y por en cuanto a lo que refiere en su inciso f) del escrito en cita refiero que lo único cierto es que efectivamente el ahora quejoso piensa y ha expresado su inconformidad por supuestas anomalías o irregularidades que a su criterio existen en la averiguación previa que nos ocupa, lo cual es totalmente falso, ya que desde el inicio de la indagatoria hasta la última diligencia hasta esta fecha practicada, las mismas han sido llevadas a cabo con la honestidad, honradez y profesionalismo, que caracteriza a la institución, y estrictamente apegadas a derecho, como en todas y cada una de las indagatorias que se ventilan en esta fiscalía Quinta Investigadora, por lo que en ese orden de ideas es mi deseo manifestar que en ningún momento se han violentado los derechos humanos del ahora quejoso, así como tampoco se le

han conculcado sus garantías individuales, ya que en la integración de la averiguación previa materia de la presente siempre ha sido apegada a estricto derecho, y todas y cada una de las peticiones hechas por las partes se han acordado en tiempo y forma como lo marcan los lineamientos que nos rigen, y lejos de encontrarnos en alguna irregularidad o dilación en la integración del expediente en cuestión, en cada una de las ocasiones que el quejoso envía a un familiar a solicitar se le atienda al C. ****** en la planta baja del Edificio de Seguridad Pública para preguntar por el curso legal del expediente en el que es ofendido, tanto el que suscribe el presente como el C. Representante Social le atendemos, dándole prioridad a las diligencias que se estén desarrollado y que habían sido previamente programadas, para no violentar garantías individuales de quienes intervienen en las mismas, incluso en las ocasiones que ha sido necesario se le ha atendido al quejoso en su vehículo, debido a que como ya se mencionó es una persona invalida que se encuentra en silla de ruedas, por lo que aún y cuando el que suscribe y el Fiscal Investigador tenemos obligaciones que atender en las instalaciones de la Representación Social tenemos la atención de acudir al lugar hasta donde se encuentra el quejoso para escuchar sus dudas e incertidumbres y darle una aclaración y explicación de las mismas, por lo que ignoro el motivo por el cual tiene equivocas intuiciones que la indagatoria de la que es parte se esté llevando a cabo de forma irregular, y en cuanto al último párrafo de su escrito de cuenta, las peticiones a las que alude como ya se mencionó siempre han sido acordadas en tiempo y forma por esta autoridad, por lo que no existe retraso alguno en la integración del expediente en cita, mismo dentro del cual en el momento procesal oportuno y de acuerdo a las facultades tanto del Agente del Ministerio Público y del suscrito se resolverá conforme a derecho corresponda, así mismo no omito manifestar que el Titular de dicha dependencia el C. LIC. ******, remitirá copia certificada de todas y cada una de las diligencias que componen la presente indagatoria…”

7. Una vez recibidos los anteriores informes con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a esta Institución, se notificó al quejoso, y por considerarse procedente se declaró la apertura de un periodo probatorio por el plazo de diez días hábiles común a las partes.

8. Por otra parte, obra en autos copia certificada de la averiguación previa penal número ******/2013, integrada en la Agencia ******del Ministerio Público Investigador de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con motivo de los hechos

denunciados por el C. ******, por el delito de LESIONES en contra de los CC. ****** y ******.

9. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron las siguientes probanzas:

9.1. PRUEBAS APORTADAS POR EL QUEJOSO:

9.1.1. Escrito sin fecha presentado por el C. ******, en el que desahoga la vista de informe que rindieran las autoridades señaladas como responsables, en el que expuso lo siguiente:

> "…que en relación al informe de autoridad del cual me notificó quiero manifestar que todos los incisos anteriores lo que expresa el C. ****** es verdad en cuanto hace al inciso f) omito manifestar que trato de convencerme de que el Agente del Ministerio Público Investigador ****** y LIC. ******, Oficial Secretario están llevando el proceso debidamente siendo que como se aprecia en el expediente están todas y cada una de las irregularidades de las cuales me quejo como lo son.- 1. Que el C. ****** estuvo interviniendo desde la primera diligencia de fecha 2 de octubre del 2013 sin haberse nombrado hasta fecha 13 de febrero de 2014, cuando se nombro.- 2. La supuesta equivocación al momento de tomarle la declaración al C. ****** de fecha 2 de octubre del 2013 como informativa ya que el antes mencionado desde el inicio de dicha averiguación es indicado y aún estando presente LIC. ******.- 3. Así como lo es las irregularidades que están llevando con la testigo ****** quien en todo momento ha estado falseando, enredando y entorpeciendo la averiguación como se puede constatar en sus declaraciones mismas que se encuentran dentro de la averiguación previa penal ******/2013.- 4. Así mismo demuestro lo anteriormente expresado con un CD de audio que contiene la grabación de la conversación que sostuve con el C. ****** la cual prueba de mi dicho.- Quiero mencionar que en cuanto hace al C. ******, Agente del Ministerio

Público lo que manifiesta el inciso C) está mintiendo y lo compruebo con un CD de audio que no estuvo ni en el inicio ni en el transcurso de dicha diligencia sino hasta antes de que se cerrara la misma y percatándose del error del secretario y en cuanto hace el inciso D) refiero que efectivamente le acordó en tiempo y forma de dicha petición pero fue hasta 3 meses después que fue enviada dicha petición en cuanto al inciso E) el C. ****** se tardó un mes en solicitar dicha colaboración, quiero manifestar que efectivamente me han atendido en la planta baja del edificio y en el vehículo pero no en cuanto a las irregularidades, anomalías, retrasos y entrampamiento etc. Que he expresado.- En cuanto al Oficial Secretario ******, en el inciso C) donde refiere que tanto él como el fiscal el C. ****** estuvieron presentes en dicha diligencia es totalmente falso ya que el C. ****** no estuvo presente ni el inicio ni el transcurso de dicha diligencia llegando antes de que la misma se cerrara y percatándose del error del Oficial Secretario ******, quiero hacerla de nuevo para lo cual le señalé que dicha audiencia la tenía mi esposa grabada, diciéndome el fiscal que él tenía la facultad para dejarlas así cerrando la audiencia, mismo que compruebo con un CD de audio de dicha diligencia, quiero manifestar que el C. ****** Y ******, como buenos compañeros se cubren uno al otro como se puede apreciar en sus declaraciones y están mintiendo.- Para aclarar los hechos de los cuales narro y para su mejor apreciación en este acto aporto un disco magnético o CD el cual contiene las conversaciones que se llevó a cabo a la hora de desarrollarse la primer diligencia ante la Agencia del Ministerio Público Investigador con el DR. ****** y en el cual en dicha conversación interviene un abogado que traía el DR. ****** el cual se que dicho abogado se apellida ****** el cual no se encontraba debidamente nombrado y el cual intervenía diciéndole al DR. ****** como se tenía que declarar, así mismo se aprecia mi intervención reclamándole al Secretario que no tenía que intervenir el abogado el declarante argumentando el abogado ****** que nada mas le estaba diciendo al Doctor lo que tenía que declarar ya que lo traía apuntado para que al Doctor no se le olvidara, así mismo en esta diligencia que se encuentra grabada interviene el Secretario ****** y también interviene al final de la diligencia el LIC. ******, el cual se percató que estaban equivocados el Secretario ****** y quiso quitar lo que ya se había avanzado de la audiencia para empezar de nueva cuenta, con la declaración del Doctor pero ahora como indiciado y no como informativa como lo venían informando el Secretario, por lo que considero que esta grabación y lo que se desprende de esta el ministerio público está abusando de su autoridad al querer favorecer en este caso al Doctor ****** y a la Doctora, los cuales estoy denunciando, por lo que presento este disco como prueba

de lo que estoy diciendo.- Así mismo quiero manifestar que en fecha 23 de junio del 2014, después de que pasó la audiencia solicité hablar con el Delegado ****** por todas las anomalías e irregularidades que se estaban ventilando en las audiencias del expediente, sigo manifestando en cuanto a esta conversación que tuve con el Delegado también cuento con un disco magnético o CD se encuentra grabada la conversación que mantuve con el mismo Delegado ****** y con el Lic. ****** y mi esposa de nombre ******, quien también interviene en la discusión y el suscrito por lo que en este acto aporto prueba como de mi intención dicho disco magnético o CD para acreditar que estoy diciendo la verdad respecto a la queja que presenté ante esa Comisión en contra de los funcionarios ya señalados. Haciendo el comentario que en dicha discusión el Delegado me trató de convencer de que la función del LIC. ******, Titular de la Agencia Quinta estaba bien y era la correcta pero yo le señalaba que estaba mal la función del funcionario ****** y que no era la correcta que estaba mal todo lo que estaba haciendo dentro del expediente de denuncia.- Así mismo y este acto pido se mande solicitar copias certificadas del expediente ******/2013, al agente quinto del ministerio público para que obre en la presente queja como prueba de mi intención de todas las anormalidades que están haciendo los servidores públicos denunciados…"

9.2. PRUEBAS OBTENIDAS POR ESTE ORGANISMO:

9.2.1. Declaración informativa elaborada por personal de este Organismo a la C. ******, quien expuso lo siguiente:

"…que efectivamente el LIC. ****** ha intervenido en las diligencias que se han llevado a cabo antes de nombrarse como abogado el DR. ******, en la declaración que se le tomó al DR. ****** como informativa, siendo que el DR. ****** era indiciado, así mismo mi pareja ****** se ha quejado de todas las irregularidades que menciona en su escrito de queja ante el LIC. ******, así mismo solicitamos una audiencia con el LIC. ****** el día 23 de junio del año en curso, para expresarle una vez más todos los puntos que menciona mi esposo en su queja, estando presente el LIC. ******, yo le expliqué al Delegado las irregularidades que hay en el expediente con respecto a la declaración de la testigo ****** le mostré las declaraciones e interrogatorios que se le han hecho expresando el porqué se había pedido que se le diera vista a la Oficialía de partes para que abriera una averiguación en contra de ****** y que el LIC. ****** a pesar de tener todo el expediente

(declaraciones de la antes mencionada) para el no había nada que le indicara que la señora estaba mintiendo, en dicha audiencia le mencionó mi esposo lo que había sucedido con el DR. ****** en fecha 02 de octubre del 2013, en relación con la declaración informativa que le habían tomado, diciéndole mi esposo que tenía el temor de que en dicho momento que la averiguación fuera turnada ante un Juez el mismo la desechara argumentando que se le violaron sus derechos al DR. ****** por la forma que le fue tomada su declaración, el Delegado LIC. ****** trató de convencernos de que no había ninguna irregularidad en la forma que se había tomado la declaración del DR. ******, quiero mencionar que todo lo antes manifestado fue grabado en un CD de audio, así como también la diligencia del 02 de octubre del 2013, donde le toman la declaración informativa al DR. ******. Por último quiero manifestar que de todo lo antes mencionado me consta ya que he estado presente desde que se inicio la averiguación, ya que yo soy la que lo acompaño en todo momento…"

10. Una vez agotada la etapa probatoria, el expediente quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis se desprenden las siguientes:

C O N C L U S I O N E S:

VII. Este Organismo es competente para conocer la queja planteada por el C. **********, por tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a una autoridad estatal, al tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

VIII. De la queja interpuesta se desprenden señalamientos como la **irregular integración de averiguación previa e incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia**, por parte del Delegado Regional de Justicia del Primer Distrito Ministerial del Estado, Agente y Oficial Ministerial

de la Agencia ******del Ministerio Público Investigador con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

IX. Ahora bien, del análisis de las constancias que conforman el expediente de queja esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas en adelante referida solo como la *Comisión (CODHET)* emite **RECOMENDACIÓN** al titular de la **PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO** derivado de las actuaciones y/u omisiones realizadas por el **Delegado Regional de Justicia del Primer Distrito Ministerial** del Estado, el Agente y el Oficial Ministerial de la **Agencia ******del Ministerio Público Investigador** con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas en su carácter de superior jerárquico, lo anterior con fundamento en los artículos 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Fracción II, 42, 43, 48 y 49 de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este Organismo, así como los numerales 63 fracción V, del Reglamento Interno. Ya que con sus acciones y omisiones violentaron los derechos humanos consistentes en el **derecho de acceso a la justicia**, así como el de **legalidad y seguridad jurídica**.

FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA

1) Derecho Humano al acceso a la justicia

EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

> ***Artículo 17****. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.*
> *Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.*

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

Artículo 21. *La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.*
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
[…]

Artículo 102.
A.
Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad ***para que la impartición de justicia sea pronta y expedita;*** *pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.*

Artículo 116*. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.*

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
[…]
Las Constituciones de los Estados ***garantizarán que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios*** *de autonomía,* ***eficiencia****, imparcialidad,* ***legalidad****, objetividad,* ***profesionalismo****,* ***responsabilidad*** *y* ***respeto a los derechos humanos****.*

(Derechos de las víctimas y/u ofendidos)

Artículo 20. *El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.*
[…]

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS[14]:

Artículo 8. Garantías Judiciales
1. *Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. […]*

2) Derecho a la legalidad y seguridad jurídica:

EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Artículo 14. […]
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.
[…]

Artículo 16.
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
[…]

[14] Conocido como: "Pacto de San José". Depositario: OEA. Lugar de adopción: San José, Costa Rica. Fecha de adopción: 22 de noviembre de 1969. Vinculación de México: 24 de marzo de 1981, adhesión. Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981.

En este sentido, la Comisión (CODHET) sostiene esta determinación a la luz de las siguientes consideraciones:

X. El señor ****** se duele en su escrito de queja de las siguientes vulneraciones:

> *c) en fecha **dos de octubre del año** 2013, se citó al C. ******, para el desahogo de una diligencia de carácter ministerial, misma que se presentó a dicha diligencia, estando presentes un abogado de nombre ****** que acompañaba al Doctor ******, levantándome una declaración informativa y en ningún momento estuvo el Fiscal ya que quien llevó a cabo la diligencia fue el Oficial Ministerial, así mismo como en todo momento hubo varias discusiones en el desahogo de dicha diligencia toda vez que el abogado ******, intervenía mucho diciéndole al Doctor que declarara, ya que todo lo traía apuntado por el doctor para que no se olvidara, antes de que se cerrar la diligencia llegó el Fiscal Investigador ******, se acercó al escribiente y miró lo que había en la pantalla manifestándole que estaba mal la declaración ya que no podía ser declaración informativa que tenía que ser como Probable Responsable, y que no podía ser, manifestando que tenía que borrar todo y empezó a decirle al Doctor que si quería declarar o no, leyéndole sus derechos y posteriormente me preguntó que si podía cambiar la declaración por lo que le manifesté que hiciera lo que el quisiera ya que yo tenía grabad en audio toda la audiencia, diciéndome que el tenía la facultad de declararlo como informativa, así misio quiero agregar que en relación al Abogado ****** ha estado interviniendo en varias diligencia sin estar nombrado dentro de la averiguación previa.-*

En este sentido, si bien en un primer momento se tomó la declaración del señor ****** como una ***declaración informativa*** (de fecha 2 de octubre de 2013) y no como de probable responsable a pesar que desde la presentación de la denuncia el afectado lo señaló con esa calidad, lo cual obra en la Averiguación Previa Penal ******/2013 de fecha 23 de agosto de 2013, lo cierto es que con posterioridad la autoridad ministerial solicitó su comparecencia con esa calidad, obrando el expediente la ***declaración*** del Dr. ****** como ***probable responsable*** de fechada el 14 de enero de 2014 (con las implicaciones que eso tiene para el respeto de los derechos del indiciado), en ese sentido, no se advierte perjuicio en contra del quejoso pues

dicha actuación fue corregida durante la integración de la averiguación en comento. Ahora bien, desde que se rindió la primera declaración (informativa) hasta la de *probable responsable*, el Ministerio Público realizo las siguientes diligencias:

- Acuerdo para citar a ****** de fecha 22 de noviembre para comparecer el 26 de noviembre 2013 y constancia de 26 de noviembre en la que se asienta la no asistencia;
- Acuerdo de 16 de diciembre de 2013 en el que se pide citar nuevamente en calidad de indiciado para que comparezca de 17 de ese mes, sin embargo, en el acuerdo de 17 de diciembre se asienta la inasistencia del Dr. ******; y
- Acuerdo de 14 de enero de 2014 para citar a Dr. ****** para recabar su declaración como indiciado.

Por otro lado, el quejoso se duele respecto a la ausencia periódica del Agente del Ministerio Público en dicha diligencia, ya que parte de la declaración informativa (de fecha 2 de octubre de 2013) la tomo el Lic. ******, Oficial ministerial de dicha Agencia y no su titular, no obstante, en este punto debemos señalar que el artículo 76, fracciones IV, VIII y XIII del Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado dispone como atribuciones del Oficial Secretario las siguientes:

> ***ARTÍCULO 76.-*** *Son atribuciones del Oficial Secretario**:***
> *[…]*
> ***IV.-*** *Auxiliar en la tramitación del exhorto, despacho, diligencia, auto y toda clase de resoluciones que expida, practique o dicte el Agente del Ministerio Publico.*
> *[…]*
> ***VIII.-*** *Auxiliar o practicar con el Agente del Ministerio Publico, las diligencias y probanzas que deban desahogarse;*
> *[…]*
> ***XII.-*** *Suplir al Agente del Ministerio Publico, en lo previsto en el párrafo segundo del artículo 35 de la Ley Orgánica y cuando se ausente temporal o definitivamente, hasta en tanto el* Procurador haga la designación;

Bajo esta lógica es claro que entre las funciones del Oficial estaba la de coadyuvar con el Agente en dicha diligencia. Además, del INFORME que rinde el Agente ******del Ministerio Público Investigador se desprende que lo siguiente:

> *[…] para lo cual comisione al Lic. ***** para que prosiguiera con la declaración que se estaba llevando en la planta baja, misma a la cual de nuevo me apersone para prestarle .la debida atención que merecía […]*

Por lo tanto, se estima que las actuaciones estuvieron apegadas a la norma y no generaron en la parte afectada un daño a sus derechos fundamentales. En consecuencia, se emite con respecto a este punto un **ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD** de conformidad con los artículos 46 de la Ley que rige a esta institución y 65, fracción I de Reglamento interno.

XI. Ahora bien, por lo que respecta a las alegaciones realizadas por el señor ****** (quejoso) y que van dirigidas a la *dilación en la integración de la Averiguación Previa Penal*, se abordaran de acuerdo al propio escrito de queja de fecha 3 de junio de 2014:

> *"d) En fecha trece de febrero del presente año, se llevó a cabo una diligencia ante la Agencia del ministerio Público, de ampliación de declaración del probable responsable ******, donde hasta ese momento se nombró como abogado defensor el Abogado ******, mismo que años anteriores perteneció a la Procuraduría General de Justicia, al final de la declaración se me dio el uso de la palabra donde solicité SE LE DIERA VISTA AL COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO. Posteriormente en varias ocasiones me presenté en compañía de mi esposa ******, a las oficinas de esa Fiscalía para informarme si ya se había remitido el oficio de lo que había solicitado manifestándome el Oficial Ministerial de nombre ******, que ya lo había enviado y que nada más estaban esperando la contestación, y que fue hasta el día de hoy **tres de julio del actual** **que el oficio lo habían enviado** el 22 de mayo y fue recibido el 23 de mayo del presente año, por lo cual fui engañado por el Oficial Ministerial durante tres meses.-"*

Del INFORME rendido por el Agente ******del Ministerio Público Investigador con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas (de fecha 18 de julio del 2014) se señala respecto a este punto lo siguiente:

> *[…] por en cuanto a lo que se hace mención en el inciso d) del escrito que nos ocupa refiero que efectivamente en fecha 13 de febrero del año en curso se llevó a cabo la diligencia de declaración de ampliación de probable responsable del C. ******, donde en uso de la voz del C. ******, solicito se le diera vista a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado, misma petición la cual fue debidamente acordada en tiempo y forma, pero debido a que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico requiere copia certificada de todas y cada una de las actuaciones que la integran, y aún y cuando dicho expediente consta de numerosas fojas, dichas fotocopias fueron sacadas a la brevedad posible para su envió, para que fuera esa comisión quien emitiera su opinión profesional respecto al caso en comento, más en ningún momento los ofendidos fueron engañados por el que suscribe o por el personal de esta H. Representación Social, […]*

En este sentido, la Comisión (CODHET) estima que no existe justificación para argüir que por el volumen de un expediente la autoridad deba tardarse casi tres meses en remitírselo a otra, máxime, cuando las copias de dicha averiguación que obran en poder de este Organismo comprenden las 713 fojas y para el momento en que se debió acordar la solicitud del señor ****** (quejoso) el número de fojas debió ser mucho menos, ya que el acuerdo y el oficio que ordenaba la remisión del expediente a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico tenía que ser realizado en la fecha en que se llevó a cabo dicha diligencia (13 de febrero de 2014) o al día siguiente. Por lo tanto, el número de fojas en ese momento rondaba cerca de las 400. Esto, por la respuesta que da la autoridad ministerial que estima legitimo dilatarse ese tiempo por la cantidad de fojas que conformaban el expediente, lo cual este Organismo no comparte.

Además, no debemos perder de vista que dicha solicitud se acordó hasta el 21 de mayo de 2014 y ese mismo día se realizó el oficio de remisión identificado como 1142/2014 en el que se le envían las copias certificadas y se le pide que emita conclusión en relación a los hecho. Por lo tanto, desde

la fecha de la diligencia en que se solicitó al Agente ****** del Ministerio Público la remisión del expediente hasta que se hizo el oficio de remisión, pasaron **70 días hábiles** (sin contar sábados y domingos). En consecuencia, para este Organismo se advierte una clara irregularidad en cuanto a la alegada *dilación* sostenida por el quejoso.

Al respecto, se estima que con sus actuaciones y omisiones la autoridad ministerial contravino las siguientes disposiciones normativas:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

> ***Artículo 20.*** *En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:*
> *[...]*
>
> *B. De la víctima o del ofendido:*
>
> *I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;*
> *II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.*
> *Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;*
> ***III.*** *Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;*
> *[…].*

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas

> ***ARTÍCULO 5°.-*** *Los servidores públicos que integran la Procuraduría regirán su actuación con base en los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.*
>
> ***ARTÍCULO 7°.-*** *Al Ministerio Público del Estado le compete el ejercicio de las siguientes atribuciones:*
> *I.- La función de seguridad pública relativa a la investigación y persecución de los delitos, que comprende:*

A) En la etapa de la averiguación previa:
[…]
3. Practicar las diligencias necesarias para acreditar el hecho delictuoso y la probable responsabilidad del indiciado, así como el monto del daño causado;
[…]
7. Obtener elementos probatorios para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, y solicitar a los particulares la aportación voluntaria de los mismos y, en su caso, solicitar al órgano judicial la autorización u orden correspondiente para su obtención;
[…]
14. Garantizar los derechos de las víctimas y ofendidos, así como de los imputados, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables;

***ARTÍCULO 72**.- Las causas de responsabilidad de los Agentes del Ministerio Público, de la Policía Investigadora, de la Policía Ministerial y, en lo conducente, de los Peritos, serán las siguientes:*
I.- No cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público;
[…]
VI.- Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto;
[…]
VII.- Abstenerse en la averiguación previa de dictar o decretar los acuerdos o resoluciones que sean procedentes o hacerlo fuera de los términos legales, o dejar de realizar las acciones necesarias en los asuntos que sean de su conocimiento;

Incluso en el **Código de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas** se prevé:

***Artículo 115.** Obligaciones del Ministerio Público*
Para los efectos del presente Código el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones:
[…]
V. Ordenar a la policía, a sus auxiliares u otras autoridades en el ámbito de su competencia, la práctica de diligencias conducentes para el esclarecimiento del hecho probablemente delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado;
VI. Requerir informes y documentos a otras autoridades, así como solicitar la práctica de peritajes y demás medios de investigación;

***Artículo 132.** Derechos de la víctima u ofendido*
1. La víctima u ofendido por algún delito tendrán los derechos siguientes:
[…]

> *VIII. **Acceder a la justicia de manera pronta**, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas;*
> *[…]*
> *XV. Solicitar el desahogo de las diligencias de investigación que, en su caso, correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de determinada actuación, debiendo éste fundar y motivar su negativa;*

Bajo esta misma lógica, la dilación en la integración de una Averiguación Previa Penal es un obstáculo para que las personas accedan a la de justicia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en este sentido ha señalado en su Recomendación General 16 sobre *el Plazo para resolver una Averiguación Previa*;

> *[…]*
> *Es por ello, que esta Comisión Nacional considera oportuno insistir en la necesidad de establecer límites claros a las facultades del agente del Ministerio Público respecto del trámite que ha de dispensar a la averiguación previa, a partir de criterios que incorporen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual hace referencia a la fijación de un plazo razonable para el cierre de una investigación, que debe tomar en cuenta las siguientes circunstancias: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procedimental de los interesados; c) la conducta de las autoridades investigadoras, principalmente de la policía judicial, científica, investigadora o ministerial; d) la afectación que genera el procedimiento en la situación jurídica del probable responsable, la víctima o el ofendido.*
> *Es preciso reconocer que en algunos asuntos existe la necesidad de realizar pruebas prolongadas, de costosa, azarosa o tardía recaudación; que en ocasiones se presentan problemas severos en la apreciación jurídica o en la calificación de los hechos o lagunas en la legislación; sin embargo, lo anterior no obsta para justificar el incumplimiento de las formalidades que exige la ley en la investigación de cualquier delito.*
>
> *La falta de resultados por parte de las instancias encargadas de la procuración de justicia del país no sólo obedece a la carga de trabajo, sino también a la ineficiencia o apatía de los responsables de la investigación, quienes en muchos de los casos se dedican a esperar que las víctimas aporten elementos que ayuden a integrar la averiguación previa, o que los peritos rindan sus dictámenes, sin que exista una verdadera labor de investigación en la que se realicen las diligencias mínimas necesarias.*

[…]
Es importante señalar que para esta Comisión Nacional los agentes del Ministerio público, a fin de garantizar una adecuada procuración de justicia, deben cumplir en el desarrollo de su labor con las diligencias mínimas para: a) evitar la dilación en el trámite de la averiguación previa, de tal manera que no existan omisiones en la práctica de diligencia por los periodos prolongados, b) garantizar el desahogo de las diligencias de investigaciones necesarias para acreditar el delito y la probable responsabilidad del sujeto, c) preservar los indicios del delito a fin de asegurar que las líneas de investigación puedan agotarse, d) propiciar el desahogo de los análisis y dictámenes periciales, e) dictar las medidas de auxilio y protección a las víctimas del delito y a los testigos, f) garantizar el acceso a la justicia a las víctimas del delito mediante la eliminación de la práctica de elaborar actas circunstanciadas en lugar de averiguaciones previas, g) evitar enviar al archivo o a la reserva las averiguaciones previas si no se han agotado las líneas de investigación y h) propiciar una mayor elaboración de investigación por parte de los elementos de la policía que tengan a su cargo dicha función.

Los criterios anteriormente aludidos permitirán determinar los casos y circunstancias en las cuales la omisión del Ministerio Público implica que se vulneren los derechos humanos de las personas, en el caso de la víctima, el ofendido o incluso, el probable responsable; así como determinar el grado de responsabilidad de los sujetos que intervienen durante la etapa de investigación de los delitos, en atención a las acciones u omisiones en las que incurran.

De ahí que sea posible afirmar que la investigación de los delitos y persecución de los probables responsables no puede diferirse en el tiempo de manera ilimitada, debido a que la imposibilidad material para obtener los elementos de prueba para acreditar la probable responsabilidad del sujeto se diluye conforme trascurre el tiempo, y es por ello que el límite de actuación de los servidores públicos se encuentra en la posibilidad real de allegarse nuevos elementos de juicio; de lo contrario, el mantener una investigación abierta después de trascurrido un plazo razonable puede arrojar información poco confiable sobre la eficacia con la que se desempeñan las instancias de procuración de justicia, sobre todo cuando el paso del tiempo es el principal enemigo de las investigaciones. Existe, por lo tanto, la necesidad de tener un control estricto de las actuaciones que realizan los distintos servidores públicos en torno a la averiguación previa, ya que omitir una diligencia o bien practicarla de forma inapropiada puede traer graves consecuencias en el desarrollo del procedimiento.

En esta misma línea, en el caso concreto se alega respecto a dilación en el la integración de la averiguación previa penal lo siguiente:

(Escrito de queja 3 de junio de 2014):

> ***e)*** *Posteriormente en* ***fecha cuatro de junio*** *del presente año, se solicitó a la Ciudad de Monterrey Nuevo León, una colaboración a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, se gire correspondiente al director del hospital "La Carlota" área de la visión de la ciudad de Montemorelos, con la finalidad de que el mismo remita copia certificada del expediente clínico número ****** del paciente ****** y una vez realizado lo anterior remita a la Fiscal dicha copia certificada, y hasta el día primero de julio del actual me percaté que se había remitido dicha colaboración, por lo cual a simple vista se nota la dilatación de dicha Averiguación Previa.-*

En este sentido, de la copia de la Averiguación Previa Penal ****** de fecha 23 de agosto de 2013 que obra en el expediente de queja 069/2014-L, se advierte la existencia de dicho Acuerdo de fecha 4 de junio de 2014. Al respecto, la Comisión (CODHET) observa que fue promovido por uno de los presuntos responsables, no obstante, es de notar el tiempo que transcurrió entre la fecha que se acordó y se hizo el oficio número 2841/2014 (4 de Junio de 2014) dirigido al Delegado Regional y la fecha en que este lo recibió (1 de julio de 2014), cerca de un mes después, esto resulta relevante porque dicha Delegación y la Agencia ****** del Ministerio Público Investigador se encuentran ubicadas en el mismo lugar (Edificio de Seguridad Pública ubicado en ******, Tamaulipas) como se advierte de sus Informes de Autoridad y que obran en nuestro expediente. Además, debe tomarse en cuenta que fue hasta el 1 de julio que el Delegado recibió dicho oficio para que este a su vez solicitara al Procurador General de Justicias, cuyas oficinas están en Ciudad de Victoria, la colaboración de la Procuraduría del Estado de Nuevo León. En este sentido, se advierte que el Delegado remitió la colaboración el 3 de julio de 2014 y esta fue recibida por el Procurador General Justicia el 7 de julio del mismo año, lo cual quiere decir que la dilación estuvo originariamente en las actuaciones de la Agencia Quinta.

En consecuencia, para la Comisión (CODHET) se acredita nuevamente una actitud omisa de la autoridad ministerial al dilatar la integración del expediente. Para este Organismo puede ser entendible la tardanza que puede derivar de los tiempos de envío y recepción de los oficios o actuaciones que se realizan entre instituciones radicadas en distintas ciudades o estados, sin embargo, en el caso concreto esto no ocurrió así, pues se dio entre instituciones radicadas en el mismo *edificio* en el que se desarrollan sus funciones ministeriales. Por lo tanto, de ninguna manera se puede entender el tiempo que transcurrió para que la Agencia ****** del Ministerio Público Investigador le remitiera el oficio en comento a la Delegación Regional, lo cual se estima como otra actuación dilatoria de la integración de dicha averiguación en perjuicio del quejoso y de su derecho para acceder a la justicia.

Bajo este tenor, cobra relevancia lo sostenido en la Recomendación General 16 de la CNDH y mencionada con anteriormente respecto a este tema:

> *En este mismo sentido, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al sostener la necesidad de que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia respeten un plazo razonable en la investigación y el formal procesamiento de los probables responsables de un delito, de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual ha sido expuesto en las sentencias de los casos: López Álvarez vs. Honduras de fecha 1 de febrero de 2006; García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú de fecha 25 de noviembre de 2005, Tibi vs. Ecuador de fecha 07 de septiembre de 2004, caso Suárez Rosero vs. Ecuador, sentencia de 12 de noviembre de 1997, caso Acosta Calderón vs. Ecuador, sentencia de 24 de junio de 2005, los votos razonados del juez A.A. Cançado Trindade y del juez Sergio García Ramírez, en el caso López Álvarez vs. Honduras, del 1 de febrero de 2006, y el voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramirez en el Caso Tibi vs. Ecuador, del 7 de septiembre de 2004, en donde dicho tribunal determinó que la oportunidad de la tutela, corre el riesgo de ser inútil, ineficaz, ilusoria, si no llega a tiempo, en la inteligencia de que "llegar a tiempo" significa operar con máxima eficacia en la protección y mínima afectación de los derechos del individuo, prontitud que no es atropellamiento, irreflexión, ligereza. Esas estipulaciones acogen la preocupación que preside el aforismo* ***"justicia retardada es justicia denegada".*** *En los casos anteriormente señalados la Corte Interamericana explica la necesidad de que las*

autoridades actúen con diligencia, con el objeto de tutelar eficazmente los derechos humanos de víctimas, ofendidos y los probables responsables.

[…]

Por otra parte, del análisis realizado al marco jurídico nacional se advierte que los plazos para la integración de una averiguación previa sólo existen generalmente cuando la libertad de una persona está sujeta al resultado del procedimiento, circunstancia contraria a la que ocurre en las averiguaciones previas sin detenido, laguna legal que esta Comisión Nacional considera debe ser subsanada, en virtud de que el resultado del procedimiento puede derivar en la afectación de los bienes jurídicos, como es el caso del derecho a la libertad personal (probable responsable) o a la reparación del daño (víctima u ofendido).

La circunstancia anterior se ha hecho patente en las diversas quejas recibidas por este organismo nacional, las cuales aluden a la dilación que existe en el trámite de las averiguaciones previas, las cuales en un porcentaje superior al 90% se envían al archivo o a la reserva por no estar acreditados los elementos constitutivos del delito, pero que también denotan una falta de actividad por parte de los agentes del ministerio público, al dejar la carga de la prueba a la víctima u ofendido, circunstancia que propicia en el porcentaje mencionado un favorecimiento a la impunidad.

Adicionalmente, podemos mencionar los siguientes criterios de interpretación sostenido por Tribunales Colegiados de Circuito:

Época: Novena Época
Registro: 190495
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XIII, Enero de 2001
Materia(s): Administrativa
Tesis: XIII.2o.8 A
Página: 1748

MINISTERIO PÚBLICO. SU INACTIVIDAD AL NO INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS.

Del análisis integral de los artículos 8o., 16, 17 y 102-A de la Constitución Federal, así como del artículo 65 de la Ley Orgánica de

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, se desprende que la representación social debe proveer en un término de treinta días hábiles a la integración de la averiguación previa; por lo tanto, el órgano persecutor no está facultado para integrar la indagatoria en forma discrecional y cuando lo estime pertinente, pues conforme a dichos numerales la citada autoridad tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para la integración de la averiguación, tan luego como tenga conocimiento de la posible existencia de un delito, así como, de no existir denuncia, dictar la reserva del expediente, o el no ejercicio de la acción, sin que se justifique su inactividad si del inicio de la indagatoria a la fecha de promoción del amparo, ha transcurrido un lapso mayor al señalado en el último ordenamiento legal aludido, lo cual implica violación de garantías.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 275/2000. Brígida Ernestina García López. 21 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Gómez Argüello. Secretaria: Ma. de los Ángeles Pombo Rosas.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, julio de 1999, página 884, tesis VIII.1o.32 A, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU INACTIVIDAD AL NO INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN EN BREVE TÉRMINO VIOLA GARANTÍAS.".

Época: Novena Época
Registro: 193732
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo X, Julio de 1999
Materia(s): Administrativa
Tesis: VIII.1o.32 A
Página: 884

MINISTERIO PÚBLICO. SU INACTIVIDAD AL NO INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN EN BREVE TÉRMINO VIOLA GARANTÍAS.

De un análisis integral y coherente de los artículos 8o., 16, 17, 21 y 102-A, de la Constitución, se desprende que la representación social debe proveer ***en breve término*** *a la integración de la averiguación previa. Por lo tanto no es posible sostener que como los artículos 123, 126, 133, 134 y 136 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Durango, no establecen un término específico para integrar la averiguación previa, el órgano persecutor puede integrar la*

indagatoria en forma discrecional y cuando lo estime pertinente; toda vez que, los mismos numerales contemplan la obligación del Ministerio Público de tomar todas las medidas necesarias para la integración de la averiguación, tan luego como tengan conocimiento de la posible existencia de un delito, así como de darle seguimiento a las denuncias que se presenten y allegarse todos los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos, dictando en uno u otro caso la reserva del expediente, el no ejercicio o la consignación. De lo que se infiere, que los artículos mencionados de la ley secundaria, siguen los lineamientos fijados en los artículos constitucionales en comento, por lo que no se justifica la inactividad del Ministerio Público, pues transcurrieron más de siete meses entre la fecha de presentación de la denuncia y la demanda de amparo, sin que existiera avance alguno en la averiguación, lo que como se ha demostrado implica violación de garantías.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

Amparo en revisión 305/98. Abdón Gallegos Quiñones. 18 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Luz Patricia Hidalgo Córdova. Secretario: Gilberto Andrés Delgado Pedroza.

Nota: Por ejecutoria de fecha 16 de octubre de 2002, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 24/2002-PS en que participó el presente criterio.

Ahora bien, si bien es cierto que en el caso del primer criterio se hace referencia a una legislación local distinta a la nuestra, lo cierto es que desde la interpretación de los artículos 8o., 16, 17 y 102-A constitucionales (constitución federal) se sostienen que el tiempo en que se debe integrar una averiguación previa no puede estar sujeta al arbitrio de la autoridad. Por otro lado, en el segundo criterio se establece con mayor claridad la idea o el sentido que tienen las disposiciones constitucionales que regulan la labor de Ministerio Público (artículos 8o., 16, 17, 21 y 102-A, de la Constitución) en cuanto a la integración de la averiguación previa en *breve término* y tomando en cuenta las legislaciones secundarias no puede estimar que esto pueda ser de otra manera o incluso establecer con su omisión de un periodo especifico, la discrecionalidad para llevar a cabo dicha tarea. Adicionalmente, se debe retomar el impacto que tiene la dilación en la integración de un

expediente penal en el acceso a la justicia del gobernado pues como se señaló anteriormente toda "*justicia retardada es justicia denegada*", para abundar en este punto conviene mencionar el siguiente criterio jurisprudencial:

Época: Décima Época
Registro: 2008230
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 14, Enero de 2015, Tomo II
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o. J/16 (10a.)
Página: 1691

SUBGARANTÍAS DE PRONTITUD, EFICACIA Y EXPEDITEZ CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SON PRIVATIVAS DEL ÁMBITO JUDICIAL, SINO QUE SU DIMENSIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA COMPRENDE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NO CONTENCIOSO SEGUIDOS ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO.

El artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En tales condiciones, debe estimarse que la observancia de las subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, no sólo resulta atribuible a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, sino que debe expandirse a todas las manifestaciones del poder público, como son los procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo. Ello es así, pues la eficacia de la autoridad administrativa presupone no sólo una sujeción irrestricta a los procedimientos señalados en la ley y los reglamentos, sino también que su proceder no puede ser ajeno a la tutela del derecho de acceso a la jurisdicción en las vertientes señaladas, lo que, además, implica en un correcto ejercicio de la función pública, la adopción de medidas, actuaciones y decisiones eficaces, ágiles y respetuosas de los derechos de los administrados, razones por las que las citadas subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez no pueden ser

privativas del ámbito judicial, sino que comprenden la producción de los actos administrativos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 35/2013. Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 16 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros.
Amparo en revisión 37/2013. Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 7 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: Claudia Luz Hernández Sánchez.
Amparo en revisión 133/2014. Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y otros. 5 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Adam Azcorra Puc.
Amparo en revisión 191/2014. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y otro. 28 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz Torres.
Amparo en revisión 211/2014. Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y otro. 16 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Santiago Ermilo Aguilar Pavón.

XII. Por lo que se refiere a las alegaciones contenidas en el inciso f) del escrito de queja, este Comisión (CODHET) no encuentra más vulneraciones a los derechos del señor ******, sin embargo, en este apartado se señala la participación del Delegado Regional del primer Distrito Ministerial del Estado, Lic. ******, como a quien se acudió para quejarse de la forma en que se estaba llevando acabo la integración del expediente (dilación), pero fuera de que este detectara las irregularidades, le manifestó que todo estaba correcto y que no se debía preocupar ya que tal situación no le afecta.

No obstante, para este Organismo esta actuación que se confirma con el informe de autoridad que remitió dicho Delegado Regional (24 de julio de 2014) y en el cual menciona:

> *En relación al inciso F), es menester aclara que efectivamente el suscrito en diversas ocasiones ha tenido a bien atender personalmente al ofendido el C. ******, sin embargo atendiendo a la naturaleza de lo expuesto en el presente inciso se tiene la presunción por parte del quejoso de irregularidades en el procedimiento, máxime que ante dicha presunción, esta autoridad vigilara el cumplimiento de las actuaciones en mi carácter de superior jerárquico, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.- Por lo anteriormente expuesto solicito muy atentamente lo siguiente:*
> *[…]*

Se estima que el Delegado Regional con su actitud omisa ante estas denuncias incurrió en responsabilidad, pues al ser puesto en conocimiento por el quejoso sobre las irregularidades advertidas, entre las que se destaca la tardanza de la vista a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico para que rindiera su opinión, que no solo no advirtió sino que justificó (informe de autoridad) por el volumen del expediente. Este Organismo toma nota de tal situación y decide tenerle también como responsable por dicha *dilación,* en consecuencia, con ello haber vulnerado el derecho al acceso a la justicia, así como el de seguridad jurídica y legalidad. Pues como autoridad superior inmediata esta debió sancionar al Agente ****** del Ministerio Público y al Oficial ministerial al tener conocimiento de las alegaciones que le manifestó el señor ******, ya que a la luz de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas las omisiones que generaron dilación son causales de responsabilidad (artículo 72, fracciones VI y VII) imponibles a los servidores públicos por su superior jerárquico, en este caso el Delegado Regional (artículo 30, fracción V).

Bajo esta perspectiva, esta Comisión (CODHET) estima acreditada la responsabilidad tanto del Delegado Regional de Justicia del Primer Distrito

Ministerial del Estado, el Agente y Oficial Ministerial de la Agencia ****** del Ministerio Público Investigador con residencia en ******, Tamaulipas por haber vulnerado los derechos humanos del señor ****** consistentes en el derecho de acceso a la justicia, el de seguridad y legalidad, así como los relativos a la víctimas u ofendidos. En consecuencia, esto Organismo decide emitir **RECOMENDACIÓN** al **PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO** como superior jerárquico de los mismos.

Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de la CODHET y 28, 29 y demás relativos previstos en la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Tamaulipas, toda persona víctima de violaciones de derechos humanos tiene el derecho a una reparación integral, en este sentido, la Comisión (CODHET) determina:

R E C O M E N D A R

AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PRIMERA: Se tenga como víctima de violación a los derechos humanos al señor ******.

SEGUNDA: Se gire instrucciones al Delegado Regional de Justicia del Primer Distrito Ministerial del Estado, el Agente y Oficial Ministerial de la Agencia ****** del Ministerio Público Investigador con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas para que ajusten sus actuaciones a la norma y den celeridad a la integración de la Averiguación Previa Penal ****** de fecha *23 de agosto de 2013.*

TERCERA: Se estima necesaria la formulación de manuales o lineamientos tendientes a sistematizar la integración de las averiguaciones previas penales con la finalidad de introducir la figura de los *plazos razonables* que si bien tomen en cuenta la complejidad de los caso, también busque erradicar las malas prácticas como la referida en este proyecto respecto la dilación de casi un mes para que la autoridad ministerial remitiera un oficio a otra radicada en el mismo lugar de trabajo.

CUARTA: Se adopten los controles pertinentes para supervisar que se cumplan las obligaciones constitucionales y legales durante el inicio, trámite y conclusión de las Averiguaciones Previas, procurando sobre todo evitar la dilación en la integración, así como las omisiones en la práctica de diligencias oportunas y necesarias.

QUINTA: Se gire instrucciones para que se investigue las actuaciones u omisiones que generaron dicha irregularidades en perjuicio del quejoso.

Dése vista a la Dirección General del Instituto de Atención a Víctimas del Delito de la presente resolución, para que de acuerdo a su competencia se proceda conforme a lo establecido en la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con el artículo 49 de la Ley de esta Comisión, es procedente requerir a la autoridad recomendada para que, dentro de un plazo de diez días hábiles, informen sobre la aceptación de esta recomendación y, en su caso, remitan dentro de los quince días siguientes las pruebas relativas a su cumplimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma establecida.

Así lo formuló y emite el C. Doctor José Martín García Martínez, Presidente de esta Comisión, en términos del artículo 22, fracción VII de la Ley que regula el funcionamiento de este Organismo, así como el 23, fracción VII y 69, fracción V de su Reglamento.

_____
Dr. José Martín García Martínez
Presidente

Proyectó

_____
Mtro. Orlando Javier Rosado Barrera
Visitador Adjunto

EXPEDIENTE N°: 025/2014-Laredo
QUEJOSO:******
RESOLUCION: Recomendación N° 016/2015 y Opinión

En Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días del mes de junio del año dos mil quince.

V I S T O para resolver en definitiva el expediente número 025/2014-Laredo, iniciado con motivo de la queja presentada por el C. ******, ante la Delegación Regional de este Organismo, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, mediante el cual denuncia EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, por parte dela Secretaría de la Contraloría y Transparencia del R. Ayuntamiento, de esa ciudad fronteriza; este Organismo procede a emitir resolución de conformidad con los siguientes.

A N T E C E D E N T E S

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, por conducto de la Delegación Regional ubicada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, recibió el escrito de queja de fecha 07 de marzo del año dos mil catorce, signado por el C. ******, en el que manifestara lo que a continuación se transcribe:

> "******, mexicano, mayor de edad, casado, Contador Público, señalo como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en la calle ******, entre las calles ****** de esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y autorizo para oírlas y recibirlas en mi nombre y representación al señor Licenciado ******, titular de la Cédula Profesional número ****** expedida por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública, ante usted ciudadano Presidente, expreso mis respetos, comparezco y expongo: que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, 28, 29 y 30 de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, vengo en tiempo y forma a interponer QUEJA en contra del Secretario de la Contraloría y Transparencia del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con domicilio conocido en la Torre Administrativa ubicada en la calle Vicente Guerrero y Maclovio Herrera del Plano Oficial de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con la finalidad de que inicie el procedimiento de investigación sobre violaciones de derechos humanos imputada al servidor público señalado.

Me fundo para hacerlo en los siguientes: HECHOS. I. El que suscribe me desempeñé como Contralor Municipal en la Administración Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 2011-2013. II. Mis funciones como Contralor Municipal concluyeron el día treinta de septiembre del año dos mil trece. III. El día seis de noviembre del dos mil trece, recibí un citatorio signado por el Ciudadano ******, Secretario de Contraloría y Transparencia del Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el que se me citaba en las oficinas que ocupa la Secretaría, el día quince de noviembre del año dos mil trece, a fin de llevar a cabo una diligencia de carácter administrativo dentro del procedimiento administrativo número ******. IV. Como lo mencioné en el hecho número dos de la presente queja, el que suscribe dejé de ser servidor público, y no obstante lo anterior, se inició un procedimiento administrativo en mi contra, basándose el Secretario de la Contraloría y Transparencia en la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, concluyendo el citado procedimiento administrativo en una sanción administrativa consistente en una multa de $193,419.90 ciento noventa y tres mil cuatrocientos diecinueve pesos 90/100 Moneda Nacional), y con una inhabilitación por cinco años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público. V. La aplicación de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, a un ciudadano que no está sujeto a ese ordenamiento legal en términos de su artículo 2º, es violatorio de los artículos 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es evidente que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, no se refiere a materia penal puesto que no tipifica un delito ni sanciona con una pena. Se ocupa, por el contrario, de un tema administrativo o laboral. Sin embargo, el artículo 8 de la Convención Americana se titula "Garantías Judiciales", su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto "sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales" a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Esa honorable Comisión debe observar que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden "civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes. En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos administrativos

sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso. Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas. Incluso, la Corte Europea de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre este tema, señalando que: …los principales enunciados en el párrafo 2 (art.6-2) y 3 (a saber los incisos a, b y d) [… de la Convención Europea de Derechos Humanos], se aplican mutatis mutandis a los procesos disciplinarios a lo que se refiere el inciso 1 (art. 6-1) de la misma forma en que se aplican a los casos en que una persona es acusada por una infracción de carácter penal. La justicia, realizada a través del debido proceso legal, como verdadero valor jurídicamente protegido, se debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los Estados no pueden sustraerse de esta obligación argumentando que no se aplican las debidas garantías del artículo 8 de la Convención Americana en el caso de sanciones disciplinarias y no penales. Permitirle a los Estados dicha interpretación equivaldría a dejar a su libre voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido proceso. El Secretario de la Contraloría y Transparencia del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, no es juez o tribunal en un sentido estricto; sin embargo, en el presente caso la decisión adoptada por él afectó mi derecho como ciudadano, por lo que resulta indispensable que dicha autoridad cumpliera con lo estipulado en el artículo 8 de la Convención. A mayor abundamiento, el servidor público evidenciado, violó el artículo 2º de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tamaulipas y el diverso 149 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, lo anterior se deriva debido a que el quejoso, no es servidor público de los mencionados en el artículo 149 de la Constitución local, por tanto no estoy sujeto a la aplicación del ordenamiento legal citado en primer término, ya que mis funciones como Contralor Municipal concluyeron como ya mencioné con anterioridad, el día treinta de septiembre del dos mil trece, lo que se encuentra asentado en la resolución sancionatoria, específicamente en el resultado primero que dice como sigue: "ya que en su desempeño como servidor público municipal, específicamente como Contralor Municipal en la Administración Municipal 2011-2013, pudo derivarse incumplimiento a lo que establece…". Además, en el considerando segundo el servidor público denunciado, me dice: "En el caso que nos ocupa el C.P. ****** se considera en todos sus términos un servidor público, de conformidad con lo establecido en el artículo 149 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas que establece para efectos de responsabilidades administrativas se reputarán como servidores públicos a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el poder público del Estado y del Municipio. En efecto, así dice el artículo que se violó en mi perjuicio porque de su interpretación literal se utiliza el verbo "desempeñar" en tiempo presente, es decir: "desempeñé" y con tal circunstancia de tiempo, la calidad específica deservidor público que pide la ley para legitimar a las autoridades para sancionar al infractor, es la de

servidor público en ejercicio de sus funciones, no cuando dejó de serlo, pues el espíritu de la ley que indebidamente se me aplicó, es sancionar a la persona que se desempeña como servidor público y no al que se desempeñó, en caso contrario si el legislador lo hubiere redactado de una forma diferente diciéndola ley: "al que desempeñé y se hubiere desempeñado como servidor público", situación que no es dable en el caso que nos ocupa, pues tal hecho se violentó el debido proceso como mi derecho humano. VI. Se violó en mi perjuicio el derecho humano al debido proceso y mi derecho a ser juzgado por un Juez o Tribunal predeterminado por la Ley. Efectivamente, el contenido esencial del derecho señala la prohibición de establecer un órgano jurisdiccional ad-hoc para el enjuiciamiento de un determinado tema, lo que la doctrina denomina "tribunales de excepción". Como consecuencias adicionales se establece el requisito que todos los órganos jurisdiccionales sean creados y constituidos por ley, la que los inviste de jurisdicción y competencia. Esta constitución debe ser anterior al hecho que motiva el proceso y debe contar con los requisitos mínimos que garanticen su autonomía e independencia. Este derecho a de mano con lo que es la predictabilidad que deben garantizar un sistema jurídico ya que los particulares deben estar con la concreta posibilidad saber y conocer cuáles son las leyes que los rigen y cuáles los organismos jurisdiccionales que juzgarán los hechos y conductas sin que esa determinación quede sujeta a la arbitrariedad de algún otro órgano estatal. En la especie, se violó en mi perjuicio este derecho, pues quien me demandó fue el mismo servidor público que me sancionó, siendo juez y parte, lo que lógicamente afectó mi esfera jurídica. VII. Se violó en mi perjuicio mi derecho humano a un Juez o Tribunal imparcial. No puede haber debido proceso si el juez es tendencioso. El juez debe ser equidistante respecto de las partes lo que se concreta en la llamada bilateralidad de la audiencia". Para evitar estas situaciones hay varios mecanismos jurídicos: 1. La mayor parte de las legislaciones contemplan la posibilidad de recusar al juez que no aparezca dotado de suficiente imparcialidad, por estar relacionado de alguna manera (vínculo de parentesco, afinidad, amistad, negocios, etc.) con la parte contrario en juicio. 2. Una de las garantías básicas en el estado de derecho, es que el tribunal se encuentre establecido con anterioridad a los hechos que motivan el juicio y, además, atienda genéricamente una clase particular de casos y no sea, por tanto, un tribunal ad hoc creado especialmente para resolver una situación jurídica puntual. En ese contexto, fue iniciado el procedimiento administrativo por el mismo servidor público que me denunció lo que transgredió en forma contundente el debido proceso y como consecuencia de lo anterior, trajo la violación a mis derechos humanos, en razón de que siempre fue parcial con los intereses políticos de la nueva administración municipal. VIII. Por otra parte, quiero hacer notar a esa Honorable Presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos de los Estados de Tamaulipas, que se violó de nueva cuenta el debido proceso, pues fui citado por el servidor público responsable, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64, fracción I, de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que a la letra dice como sigue:

"I. Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el día y hora en que se verificará dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor". De esta manera, quiero puntualizar que fui citado a comparecer el día quince de noviembre del dos mil trece, a las oficinas que ocupa la Secretaría de la Contraloría y Transparencia para desahogar una diligencia de carácter administrativo derivado de las observaciones emitidas por la Dirección de Auditoría de Obra, donde solicitan la investigación a diversos expedientes y/o Contratos de Obra Pública autorizados que no fueron revisados y/o autorizados por usted y el quejoso y posteriormente remitidos a la tesorería municipal para su pago correspondiente; resaltando claramente que el citatorio era confuso, ya que no se mencionó el contrato controvertido el LP-DEPORTES-FF-09/13/8312; para mayor claridad se anexa copia del citatorio en cuestión. Es por tal motivo, que no se me puede sancionar por cuestiones a las que no fui citado, es decir, el citatorio claramente me hace saber lo siguiente: *"derivado de las observaciones emitidas por la Dirección de Auditoría y Obra, donde solicitan la investigación a diversos expedientes y/o contratos de obra pública autorizados por usted, y posteriormente remitidos a la Tesorería Municipal para su pago correspondiente".* Por tanto, el actuar del servidor público denunciado se puede encuadrar como presunto responsable de incumplimiento a las obligaciones de todo servidor público previstas por el numeral 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, pues él si se encuentra actualmente desempeñándose como servidor público. A más de lo anterior, el servidor público denunciado, me atribuyó la responsabilidad siguiente: "…como quedó anotado, el C.P. ****** debió haberse cerciorado y verificado, que la obra amparada en el contrato de Obra LP-DEPORTES-FFM-09/13-8312, se encontraba totalmente concluida para así dar las indicaciones necesarias a la Tesorería Municipal para el pago correspondiente y no habiéndose hecho así, es evidente la existencia de una omisión en el desempeño de sus funciones, aunado a una acción dolosa al enviar a la Tesorería Municipal el finiquito del contrato de referencia sabiendas que la obra amparada en el Contrato de Obra Pública LP-DEPORTES-FFM-09/13-8312 no fue verificada físicamente sin siquiera constarle si estaba totalmente concluida y aún, así, en el oficio CM-04331/2013 suscrito por el propio ****** trajo como consecuencia un beneficio indebido al Ing. ******, quien era el encargado de la ejecución del contrato LP-DEPORTES-FFM-09/13-8312, ya que como quedó referido sin siquiera haber estado totalmente concluida la obra, considerándose de igual manera, un actuar negligente e inexcusable por parte del C.P. ******". En otro orden de ideas, en el resolutivo tercero de la resolución dictada en mi contra, me permito destacar que la cantidad impuesta como sanción económica, es dolosa e infundada, ya que no tiene sustento legal ni se origina de un dictamen pericial del supuesto daño patrimonial causado en los vicios ocultos de la obra LP-DEPORTES-FFM09/13-8312, enmarcada jurídicamente en contrato administrativo de obra pública, que por exigencia de la ley de la materia obliga a los

contratistas a constituir garantía que ampare los posibles vicios ocultos del total de la obra, que en el caso que nos ocupa es de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Con los anteriores antecedentes y tratándose de un contrato administrativo de obra pública (no contrato civil o mercantil) y lógico que para este caso de debe ejecutar la fianza que trae aparejada el contrato. Para aunar en lo anterior, el daño patrimonial no existe porque al contratista no se le ha pagado parcial ni el total de la obra. (se anexa solicitud de pago de contratista ****** dirigido al Presidente Municipal, al Primer Síndico y Secretario del Ayuntamiento, de fecha veintisiete de noviembre del dos mil trece. En cuanto a la determinación del monto de los supuestos vicios ocultos de $96,709.95 (noventa y seis mil setecientos nueve 95/100, sustentado en once puntos supervisados, solamente aplican cuatro que están contemplados en el contrato de referencia el resto de los siete puntos no están contemplados en el mismo, para tal efecto se anexa dictamen elaborado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo Laredo, A.C., firmando como responsable el perito número I-141 Ing. ******, quien concluyó del análisis técnico que los vicios ocultos de los cuatro puntos ascendían a la cantidad de $5,987.22 (Cinco mil novecientos ochenta y siete pesos 22/100 Moneda Nacional). Por todo lo anterior, se puede observar, que los servidores públicos que actuaron en el procedimiento administrativo C.P. C. ******, Secretario de la Contraloría y Transparencia, Licenciado ******, Director de Asuntos Internos, Arquitecto ******, Director de Auditoría de Obra, Licenciado ****** integrante de la Dirección de Asuntos Internos y los auditorios de obra Arquitecto ******, Arquitecto ******, Ingeniero ****** e Ingeniero ******, lo hicieron en forma contraria y dolosa a lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas; al excederse en sus funciones y no cumplir cabalmente con sus obligaciones establecidas en el artículo 47; y citarme comparecer en procedimiento administrativo sin decirme de qué se me acusaba y diligenciarlo sin oportunidad de aportar las pruebas que exige la Constitución General de la República; la segunda no aplicar la fianza y no hacer partícipe al responsable en la materia como lo es el Secretario de Obras Públicas y soslayar lo establecido en el Contrato de Obra, al imponer sanciones económicas sin sustento y fuera de sus facultades y de la Ley de Transparencia, la publicidad ante el cabildo y medios de prensa en mi nombre, el procedimiento, las sanciones y multa, violando los artículos 27 y 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública donde se considera información sensible, restringida confidencial (anexo copias del artículo publicado en el periódico local). Me fincó el tesorero municipal C.P. C. ****** un crédito fiscal por la cantidad de $193,419.90 el cual se me ha estado cobrando insistentemente, esto lo podrá comprobar en edición del periódico milenio el día doce de diciembre del año dos mil trece, de ciudad Victoria, Tamaulipas. Ahora bien, se violó con ello, lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece el Derecho de Rectificación o Respuesta, y que a la letra dice: “1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que

se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece la ley. 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga del fuero especial". En este contexto, se violó en mi perjuicio la disposición antes citada, pues no obstante que tengo derecho a que se respetara el sigilo del procedimiento conforme a la ley de transparencia vigente, se estuvo difundiendo por el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en periódicos locales y estatales, la apertura, la audiencia y la conclusión del procedimiento administrativo, lo que trajo como consecuencia la divulgación de información inexacta a la población afectando con ello mi honra y reputación, por tanto, una vez que se resuelva la presente queja solicito recomiende al servidor público denunciado que pida una disculpa pública al suscrito, además de que se me dejen a salvo mis derechos civiles para ejercitar la acción de daños y perjuicios ocasionados a mi persona. IX. Solicito a esa Honorable Comisión se le recomiende al Presidente Municipal y al Ayuntamiento, proceda a suspender en sus funciones al multimencionado Contralor Municipal y se le inicie el proceso administrativo por las causales relatadas y por las acciones realizada con las cuales violó el marco jurídico constitucional, estatal y local vigente, en su calidad de servidor público. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado a Usted ciudadano Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, atenta y respetuosamente pido: **PRIMERO.** Admitir la presente queja a trámite en virtud de que existen suficientes elementos que permiten la intervención de esa Comisión. **SEGUNDO.** Se ordene la notificación de la queja al servidor público señalado como presuntamente responsable y le solicite que rinda un informe y remita la documentación respectiva, sobre los actos que se le reclaman, lo que deberá hacer en el plazo de diez días hábiles. **TERCERO.** Una vez realizado los trámites de ley emita recomendación al servidor público responsable. **CUARTO.** Se me tengan exhibiendo copia simple de la acta número nueve correspondiente a la octava sesión ordinaria del Honorable Cabildo de Nuevo Laredo, Tamaulipas 2013-2016, de la que derivan las violaciones a mis derechos humanos que hago valer en esta queja".

2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo cual se admitió a trámite, procediendo a su radicación con el número 025/2014-Laredo, y se acordó solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe justificado, relacionado con

los hechos motivo de la queja, así como la exhibición de toda la documentación que se hubiera integrado sobre el caso.

3. Mediante oficio sin número SCT-00816/2014, de fecha 25 de marzo de 2014, el C.P. ******, Secretario de la Contraloría y Transparencia, del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, rindió el informe solicitado en el que expuso:

> "******, mexicano, mayor de edad, servidor público, con domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en el cruce de l Avenida Melchor Ocampo y calle Maclovio Herrera sin número, Torre Administrativa Tercer Piso, en esta ciudad; autorizando para los mismos efectos a los CC. Licenciados ****** , ******, ******, ****** y ******; ante Usted respetuosamente expongo: por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 38, 39 y demás relativos y aplicables de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, comparezco ante esta H. Comisión en relación al expediente número 25/2014-L que se lleva en esa dependencia, relacionado con el oficio 164/2013-L, del 10 de marzo del 2014, que se formó en virtud de la queja interpuesta por el C. ******. Por ello, en este escrito, rendiré, tal y como se solicitó, un informe en el que se precise si son ciertos o no los actos que se me imputan, expondré los antecedentes, motivaciones y fundamentos que sirvieron de base a mi actuación y otras cuestiones que es importante citar. El C. ******, divide su queja en 9 puntos en el capítulo de hechos, enumerándolos con números romanos del I al IX. I. Es cierto que quien ahora se queja se desempeñó como Contralor Municipal de Nuevo Laredo durante los años 2011-2013. II. Es cierto que sus funciones concluyeron el 30 de septiembre del 2013. III. Es cierto que fue citado para que compareciera en las instalaciones de esta Secretaría de la Contraloría y Transparencia el día 15 de noviembre del 2013, a fin de llevar a cabo una diligencia de carácter dentro del procedimiento administrativo número ******. IV. Es cierto que a pesar de haber dejado de ser servidor se le inició un procedimiento en su contra con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas y que esta autoridad decidió fincar una sanción administrativa de carácter económico fincando un crédito por la cantidad de $193,419.00 (ciento noventa y tres mil cuatrocientos diecinueve pesos 00/100 M.N.) y demás se le sancionó con una inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un lapso de cinco años. ***En los hechos que el quejoso enumera como V, VI, VII y VIII señala de manera dogmática diversas violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso, citando un gran número de ordenamientos legales. También señala que se violó su derecho humano de un juez imparcial y elabora una serie de agravios que le causa supuestamente el procedimiento sancionador que emitió esta Secretaría de la Contraloría y Transparencia. Después de haber expuesto lo anterior, es preciso hacer las siguientes precisiones: 1. De acuerdo a lo dispuesto por el

artículo 78, fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tamaulipas, este Órgano de Control Interno consideró con diversas constancias que se allegaron a esta Dependencia, que el desempeño del quejoso C. ****** como funcionario público municipal en la Administración Municipal 2011-2013 encuadró en los supuestos que refiere el artículo mencionado, por lo que en tiempo y forma se dio inicio al procedimiento administrativo en contra del C. ******. 2. De acuerdo a las facultades que como Secretario de Contraloría y Transparencia me atribuye la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tamaulipas, se radicó e instruyó el expediente administrativo número ******en contra de ******, por la presunta actuación negligente que como servidor público municipal desempeñó en la administración pública Municipal 2011-2013 de este Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ya que durante su encomienda como funcionario municipal no salvaguardó las obligaciones de legalidad, honradez y eficacia. 3. Resulta importante señalar que cumpliendo debidamente con todas y cada una de las formalidades que señala el artículo 64, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tamaulipas, este Órgano de Control Interno citó al ahora quejoso para el desahogo de la audiencia dentro del expediente administrativo número ****** tal y como lo acredito con la copia del citatorio de fecha 6 de noviembre del 2013. En fecha 08 de noviembre de 2013, el quejoso C. ****** compareció por escrito ante este Órgano de Control Interno a efecto de solicitar copia de las constancias que integran el expediente ******; por lo tanto, resulta totalmente improcedente y fuera de orden que se duela el quejoso por la supuesta violación en su perjuicio la garantía de legalidad, ya que tuvo conocimiento del inicio del procedimiento administrativo instaurado en su contra y de igual manera, se le dio el derecho de aportar en la audiencia las probanzas que estimara pertinentes alegando lo que su derecho conviniere por sí o por medio de su defensor. Dentro del procedimiento que se le instruyó, el ahora quejoso tuvo en todo momento la oportunidad de defenderse en los términos a que se refiere la lay de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, ya que acudió a alegar lo que a sus derechos convino. 4. Cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 64 fracción II de la citada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tamaulipas; este Órgano de Control Interno, emitió resolución definitiva dentro del expediente administrativo ******, misma que fue debidamente notificada de manera personal al quejoso C. ******. Resulta incomprensible, que el quejoso C. ******, quien se desempeñó como Contralor Municipal en la Administración Pública Municipal 2011-2013 y que tenía la facultad de aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tamaulipas, denote un total desconocimiento de la materia engañosa pretende hacer creer a esta H. Comisión la existencia de violación de la garantía de legalidad en su perjuicio por parte de la Secretaría de Contraloría y Transparencia. Por el contrario, resulta importante que el quejoso tenga conocimiento primeramente del concepto o finalidad del sentido de dicha garantía, que

es la siguiente: "Esta garantía consiste, independientemente de la seguridad jurídica que entraña, en la obligación que tienen todas las autoridades de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que la ley les confiere, al expedir cualquiera orden o mandato que afecte a un particular en su persona o en sus derechos, es decir, las garantías de legalidad requiere sustancialmente que las autoridades se atengan precisamente a la ley, en su procedimiento y en sus decisiones que de cualquier modo se refieran a las personas o a sus derechos" Como se acredita con las constancias que acompaño al presente escrito, esta Secretaría de la Contraloría y Transparencia cumplió debidamente con todos y cada uno de los requisitos procesales invocados en la legislación aplicable al caso, por lo que no existe violación de derecho humano alguno en perjuicio del C. ******, debiendo esta H. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas dictar acuerdo de NO RESPONSABILIDAD a favor del suscrito. Toda vez que del escrito inicial de queja existen manifestaciones por parte del C. ****** y de su representado que pudieran encuadrar como delito de acuerdo al Código Penal para el Estado de Tamaulipas, solicito se me expida a mi costa copia certificada de todas y cada una de las actuaciones que integran el presente expediente a efecto de hacerlas llegar y poner del conocimiento a las Autoridades correspondientes. De la misma manera, llama poderosamente la atención el hecho de que esta Comisión no podrá conocer y formular recomendaciones respecto de actos u omisiones de autoridades contra las cuales se encuentre en trámite un recurso ordinario, un juicio de amparo o cuando la queja la esté conociendo otra autoridad. Para estar seguros de que el acto emitido por esta Secretaría de la Contraloría y Transparencia no esté impugnando de alguna manera, le solicito que requiera al quejoso, apercibido de las penas en que incurre quien declare con falsedad, que manifieste si se inconformó legalmente de alguna manera de la resolución emitida en su contra. Es decir, que señale claramente el quejoso si presentó algún medio de defensa de los que hace referencia la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas o bien algún Juicio de Amparo en contra de algún acto emitido dentro del procedimiento que se llevó en esta dependencia. En cuanto al hecho que señala como número IX, me es imposible pronunciarme al respecto, ya que solicita que el suscrito sea suspendido. Lo que si se reitera es que no se ha violado derecho humano alguno. Por el contrario, ya que su conducta encuadró en los supuestos a que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se le sancionó con base en dicha ley, cumpliendo con el derecho positivo vigente en todo momento. Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito: PRIMERO. Se me tenga en tiempo y forma presentando el informe que señala la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, así como se me tengan por recibidos los antecedentes, motivaciones y fundamentos que sirvieron de base a mi actuación. SEGUNDO. Requiera al quejoso a que bajo de decir verdad,

apercibiéndolo de las penas en que incurre quien declare con falsedad, si ha impugnado de alguna manera la resolución que se emitió en su contra por parte de esta Secretaría de la Contraloría y Transparencia dentro del procedimiento número 00******/2014-II. TERCERO. Se expidan a mi costa, copias certificadas de todo lo actuado en el expediente que nos ocupa. CUARTO. Una vez valoradas las probanzas que aporto al presente expediente, se dicte acuerdo de NO RESPONSABILIDAD a favor del suscrito".

4. Una vez recibido el informe rendido por la autoridad señalada como responsable con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a esta Institución, se notificó al quejoso ******, y por considerarse procedente se declaró la apertura de un período probatorio por el plazo de diez días hábiles común a las partes.

Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron las siguientes probanzas:

5.1. Pruebas ofrecidas por el quejoso:

5.1.1. Copia fotostática del citatorio de fecha 06 de noviembre de 2013, signado por el C.P.C. ******, Secretario de la Contraloría y Transparencia, dirigido al C. ******, a efecto de que compareciera el día 15 de noviembre del año 2013, a las 12:00 horas a las oficinas de la Secretaría de Contraloría y Transparencia a efecto de llevar a cabo una diligencia dentro del procedimiento administrativo número ******.

5.1.2. Fotocopia del escrito de fecha 27 de noviembre del 2013, signado por el C. ******, Contratista, dirigido al C. Lic. ******, Presidente Municipal, mediante el cual solicita el pago de diversos trabajos realizados a favor del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

5.1.3. Copia del oficio CIC-26/13 de fecha 26 de noviembre del 2013, signado por el C. Ing. ******, Director Responsable de Obra, dirigido al C. ******, mediante el cual le remite el dictamen técnico de los volúmenes y conceptos de la obra denominada “Remodelación del Parque la Junta”.

5.1.4. Copia fotostática de 6 notas periodísticas de distintas fechas, publicadas en diferentes rotativos.

5.1.5. Fotocopia del acta número 9 correspondiente a la octava sesión ordinaria del Honorable Cabildo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de fecha 06 de diciembre del 2013.

5.1.6. Copia de la cédula de notificación de fecha 25 de noviembre del 2013, elaborada por el C. ******, adscrito a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, mediante el cual notifica la resolución definitiva, emitida por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, derivada del procedimiento administrativo número ****** al C. ******.

5.1.7. Copia fotostática de la resolución de fecha 19 de noviembre del 2013, signada por el C.P.C. ******, Secretario de la Contraloría y Transparencia, del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, determinación emitida dentro del procedimiento administrativo ******.

5.1.8. Escrito de fecha 24 de marzo del 2014, signado por el C. ******, el cual continuación se transcribe:

> “… que por medio del presente escrito, vengo a proporcionar el cargo y domicilio de las personas que mencioné en mi escrito de queja de fecha siete de marzo del dos mil catorce, para que esa Honorable Delegación Regional, se encuentre en posibilidad de solicitar los informes complementarios respectivos, a los Arquitectos ****** y ******, y a los Ingenieros ****** y ******, quienes se desempeñan como “Auditores de Obra” pertenecientes a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con domicilio conocido en la Torre Administrativa ubicada en la calle Vicente Guerrero y Maclovio Herrera del plano oficial de esta localidad.

Por otra parte, me veo en la imperiosa necesidad de ampliar la queja interpuesta, ahora en contra del Director de Ejecución Fiscal del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con domicilio en la Torre Administrativa Municipal, planta baja, ubicada en las calles Maclovio Herrera y Ocampo, Sector Centro de esta ciudad, ya que en represalia a la solicitud que hice con anterioridad ante ese Organismo, en lo que me dolí de hechos que considero violatorios de mis derechos humanos, por parte del Secretario de la Contraloría y Transparencia del R. Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, éste, ordenó al mencionado Director de Ejecución Fiscal, ejecutar la resolución de fecha diecinueve de noviembre del dos mil trece, dentro del expediente número ******, en la que se me requiere el pago de la cantidad de $193,419.90 (ciento noventa y tres mil cuatrocientos diecinueve pesos 90/100 Moneda Nacional), argumentando que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 65 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, y que por tal razón se me requiere para que en un término que no deberá de exceder de seis días de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 del mismo ordenamiento jurídico, realice el pago de las multas y sus accesorios, debidamente actualizados a la fecha en que se realice el pago mismo, en las oficinas dela Secretaría de Tesorería y Finanzas de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ubicadas en la Torre Administrativa Municipal, planta baja, con domicilio en Maclovio Herrera y Ocampo de esta ciudad. Además apercibiéndome de que en caso de ser omiso al oficio número DEF/069/2014, de fecha diecinueve de febrero del dos mil catorce, se procedería en mi contra a embargar bienes bastantes y suficientes que garanticen el pago de las multas, así como los accesorios correspondientes, lo anterior fundándose en los numerales 134, fracción I, 136, 137, 145 y 146 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas; el cual a todas luces se me notificó como venganza de la solicitud de investigación que realicé ante esa Comisión, hasta el día veinte de marzo del año en curso, lo que antecede lo acredito con copia simple del original que se refiere al oficio en comento y a su notificación, los cuales solicito sean cotejadas por ese Organismo y sean devueltas al que suscribe, para promover en otra instancia la afectación que están realizando a mi esfera jurídica como gobernado. Quiero hacer del conocimiento de ese Honorable Organismo, que la resolución que se me pretende ejecutar, no se encuentra firme, pues el que suscribe interpuse el recurso correspondiente ante el Tribunal Fiscal del Estado de Tamaulipas, por tanto, la ejecución es un atentado más a mis derechos humanos, por lo que de la manera más atenta, con fundamento en lo dispuesto en el arábigo 40 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, solicito a Usted Delegada Regional, pida a los servidores públicos tomen las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o reclamadas o de daños de difícil reparación al que suscribe. Del mismo modo, y con apoyo jurídico en los artículos 51 y 52, segundo párrafo, del Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, solicito se me tenga ampliando la queja y proceda a recabar el informe correspondiente. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado

a Usted Ciudadana Delegada Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, atenta y respetuosamente pido: PRIMERO. Se me tenga proporcionando el cargo o comisión de las personas que se mencionaron en mi escrito de queja, para que ese Organismo se encuentre en posibilidad de requerirles el informe complementario correspondiente. SEGUNDO. Se me tenga ampliando la queja en los términos del presente escrito y se ordene la notificación de la misma al Director de Ejecución Fiscal del R. Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, señalando como presunto responsable y le solicite que rinda un informe y remita la documentación respectiva, sobre los actos que se le reclaman, lo que deberá hacer en el plazo de diez días hábiles. TERCERO. Una vez realizados los trámites de ley emita recomendación al servidor público responsable. CUARTO. Se me tengan exhibiendo copia simple del oficio número DEF/069/2014, de fecha diecinueve de febrero del dos mil catorce, así como del citatorio y notificación del mismo, de la que derivan las violaciones a mis derechos humanos que hago valer en esta ampliación de queja".

5.1.9. Copia fotostática del acta de notificación de fecha 20 de marzo del 2014, elaborada por el C. Lic. ******, mediante el cual se le comunica el oficio de requerimiento de pago número DEF/069/2014, de fecha 19 de febrero del 2014, signado por el C. Lic. ******, Director de Ejecución Fiscal adscrito a la Secretaría de Tesorería de Finanzas de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

5.1.10. Fotocopia del citatorio de fecha 19 de marzo del 2014, elaborado por el C. Lic. ******.

5.1.11. Copia del oficio DEF/069/2014, de fecha 19 de febrero del 2014, signado por el C. LIC. ******, Director de Ejecución Fiscal, dirigido al C. C.P. ******, mediante el cual se le solicita realice el pago de las multas y accesorios.

5.1.12. Escrito de fecha 10 de abril del 2014, signado por el C. ******, el cual a continuación se transcribe:

"… Que por medio del presente escrito, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, vengo en tiempo y forma legal a ofrecer las siguientes: PRUEBAS: 1. CONFESIONAL EXPRESA: Que se deriva de lo

asentado por el C. ******, en su informe rendido ante esa H. Comisión Regional de Derechos Humanos, de fecha veinticinco de marzo de dos mil catorce, en el que expresa lo siguiente: "I. Es cierto que quien ahora se queja se desempeñó como Contralor Municipal de Nuevo Laredo, durante los años 2011-2013. II. Es cierto que sus funciones concluyeron el 30 de septiembre del 2013. III. Es cierto que fue citado para que compareciera en las instalaciones de esta Secretaría de la Contraloría y Transparencia el día 15 de noviembre del 2013, a fin de llevar a cabo una diligencia de carácter administrativo dentro del procedimiento administrativo número ******. IV. Es cierto que a pesar de haber dejado de ser servidor público se le inició un procedimiento en su contra con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas y que esta autoridad decidió fincar una sanción administrativa de carácter económico fincando un crédito por la cantidad de $193,419.00 (ciento noventa y tres mil cuatrocientos diecinueve pesos 00/100 M.N.) y además se le sancionó con una inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un lapso de cinco años…". De la citada confesión se advierte que efectivamente soy víctima de la violación de mis derechos humanos indicados en mi escrito de queja, pues al no tener la calidad específica cualitativa de servidor público no puedo ser juzgado como tal y por consecuencia lógica no soy sujeto de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, por tanto, esa Comisión deberá emitir en su momento la recomendación correspondiente. En cuanto a las manifestaciones realizada por el Secretario de Contraloría y Transparencia, me permito manifestar lo siguiente: 1. Es manifiesto el desconocimiento de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, por parte del servidor público señalado, pues ésta norma jurídica no la pudo aplicar en tiempo y forma como expresa, ya que ésta la puede aplicar durante el ejercicio de sus funciones y carece él de toda competencia para hacerlo, en razón de que en términos de los numerales 3 y 4 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, en concordancia con el arábigo 89 del Código Municipal, corresponde al Ayuntamiento la aplicación de sanciones, es decir al cuerpo colegiado electo, es decir al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos. 2. En el punto número 2 de su informe, de nueva cuenta manifiesta su ignorancia en las facultades que le confiere el artículo 72 quáter del Código Municipal, dentro de las cuales se puede apreciar que en ninguna le faculta para resolver procedimientos administrativos. 3. En cuanto a lo expresado resulta ocioso expresamente respecto a que se cumplieron las formalidades esenciales que señala el artículo 64 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, pues es evidente que no fue así, además de que si se violentaron mis derechos humanos en razón de lo manifestado en mi escrito de queja. 4. En cuanto al número 4 del informe, manifiesto categóricamente que quien desconoce la materia administrativa es el servidor público denunciado, ya que de lo contrario al ser diestro en la misma, no se atrevería a realizar los actos que ha materializado de manera ilegal. Además, quiero dejar bien claro

que jamás me he dirigido de manera dolosa y engañosa ante esa Honorable Comisión, ya que suponiendo sin conceder que así lo hubiera realizado, el servidor público no hubiera confesado la totalidad de los hechos de mi queja. Por otra parte, quiero solicitar a esa Honorable Comisión que no pase inadvertida la amenaza que realiza el funcionario de que me acusará ante la autoridad correspondiente por un delito que evidentemente no existe, pero dicha intimidación tiene por objeto que el que suscribe desista de esta queja lo que jamás haré. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado a Usted Ciudadana Delegada Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, atenta y respetuosamente pido: PRIMERO. Se me tenga ofreciendo pruebas y manifestando lo que a mi derecho corresponde".

5.1.13. Escrito de fecha 29 de abril del 2014, signado por el C. ******, el cual a continuación se transcribe:

"… Que por medio del presente escrito, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 38, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, vengo en tiempo y forma legal a ofrecer las siguientes: PRUEBAS: 1. Copia simple de documentales públicas que consisten en el mandamiento de ejecución de fecha dos de abril de dos mil catorce, el que se ejecutó el día tres del mismo mes y año, por personal de la Dirección de Ejecución Fiscal del Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en los que se aprecia el embargo de mi propiedad ****** de esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, esta ejecución es consecuencia del procedimiento administrativo incoado en mi contra. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado a Usted Ciudadana Delegada Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, atenta y respetuosamente pido: ÚNICO. Se me tenga ofreciendo pruebas y manifestando lo que a mi derecho corresponde".

5.1.14. Copia fotostática de los citatorios de fechas 2 y 19 de marzo del 2014, signados por el C. Lic. ******, Notificador y Ejecutor de la Dirección de Ejecución Fiscal, dirigidos al C. ******.

5.1.15. Fotocopia del acta de notificación de veinte de marzo del 2014, firmado por el C. Lic. ******, Notificador y Ejecutor de la Dirección de Ejecución Fiscal.

5.1.16. Copia del oficio DEF/069/2014, de fecha 19 de febrero del 2014, signado por el C. Lic. ******, Director de ejecución Fiscal, dirigido al C.P. ******.

5.1.17. Copia fotostática del acta de requerimiento de pago de fecha 3 de abril del 2014.

5.1.18. Fotocopia del acta de embargo de fecha 03 de abril del 2014, elaborada por personal de la Secretaría de Contraloría y Transparencia.

5.1.19. Copia del oficio número DEF/123/2014, de fecha 02 de abril del 2014, signado por el C. C.P. ******, titular de la Secretaría de Tesorería y Finanzas de Nuevo Laredo, Tamaulipas, mediante el cual se ordena el mandamiento de ejecución por no haber garantizado o pagado el crédito fiscal dentro del plazo que señala el artículo 65 y 146 del Código Fiscal para el Estado de Tamaulipas.

5.2. Pruebas aportadas por la autoridad señalada como responsable:

5.2.1. Oficios números 00785/2014, de fecha 19 de marzo del 2014, signados por los CC. ******, ******, ******, los cuales a continuación se transcriben:

> "Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, comparezco ante esta H. Comisión a efecto de cumplir en tiempo y forma y rendir mi informe que deriva del expediente de queja número 025/2014-L; a lo que manifiesto: NO ES CIERTO LO QUE MENCIONA EL QUEJOSO EN SU ESCRITO INCIAL DE QUEJA; toda vez que aún y cuando tuve conocimiento del procedimiento administrativo que le fue instaurado al C.P.******, mi carácter dentro del mismo no fue autoridad ordenadora, sino solamente de testigo. Así mismo, y como lo refiere el quejoso, al considerar que el procedimiento administrativo número ****** instaurado en su contra por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, lo fue en forma contraria a como lo establece la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Tamaulipas, es de decirse que el quejoso se desempeñó como Contralor Municipal en la pasada Administración Pública Municipal 2011-2013; por consiguiente, debe

de tener conocimiento de la existencia de los diversos medios de defensa que refiere la Ley de Servidores Públicos para el Estado de Tamaulipas para recurrir la sanción impuesta; por lo que solicito a esta H. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, requiera al quejoso para que manifieste bajo protesta de decir verdad, si previo a la presentación de su escrito de queja ante esta Comisión, presentó algún medio de defensa o inconformidad ante autoridad diversa a ésta, respecto a la resolución que derivó del expediente administrativo número ****** que le fue instruido al C.P. ****** por presuntas irregularidades cometidas durante el tiempo en que se desempeñó como servidor público municipal, así como de una actuación negligente e inexcusable en el mismo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a esta C. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, lo siguiente: PRIMERO. Se me tenga en tiempo y forma rindiendo mi informe que señala el artículo 36 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. SEGUNDO. Se requiera al C.P. ****** para que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD informe a esta autoridad si previo a la presentación de la presente queja, presentó algún medio de defensa de los que refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tamaulipas, ante Autoridad diversa a esta H. Comisión. TERCERO. Se sirva Usted acordar de conformidad lo solicitado".

5.2.2. Oficio número SCT-00832/2014, así como dos oficios números, todos de fecha 28 de marzo del 2014, signados por los CC. Ing. ******, Ing. ****** y Arq. ******, los cuales a continuación se transcriben:

"… Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, comparezco ante esta H. Comisión a efecto de cumplir en tiempo y forma y rendir mi informe que deriva del expediente de queja número 025/2014-L; a lo que manifiesto: ES FALSO LO QUE MENCIONA EL QUEJOSO EN SU ESCRITO INCIAL; toda vez que no tuve participación y/o intervención alguna dentro del expediente administrativo ****** que le fue instruido al C.P. ******, por presuntas irregularidades cometidas durante el tiempo en que se desempeñó como servidor público municipal, así como de una actuación negligente e inexcusable en el mismo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, ante esta H. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIAPS, solicito: PRIMERO. Se me tenga en tiempo y forma rindiendo mi informe que señale el artículo 36 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. SEGUNDA. Se sirva Usted acordar de conformidad lo solicitado".

5.2.3. Copia fotostática certificada del expediente número 004/2014-II, radicado ante el Órgano de Control Interno, en contra del C. ******, del que destacan las siguientes atribuciones:

a) Oficio número SCT-00229/2013 de fecha 6 de noviembre del 2013, signado por el Arq. ******, Director de Auditoría de Obra, dirigido al C. Lic. ******, Director de Asuntos Internos, mediante el cual le envía una relación de contratos de obra pública con la finalidad de que se investigue si existen irregularidades en los diversos expedientes conformados, toda vez que se había detectado que el personal de auditoría de obra interviene en los procedimientos de revisión de obra no firmaron ni fueron requeridos para el procedimiento de revisión.

b) Constancia de fecha 6 de noviembre del año 2013, signada por el C. P.C. ******, Secretario de la Contraloría y Transparencia, en la que se asentó que se tenía por recibido el oficio que precede.

c) Auto de inicio y razón de registro de procedimiento administrativo, de fecha 6 de noviembre del 2013.

d) Auto de fecha 6 de noviembre del 2013, en el que se asentó que para lograr la debida integración del expediente número ******, resultaba necesario la declaración del presunto responsable******, el cual se desempeñó como Contralor Municipal, señalándose para tal efecto el día 15 de noviembre del 2013, a las 12:00 horas; girándose el citatorio correspondiente.

e) Escrito de fecha 8 de noviembre del 2013, signado por el C. ******, mediante el cual solicita copia fotostática del procedimiento administrativo ******; a la anterior promoción le recayó el acuerdo mediante el cual se le expide a su costa copia simple de lo actuado.

f) Oficio número CM-04331/2013, de fecha 27 de septiembre del 2013, signado por el C.P. ******, Contralor Municipal, dirigido al C.P. ******, Tesorero Municipal.

g) Oficio sin número de fecha 13 de noviembre del 2013, signado por el C. Arq. ******, Director de Auditoría de Obra, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, dirigido al C. ******, Secretario de la Contraloría y Transparencia, mediante el cual le informó sobre la revisión física y documental del contrato LP-

DEPORTES-FFM-09/13-8312 concerniente a la rehabilitación del parte de béisbol "La Junta".

h) Acta administrativa de audiencia de fecha 15 de noviembre de 2013.

i) Escrito de fecha 6 de noviembre del 2013, signado por el C. ******, mediante la cual rinde su declaración en relación al procedimiento administrativo Nº. ******.

j) Resolución de fecha 19 de noviembre del 2013, emitida dentro del expediente administrativo número ******. En la que se determinó que procedía el procedimiento instruido en contra del C.P. ******, por el incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47 fracción I y XXIV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, determinándose además que eraresponsable administrativamente de las imputaciones existentes en su contra y que se le imponía como sanción administrativa la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de 5 años, de igual manera se le imponía una sanción económica por el monto de $193,419.90.

k) Oficio número SCT-00287/2013, de fecha 25 de noviembre del 2013, signado por el C.P.C. ******, Secretario de la Contraloría y Transparencia, dirigido al C.P. ******, Secretario de Administración, mediante el cual le informa que dentro del expediente administrativo ******, instruido en contra del C. ******, quien fungió como Contralor Municipal en la administración municipal 2010-2013 se dictó determinación.

l) Cédula de notificación de fecha 25 de noviembre del 2013, signada por el C. Lic. ******.

m) Oficio número SCT-00292/2013, de fecha 27 de noviembre del 2013, signado por el C.P.C. ******, Secretario de la Contraloría y Transparencia, dirigido al C. Lic. ******, mediante el cual le envía la resolución dictada dentro del procedimiento administrativo número ******.

n) Oficio número SCT-00310/2013, de fecha 3 de diciembre del 2013, signado por el C.P.C. ******, Secretario de la Contraloría y Transparencia, dirigido al C. Lic. ******, Director de Ejecución Fiscal, mediante el cual le informa que la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo número ******, fue

notificada por esa dependencia el 25 de noviembre del 2013 personalmente al C. ******.

5.3. Pruebas obtenidas por este Organismo.

5.3.1. Constancia de fecha 27 de marzo del 2014, elaborada por personal de este Organismo la cual a continuación se transcribe:

> "Que me constituí en la Secretaría de Contraloría y Transparencia del R. Ayuntamiento de esta ciudad, entrevistándome con el Lic. ******, quien se desempeña como Coordinador de Asuntos Internos de dicha Secretaría, a quien le hice ver el objeto de mi presencia, que era el de notificar la queja número 025/2014-L, al C. Arquitecto ******, iniciado con motivo de la denuncia presentada por el C. ****** mediante la cual se duele de ejercicio indebido de la función pública lo cual se traduce en violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica por parte del Secretario de la Contraloría y Transparencia y otros, por lo que hago constar; que el C. Licenciado ****** me indicó que desde que inició esta nueva administración el Arquitecto ******, ya no se encontraba laborando en esa Secretaría ni en esa administración municipal, desconociendo en donde se pueda localizar, en virtud de lo anterior procedí a retirarme de dicha Secretaría".

5.3.2. Constancia de fecha 6 de mayo del 2014, elaborada por personal de este Organismo, la cual a continuación se transcribe:

> "Que me entrevisté con el Licenciado ******, Abogado del C. ****** a quien le solicité me informara si se había interpuesto recurso alguno o amparo en contra del mandato de ejecución de fecha 02 de abril del presente año mismo que fuera ejecutado el día 03 del mismo mes y año por parte del personal de la Dirección de Ejecución Fiscal del Ayuntamiento de esta ciudad situación que quedó de manifiesto en el escrito de fecha 29 de abril del presente año y que fuera presentado por el C. ****** y agregado a las actuaciones de la presente queja, hago constar que me fue informado por el C. Lic. ******que efectivamente se promovió en contra de esta orden de ejecución el amparo ****** ante el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en esta ciudad en el cual se les concedió la suspensión provisional y definitiva, señalando que actualmente dicho amparo se encuentra en trámite".

5.3.3. Acta de fecha 28 de agosto del 2014, elaborada por personal de este Organismo, la cual a continuación se transcribe:

"Que en fecha 28 de agosto del presente año, me constituí formalmente al despacho del Lic. ******. en el domicilio de Morelos · 1050 sector centro en la ciudad, quien funge como representante legal del Sr. ******, con el objeto de solicitarle copias del juicio de nulidad, interpuesto ante el Tribunal Fiscal, así como del amparo Nº ******/2014-2 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito, en el cual se le concede el amparo y protección de la justicia federal, en cuanto a la ejecución de la resolución dictada por la Contraloría Municipal de esta ciudad, por lo que me atendió una señora quien dijo ser su asistente señalándome que el Licenciado ******, estaba fuera de la ciudad y que regresaría hasta el día lunes 01 de septiembre del presente año, sin embargo, se le dejó razón sobre la solicitud de copias correspondiente".

5.3.4. Constancia de fecha 01 de septiembre del 2014, elaborada por personal de esta Organismo, la cual a continuación se transcribe:

"Que en la fecha 01 de septiembre del presente año, me comuniqué telefónicamente al número 8677128822, despacho del Lic. ******., con el domicilio de Morelos · 1050 sector centro en la misma ciudad, quien funge como representante legal del Sr. ******, con el objeto de solicitarle copias del juicio de nulidad interpuesto ante el Tribunal Fiscal, así como del amparo ******, tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito, en el cual se le concede el amparo y protección de la justicia federal, en cuanto a la ejecución de la resolución dictada por la Contraloría Municipal de esta ciudad, por lo que me atendió un señor quien dijo ser trabajador del despacho señalándome que el licenciado Miranda, estaba en una diligencia en el juzgado y que no tenía hora de regreso, por lo que se le dejó razón sobre la solicitud de copias correspondientes, manifestándome que llegando al despacho daba el recado".

5.3.5. Acta de fecha 28 de noviembre del 2014, elaborada por personal de este Organismo, la cual a continuación se transcribe:

"Que me comuniqué al número telefónico (867) 712-84-74 mismo que aparece en la hoja membretada mediante el cual el C. ****** expuso hechos presuntamente violatorios de derechos humanos por parte de autoridades del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo anterior a efecto de informarle al C. ****** el estado que guarda el expediente de queja 025/2014-L, lo anterior no fue posible debido a que nadie contestó la llamada telefónica".

5.3.6. Constancia de fecha 01 de diciembre del 2014, elaborada por personal de este Organismo, la cual a continuación se transcribe:

"Que me comuniqué al número telefónico (867) 712-84-74 mismo que aparece en la hoja membretada mediante el cual el C. ****** expuso hechos

presuntamente violatorios de derechos humanos por parte de autoridades del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo anterior a efecto de informarle al C. ****** el estado que guarda el expediente de queja 025/2014-L, lo anterior no fue posible debido a que nadie contestó la llamada telefónica".

5.3.7. Acta de fecha 3 de diciembre del 2014, elaborada por personal de este Organismo, la cual a continuación se transcribe:

"Que me comuniqué al número telefónico (867) ******-84-74 mismo que aparece en la hoja membretada mediante el cual el C. ****** expuso hechos presuntamente violatorios de derechos humanos por parte de autoridades del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, contestando a mi llamada una persona del sexo femenino a quien le pregunté por el señor ******, a lo que la persona se queda callada, después le pregunto si era el despacho el Lic. ******, a lo que me respondió que sí, explicándole que el C. ****** había presentado una queja ante este Organismo y que en la hoja venían los datos del despacho, y que el motivo de mi llamada era para hablar con el señor ****** e informarle el estado actual de su expediente de queja, señalándome la persona del sexo femenino quien dijo llamarse ****** y ser la secretaria que de momento no se encontraban el abogado ****** ni el C. ******, pero que le dejara mis datos así como mi número telefónico para que se contactaran con el suscrito, los cuales procedo a facilitarle, agradeciendo por las atenciones brindadas".

5.3.8 Documental consistente en copia del correo electrónico de fecha 14 de enero del 2015, firmado por el C.P. ******, y enviado originalmente al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que a la letra dice:

*"… Recibí oficio del Dr. ******, Director encargado del Despacho de la Sexta Visitaduría General, en la cual recomienda que me presente en el domicilio de la calle Maclovio Herrera N°. 3320 de la ciudad de Nuevo Laredo, para que aporte toda la información que se requiera. Toda la documentación solicitada por escrito por esa dependencia fue presentada en tiempo y forma el pasado mes de febrero del 2014. Posteriormente estuve visitando a la representante de la Delegación de Nuevo Laredo, cada 15 días, hasta que el expediente quedó integrado en su totalidad y fue enviado a la CODHET de ciudad Victoria, Tamaulipas, continúe visitando a la Delegada para informarme como iba el trámite y su respuesta siempre fue que iba bien y que no tardaría en salir la resolución. Pasado tanto tiempo en el mes de agosto del 2014 viajé a ciudad Victoria a checar como iba la resolución y la sorpresa es que la 2ª. Visitadora me informa que el expediente se encontraba archivado porque no procedía*

*la denuncia, le comenté el porque no había informado por escrito que la denuncia era improcedente y le comenté que me habían negado la Secretaría de Contraloría y Transparencia la documentación que prueba mi inocencia sobre un procedimiento administrativo fincado en la ilegalidad y violando todos los preceptos legales. Fue cuando me comentó que si ampliaba la denuncia, mismo que no quise hacer para que no durmiera el expediente uno o dos años más, le informé a la Delegada Estatal en Nuevo Laredo que informara a la 2ª. Visitadora que no iba ampliar la denuncia, sino que iba a elaborar otra denuncia por hechos de ocultamiento de documentación, lo cual la 2ª. Visitadora responde que no hiciera otra denuncia sino que ampliara la anterior. Mi pregunta es: ¿Por qué se me informa que no procede mi denuncia y posteriormente me informan que la amplíe?, y es mi decisión no ampliarla ni presentar una nueva y que se emita la resolución sobre las bases de la denuncia original "supuestamente improcedente". La denuncia original tiene todos los elementos y pruebas y en la cual existe un escrito del Secretario de la Contraloría y Transparencia donde acepta que se cometió lo que mencioné en la denuncia pero que como su servidor estaba declarando en falso me iba a levantar una denuncia penal. ¿Qué esto no es amenaza e intimidación?, y en la misma denuncia aparece el escrito antes mencionado. Me he comunicado vía correo electrónico con el titular de la CODHET, Mtro. ******, quien ha sido omiso a mis solicitudes, protegiendo a la 2ª. Visitadora y a la Delegada en Nuevo Laredo y también a su persona. A quien tengo que acudir para se me de solución a mi denuncia?, e independientemente emitir una denuncia de carácter administrativo en contra de estos malos funcionarios que están también ocultando documentación, no cumplir con los tiempos de emitir la resolución en tiempo y forma y por confabulación de funcionarios en perjuicio de los derechos humanos de un ciudadano. Anexo oficio de la 6ª. Visitaduría, y comentar por último que he solicitado por este medio al titular de la CODHET que es lo que requiere y sólo le ha recomendado a un subalterno en 2 ocasiones que se comunique con su servidor lo cual el subordinado no lo ha hecho nunca. Y que la documentación que soliciten sea solicitada por escrito no por teléfono como lo han estado haciendo con mi abogado como solicitando documentación que no tiene nada que ver con la denuncia de derechos humanos. Por lo que además queda velada una posible corrupción por no solicitar por escrito tales documentos y por estar al servicio de las autoridades municipales. En espera de sus amables comentarios y contar con la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos por daños y abuso de autoridad no*

cumpliendo con los preceptos de la Ley de Derechos Humanos y la de responsabilidad de los servidores públicos."

5.3.9 Documental consistente en oficio número 70612, signado por el C. Licenciado ******, Director General Encargado del Despacho de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el cual remite el expediente número CNDH/6/2014/7374-R, relativo a las actuaciones que corresponden al presente expediente de queja.

5.4 Documental consistente en correo electrónico de fecha 12 de enero del 2015, enviado por el C.P. ******, que a continuación se transcribe:

"… Ninguna dependencia gubernamental de carácter federal ha dejado de contestar mis solicitudes a través de este medio y por envío de correspondencia escrita a través de oficios. Es una lástima que funcionarios del gobierno del Estado tomen este tipo de actitud misma que provocaría una denuncia por negligencia y por omisión de sus funciones. No tengo que recordarle que la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas tipifica delitos.

6. Una vez agotada la etapa probatoria, el expediente quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis se desprenden las siguientes:

C O N C L U S I O N E S

I. Este Organismo es competente para conocer y resolver la queja interpuesta por el **C. ******, por tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a servidores públicos que prestan sus servicios en esta entidad federativa, al tenor de lo dispuesto por los artículos 1 y 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

II. Analizado la narración del escrito de queja presentado por el **C. ********, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas en adelante identificada sólo como “la Comisión (CODHET)”, abrió el Expediente N° 025/2014-L de fecha 10 de marzo de 2014 por la comisión de presuntas vulneraciones a los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad cometidos por servidores públicos del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas.Por lo cual, una vez que se revisaron las constancias que obran en dicho expediente se estima la imposibilidad de recomendar respecto de la totalidad delas alegaciones planteadas, ya quegran parte fueron materia deuna *resolución administrativa* y además actualmente materia deun recurso pendiente de resoluciónante el Tribunal Fiscal del Estado, lo anterior con fundamento en los artículos 45 y 9, fracción V de la Ley y el artículo 13, fracción V del Reglamento Interno que regulan a este Organismo. No obstante, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, fracción III, 50 de la Ley y 67 del Reglamento Interno de esta Institución, resulta procedente emitir **OPINIÓN** sobre estos aspectos, mismos que serán abordados más adelante. Adicionalmente, la Comisión (CODHET) encuentra elementos para pronunciarse mediante **RECOMENDACIÓN**con relación a la vulneración del derecho al honor alegada por el quejoso, toda vez que los actos no fueron materia de la resolución del Procedimiento Administrativo número ****** y su consecuente impugnación, por lo que decideentrar a su análisis y emitir resolución en su momento oportuno.

O P I N I Ó N:

III. De las alegaciones presentadas por el quejoso se desprenden las siguientes vulneraciones (debido proceso y seguridad jurídica) sobre las que este Organismo entra a su estudio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, fracción III, 50 de la Ley y 67 del Reglamento Interno de esta Institución. Para mejor claridad se transcribe el artículo 50 de la Ley referida:

> *En los casos a que se refiere el artículo 9 de esta ley y de quejas extemporáneas, la Comisión podrá emitir opiniones en relación con los actos y omisiones provenientes de autoridades y servidores públicos que sean violatorios de derechos humanos.*

Esta facultad será de naturaleza discrecional y la Comisión podrá ejercerla tomando en cuenta la gravedad o la urgencia del caso con el objeto de impedir o de extinguir violaciones a los derechos humanos.

a) En primer término, destaca el **citatorio** para llamar a procedimiento administrativo al quejoso, así como las alegaciones consistentes en no haber sido correctamente emplazado, este Organismo estima que si bien el contenido de dicho citatorio se ampara en el artículo 64, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, y materialmente el quejoso tuvo la oportunidad de conocer, defenderse y contestar la acusación que le realizó el ayuntamiento, lo cierto, es que el documento debió ser claro con respecto a la causa de la presunta responsabilidad que se le imputaba al quejoso, pues dicho documento en ningún momento precisaba los contratos materia de las irregularidades (citatorio de fecha 6 de noviembre de 2013). Esto es relevante porque cualquier vicio en el llamamiento a un procedimiento de esta naturaleza constituye una vulneración a todo *debido proceso*.

Época: Novena Época
Registro: 178943
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXI, Marzo de 2005
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.4o.A. J/36
Página: 1007

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ACTO QUE LO INICIA ES EFICAZ A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN.

Los procedimientos que establece la ley para desarrollar la actividad administrativa del Estado deben sujetarse a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, atento a lo cual el acto administrativo, que es la exteriorización de la voluntad del Estado con la que culminan dichos procedimientos, tiene como uno de sus elementos de eficacia la publicidad, que asume la forma de notificación cuando sus efectos son particulares. Por tanto, la notificación es la forma en que el acto administrativo se comunica a

las partes como consecuencia de esa exteriorización, pues no es suficiente que se declare la voluntad de la administración, sino que es imperativo que llegue a la órbita de los particulares o administrados para que produzca sus efectos. **Es así que a través de la notificación los particulares afectados conocen el contenido del acto y éste adquiere eficacia porque su conocimiento les permite reaccionar en su contra. Por consiguiente,la eficacia se consuma en el momento en que el interesado a quien va dirigido el acto toma conocimiento de su existencia, contenido, alcance y efectos vinculatorios, no antes, ni desde la fecha de su emisión, ya que, en este caso, sólo podría tener efectos en sede administrativa.**

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Revisión fiscal 1603/2001. Contralor Interno en la Procuraduría General de la República, por sí y en representación del Titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 12 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude TronPetit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.
Revisión fiscal 208/2002. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, en ausencia del Titular del Órgano de Control en la mencionada procuraduría y en representación del Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 11 de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude TronPetit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.
Amparo directo 445/2003. Autodistribuidora, S.A de C.V. 25 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez.
Revisión fiscal 10/2004. Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 28 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude TronPetit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Revisión fiscal 75/2004. Administradora Local Jurídica del Norte del Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 2 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude TronPetit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez.
Nota: Por ejecutoria del 24 de abril de 2013, la Segunda Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 19/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

Este criterio resulta relevante porque si bien parte de la importancia de la notificación, también precisa que *"la eficacia se consuma en el momento en que el interesado a quien va dirigido el acto toma conocimiento de su existencia, contenido, alcance y efectos vinculatorios, no antes, ni desde la fecha de su emisión*," por lo tanto, en el caso concreto la eficacia implicaba que el citatorio contuviera la especificación de la causa de su presunta responsabilidad desde el inicio, lo cual no ocurrió, sino que este tuvo que enterarse después por la inercia del procedimiento. En este sentido, la Comisión (CODHET) considera relevante señalar que esta corrección no deja de constituir una irregularidad en la función pública que no debería manifestarse y por lo tanto debe señalarse a la autoridad.

b) Ahora bien, por lo que se refiere a la **resolución derivada del Juicio de Amparo ******** relativa a la ilegal notificación que realizó la Secretaria de Tesorería y Finanzas y a Dirección de Ejecución Fiscal del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas y que derivo del Procedimiento Administrativo número ****** iniciado por la Secretaria de la Contraloría y Transparencia de dicho Ayuntamiento, esta Comisión (CODHET) estima necesario pronunciarse en la misma línea que se argumenta en el presente juicio, ya que si bien en su momento no se pudo entrar al fondo del asunto por las justificaciones legales esgrimidas en su momento (acuerdo de improcedencia de fecha 25 de marzo de 2014), lo cierto, es que dicha vulneración ya fue acreditada por dicha autoridad Federal y guarda relación con la materia de nuestro expediente. En este sentido, la autoridad sostiene en su resolución lo siguiente:

> *La norma en consulta, establece que cuando se trata de notificaciones de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, como lo es el requerimiento de pago y embargo de un crédito fiscal, la diligencia se entenderá con el destinatario, o con la persona que se encuentre en el domicilio, o con un vecino y, en caso de que éstos últimos se negaren a recibir la notificación respectiva, sólo entonces, esa notificación se hará por medio de instructivo que deberá fijarse en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón*

de tal circunstancia para dar cuenta al jefe de la oficina que ordenó la diligencia.
*En el asunto que nos ocupa, del análisis a las constancias que obran en autos, se advierte que el notificador adscrito a la Dirección de Ejecución Fiscal del Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que practicó la diligencia de requerimiento de pago y embargo con motivo del crédito fiscal contenido en el oficio **********, de dos de abril del año en curso, derivado del expediente **********, que se instauró en contra del aquí quejoso, no cumplió cabalmente con las formalidades previstas en el artículo 136 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas.*
[…]
*Como se puede ver, el notificador adscrito a la autoridad responsable ordenadora, asentó que se constituyó, el día dos de abril de dos mil, en el domicilio sito en **********, colonia ********** de esta ciudad, a fin de requerir el pago relativo a la liquidación emitida por el titular de la Secretaría de Tesorería y Finanzas, controlada con el oficio **********, al ahora quejo **********, y que al no encontrarlo procedió a dejar citatorio en poder de **********, quien le manifestó ser empleado del deudor, y se identificó con credencial para votar, a efecto de que lo esperara a hora fija del día siguiente; esto es, a las once horas con treinta minutos del tres de abril de dos mil catorce.*
*Asimismo, se advierte que al constituirse el día y hora precisados en el citatorio señalado, encontró el domicilio cerrado, por lo que procedió a practicar la diligencia de requerimiento de pago por instructivo. Lo anterior, pone de manifiesto que no fue debidamente diligenciado el mandamiento de ejecucióncontenido en el oficio **********, al no observarse las formalidades establecidas por el artículo 136 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, puesto que la diligencia relativa, ante la ausencia de la persona citada o su representante legal, porque el domicilio estaba cerrado (según el dicho del notificador), debió realizar esa diligencia con un vecino, por así establecerlo de manera imperativa el segundo párrafo del trascrito artículo 136 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, y sólo en caso de que el vecino con quien se entendiera la diligencia se hubiere negado a recibir la notificación respectiva, entonces podía realizar la diligencia y su notificación por instructivo.*
Dicho de otro modo, si bien el artículo 136 del código en comento no impide que la notificación relativa al requerimiento de pago a la persona que deba cumplirlo, se realice mediante instructivo; esta hipótesis se dará únicamente cuando previa cita para hora fija dentro del siguiente día, el interesado no espera a que se le haga la notificación; diligencia que entonces se hará por medio de instructivo que se entregará a los parientes o domésticos del mismo o a cualquiera otra persona que viva en la casa, e inclusive con un vecino. Es decir, que si bien se ordena que la mencionada diligencia debe llevarse a cabo con el interesado, también es verdad que la propia

legislación fiscal prevé, en el artículo en comento, la forma en que debe realizarse cuando no se encuentre al deudor a la primera búsqueda, a fin de llevar a cabo el requerimiento indicado, esto es, mediante instructivo, por ende, tener por requerido al deudor por conducto de quien haya atendido la diligencia.

*Así, al no ajustarse dichas actuaciones a lo preceptuado en el artículo 136 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, esto implica que el actuar de la ejecutora al practicar la diligencia de tres de abril del año en curso, por la que se le notificó y ejecutó el mandamiento de ejecución del crédito fiscal contenido en el oficio **********, derivado del procedimiento administrativo número **********, que se instruyera al aquí quejoso, es ilegal; razón por la cual no resta sino concluir que no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa, al no hacérsele saber de dónde emana el adeudo y por qué concepto deviene el mismo, Esto es, no fue debida y oportunamente notificada del mandamiento de ejecución controlado por la Secretaría de Tesorería y Finanzas de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y por tanto no estuvo en aptitud de atender la notificación de requerimiento de pago y, en consecuencia, el embargo que se decretó en su contra.*

*Consecuentemente, al resultar fundados los conceptos de violación, aunque suplidos en su deficiencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitado por **********, para el efecto de la Dirección Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, deje insubsistente la diligencia de notificación y ejecución de tres de abril de dos mil catorce, realizada por instructivo por el Notificador Ejecutor de su adscripción, así como el embargo decretado en la misma fecha al ser producto de la indebida diligencia a que se ha hecho alusión a lo largo de la presente sentencia.*

Bajo esta perspectiva, la Comisión (CODHET) estima conveniente adoptar los argumentos esgrimidos en dicha resolución ya que a la luz de nuestro expediente las autoridades señaladas pertenecen a la Administración Pública Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas y los hechos se encuentran estrechamente relacionados con las acciones y/u omisiones que generaron el presente expediente de queja. Por lo tanto, este Organismo no puede ignorar las violaciones acreditadas en dicha instancia.

c) Finalmente, la Comisión (CODHET) aborda el tema de las facultades del Secretario de la Contraloría y Transparencia del Ayuntamiento de Nuevo Laredo para *conocer y resolver* el procedimiento administrativo ******, ya que

considera que en esta determinación se vulneró el derecho a la seguridad jurídica del quejoso. En primer término, el artículos 35 fracción, XVII del Reglamento de la Administración Pública de Nuevo Laredo, Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de octubre de 2010, vigente al momento que se le aplicó dicho procedimiento al señor ****** señala:

> ***ARTÍCULO 35***.- ***La Secretaría de la Contraloría****, a través de su titular, contará con las facultades y obligaciones que se contemplan en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, incluyendo además, las siguientes atribuciones:*
> *[…]*
> *XVII.- Vigilar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, así como* ***conocer e investigar*** *los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos municipales, que puedan implicar responsabilidad administrativa; y*
> *XVIII.- Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.*

Por lo tanto, a juicio de este Organismo dicha autoridad era competente únicamente para **conocer e investigar** sobre el procedimiento administrativo anteriormente señalado y no poseía la facultad para imponer sanciones, pues ésta sólo le corresponde al Presidente del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, como lo dispone expresamente el artículo 89 del **Código Municipal**:

> ***Articulo 89.-***
> *[…]*
> ***En lo querespecta a la responsabilidad administrativa****, las funciones propias de la Dirección General de la Contraloría Estatal,* ***así como de las Contralorías Internas*** *y del Superior jerárquico* ***que se menciona en la propia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos****,* ***serán desempeñadas por el Ayuntamiento, a través de su Presidente Municipal en lo relativo a servidores municipales.*** *Las responsabilidades administrativas de los miembros de los Ayuntamientos es competencia exclusiva del Congreso del Estado, estando facultado para identificar, investigar y determinar dichas responsabilidades, así como para aplicar las sanciones respectivas.*

Esto es así, porque a pesar que existe una ***Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado***(artículo 51)en la que se prevén facultades aplicables a las *Contralorías Internas de los Ayuntamientos*, tambiénse expresa con claridad que*"para identificar, investigar, determinar y aplicarlas sanciones"*se deberá estar a lo dispuesto por el **Código Municipal**.

> *CAPÍTULO II*
> *SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA APLICARLAS*
>
> ***ARTÍCULO 51.-*** *En el caso de los servidores del Poder Judicial, el Supremo Tribunal de Justicia* ***establecerá los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 47, así como para aplicar las sanciones establecidas en el presente capítulo****, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo propio hará el Congreso local, conforme a la legislación respectiva;* ***y por lo que se refiere a los Ayuntamientos se estará a lo dispuesto en el Código Municipal.***
> *Por cuanto hace a los servidores públicos del área de seguridad pública, ya sea del Estado o de sus municipios, se regirán por sus disposiciones legales aplicables, sin demérito de aplicar de manera supletoria las previsiones de esta ley en lo que corresponda*.

En consecuencia, dado que la fuente normativapara fincar responsabilidades en los Ayuntamientos se encuentra en el **Código Municipal**, se refuerzalo dispuestopor el artículo 89 de dicho Código, pues es el *Presidente Municipal* quien tiene la facultad originaria para resolver y aplicar las sanciones, lo cual no ocurrió en el caso concreto, ya que quien resolvió y aplicó la sanción fue únicamente elSecretario de la Contraloría y Transparencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Para robustecer este argumento se transcribe el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado que nos permite inferir la intervención necesaria del Presidente del Ayuntamiento en este tipo de procedimientos y que a la letra dispone:

ARTÍCULO 57.- *[…]*

La Contraloría interna de la dependencia determinará si existe o no responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, y aplicará, por acuerdo del superior jerárquico, las sanciones disciplinarias correspondientes.
[…]

Aunado a esto, en el Reglamento de la Administración Pública de Nuevo Laredo, que podía precisar con mayor claridad esta facultad, en ese momento (Reglamento de 2010) sólo se limitó a establecer que sus facultades consistirían en ***conocer*** *e* ***investigar*** *los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos municipales, que puedan implicar responsabilidad administrativa* (artículo 35, fracción XVII), pero no a **resolvero sancionar**, en ese sentido, el Código Municipal es muy claro al señalar exclusivamente al Presidente Municipal para cumplir con ese fin y el reglamento vigente en 2010 respalda esa disposición.

Por lo tanto, en el caso que nos ocupa la resolución del Procedimiento Administrativo anteriormente señalado debía haber contenido la firma del Presidente Municipal, así como también haberse previsto esta facultad en el Reglamento de la Administración Pública de Nuevo Laredo que se aplicó en ese momento, sin embargo, dicha resolución sólo contiene la firma del Secretario de la Contraloría y Transparencia, lo cual representó un agravio en contra del quejoso pues es de estimarse que la autoridad no tenía competencia para resolver y aplicar la sanción en dicho procedimiento.

IV. Por otro lado, como se había expuesto en la fracción II de estas conclusiones, este Organismo decide pronunciarse por la vulneración al **DERECHO HUMANO AL HONOR** del señor ****** a la luz de la siguiente:

FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA

EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Artículo 1o*. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 6o.
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS:

> ***Artículo 17***
> *1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.*
> *2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS:

> ***Artículo 11.***
> *Protección de la Honra y de la Dignidad*
> *1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
> *2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*
> *3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

> **Artículo 14.** Derecho de Rectificación o Respuesta
> *1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.*
> *2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.*
> *3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.*

V. La Comisión (CODHET) parte de las alegaciones consistentes en la divulgación de información personal y reservada del quejoso que tenían la obligación de resguardar el Secretario de la Contraloría y Transparencia del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas.En este caso, se considera que es procedente analizar dichas violaciones ya que a pesar que existe un recurso pendiente de resolver ante el Tribunal Fiscal del Estado, estas vulneraciones no representan la materia de las alegaciones *sub júdice,*

además, son acciones realizadas con posterioridad a la emisión de la resolución del Procedimiento Administrativo número ****** (de fecha **19 de noviembre del 2013**) como obra en las probanzas vertidas en el expediente.

En este sentido, se parte de las alegaciones realizadas por el señor ****** en su escrito de queja y en la cual señala:

> *[…] pues no obstante que tengo derecho a que se respetara el sigilo del procedimiento conforme a la ley de transparencia vigente, se estuvo difundiendo por el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en periódicos locales y estatales, la apertura, la audiencia y la conclusión del procedimiento administrativo, lo que trajo como consecuencia* ***la divulgación de información inexacta a la población afectando con ello mi honra y reputación****, […]*

Aunada a esta inconformidad se agregan 6 notas periodísticas en donde se publicó la sanción impuesta y el nombre del quejoso (obran en el expediente de queja 025/2014-L) en las cuales se señala lo siguiente:

1. Periódico "*el MAÑANA el Periódico que va con el Pueblo*" de fecha sábado **7 de diciembre de 2013**, en él se rotula:

> *SURGEN TRAPOS SUCIOS DE ******.*
> *Gobierno de CCR inhabilita a ex contralor; indagan a 11 ex funcionarios.*
> *[…]*
> *Durante la sesión de Cabildo de ayer, compareció ******, Secretario de Contraloría y Transparencia y dio a conocer que […]*
> *Destaco que en una de las resoluciones es la inhabilitación del* ***ex contralor ***** *por un periodo de cinco años con una sanción económica de 193 mil 419 pesos, ya que durante su función efectuó nula supervisión y posteriormente finiquito obras publicas concluidas.*

2. El Diario de Nuevo Laredo. Opinión, de fecha domingo **8 de diciembre de 2013**, en el cual se dice:

> *[…] y ya sentencio sanciones contra el* ***ex contralor ******. *Esta aberración cometida por el contralor de turno, […]*

3. El *MAÑANA* de fecha jueves **19 de diciembre de 2013** se señaló:

*El alcalde de Nuevo Laredo ****** dijo[…] prueba de los malos manejos que encontró y denuncio a su llegada a la alcaldía, mencionó, es que se inhabilito al ex contralor municipal de nombre* ****** *por un periodo de 5 años.*

4. *MILENIO* de jueves **12 de diciembrede 2013** en el que se señala:

Informa Secretaria de Nuevo Laredo Bajo investigación, 11 funcionarios municipales
*El ex contralor de Nuevo Laredo que fue multado con 193 mil pesos y su inhabilitación de cargos públicos por cinco años, […] ******, ex tesorero municipal, tiene el derecho de impugnar la resolución, […]*

5. *Hoy Laredo Noticias* de fecha **13 de febrero de 2014**, en el cual se señala:

*El Secretario de Contraloría y Transparencia, ****** dio a conocer […] […] igual, como en el caso de ******, quien fue inhabilitado por 5 años para no ocupar un puesto público, así como una multa de 193 mil pesos.*

En este sentido, este Organismo comparte las alegaciones del quejoso pues los artículos 27 y 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas son claros en prever la necesidad de mantener la secrecía de datos que puedan estar relacionados con *"**los expedientes de los procesos judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, durante su instrucción**" (artículo 28.2 inciso e)*. Al respecto los artículos en comento señalan textualmente:

DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO

***ARTÍCULO 27**.*
*La información de acceso restringido, sea reservada, confidencial o sensible, **no podrá ser divulgada bajo ninguna circunstancia, salvo las excepciones expresamente señaladas en esta ley**.*
***ARTÍCULO 28**.*
1. Para efectos de este ordenamiento se considera información reservada aquella que se clasifique como tal, mediante la determinación del titular del ente público correspondiente.
2. La Unidad de Información Pública planteará al titular del ente público si la información debe clasificarse como reservada una vez

que la misma sea solicitada y, exclusivamente, en los siguientes casos:
[…]
e) Los expedientes de los procesos judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, durante su instrucción;

Ahora bien, la Comisión (CODHET) estima que estos artículos fueron incumplidos ya que si bien es cierto que en estos se prevé la necesidad de clasificar primero como reservada dicha información, siendo necesaria la existencia de una solicitud y después que la unidad de información pública se lo pida al titular de la dependencia o ente público responsable, también lo es que en el punto 2 del artículo 28 se enuncia una serie de supuestos que no son otra cosa que límites a la autoridad para que estime qué información debe ser clasificada como tal (reservada), en consecuencia, con independencia que no haya existido dicha solicitud y el posterior pedimento al titular para que la clasificara de esta forma, el ***inciso e)*** es un supuesto de información reservada y por ende de lo que no se puede dar a conocer por estimarse con esa calidad.

De lo contrario admitir que para que surta efectos la calidad de **reservada**es necesario la valoración del titular de la dependencia pública, se traduciría en una herramienta discrecional para la autoridad que pone en riesgo los derechos humanos (a la *presunción de inocencia, honor, imagen, etc*.) de aquellos que se encuentran imputados dentro de un procedimiento administrativo y aun no son encontrados culpables definitivamente.

En este sentido, debemos precisar los alcances del artículo 28.2, *inciso e)* de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, ya que en este se habla de ***"procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, durante su instrucción",*** lo que significa que aparentemente en el caso concreto la autoridad podría argumentar que al haber emitido una resolución, esto implicaba que dicha información no

entraría en el supuesto de lo que se debe tener como reservada, no obstante, esta Comisión (CODHET) estima que a la luz de las obligaciones derivadas del artículo 1 de la Constitución Federal y en específico destacando lo referente a la principio *pro persona*, de ninguna manera se puede estimar una interpretación restringida respecto a la figura de la ***instrucción***que prevéel artículo 28.2 inciso e) de la Ley en comento, sobre todo porque las resoluciones de los procedimientos administrativos como al que se le sometió al quejoso ante la Secretaria de la Contraloría y Transparencia del ayuntamiento de Nuevo Laredo y que se fundamentaron en el titulo tercero sobre Responsabilidades Administrativas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, no se habla propiamente de la figura de ***instrucción,*** lo que genera la posibilidad de interpretar (artículo 64 y 65 de dicho ordenamiento), en consecuencia, para que esta vaguedad o laguna normativa no genere vulneraciones de derechos, debemos entender que dicho periodo de instrucción comprende desde el inicio del procedimiento hasta la emisión de una resolución definitiva que ponga fin a la controversia, en este sentido, la idea no resulta descabellada si tomamos en cuenta la regulación federal, por ejemplo; el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone:

> *Artículo 14. También se considerará como información reservada:*
> *IV.* ***Los expedientes*** *judiciales o* ***de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado****;*

Incluso la recientemente Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública al respecto dispone:

> ***Artículo 113.*** *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación*
> *[…]*
> *X. Afecte los derechos del debido proceso;*
> *XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;*

En esta lógica, estos ordenamientos hacen referencia a la necesidad que la resolución este firme o bien haya causado estado, pero incluso, este último artículo introduce el supuesto jurídico consistente en que no se comprometan los ***derechos del debido proceso***, al respecto esto debe traerse a colación porque dentro de estos derechos se encuentra la ***presunción de inocencia*** que a la luz de la dinámica de todo procedimiento administrativo guarda estrecha relación con la materia penal (por lo que hace a la persecución y sanción de conductas irregulares).

Al respecto cabe destacar los siguientes criterios de interpretación:

> ***Época: Novena Época***
> ***Registro: 174488***
> ***Instancia: Pleno***
> ***Tipo de Tesis: Jurisprudencia***
> ***Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta***
> ***Tomo XXIV, Agosto de 2006***
> ***Materia(s): Constitucional, Administrativa***
> ***Tesis: P./J. 99/2006***
> ***Página: 1565***
>
> ***DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.***
>
> *De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador*

puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el Derecho Público Estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal.
Acción de inconstitucionalidad 4/2006. Procurador General de la República. 25 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: MakawiStaines Díaz y Marat Paredes Montiel.
El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 99/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de agosto de dos mil seis.

Época: Décima Época
Registro: 2006590
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 7, Junio de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 43/2014 (10a.)
Página: 41

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES*.*

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer

efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso.

Contradicción de tesis 200/2013. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 28 de enero de 2014. Mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.

Tesis y/o criterios contendientes:
Tesis 1a. XCIII/2013 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. LA APLICACIÓN DE ESTE DERECHO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DEBE REALIZARSE CON LAS MODULACIONES NECESARIAS PARA SER COMPATIBLE CON EL CONTEXTO AL QUE SE PRETENDE APLICAR.", aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, página 968,
Tesis 1a. XCVII/2013 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS, NO VULNERA ESTE DERECHO EN SUS VERTIENTES DE REGLA DE TRATAMIENTO, REGLA PROBATORIA Y ESTÁNDAR DE PRUEBA.", aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, página 967,
Tesis 2a. XC/2012 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. CONSTITUYE UN PRINCIPIO CONSTITUCIONAL APLICABLE EXCLUSIVAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL.", aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1687, y
Tesis 2a. XCI/2012 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO ES UN PRINCIPIO APLICABLE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.", aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1688.
El Tribunal Pleno, el veintiséis de mayo en curso, aprobó, con el número 43/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.
Nota: La tesis aislada P. XXXV/2002 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, con el rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

Por lo tanto, bajo esta línea argumentativa la Comisión (CODHET) estima respecto la situación alegada por el quejosoque dicha informaciónencuadra en el supuesto previsto por el artículo 28.2 inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. En consecuencia, al no estimarse como información reservada la autoridad contribuyó a la divulgación de la misma y con ello,el efecto que cobró la exposición mediática de los datos del Procedimiento Administrativo número ****** (divulgación en prensa), repercutió en perjuicio del señor ****** vulnerando su derecho humano al honor e imagen,pues dicho procedimiento está sujeto a revisión ante el Tribunal Fiscal del Estado.

Bajo esta lógica conviene enunciar los siguientes criterios de interpretación que diversos Órganos del Poder Judicial Federal han sostenido respecto a este derecho:

Época: Décima Época
Registro: 2003844

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2
Materia(s): Constitucional
Tesis: I.5o.C.4 K (10a.)
Página: 1258

DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN. CONSTITUYEN DERECHOS HUMANOS QUE SE PROTEGEN A TRAVÉS DEL ACTUAL MARCO CONSTITUCIONAL.

Si conforme a las características que conforman a los derechos humanos, éstos no recaen sobre cosas materiales, sino que otorgan acción para lograr que el Estado respete los derechos garantizados, y se consideran esenciales e inherentes al ser humano y derivados de su propia naturaleza, **resulta lógico que los atributos de la personalidad se enlacen directamente con tales derechos, pues los mencionados atributos tienen una coincidencia con las libertades protegidas por los derechos del hombre como son los concernientes al honor, a la intimidad y a la propia imagen que constituyen derechos subjetivos del ser humano, en tanto que son inseparables de su titular, quien nace con ellos, y el Estado debe reconocerlos.** Como no recaen sobre bienes materiales, sino sobre la personalidad de los individuos, son generales porque corresponden a todos los seres humanos, y no pueden considerarse renunciables, transmisibles o prescriptibles, porque son inherentes a la persona misma, es decir, son intrínsecos al sujeto quien no puede vivir sin ellos. **Ahora, del contenido expreso del artículo 1o. constitucional se advierte que nuestro país actualmente adopta una protección amplia de los derechos humanos, mediante el reconocimiento claro del principio pro personae, como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas, aunado a que también precisa de manera clara la obligación de observar los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano al momento de aplicar e interpretar las normas jurídicas en las que se vea involucrado este tipo de derechos, como son los señalados atributos de la personalidad conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en casos en los que se involucra la posible afectación por daño moral de un atributo de la personalidad -en su vertiente del derecho al honor- debe aplicarse la tutela y protección consagrada en los principios reconocidos al efecto en nuestra Carta Magna, con independencia de que no exista una referencia expresa en el texto constitucional hacia la salvaguarda concreta del citado atributo,**

pues la obligación de protección deriva de disposiciones contenidas en dos tipos de ordenamientos superiores -Constitución y tratados internacionales- con los que cuenta el Estado Mexicano.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 35/2011. German Pérez Fernández del Castillo. 27 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Amparo directo 4/2012. German Pérez Fernández del Castillo. 31 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Época: Décima Época
Registro: 2005523
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: *Jurisprudencia*
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 118/2013 (10a.)
Página: 470

DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.

A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible definir **al honor como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social.Todo individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser respetado y considerado y, correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos que lo rodean. En el campo jurídico esta necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder a este tratamiento.** Por lo general, existen dos formas de sentir y entender el honor: a) en el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad; y b) en el aspecto objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el

sentimiento de la propia dignidad. **En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros.**

Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 23 de noviembre de 2011. Mayoría de cuatro de votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien formuló voto particular; José Ramón Cossío Díaz formuló voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
Amparo directo 8/2012. Arrendadora Ocean Mexicana, S.A. de C.V. y otros. 4 de julio de 2012. Mayoría de cuatro de votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, reservaron su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
Amparo directo en revisión 931/2012. Juan Manuel Ortega de León. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
Amparo directo en revisión 2411/2012. Milenio Diario, S.A. de C.V. y otro. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
Amparo directo 74/2012. Jorge Patricio Diez Gargari. 10 de abril de 2013. Cinco votos; José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.
Tesis de jurisprudencia 118/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintidós de noviembre de dos mil trece.

Este último criterio permite clarificar el efecto que tuvo la exposición mediática de la información que debía ser reservada, pues fue recogida y editorializada por la prensa como lo acredita el quejoso (notas periodísticas). Bajo esta perspectiva, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene las bases para entender lo que es el honor y las formas en que se puede lesionar al señalar: *"En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la*

reputación que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros." Luego entonces, al haber sido expuesto al escrutinio público sin justificación legal se vulneró el derecho al honor del señor ******.

Si bien la Comisión (CODHET) es consciente que la vulneración fue ocasionada (ejecutada) por los medios de comunicación, lo cierto, es que la autoridad (el Secretario de la Contraloría y Transparencia) tenía la obligación de resguardar toda información (el nombre del quejoso y las sanciones impuestas) relacionada con el Procedimiento Administrativo ****** en tanto no se resolviera de forma definitiva, sin embargo, al no hacerlo incurrió en una conducta irregular que contribuyó a la divulgación de dicha información en los medios de comunicación.

Finalmente, aunado a estos argumentos podemos enunciar el criterio sostenido por la Primera Sala la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre información reservada:

> ***Época: Décima Época***
> ***Registro: 2000234***
> ***Instancia: Primera Sala***
> ***Tipo de Tesis: Aislada***
> ***Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta***
> ***Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1***
> ***Materia(s): Constitucional***
> ***Tesis: 1a. VIII/2012 (10a.)***
> ***Página: 656***
>
> ***INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).***
>
> *Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo,*

*ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información reservada. El primero de los artículos citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. **Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la información también se considerará reservada:** 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado; **5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva;** o 6) la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. **Como evidencia el listado anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada.***

Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

En este sentido, si bien el criterio loaborda la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo cierto, es que también se parte de tener como un supuesto que limita el derecho de acceso a la información a todo "*procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva(artículo 14)".*

VI. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Fracción II y III, 42, 43, 48, 49, 50 de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este Organismo, 63 fracción V, 67 del Reglamento Interno, así como 28, 29 y demás relativos previstos en la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Tamaulipas. Se emite al C. Presidente del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, como superior jerárquico,las siguientes resoluciones:

R E C O M E N D A C I Ó N:

PRIMERA: Se reconsidere la emisión de declaraciones o divulgar datos personales sobre sujetos involucrados en procedimientos administrativos que aún no tienen una resolución firme.

SEGUNDO: Como medidas de no repetición se pide instaurar programas de capacitación en materia de Derecho Administrativo y Municipal con perspectiva en Derechos Humanos, así como la adopción de criterios interpretativos sobre los derechos fundamentales y las funciones de la Administración Pública Municipal. Estos programas serán instaurados a la brevedad y sin que transcurra un año desde que se notifique esta Recomendación, además estarán dirigidos a todo el personal del ayuntamiento y deberán ser evaluados con criterios objetivos.

TERCERO: Se giren instrucciones para que se investiguen y sancionen la conductade quien o quienes permitieron que se divulgara información del Procedimiento Administrativo número ****** y por lo cual se generó la presente Recomendación.

CUARTO: Se emita una disculpa dirigida al señor ****** por haberse difundido información de carácter reservada. Con independencia del derecho que le asiste de reclamar daños y perjuicios, así como el de convenir sobre la satisfacción de los mismos.

O P I N I Ó N:

PRIMERA: Se giren instrucciones para sustanciar apegados al*debido proceso*todo procedimiento administrativo, a fin de evitar violaciones al mismo, como han quedado establecidas en el punto III incisos a y b, del cuerpo de la presente resolución.

SEGUNDA: Se reconsidere la delegación de facultades que no estén amparadas en norma alguna, como la que ejercitó el Secretario de la Contraloría y Transparencia al resolver y aplicar sanciones que sólo le correspondían al Presidente del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De conformidad con el artículo 49 de la Ley de esta Comisión, es procedente requerir a la autoridad recomendada para que, dentro de un plazo de diez días hábiles, informe sobre la aceptación de esta recomendación y, en su caso, remita dentro de los quince días siguientes las pruebas relativas a su cumplimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma establecida.

Así lo formuló y emite el C. Doctor José Martín García Martínez, Presidente de esta Comisión, en términos del artículo 22, fracción VII de la Ley que regula el funcionamiento de este Organismo, así como el 23, fracción VII y 69, fracción V de su Reglamento.

_____
Dr. José Martín García Martínez
Presidente

Proyectó

_____
Mtro. Orlando Javier Rosado Barrera
Visitador Adjunto

L´OJRB/l´yicm

EXPEDIENTE N°. 150/2014

QUEJOSA: ******

RESOLUCIÓN: Recomendación No 017/2015 y Acuerdo de No Responsabilidad

En ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los once días del mes de junio del año dos mil quince.

V I S T O para resolver en definitiva el expediente número 150/2014, iniciado con motivo de la queja presentada por al **C.******, ante este Organismo, mediante la cual denunciara Inejecución de Orden de Aprehensión y Dilación o Negligencia Administrativa en el Proceso Jurisdiccional, por parte de agentes de la Policía Ministerial del Estado y Juzgado ****** de Primera Instancia de lo Familiar, autoridades con residencia en esta ciudad; este Organismo procede a emitir resolución de conformidad con los siguientes:

A N T E C E D E N T E S:

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, por conducto de éstas oficinas centrales, recibió el escrito de queja de fecha 26 de mayo del año 2014, signado por la C. ******, quien expuso lo siguiente:

> *"… Dentro del proceso penal ******, que se instruye ante el Juzgado ****** de Primera Instancia Penal con residencia en esta ciudad, se giró con fecha 11 de abril del presente año, orden de reaprehensión en contra de ******, por el delito de Abandono de Obligaciones Alimenticias, cometido en agravio de mi menor hijo ******, sin embargo, a la fecha dicho mandamiento no ha sido ejecutado por la Policía Ministerial, lo cual me parece irregular, ya que el C. ****** vive a lado de mi domicilio y allí se encuentra todo el día, y lo único que me han señalado en la Ministerial es que no pueden entrar por él, lo cual entiendo, pero creo que no pueden poner ese pretexto para no cumplimentar la orden de mérito, pues ahora resulta que si el señor decide ya no salir de la casa, la orden se va a quedar así sin cumplirse, y tampoco he visto que los agentes ministeriales acudan al domicilio para ver si logran ejecutar la orden, y de hecho yo les he marcado a los teléfonos que me proporcionaron, siendo éstos ****** y ******, cuando veo que el señor sale a la calle, pero me han señalado que tienen trabajo y no han acudido. Por esa razón solicito la intervención de esta Comisión toda vez que me parece muy injusto que mi problemática porque el señor ******, inició en el año 2011,*

*porque éste no me proporciona alimentos para mi menor hijo, a la fecha no se ha podido lograr absolutamente nada, ya que no he recibido ningún peso de su parte para la manutención de mi hijo, y como es posible que las autoridades no actúen de inmediato, por lo que solicito se intervenga ante la Policía Ministerial a fin de que a la brevedad posible se ejecute la orden antes referida. Por otra parte, deseo externar mi inconformidad en contra del Juez ******de Primera Instancia de lo Familiar en esta ciudad, en virtud de que ante dicha autoridad promoví la pérdida de patria potestad del señor ******, así como se fijara una pensión alimenticia para mi menor hijo, iniciándose el expediente ******, observando que el Juez en todo momento ha favorecido al padre de mi hijo, pues en principio me señaló que no podía fijarle ninguna pensión alimenticia en virtud de que éste acreditó que no tiene trabajo y que por esa razón no le puede imponer el pago de ninguna cantidad, así también en audiencia celebrada en dicho juicio, de la cual no recuerdo la fecha, pero fue el año pasado, el Juez me dijo que el señor ****** tenía el derecho de convivir cuatro días a la semana con el niño, a lo cual le externé mi desacuerdo, al referirle que la suscrita trabajo y no puedo hacerme cargo de andar llevándoselo al Centro de Convivencia del Supremo Tribunal de Justicia, como así me lo refirió dicho Juez, pero además porque a la fecha, desde el año 2011 esta persona no me apoya económicamente con los gastos del menor, y me parece ilógico que no pueda obligarlo a cumplir con su deber de padre de proporcionarle una pensión alimenticia, pero si le otorgué el derecho de convivir con él, máxime cuando mi hijo ni siquiera conoce al señor, pero el Juez me manifestó que quería que él hiciera, que el señor tiene derechos y él no lo puede privar de ello. En tal virtud solicito la intervención de este Organismo a fin de que se revise la actuación de la autoridad antes referida de dicho juicio, ya que estimo que solamente las autoridades toman en cuenta los derechos del padre de mi hijo y no de sus obligaciones, así como me han dejado totalmente desprotegida con mi hijo el cual tiene 4 años de edad, y sólo la suscrita me he encargado de su manutención, estudio, enfermedades y todo lo que he tenido que pasar con mi niño."*

2. Analizado el contenido de la queja, se calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, se admitió a trámite, radicándose con el número 150/2014, se acordó solicitar a las autoridades señaladas como responsables un

informe justificado, relacionado con los hechos denunciados, así como la exhibición de la documentación que se hubiera integrado sobre el caso.

3. Mediante oficio número PME00999, de fecha30 de mayo del 2014, el C. ******, Comandante de la Policía Ministerial del Estado con residencia en esta ciudad, rindió el informe solicitado en el que expuso lo siguiente:

> *"… al respecto me permito informar a usted, que no son ciertos los hechos que se le imputan a los agentes de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en esta ciudad capital, bajo mi mando, por parte de la referida quejosa C. ******. Sobre el particular, me permito informar a usted, que derivado del oficio número 1740/2014, signado por el Licenciado ******, Juez ******de Primera Instancia del ramo penal del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en es ciudad, dentro del expediente número ******, en donde se gira orden de reaprehensión en contra del C. J. ******, por lo tanto no se ha acudido hablar en diversas ocasiones al domicilio, con la denunciante la C. ******, la cual menciona que su ex esposo el C. ******, ya tenía conocimiento de la resolución del juez y que en todo el día no trabajaba, ni salía de su casa, por lo tanto no se ha podido dar cumplimiento a dicha orden de reaprehensión, por el delito de abandono de obligaciones, ya que como se menciona, dicho individuo nunca sale de su casa, y por lo tanto se le va a dar seguimiento hasta ejecutar dicha orden de reaprehensión en contra del C. ******."*

4. Así mismo, a través del oficio sin número, de fecha 11 de junio del presente año, el C. Lic. ******, Juez ******de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, rindió el informe solicitado en el que expuso:

> *"… NO SON CIERTOS los actos que se imputan al suscrito por parte de la persona antes referida, pues el suscrito en ningún momento he favorecido al padre del hijo de la aquí quejosa, tampoco le señalé a la misma que no podía fijarse pensión alimenticia en virtud de que éste acreditó que no tiene trabajo. Tampoco es verdad que el suscrito le haya dicho a la quejosa que el señor ****** tenía derecho de convivir cuatro días a la semana con el niño, menos aún que ésta haya externado su desacuerdo sobre tal aspecto porque no puede hacerse cargo de llevarlo al Centro de Convivencia. Lo cierto es que en el expediente ****** (no ****** como lo refiere la quejosa), a petición del señor ****** se llevó a cabo una audiencia para fijar lo relativo a la custodia, convivencia y alimentos del menor hijo de ambas partes, en la*

*cual el señor ****** se comprometió a otorgarle a la aquí quejosa una pensión alimenticia para su hijo de $300.00 pesos por semana, porque a su decir, actualmente no trabaja, cantidad con la que no estuvo de acuerdo la aquí quejosa, sin embargo, no ha aportado a esta Autoridad algún elemento de prueba que permita fijar una cantidad mayor a la mencionada, pues sobre tal aspecto dicha persona se ha mantenido totalmente pasiva, por lo que el suscrito juzgado de oficio ordenó recabar informes de la Oficina Fiscal y del Registro Público de la Propiedad sobre bienes de propiedad del demandado, asimismo, ordenó a la parte demandada para que informara sobre su actual trabajo y percepciones, sin embargo, no se ha obtenido ningún resultado favorable, y a pesar de ello la aquí quejosa se ha abstenido de aportar cuando menos información que permita a esta autoridad recabar mayores elementos sobre las actividades que realiza el señor ****** y sus ingresos. Respecto a la convivencia, este Juzgado determinó que se llevara a cabo tomando en cuenta lo manifestado por las partes en la Audiencia, ya que la propia quejosa manifestó que la misma se llevara a cabo en el Centro de Convivencia y entre semana, manifestando también que labora de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, por lo que dicha convivencia se estableció los días lunes, miércoles y viernes, de 3:00 a 6:00 de la tarda en el Centro de Convivencia. Lo anterior se podrá observar por parte de usted en las actuaciones que obran dentro del citado expediente, del cual se acompañan copias certificadas tomadas del sistema de gestión judicial en el que se trabaja en el Juzgado a mi cargo, ya que de las mismas se advierte que no existe ninguna conducta inapropiada por parte del suscrito.”*

5. Una vez recibidos los informes de referencia con base con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a ésta Institución, se notificó a la quejosa ****** y por considerarse procedente se declaróla apertura de un período probatorio por el plazo de diez días hábiles común a las partes.

6. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron las siguientes probanzas:

6.1. PRUEBAS APORTADAS POR PARTE DEL JUZGADO **** DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR:**

6.1.1. Copia fotostática del escrito de fecha 22 de abril del 2013, signado por el C. ******, dirigido al C. Juez ***** de Primera Instancia Familiar, mediante el cual

solicita tenga a bien señalar fecha para el verificativo el desahogo de la audiencia para fijar las reglas de convivencia; escrito al que le recayó el acuerdo correspondiente, fijándose las 12:30 horas del día 13 de mayo del 2013.

6.1.2. Fotocopia de la audiencia para fijar las reglas relativas a la guarda, custodia, alimentos y convivencia del menor ******, con sus padres ****** y ******.

6.1.3. Copia simple del escrito de fecha 4 de junio del 2013, signado por la C. ******, mediante el cual presenta pruebas de su intención a efecto de acreditar su acción.

6.1.4. Fotocopia del pliego de posiciones que debía absolver el C. ******.

6.1.5. Copia fotostática del interrogatorio al tenor del cual debían ser examinados los testigos que presentara la C. ******.

6.1.6. Copia simple de la sentencia número 041, de fecha 26 de abril del 2013, emitida por el C. Juez ******de Primera Instancia Penal.

6.1.7. Fotocopia del auto de fecha 06 de junio del 2013, mediante el cual se tienen por ofrecidas las diversas pruebas por parte de la C. ******, las cuales se admiten a trámite con citación a la parte contraria y se valorarán en su momento procesal oportuno.

6.1.8. Copia fotostática del escrito signado por el C. ******, mediante el cual ofrece diversas probanzas.

6.1.9. Copia simple del interrogatorio de fecha 31 de mayo del 2013, sobre el cual deberán ser examinados los testigos ofrecidos por la parte demandada ******, dentro de los autos del expediente 1009/2012.

6.1.10. Fotocopia del auto de fecha 06 de junio del 2013, mediante el cual se tienen por ofrecidas las diversas pruebas por parte del C. ******, las cuales se admiten a trámite con citación a la parte contraria y se valorarán en su momento procesal oportuno.

6.1.11. Copia fotostática del oficio 2414, de fecha 17 de junio del 2013, signado por el C. LIC. ******, Director de la Policía Ministerial del Estado, mediante el cual le instruye al C. LIC. ******, Comandante de la Policía Ministerial del Estado, de cumplimiento al oficio 1817, de fecha 07 de junio del 2013, signado por el Juez ******de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.

6.1.12. Copia del auto de fecha 18 de junio del 2013, en el que se asentó que se recibió el oficio número 2038, de fecha 18 de junio del 2013, signado por el C. LIC. ******, en su carácter de Juez ******de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado.

6.1.13. Fotocopia del auto de fecha 18 de junio del 2013, en el que se asentó que siendo las 11:00 horas del día antes señalado para la celebración de la audiencia de prueba testimonial que voceadas las partes, no se dio por presente el C. ******, así mismo a los testigos ofrecidos por la misma.

6.1.14. Copia fotostática de la declaración de la absolvente ******.

6.1.15. Copia del escrito signado por el C. ******, de fecha 19 de junio del 2013, dirigido al C. Juez ******de Primera Instancia Familiar, mediante el cual solicita se señale fecha para el desahogo de la prueba testimonial ordenada en día 18 de junio del 2013, no fue posible presentar a sus testigos; auto de fecha 20 de junio del 2013, en el que se asentó que se tenía por recibido el escrito antes mencionado, y que no era procedente lo solicitado, toda vez que el período de desahogo de pruebas había concluido en fecha 3 de julio del 2013.

6.1.16. Copia fotostática del oficio PME 0014, de fecha 19 de junio del 2013, signado por el C. LIC. ******, Comandante de la Policía Ministerial del Estado, dirigido al Juez ******de Primera Instancia de lo Familiar, mediante el cual da contestación a su oficio 1817, de fecha 07 de junio del presente año, deducido del expediente número ******/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil de Pérdida de la

Patria Potestad, promovido por la C. ******; auto de fecha 21 de junio del 2013, en el que se asentó que se tenía por recibido el oficio antes mencionado.

6.1.17. Copia del escrito de fecha 24 de junio del 2013, signado por el C. ******, mediante el cual exhibe el pliego de preguntas de idoneidad, así como también las repreguntas, las cuales deberán ser formuladas a los testigos ofrecidos por la actora ******; así como auto de fecha 24 de junio del 2013, que le recayó al escrito antes señalado.

6.1.18. Fotocopia de las declaraciones de ******, en fecha 24 de junio del 2013.

6.1.19. Copia fotostática del oficio número 6981/2013, de fecha 03 de julio del 2013, signado por la C. LIC. ******, Agente ******del Ministerio Público de Protección a la Familia, mediante el cual remita la información solicitada por el C. Juez ******de Primera Instancia de lo Familiar; así como acuerdo de recibido de dicho oficio.

6.1.20. Copia del auto de fecha 26 de junio del 2014, en el que se asentó que ante la inasistencia del C. ****** se declara confeso de las posiciones calificadas de legales.

6.1.21. Fotocopia de la constancia de fecha 3 de julio del 2013, en el que se asentó la Secretaria de Acuerdos del Juzgado ****** de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, que al vocear las partes, no se dio por presente el C ******, ni testigo ofrecido por él, motivo por el cual no se celebró la audiencia.

6.1.22. Copia fotostática del escrito de fecha 11 de julio del 2013, signado por la C. ******, mediante el cual remite el acuse de recibo de los oficios 1816, 1817, 1822, 1826 y 1827, dirigidos al Director del Hospital General de Zona M.F. del Instituto Mexicano del Seguro Social, Director de la Policía Ministerial, Agente ******* del Ministerio Público de Protección a la Familia, Juez ****** de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado, Juez ****** de Primera

Instancia del Ramo Familiar y Director de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia; así como el acuerdo de fecha 12 de julio del 2013, que le recayó al escrito antes mencionado.

6.1.23. Copia del oficio número 29900/1500100/181DIR/2013, de fecha 22 de julio del 2013, DR. ******, encargado de la Dirección Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual remite la información solicitada; así como el acuerdo de fecha 06 de agosto del 2013, que le recayó al escrito antes mencionado.

6.1.24. Fotocopia del oficio 004347, de fecha 19 de agosto del 2013, signado por el C. LIC. ******, Director de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual informa al C. Juez ****** de Primera Instancia de lo Familiar, que no se encontraron antecedentes penales del C. ******, escrito al que le recayó en fecha 21 de agosto del 2013, el acuerdo correspondiente.

6.1.25. Copia de los escritos de fecha 12 de noviembre del 2013, 14 y 31 de enero de 2014, signados por la C. ******; escritos al que le recayó el acuerdo correspondiente.

6.1.26. Copia fotostática de los oficios 261 y 262, de fecha 28 de enero de 2014, dirigidos a los CC. Director del Instituto Registral y Catastral y Jefe de la Oficina Fiscal, mediante el cual les requiere diversa información.

6.1.27. Fotocopia del auto de fecha 06 de marzo del 2014, mediante el cual se tenía por recibido el escrito signado por la C. ******, por medio del cual exhibe copias de los oficios 261 y 262 de fecha 28 de enero del 2014.

6.1.28. Copia del escrito de fecha 26 de mayo del 2014, signado por la C. ******, mediante el cual solicita al Juez ****** de Primera Instancia de lo Familiar, tenga a bien citar a las partes para oír sentencia.

6.1.29. Copia fotostática de la constancia de fecha 20 de enero del 2014, signada por la C.P. ******, Directora de la Guardería Vecinal Comunitaria Bebecitos S.C.

6.1.30. Fotocopia de las propuestas de cédula de determinación de cuotas, aportaciones y amortización.

6.1.31. Copia del recibo expedido por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Victoria, a nombre de ******.

6.1.32. Copia fotostática del escrito de fecha 22 de enero del 2014, signado por la C. ******, mediante el cual ofrece diversos medios de prueba.

6.1.33. Fotocopia del auto de fecha 5 de junio del 2014, en el que se acordó requerirle al C. Director del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, de contestación al oficio 262 de fecha 28 de enero del 2014, o en defecto informe el impedimento legal que tiene para ello; de igual manera, se acordó requerirle al C. ****** diera cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de fecha 16 de enero del 2014, en el sentido de que debía informar a ese Juzgado, si en la actualidad trabajaba, informar las percepciones que percibía, la razón social de la fuente de trabajo, y en el caso de prestar sus servicios para algún trabajador, informar el nombre de su patrón; así mismo, se acordó requerirle a la C. ******, diera cumplimiento al requerimiento que se le hiciera por auto de fecha 16 de enero del 2014, en el sentido de que relaciones y acredite a cuanto ascienden los gastos de su menor hijo de forma semanal, por concepto de alimentación, educación, atención médica, habitación e incluso esparcimiento, de la misma forma indique si habitan en casa propia o de renta, y en su caso el monto de ésta última.

6.1.34. Copias certificadas del expediente número ******, relativo al Juicio Ordinario Civil de Pérdida de Patria Potestad, promovido por la C. ******, en contra del C. ******, el cual a continuación se detalla:

1) Escrito inicial de demanda de fecha 5 de diciembre del año 2012, signado por la C. ******.

2) Auto de fecha 06 de diciembre del año 2013, mediante el cual se tiene por recibido el escrito señalado en el inciso que precede y se ordena la radicación del expediente número ******, además de correrse traslado a la parte demandada para que produzca su contestación.

3) Escrito de fecha 12 de abril del 2013, signado por el C. ******, mediante el cual da contestación a la demanda interpuesta en su contra por parte de la C. ******.

4) Oficio número 466/111/2013, de fecha 19 de abril del 2013, firmado por la C. LIC. ******, Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado ****** de Primera Instancia de lo Familiar.

5) Escrito de fecha 22 de abril del 2013, signado por el C. ******, mediante el cual solicita se fije fecha para el desahogo de la audiencia mediante la cual se deberán fijar las reglas de convivencia con el menor ******.

6) Escrito de fecha 3 de mayo del 2013, signado por la C. ******, mediante el cual solicita al Juez ****** de Primera Instancia de lo Familiar decrete la apertura del período probatorio.

7) Audiencia de fecha 13 de mayo del 2013, mediante la cual tiene el objeto fijar las reglas relativas a la guarda, custodia alimento y convivencia del menor ******, con sus padres ****** y ******.

8) Auto de fecha 11 de junio del 2013, mediante el cual se fijan las reglas para la guarda, cuidado y convivencia del menor ******.

9) Escritos de fechas 11 de julio y 12 de noviembre del 2013, signados por la C. ******, mediante el primero de ellos presenta sus alegatos, y el otro realiza diversos argumentos.

10) Escrito de fecha 14 de enero del 2014, signado por la C. ******, mediante el cual solicita al Juez ****** de Primera Instancia de lo Familiar, mediante el cual solicita tenga a bien citar a las partes para oír sentencia; escrito al que le recayó el acuerdo correspondiente consistente en que no había lugar para acordar de conformidad lo solicitado; acordando además solicitarle al C. ****** informe si trabaja, en caso de ser afirmativo informe cuales son sus percepciones, la razón social de la fuente de trabajo, así como el nombre de su patrón; de igual manera se acordó girar oficio al Director del Instituto Registral y Catastral y Jefe de la Oficina

Fiscal a efecto de que informen el primero de ellos si el C. ******, cuenta con bienes inmuebles registrados a su nombre, y el segundo si el demandado tiene bienes muebles susceptibles de embargo; de la misma forma se acordó requerirle a la C. ******, acredite a cuánto ascienden los gastos de su menor hijo en forma semana.

11) Escrito de fecha 22 de enero del 2014, signado por la C. ******, mediante el cual ocurre a dar cumplimiento a lo solicitado, acreditando a cuanto ascienden los gastos de su menor hijo.

12) Escrito de fecha 26 de mayo del 2014, signado por la C. ******, mediante el cual solicita al Juez ****** de Primera Instancia de lo Familiar tenga a bien citar a las partes para oír sentencia; escrito al que le recayó el acuerdo correspondiente consistente en que no había lugar para acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que aún no rendía el informe solicitado el Director del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas.

13) Auto de fecha 5 de junio del 2014, en el que se acordó requerirse mediante oficio al C. Director del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, a fin de que en un término de 3 días de contestación al oficio 261, de fecha 28 de enero del 2014, o en su defecto informe el impedimento legal que tiene para ello; de igual manera se acordó requerir por segunda ocasión mediante notificación personal al C. ******, a efecto de que informe si en la actualidad trabaja, cuales son las percepciones que percibe, la razón social de la fuente de trabajo, y en caso de que preste sus servicios para algún particular deberá informar el nombre de su patrón; así mismo se acordó requerirle a la C. ******en cumplimiento al requerimiento que se le hizo, en el sentido de que relacione y acredite a cuanto ascienden los gastos de su menor hijo en forma semanal, por concepto de alimentación, educación, atención médica, habitación e incluso esparcimiento, así como indique si habitan en casa propia o de renta, y en su caso el monto de ésta última, así como si su menor hijo se encuentra afiliado a alguna institución de salud de gobierno o particular, y quien se hace cargo en su caso de las cuotas que eso genere.

6.2. PRUEBAS OBTENIDAS POR ESTE ORGANISMO.

6.2.1. Declaración informativa de fecha 19 de junio del presente año, recabada a la C. ******, a través del cual desahoga la vista de informe que rindieran las autoridades presuntamente responsables y en el cual asentó lo siguiente:

> *"… Que no estoy de acuerdo con el informe del Juez, ya que como no estuve de acuerdo ni con la convivencia ni con la cantidad que estableció de pensión, sino que fue el propio Juez quien la fijó, sin tomarme en cuenta a mi para nada y creyéndole al padre de mi hijo quien le dijo que estaba desempleado y que esa cantidad es muy mínima y no alcanzaría para nada, y que es falso también lo que señala el Juez de que no he presentado pruebas que permitan incrementar el monto de la pensión que él estableció, ya que, dentro del expediente constan los documentos que yo he aportado en donde acredito mis gastos de vivienda, servicio médico, guardería y agua; además de que yo desde la audiencia también les dije que no estaba de acuerdo con tener que llevarle el niño 3 veces a la semana porque yo tenía que trabajar y a pesar de eso no me hizo caso, ya que, además de mi trabajo en oficina y de tener que cubrir el horario en el día, para alcanzar a cubrir mis gastos me veía en la necesidad de trabajar por las tardes en ventas de calzado y venta de comida los fines de semana, además de que en la fecha de la audiencia estaba haciendo un curso de enfermería por las tardes y prácticas en hospital, sábados y domingos, pero aún así al Juez no le importó y decretó que yo debía llevarle a mi niño tres veces a la semana a su papá. Por otra parte, en cuanto al informe de la Comandancia de la Policía Ministerial, deseo manifestar que es verdad que los agentes fueron en dos ocasiones a mi domicilio, la primera vez no me encontraron y fue hasta la segunda en que yo estaba y e dijeron que no podían detenerlo adentro de la casa, que tenían que detenerlo afuera, pero que el no salía y que me proporcionaron los números telefónicos a donde les llamara para que les informara cuando el padre de mi hijo anduviera afuera y pudieran ejecutar la orden y les he llamado y a veces me dicen que no andan cerca y otras que no andan en servicio y aún no ejecutan la orden de aprehensión, lo que me parece injusto."*

6.2.2. Constancia de fecha 17 de octubre del 2014, elaborada por personal de este Organismo, la cual a continuación se transcribe:

> *"… Que me comuniqué vía telefónica a las instalaciones que ocupa la Agencia del Ministerio Público adscrita al Juzgado ****** de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de preguntar si la orden de reaprehensión girada en contra del C. ****** dentro del proceso penal ******, por el Juez ****** de*

*Primera Instancia ya había sido ejecutada por los elementos de la Policía Ministerial del Estado, siendo informado por quien dijo llamarse ****** y tener el puesto de oficinista, que dicho mandamiento judicial aún se encontraba pendiente de ejecutar, agregando que hace unos días había acudido la C. ****** a solicitar una copia de dicha orden".*

6.2.3. Acta de fecha 22 de octubre del 2014, elaborada por personal de este Organismo, la cual a continuación se transcribe:

*"… Que me constituí en las instalaciones que ocupa el Juzgado ****** de Primera Instancia del Ramo Familiar, con la finalidad de solicitar se me brindara acceso al expediente número ******, radicado en ese Juzgado con motivo de la demanda interpuesta por la C. ******, en contra del C. ******, siendo atendido por quien dijo llamarse ******, Secretario de Acuerdos del Juzgado antes mencionado, quien una vez enterado del motivo de mi presencia me facilitó el expediente antes señalado, pudiendo apreciar que después de la foja 454 obran las siguientes actuaciones: - oficio número DJ/DCA/3191/2014, de fecha 11 de julio del 2014, signado por el C. LIC. ******, Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, mediante el cual informó que efectuada la búsqueda en la base de datos electrónicos de ese instituto no se localizaron registros de bien inmueble a nombre de ******; oficio al que en fecha 16 de julio del 2014 le recayó el acuerdo correspondiente. – Escrito de fecha 7 de octubre del 2014, signado por la C. ******, mediante el cual solicita se le requiera al C. ****** el cumplimiento al requerimiento que se le hiciera mediante auto de fecha 16 de enero del 2014, así mismo se le aplique la medida de apremio ordenada dentro de los autos; promoción a la que en fecha 13 de octubre del 2014, se acordó de procedente, ordenándose girar oficio respectivo a la oficina fiscal y copia al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a efecto de que haga efectivo el apercibimiento, acordándose además requerirle al C. ******, informe si en la actualidad trabaja, cuales son las percepciones que percibe, la razón social de la fuente de trabajo, y en caso de que preste sus servicios para algún particular deberá informar el nombre de su patrón. – Cédula de notificación de fecha 13 de octubre del 2014, con folio 12404, dirigida al C. ****** mediante el cual se le solicita que informe si en la actualidad trabaja, cuales son las percepciones que percibe, la razón social de la fuente de trabajo, y en su caso de que preste sus servicios para algún particular deberá informar el nombre de su patrón."*

7. Una vez agotada laetapa probatoria, el expediente quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis se desprenden las siguientes:

C O N C L U S I O N E S:

PRIMERA. Este Organismo es competente para conocer y resolver la queja planteada por la C. ******, por tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a una autoridad estatal, al tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDA. La queja interpuesta por la C. ******, la promovió respectivamente por INEJECUCIÓN DE ORDEN DE APREHENSIÓN y DILACIÓN O NEGLIGENCIA ADMINISTRATIVA EN EL PROCESO JURISDICCIONAL, por parte de Agentes de la Policía Ministerial del Estado y Juzgado ****** de Primera Instancia de lo Familiar, autoridades con residencia en esta ciudad.

TERCERA. Analizadas las actuaciones que conforman el presente expediente de queja, y por cuanto se refiere a la inejecución de orden de aprehensión denunciada por la hoy promovente ****** y que hiciera consistir en que dentro del proceso penal ******, que se instruye en el Juzgado ****** de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad capital, en fecha 11 de abril del año 2014 se giró orden de reaprehensión en contra del C. ******, por el delito de abandono de obligaciones alimenticias cometido en agravio de su menor hijo ******, mandamiento que no se ha cumplimentado por los agentes de la Policía Ministerial del Estado, circunstancia que se acredita con el informe rendido por el C. ******, Comandante de la Policía Ministerial del Estado, quien mediante oficio número PME 0099, de fecha 30 de mayo del 2014, señaló que del oficio número 1740/2014, signado por el Licenciado ******, Juez ******de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente ******, se les comunica que se gira orden de reaprehensión en contra del C. ******, por lo que acudieron a hablar en diversas ocasiones con la denunciante la C. ******, la cual les mencionó que su ex esposo el C. ******, ya tenía conocimiento de la resolución del juez, que además en todo el día no trabajaba, ni salía de su casa, por lo que no habían podido dar cumplimiento a dicha orden de reaprehensión, ya que,

como se menciona, dicho individuo nunca sale de su casa, por lo que se le iba a dar seguimiento hasta ejecutar dicha orden.

En ese orden de ideas, si bien la autoridad presunta responsable señaló que no ha sido posible ejecutar la precitada orden de reaprehensión en atención a que pese a haber acudido al domicilio de la ahora promovente ******, quien le comunicó que el C. ****** no salía de su casa ya que no trabajaba, por lo que se procedería a darle seguimiento hasta ejecutar dicho mandamiento, de lo informado por el C. ******, Comandante de la Policía Ministerial del Estado, se advierte que no han acudido directamente al domicilio del procesado ******con la finalidad de darle cumplimiento a dicha orden, por lo que no acreditan que de manera efectiva hayan procedido a dar cumplimiento a dicho mandamiento judicial, además de lo anterior no demuestran que hayan realizado acción alguna tendiente para dar cumplimiento a la multireferida orden de reaprehensión.

En ese tenor, consideramos que la omisión de la autoridad responsable al no realizar acciones tendientes a ejecutar el mandamiento librado en contra de ******, vulnera el derecho a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado que le otorga a los agraviados el derecho de que se les administre ésta de manera pronta, completa e imparcial, por lo Órganos del Estado previamente establecidos para ello, transcribiéndose para mayor ilustración dicho dispositivo legal que dice:

> *"Artículo 17. […] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."*

Así mismo, se advierte que se vulneran los siguientes instrumentos normativos:

Declaración Universal de Derechos Humanos.

> *"Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en material penal."*

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

"Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto."

"Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social."

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles.

"Artículo XVII. Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales."

Derecho de protección contra la detención arbitraria.

"Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes."

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos.
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

Artículo 24. Igualdad ante la Ley.
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley:

"Artículo 1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión."

"Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las personas."

Acceso a la Justicia y Trato Justo.

"Artículo 4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional."

Así mismo, es de tomarse en consideración lo señalado por el artículo 52 Fracción VII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que a la letra señala:

"Artículo 52. Son atribuciones de la Policía Ministerial, las siguientes: […] VII. Ejecutar la orden de presentación, detención, comparecencia, orden de aprehensión o reaprehensión y arrestos, dictada por el Ministerio Público o la autoridad judicial y llevar su registro."

En ese orden de ideas, es procedente emitir **RECOMENDACIÓN**al C. Procurador General de Justicia del Estado, como superior jerárquico, a efecto de que ordene a quien corresponda instruya a los agentes de la Policía Ministerial del Estado intensifiquen las acciones tendientes a la ejecución del mandamiento judicial emitido por el Juez ****** de Primera Instancia Penal, en contra de ******, dentro del proceso penal ******, por el delito de abandono de obligaciones alimenticias, debiendo informar respecto al resultado de las gestiones realizadas para tal efecto; de igual manera, ordene a quien corresponda el inicio, trámite y resolución al procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los agentes de la Policía Ministerial que incurrieron en omisión de la ejecución de la multireferida orden de aprehensión.

CUARTA. De igual manera, la C. ****** señaló que el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar en todo momento ha favorecido al C. ******, manifestándole que no podía fijarle ninguna pensión alimenticia, toda vez que éste no había acreditado tener trabajo y que por esa razón no le podía imponer el pago de ninguna cantidad, además que el multireferido Juez le dijo que el C. ****** tenía el derecho de convivir cuatro días a la semana con el niño, a lo que le externó su desacuerdo, señalando que dicho Juez que quería que hiciera que el señor ****** tenía derechos y él no lo podía privar de ellos.

Al respecto, el C. LIC. ******, Juez ****** de Primera Instancia de lo Familiar, mediante oficio sin número, de fecha 11 de junio del 2014, señaló que no eran ciertos los actos que se le imputaban, que en ningún momento había favorecido al padre del hijo de la promovente ******, así como tampoco le señaló que no podía fijarse pensión alimenticia en virtud de que éste acreditó que no tenía trabajo, agregando que no era cierto que le dijo a la quejosa que el señor ****** tenía el derecho de convivir 4 días a la semana con el menor.

En virtud de lo anterior, debe decirse que el sólo dicho aislado de la promovente ****** resulta insuficiente para estimar fundada la violación de derechos humanos denunciada al no robustecerse con algún otro medio de prueba, aunado que obra la negativa del servidor público señalado como responsable; por lo que este

Organismo considera procedente emitir **ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD**, de acuerdo a lo contenido en la fracción II del artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas que establece: *"Los Acuerdos de No Responsabilidad se expedirán después de haberse concluido procedimiento de investigación de la queja y no se comprueben las violaciones de derechos humanos a una autoridad o servidor público en los siguientes supuestos: […] II. Por no obtenerse los elementos probatorios para acreditar en forma fehaciente la violación de derechos humanos";* sin embargo, hágasele del conocimiento a la promovente ****** que si con posterioridad se allegaran medios probatorios, se abrirá un nuevo expediente de queja.

QUINTO. Acorde a nuestro sistema de protección a los derechos humanos –*integrado no sólo por las disposiciones constitucionales, sino además por los tratados formalmente válidos sobre la materia*- el Estado Mexicano tiene la obligación –*Ex ante*- de prevenir las violaciones de derechos humanos, y –*Ex post*- la de ejercer acciones de investigación, sanción y reparación de la violación a los derechos humanos, esto es –*entre otras cosas*-, el Estado Mexicano tiene la obligación irrestricta de investigar la violación de derechos humanos, y en caso de que existiese, deberá sancionarla y repararla de acuerdo a lo señalado en el artículo 1° de nuestra Constitución General de la República.

Además para sostener este aserto, debemos en inicio remitirnos al criterio que sostiene nuestro Máximo Tribunal Constitucional en la tesis aislada 1ª. XVIII/2012 (9ª.) Sustentada por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la 10ª. Época, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1. Pág. 257 del rubro y tenor siguientes:

> ***"DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA.****Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1°. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y a los Tratados*

Internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, que los derechos humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental y los tratados internacionales suscritos por México, y que la interpretación de aquélla y de las disposiciones de derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las mejores condiciones para las personas. Asimismo, del párrafo tercero de dicho precepto destaca que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, ***en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley****, lo cual conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas las personas por igual, con una visión interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de aquéllos."*

Para cumplir con lo anterior el Estado Mexicano, en sus tres ámbitos de gobierno, debe impulsar las medidas necesarias para que se reconozcan, con base en los principios y estándares internacionalmente aceptados, así como en los preceptos que establece el apartado B, del artículo 20 Constitucional, al menos los siguientes derechos a las víctimas del delito y de abuso de poder:

a) Recibir la atención integral y especializada que necesiten para el tratamiento eficaz en contra de los efectos causados por el hecho delictivo o el abuso de poder con plena observancia y respeto de sus derechos humanos;

b) Acceder a los sistemas de justicia, salud y asistencia social;

c) Estar informadas oportunamente de los derechos que establece a su favor el orden jurídico mexicano, así como de sus alcances y medios para hacerlos valer;

d) Ser acompañadas y contar con un asesor jurídico, cuando ella se requiera, ante las instancias de procuración e impartición de justicia para que defienda sus intereses;

e) A ser canalizada a las instituciones idóneas para recibir una atención que permita el restablecimiento de sus derechos;

f) A la reparación del daño cuando éste proceda, en los términos más amplios y eficaces, debiendo ser a cargo del Estado cuando el autor del delito sea un servidor público, y

g) A recibir asistencia a cargo del Estado cuando proceda, en función de los fondos de ayuda y apoyo creados expresamente para tal fin.

En esta lógica, los procedimientos de atención deben uniformarse bajo el principio de que las víctimas serán tratadas con respeto total a su dignidad, y recibirán la asistencia jurídica, médica, psicológica y social que sea necesaria, salvaguardando en todo momento sus derechos humanos por medio de servicios especializados, los cuales serán regidos bajo los postulados de oportunidad, calidad idónea, responsabilidad ética, sencillez, gratuidad, confidencialidad y contacto directo con las autoridades o instancias respectivas, para dar respuesta inmediata a las situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22, fracción VII; 25, fracción V, 41 fracciones I y II, 42, 48 y 49 de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este Organismo, así como los numerales 63 fracción V, y 68 primer párrafo del Reglamento Interno, se emiten al **Procurador General de Justicia del Estado** las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA. Acorde a las posibilidades económicas, materiales y personales, crear e implementar un programa de capacitación en materia de derechos humanos dirigido a los agentes de la Policía Ministerial del Estado previa identificación del o los servidores públicos responsables de la omisión que aquí se destacó.

SEGUNDA. Girar instrucciones o dar vista a quien corresponda para que con motivo de las violaciones aquí destacadas, dé inicio, trámite y resolución al procedimiento de responsabilidad administrativa respectiva y en su caso imponga la sanción que corresponda en contra de los agentes de la Policía Ministerial del Estado, responsables de las omisiones denunciadas, consistentes en inejecución de la orden de aprehensión.

TERCERA. Ordene a quien corresponda, se instruya a los agentes de la Policía Ministerial del Estado para que den cumplimiento a la brevedad al mandato dictado por el Juez ******de Primera Instancia Penal, dentro del proceso ****** y ejecuten la orden de aprehensión librada en contra de ******.

CUARTA: Ofrezca al promovente ****** de así requerirse apoyo psicológico.

En la inteligencia que de conformidad con el artículo 49 de la Ley de esta Comisión, se le solicita que en un plazo no mayor a diez días hábiles, informe sobre si acepta o no esta Recomendación, y en su caso, remita dentro de los quince días siguientes las pruebas relativas a su cumplimiento;

De igual manera, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, fracción I, 42, 43 y 46 de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este Organismo, y 65, fracción II de su Reglamento Interno, se emiten el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO. ACUERDO DE NO ACREDITADA LA RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO EN LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, por lo que refiere al derecho a la legalidad y seguridad jurídica denunciada por la C. ******, en la inteligencia de que si con posterioridad se allegandiversos medios de prueba, se abra nuevo expediente, y se resuelva lo procedente.

Comuníquese a las partes, y hágase saber a la quejosa que el artículo 75 del Reglamento de esta Comisión, le otorga el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de reconsideración.

Así lo formuló y emite el C. Doctor José Martín García Martínez, Presidente de esta Comisión, en términos del artículo 22, fracción VII de la Ley que regula el funcionamiento de este Organismo, así como el 23, fracción VII y 69, fracción V de su Reglamento.

_____

Dr. José Martín García Martínez

Presidente

Proyectó

_____

Mtro. Orlando Javier Rosado Barrera

Visitador Adjunto

L´OJRB/l´yicm

QUEJA N°: 099/13-T
QUEJOSA: **********
AUTORIDAD: ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE DE *****, TAMAULIPAS.**
RECLAMACIÓN: VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONAL, VIOLACIÓN AL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.
RESOLUCIÓN: RECOMENDACIÓN No. 018/2015
ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD Y NO ACREDITADOS LOS HECHOS.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los doce días del mes de junio de dos mil quince.

VISTO para resolver el expediente número 099/2013-T, iniciado con motivo de la queja presentada por la C. **********, en contra de actos presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a elementos de la Policía Estatal Acreditable con residencia en **********, Tamaulipas, los que ante la Delegación Regional de aquella ciudad, se calificaron como violación al derecho a la libertad y seguridad personal, violación al derecho al debido proceso; una vez agotado el procedimiento, se resuelve de conformidad con los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, por conducto de la Delegación Regional **********, recepcionó queja por los siguientes hechos:

> *"… El día ****** del presente mes y año, mi hijo fue detenido por elementos de la policía estatal acreditable de esta ciudad aproximadamente entre seis y media y ocho de la noche, en la zona centro de **********, por lo que mi hijo fue presentado ante el ministerio público federal hasta las 00:30 horas del día siguiente es decir del día *** del presente mes y año, estando presente ya la suscrita ante la P.G.R. y fue cuando vi que llevaban a mi hijo esposado por los Policías Estatales teniendo a mi hijo esposado hasta las dos de la mañana de ese mismo día por dichos elementos estatales de quienes como ya señalé desconozco sus nombres, desconociendo por igual en donde estuvo mi hijo durante todo ese tiempo que fue detenido, asimismo quiero denunciar que mi hijo […] fue fotografiado por dichos elementos de la Policía Estatal Acreditable con residencia en ******, dándonos cuenta que fue exhibida una fotografía de mi hijo en el noticiero *******

***** de ******, Tam., en donde aparece mi hijo en la batea de la camioneta de la policía estatal acreditable, asimismo que se dio a conocer su nombre completo en el noticiero de referencia, quiero señalar que dicha noticia se dio a conocer por ese noticiero el día de ayer en el horario de las ocho de la noche y hoy en el transcurso de la mañana, desconociendo si hoy en el noticiero del medio día también se haya exhibido a mi menor hijo, quiero indicar que aparece fotografía no video y es en esa foto que se aprecia claramente a mi hijo menor de edad, deseo señalar que cuando llevaron a mi hijo ante la P.G.R. un policía estatal acreditable me enseñó de su celular una fotografía en donde estaba un arma que supuestamente llevaba mi hijo, sin embargo quiero indicar que estaban mostrando más fotografías a la parte afectada, es por todo lo aquí expuesto que acudo ante este organismo de los derechos humanos a denunciar estos hechos que considero violatorios a los derechos humanos que van en agravio de mi menor hijo […].".*

2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, radicándose con el número 099/13-T, y se acordó solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe, relacionado con los hechos denunciados, así como la documentación que se hubiera integrado sobre el caso.

3. Mediante oficio ******* de fecha **********, el Coordinador Municipal de la Policía Estatal ******, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad presuntamente responsable, rindió un informe en relación a los hechos que dice:

*"… Al respecto le informo a usted que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 36 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, comparezco en tiempo y forma a rendir el informe solicitado. En el sentido de que NO SON CIERTOS LOS ACTOS que se le imputan al personal de la Policía Estatal Acreditable con destacamento en ******, Tamaulipas, toda vez que la detención del C. […], y la actuación de los elementos de la Policía Estatal Acreditable fue apegada a derecho, en todo momento respetando los Derechos Humanos y Garantías del detenido consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo se respetaron sus Derechos establecidos en la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos Art. 7. Fundando la detención en lo establecido por los artículos 16, 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 1/o,*

*7/o, 13, del Código Penal Federal, Art. 113, 116, 118, 119, 123, 125, 134, 136 y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales Art. 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Esto de acuerdo a lo informado en la puesta a disposición de fecha diecinueve de Noviembre del año en curso, signado por los Policías Estatales Acreditables Policía "A" **********, POLICÍA "A" ********** Y POLICIA "A" **********, mediante el cual dejan a disposición de la Agencia ********** del Ministerio Público de la Federación de ******, Tamaulipas, al detenido el C. […], así como el armamento que le fue decomisado al momento de su detención, derivado de los siguientes hechos: "….Siendo aproximadamente las 20:55 horas del día **********, al efectuar recorrido de seguridad y vigilancia en la zona centro del municipio de ******, Tamaulipas, al transitar sobre la calle ********** del citado municipio, se observó un vehículo que se encontraba estacionado sobre la calle ******, con varias personas en su interior con actitud sospechosa, por lo que descendimos del vehículo oficial propiedad del Gobierno del Estado, para entrevistarnos con dichas personas, quienes eran un total de cuatro, de las cuales dos del sexo masculino y una del sexo femenino se encontraban en la parte trasera, y otro del sexo masculino en el asiento del copiloto, quienes se mostraron nerviosas, solicitándoles que descendieran del vehículo para proceder hacer una revisión, momento en el que la persona del sexo femenino, manifestó que los tenían secuestrados, señalando como responsable al copiloto, que vestía playera amarilla, pantalón de **** , tenis ******, diciendo además que el copiloto portaba un arma larga de fuego, por lo que se les solicitó bajaran de la unidad, ya estando abajo los tres tripulantes que viajaban en la parte trasera y que refirieron estar secuestrados, mencionaron que con anterioridad habían llevado al conductor que en ese momento no se encontraba y al copiloto a comprarles ropa y calzado, usando sus tarjetas de crédito, llevándose además a una amiga de ellos a un hotel cercano, el conductor de la unidad, quien es amigo del copiloto, desconociendo el nombre y la ubicación del hotel, por lo cual procedimos al aseguramiento de inmediato de dicha persona (copiloto); procediendo a realizarle una revisión al vehículo en el que fueron encontradas las personas, siendo este de la marca ********, tipo ****** confort, modelo ******, color ******, 4 puertas, placa trasera de circulación ********** del Estado de **********, número de serie **********, localizando en medio de los asientos del conductor y del copiloto, 1 (un) fusil cal. 9mm, tipo usl, matrícula no visible, marca luger, con su respectivo cargador metálico abastecedor con ******cartuchos, útiles del mismo calibre, copiloto que manifestó llamarse: […], de *** años de edad, originario de Cd. ******, Tamps., con domicilio en calle **********, colonia ******, en ciudad ******, Tamaulipas, y quien traía en la mano derecha, 1 (un) teléfono celular marca L.G., modelo ******, color negro, No. De serie ******, batería y sin chip; una vez asegurada dicha arma se procedió a realizar la búsqueda de la secuestrada en los hoteles cercanos, y*

*quien según lo manifestaron las otras tres personas secuestradas vestía blusa verde con short de mezclilla deslavado, y el secuestrador vestía playera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis puma negros, con una cicatriz en el cuello; no teniendo resultados positivos; minutos después llegó por su propio pie al lugar de los hechos, en donde se habían quedado compañeros (Policías Acreditables) con las tres personas secuestradas que abordaban el precitado automotor; la persona secuestrada quien manifestó llamarse […], así como que había sido violada por el amigo de quien los tenía secuestrados de nombre […], pero que había podido escapar del hotel donde la tenía encerrada. Trasladándonos a las instalaciones de barandilla de este Municipio para su resguardo de las víctimas y poner a disposición al ahora detenido, quien también refirió pertenecer a la organización delictiva del cartel del golfo, siendo su función extorsionar, robar vehículos, secuestrar, junto con otro individuo que no se encontraba en ese momento con él, que el arma que había sido asegurada en el interior del vehículo, la empleaba para intimidar, amenazar a sus víctimas, y que las personas que tenían secuestradas las levantaron a la altura de la carretera ********** en el Estado de ********, y que el vehículo que tripulaba era robado. "… Poniéndose físicamente a disposición: 1 (un) Fusil Cal. 9mm. tipo Uzi, matricula no visible, marca Luger. 1 (un) cargador metálico con capacidad para 40 cartuchos calibre 9 mm., 31 cartuchos cal. 9mm. 1(un) teléfono celular marca LG, modelo *******, color negro, No. de serie ******* batería y sin chip. 1 (un) tenis puma del núm. 13, color blanco. 1 (un) tenis nike del núm. 8, color gris con amarillo. 1 (un) sudadera amarilla América Eagle usada. 1 (un) playera deportiva color verde de ***** marca ******, sin talla. 1 (un) pans deportivo, marca *****, talla ***, de caballero. 1 (un) vehículo *****. Modelo ******, color rojo, 4 puertas, placas *******, del Estado de ******, Serie **********. Motivos por los cuales el C. […], armamento y objetos, fueron puestos a disposición de la Agencia ****** del Ministerio Público de la Federación de ******, Tamaulipas, para que dicha autoridad determinara lo conducente, radicándose la **********. Con lo antes expuesto los elementos de la Policía Estatal Acreditable que realizaron la detención del C. […], dieron cabal cumplimiento establecido en el Artículo 22 fracciones X y XXIII de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas. Que establece las funciones que le corresponden a la POLICÍA ESTATAL. ARTÍCULO 22. A la Policía Estatal, le corresponde: X.- Practicar detenciones o aseguramientos en casos de flagrancia o cuasi-flagrancia, poniendo a las personas detenidas y los bienes que se hayan asegurado o que estén bajo su custodia, a disposición de las autoridades competentes en los términos y plazos constitucionales y legales establecidos; XXIII.- Llevar a cabo el proceso de detención de personas y aseguramiento de armamento, droga u otros objetos en flagrancia; así como la disposición de éstos ante las autoridades competentes con estricto apego a la ley…" * <u>En relación a que fueron violentados los</u>*

*Derechos a la Libertad y Seguridad Personal, Transgresión del Derecho a la Presunción de Inocencia, a la Honra Reputación, Vida Privada e intimidad. Al respecto hago de su conocimiento lo siguiente: 1) De acuerdo a las documentales que se anexan en el presente, en ningún momento los elementos de la Policía Estatal Acreditable con destacamento en esta ciudad, violaron el DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL del C. […], toda vez que en la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, establece en el apartado número 2.- que a la letra dice: "Nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o las leyes dictadas conforme a ellas… Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Y en este caso en concreto se establecieron los motivos (conductas ilícitas) por los cuales el C. […], fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente. 1) No se encontró antecedente alguno de que los elementos de la Policía Estatal Acreditable, hayan exhibido al C. […] ante los medios de comunicación y/o proporcionado datos personales del detenido así como datos relacionados a la detención. 3) La detención del C. […], fue realizada en flagrancia del delito (ya que se encontraba con cuatro víctimas de secuestro y armamento de uso exclusivo del ejército), y corresponde a las autoridades judiciales determinar la culpabilidad o inocencia del detenido. Así mismo le informo que al C. […], se le dio un trato especial y digno al ser un menor de edad (Adolescente), no omito manifestar que la Agencia ****** del Ministerio Público de la Federación de ******, dio vista de hechos con detenido a la Agencia del Ministerio Público para la Atención de Conductas Antisociales cometidos por Adolescentes en ******. Se anexa al presente las siguientes Documentales. A) PUESTA A DISPOSICIÓN de fecha 18 de Noviembre del año en curso, ante la Agencia ****** a del Ministerio Público de la Federación de Procedimientos Penales en ******, Tamaulipas. B) PARTE MEDICO del C. […] (No. ******) emitido por el médico adscrito a la Cruz Roja ****** Zona Centro de ******, Dr. **********, en el cual informa el estado médico del antes señalado en los siguientes términos "… no existen hematomas en el cuerpo, íntegro físicamente…", asimismo se anexa partes médicos de los ofendidos, los CC. […] (*****), […] (No. *****), […] (No. ******) […] (No. ******)."*

4. Con una copia del informe rendido por la autoridad señalada como responsable, se dio vista a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés

conviniera, y en el mismo acto se ordenó la apertura de un período probatorio consistente en diez días hábiles, circunstancia que se hizo del conocimiento a las partes por si fuera el caso que desearan aportar alguna prueba de su intención.

5. Pruebas desahogadas en el procedimiento.

5.1. Mediante oficio número ******, de fecha ******, el Agente del Ministerio Público Investigador para la Atención a Conductas Antisociales, Cometidas por Adolescentes de *******, Tamaulipas, informó lo siguiente:

> *"… en esta Fiscalía se inició el procedimiento de investigación número ****** en contra del adolescente […] por los delitos de SECUESTRO EXPRESS Y VIOLACIÓN, ejercitándose la correspondiente Acción de Remisión en fecha **********, dejando a disposición de dicha autoridad el adolescente antes mencionado."*

5.2. Comparecencia ante este Organismo de la quejosa **********, en fecha **********, a quien se le dio vista del informe de la autoridad, manifestando lo siguiente:

> *"… Que visto el informe rendido a este organismo por el ********* (COORDINADOR MUNICIPAL DE LA POLICÍA ESTATAL-******) por oficio **********, sólo quiero señalar que si bien es cierto que mi hijo […] fue detenido por portar el armamento que se le encontró en el momento de la detención, el cual no era de él sino de una persona que lo acompañaba del cual desconozco el nombre pero a ésta persona no lo detuvieron, además mi hijo no secuestró a nadie sino que el responsable de dicho secuestro es la otra persona que no detuvieron, no obstante esto no justifica la forma en como fue tratado en su detención, que aunque no fue golpeado pero lo exhibieron en los medios de comunicación. A la fecha mi hijo […], enfrenta un proceso ante el Juzgado Especializado en Justicia para adolescentes en **********, Tamps con número de exp. *******, dentro del cual aún no se dicta resolución."*

5.3. Mediante oficio número ****** de fecha **********, el Juez de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes del ******* Distrito Judicial del Estado, informó lo siguiente:

> *"… que por parte de los elementos a mi cargo en ningún momento se ha realizado la divulgación ante los medios informativos de los datos personales y confidenciales del adolescente. Así mismo dicho procedimiento se encuentra en etapa de trámite, lo que informo a Usted para su conocimiento, y efectos legales a que haya lugar."*

5.4. Constancia de fecha ******, recabada por personal profesional de este Organismo, en la que se asentó lo siguiente:

> *"… Que atendí llamada telefónica de la C. **********, de generales conocidas en la queja de mérito, quien manifiesta que su hijo […], le ha pedido no hablar con nadie sobre su detención ya que teme por su integridad física y la de su familia, además el temor de su hijo ha aumentado debido a la inseguridad que ha prevalecido en esta ciudad en estas fechas, por lo que no quiere declarar nada al respecto ante ninguna autoridad."*

6. Una vez agotado el período probatorio, el expediente quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis se obtuvieron las siguientes:

C O N C L U S I O N E S

Primera. Este Organismo es competente para conocer la queja presentada por la C. **********, por tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorias de derechos humanos imputados a servidores públicos estatales, al tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

Segunda. No se advierte que en la especie se actualice alguna causal de improcedencia, por lo que se procede realizar el estudio de los motivos de inconformidad planteados por la parte quejosa.

Tercera. La quejosa de esta vía reclama en concepto de agravio la privación ilegal de la libertad de su hijo, contenida en el primer párrafo del articulo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los que reconocen y tutelan que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas en la Constitución o en las leyes dictadas conforme a ella; el derecho a la seguridad jurídica al incumplir los funcionarios policiales con sus obligaciones de respetar y proteger los derechos humanos del detenido.

Cuarta. La impetrante de los Derechos Humanos expresó esencialmente en concepto de agravio que el día ******, entre las ****** **y ******** de la noche su hijo fue detenido por elementos de la Policía Estatal Acreditable, **siendo presentado ante el Ministerio Público de la Federación hasta las ****** horas del día *** del mes y año que se cita**; que a su hijo le fue tomada una impresión fotográfica por sus captores, cuya fotografía fue exhibida en un noticiero del canal *** de ******.

Quinta. En principio, debe mencionarse que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas desea patentizar que la materia de las recomendaciones que emite en el ejercicio de sus funciones, no incluye pronunciamiento alguno sobre la inocencia o responsabilidad penal de los afectados, sino que su único propósito es vigilar el respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades y servidores públicos del Estado, que se contemplan en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en nuestro derecho interno.

Sexta. En esta línea de pensamiento, la parte quejosa reclama inicialmente que su hijo fue detenido de manera injustificada por elementos de la Policía Estatal Acreditable, siendo trasladado a la Procuraduría General de la República, lugar donde uno de sus aprehensores de un teléfono celular le mostró la fotografía de una arma que supuestamente llevaba su hijo.

Sobre esta detención en particular, debe mencionarse que obra en el sumario, el informativo justificado policial de **********, signado por el Coordinador Municipal de la Policía Estatal ******, en el que refiere que el hijo de la quejosa de esta vía, fue detenido en el momento en que en compañía de otras personas, tenían secuestradas a dos mujeres y dos varones; que a tales personas se les encontró en poder de un fusil calibre ***mm, tipo ****, marca ******; un cargador para *** cartuchos; *** cartuchos **mm; un teléfono celular ****; un vehículo **********, modelo ********, color ******, cuatro puertas, con placas del estado de ******, motivo por el cual fueron puestos a disposición de la Agencia ****** del Ministerio Público de la Federación con residencia en ******, Tamaulipas.

Lo informado con antelación, fue corroborado en el sumario con el informe que rinde la Agente del Ministerio Público Investigador para la Atención a Conductas Antisociales Cometidas por Adolescentes, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el que señala que con motivo de los hechos precisados, dada la minoría de edad del hijo de la quejosa de esta vía, se le inició con el procedimiento de investigación número **********, por los ilícitos de Secuestro Express y Violación, en la que se le ejercitó la correspondiente Acción de Remisión.

En razón de lo anterior, el estudio detallado y meticuloso de todas las constancias que integran el sumario que se resuelve, permite advertir que no se demuestran las irregularidades imputadas en el proceder de los elementos de

seguridad pública señalados, al haber ajustado su conducta de conformidad con la fracción X y XXIII del artículo 22 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, por lo cual, es procedente dictar un **ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD**, por lo que a la detención se refiere, en virtud de que fue sorprendido cuando portaba diversos objetos entre los que se encontraba un arma de fuego, además de las personas que se encontraron privadas ilegalmente de su libertad personal –víctimas del secuestro-, de conformidad con la fracción I del artículo 65 del Reglamento de este Organismo, que refiere:

> *"**Artículo 65.** Los Acuerdos de No Responsabilidad se expedirán después de haberse concluido el procedimiento de investigación de la queja y no se comprueben las violaciones de derechos humanos imputadas a una autoridad o servidor público, en los siguientes supuestos: **I.** Por que el acto emanado de la autoridad o servidor publico se encuentre ajustado a derecho y, por lo tanto, sea inexistente la violación de derechos humanos; y"*

Séptima. Además de lo anterior, la señora ********** adujo que los elementos de la Policía Estatal Acreditable le tomaron una fotografía a su hijo la cual posteriormente fue exhibida en el noticiero punto de vista que se trasmite por el canal **** en ******, sin embargo, debe mencionarse que en el sumario de queja no obran los elementos de prueba suficientes que acrediten fehacientemente sus afirmaciones, por que en ese sentido, su sola declaración informativa resulta insuficiente para demostrar esos actos reclamados, considerando que contrario a su dicho, obra en el sumario el informe de autoridad en el que se señala que no existe antecedente alguno de que los servidores públicos implicados hubiesen exhibido al detenido ante los medios de comunicación y/o proporcionado los datos personales del detenido.

No se omite mencionar que sobre este tema, la Juez de Primera Instancia Especializada en Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial del Estado, comunicó que por parte de los elementos a su cargo en ningún momento se ha realizado la divulgación ante los medios informativos de los datos personales y confidenciales del adolescente en cuestión, siendo lo procedente dictar un **ACUERDO DE NO ACREDITADOS LOS HECHOS**, de conformidad con la fracción II del artículo 65 del Reglamento de este Organismo, que refiere:

> *"**Artículo 65.** Los Acuerdos de No Responsabilidad se expedirán después de haberse concluido el procedimiento de investigación de la queja y no se comprueben las violaciones de derechos humanos imputadas a una autoridad o servidor público, en los siguientes supuestos: … **II.** Por no obtenerse los elementos probatorios para acreditar en forma fehaciente la violación de derechos humanos."*

Octava. En otro aspecto del reclamo, la señora ********** adujo que los elementos de la Policía Estatal Acreditable que detuvieron a su hijo no lo pusieron inmediatamente a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, al señalar que a su vástago lo detuvieron entre las ********** del día **********, sin embargo, que ante el Ministerio Público lo presentaron hasta las ****** del día **********, desconociendo en qué lugar mantuvieron los policías a su hijo durante ese lapso de tiempo.

Es oportuno señalar que atento a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez que se lleve a cabo la detención de una persona por encontrársele en flagrancia del delito, debe ser puesta **sin demora** a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. En ese sentido, los artículos 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que toda autoridad que efectúe la privación

de la libertad de una persona, tendrá que llevarla **sin demora** ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales.

Sobre este particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esta prerrogativa tiene una especial trascendencia ya que el análisis posterior a la detención de la persona tiene como objetivo verificar la existencia de una detención ilegal que al acreditarse traería como consecuencia que la autoridad ministerial se viera obligada a restablecer la libertad del detenido y en su caso a invalidar todas las pruebas que hayan sido obtenidas con motivo de la restricción de su libertad.

A su vez, dentro de la Décima Época del Seminario Judicial de la Federación, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación dio alcance y contenido al derecho fundamental que toda persona detenida tiene de ser puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público bajo el rubro y texto:

> ***"DERECHO DE LA PERSONA DETENIDA A SER PUESTA A DISPOSICION INMEDIATA DEL MINISTERIO PUBLICO. LA RETENCION INDEBIDA GENERA COMO CONSECUENCIAS Y EFECTOS LA INVALIDEZ DE LOS DATOS DE PRUEBA OBTENIDOS DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN AQUELLA, AL SER CONSIDERADOS ILÍCITOS.***
> *De conformidad con el artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la limitación a la libertad personal con motivo de la detención por flagrancia, implica que toda persona detenida bajo esa hipótesis sea puesta sin demora a disposición de la autoridad ministerial. El reconocimiento y protección de este derecho fundamental conlleva una trascendencia especial, pues el escrutinio estricto posterior a la detención se dirige precisamente a verificar que no hubo una privación ilegal de la libertad que, de actualizarse, provocaría invalidar la detención, así como datos de prueba obtenidos con motivo de la misma, además que ello deberá desencadenar el reproche y la exigencia de responsabilidad a los agentes captores. Así, en términos estrictamente constitucionales, el agente que detenga al imputado por la comisión de un delito en flagrancia, tiene obligación de ponerlo sin demora ante el ministerio público, esto es, sin retraso injustificado o irracional. Ahora bien, las*

consecuencias y efectos de la vulneración al derecho humano de libertad personal, con motivo de la retención indebida, deben vincularse estrictamente con su origen y causa; lo que implica que si la prolongación injustificada de la detención generó la producción e introducción de datos de prueba, éstos deben declararse ilícitos, lo mismo que las diligencias pertinentes se hayan realizado en condiciones que no permitieron al inculpado ejercer el derecho de defensa adecuada, de conformidad con los principios de debido proceso y obtención de prueba lícita."

Ahora bien, para entrar al estudio sobre la violación a este derecho se debe de mencionar que este siempre se debe de sujetar a las circunstancias particulares de cada caso, es decir, no se pueden establecer reglas temporales específicas, por lo que se llega a la conclusión de que existe "*una dilación indebida en la puesta a disposición del detenido ante el Ministerio Público, cuando no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica"*

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fleury y otros vs Haití, ha señalado que "*corresponde a las autoridades policiales o administrativas demostrar si existieron razones o circunstancias legítimas para no haber puesto sin demora a la persona a disposición de las autoridades competentes*". Estas razones o circunstancias deben descansar en impedimentos fácticos, reales, comprobables y lícitos, lo que significa que la autoridad ante la dilación de presentar a una persona ante el Ministerio Público, no puede argumentar situaciones tales como la búsqueda de la verdad, la debida integración de la investigación o el desahogo de interrogatorios hacia los detenidos.

De acuerdo con las actuaciones que obran del presente caso, se advierte que el hijo de la quejosa **fue detenido**, según informe de autoridad siendo las ******horas del día ******,** y fue **presentado** junto con otras personas ante la Agencia ****** del Ministerio Público de la Federación en ********, Tamaulipas, **hasta las ****** del día ******, según se advierte del sello de recepción del oficio mediante el cual fue puesto a disposición.

Tal y como se aprecia, los agentes de la Policía Estatal Acreditable una vez que detuvieron al hijo de la impetrante, demoraron más de 5-cinco- horas en ponerlo a disposición del Ministerio Público de la Federación, aun cuando no se advierten impedimentos que hubieran sido generados por circunstancias propias a la distancia entre el lugar de la detención y las instalaciones de la Fiscalía ante la cual presentaron a las víctimas y a los detenidos, ya que ambos lugares se encuentran situados dentro de la misma zona de la Ciudad de ******. Ante esta dilación, los elementos policiales no señalaron ante la autoridad investigadora y ante este organismo mediante el informe respectivo, cuáles habían sido las causas, motivos o razones que les imposibilitaron la puesta inmediata de los detenidos, mucho menos justificaron ante esta Comisión que ese retraso se hubiere debido al propio ejercicio de sus funciones legales y legítimas como elementos de la Policía Estatal Acreditable.

Sobre este tema, diversos mecanismos internacionales de protección a derechos humanos han identificado que a nivel nacional se vive un contexto en el que habitualmente se violenta el derecho fundamental a ser puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público. En este sentido, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas recientemente, al analizar los informes rendidos por México, expresó:

> "*9. Preocupan al Comité las informaciones según las cuales a los detenidos se les niega con frecuencia el pronto acceso a un abogado*

y a un examen médico independiente, el derecho a notificar su detención a un familiar ***y a comparecer inmediatamente ante un juez*** *(…)"*

Continuando con el análisis, no se puede dejar pasar sin advertir que en el informe de autoridad se dice que luego de su detención, el hijo de la quejosa fue trasladado a las instalaciones de barandilla municipal, donde señalan que el detenido les refirió pertenecer a una organización delictiva, encargándose de extorsionar, robar vehículos y secuestrar, entre otras actividades ilícitas, esto es, que en ese lugar fue interrogado por sus apresadores sin que se desprenda que haya existido la presencia de un abogado o defensor público que hubiera podido salvaguardar sus derechos, lo cual, sumado con la dilación que existió en ponerlo a disposición del Ministerio Público Federal, resulta incompatible con el derecho que se tiene a un debido proceso legal y a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que "*la policía no puede simplemente retener a un individuo con la finalidad de obtener su confesión o información relacionada con la investigación que realiza, para inculparlo a él o a otras personas*", en el rubro y texto siguiente:

"DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO SIN DEMORA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. ALCANCES Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS GENERADAS POR LA VULNERACIÓN A TAL DERECHO.
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra un régimen general de libertades a favor de la persona, entre las cuales, destaca el derecho a la libertad personal. Sin embargo, como todo derecho humano, éste no es absoluto, por lo que la citada norma fundamental también delimita exhaustivamente diversas hipótesis para su afectación, a saber: a) la orden de aprehensión; b) las detenciones en flagrancia; y, c) el caso urgente. En tratándose de la flagrancia, esta Primera Sala ha puntualizado que la misma constituye una protección a la libertad personal, cuyo control judicial ex post debe ser especialmente cuidadoso, ya que quien afirma la legalidad y constitucionalidad de una detención, debe poder defenderla ante el juez respectivo. Ahora bien, por cuanto se refiere al derecho fundamental de "puesta a disposición ministerial sin demora", es dable concluir que dentro del régimen general de protección contra detenciones que prevé el artículo 16 constitucional, se puede derivar

la exigencia de que la persona detenida sea presentada ante el Ministerio Público lo antes posible, esto es, que sea puesta a disposición de la autoridad ministerial o judicial respectiva, sin dilaciones injustificadas. Así, se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público, cuando no existan motivos razonables que imposibiliten esa puesta inmediata, los cuales pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos, los que deben ser compatibles con las facultades concedidas a las autoridades, lo que implica que los agentes aprehensores no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público; desechando cualquier justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de la verdad o en la debida integración del material probatorio y, más aún, aquellas que resulten inadmisibles como serían la presión física o psicológica al detenido para que acepte su responsabilidad o la manipulación de las circunstancias y hechos de la investigación. En suma, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la violación al derecho fundamental de "puesta a disposición del indiciado ante el Ministerio Público sin demora" genera como consecuencias: a) la anulación de la confesión del indiciado, obtenida con motivo de esa indebida retención; b) la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada, los cuales no producirán efecto alguno en el proceso ni podrán ser valorados por el juez; y, c) la nulidad de aquellas pruebas que a pesar de estar vinculadas directamente con el hecho delictivo materia del proceso penal, sean recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora so pretexto de una búsqueda de la verdad o debida integración del material probatorio -en el supuesto de prolongación injustificada de la detención-, sin la conducción y mando del Ministerio Público; es decir, sin la autorización de este último. No obstante, debe precisarse que las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de una detención en flagrancia no pueden ser invalidadas por actos posteriores, como la obtención de pruebas que tengan como fuente directa la demora injustificada, a menos que se acredite la existencia de vicios propios de la misma detención del inculpado que determinen que ésta sea considerada inconstitucional."

Elementos de razón que ponen de manifiesto que al detenido se le violentó su derecho fundamental a ser puesto **sin demora** a disposición del ministerio público, en los términos de lo establecido en los artículos 1 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; los diversos 2.1, 9.3 y 14.3

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los numerales 1.1, 7.1,7.5 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Principio 10 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, lo cual configura una privación injustificada , a la luz del artículo 7.3 y 8.2 del Pacto de San José y de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el presente caso y en virtud que los hechos que nos ocupan permiten advertir que el detenido no fue puesto a disposición con la brevedad dispuesta en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la Carta Magna, lo que se traduce en una afectación directa a su integridad y seguridad personal, y que en términos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye tratos crueles e inhumanos.

Novena. "*De la Reparación del daño"*. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, han establecido la obligación que tienen los Estados de reparar el daño a las víctimas de violaciones a derechos humanos. En el Sistema Universal de Protección a Derechos Humanos se han desarrollado los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional, mientras que en el Sistema Interamericano la propia Convención Americana dispone este compromiso en su artículo 63.1, al señalar la obligación de garantizar al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados, y al establecer la obligación de reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la violación de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

En relación al derecho que tienen las víctimas de violaciones a derechos humanos de recibir una reparación integral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que:

> *"Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido."*

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto a la obligación de reparar, y ha manifestado que esta se regula en todos sus aspectos por el derecho internacional, invocando disposiciones de derecho interno. El Máximo Tribunal Interamericano ha establecido que "*la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere plena restitución, lo que consiste en el restablecimiento de la situación anterior, y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo, así como el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados*". No se debe olvidar que en el tema de reparaciones de violaciones a derechos humanos, "*se debe de pensar desde la perspectiva de la integralidad de la personalidad de la víctima, y teniendo presente su realización como ser humano y la restauración de su dignidad*".

En el derecho interno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo tercero de su artículo 1° señala:

> "*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley*".

Sirve de apoyo además, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 257, Tomo 1, 10ª época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen:

> ***"DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA.***
> *Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, que los derechos humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental y los tratados internacionales suscritos por México, y que la interpretación de aquélla y de las disposiciones de derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las mejores condiciones para las personas. Asimismo, del párrafo tercero de dicho precepto destaca que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, lo cual conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas las personas por igual, con una visión*

interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de aquéllos."

En congruencia de lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 3, 8, 46, 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se emite la siguiente:

R e c o m e n d a c i ó n:

Al Secretario de Seguridad Pública del Estado:

Primero. Gire sus instrucciones escritas a quien corresponda, para que administrativamente se revise la actuación de los CC. ********** y **********, elementos de la Policía Estatal Acreditable, por la prestación indebida del servicio público en que incurrieron.

Segundo. Con el fin de abonar en la profesionalización de los agentes de la Policía Estatal Acreditable implicados en este asunto, se implemente una capacitación sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, especialmente, los relacionados con la detención de las personas.

Tercero. Provea lo necesario para que con anuencia de sus padres, el menor sea provisto de asistencia psicológica, lo que a su vez constituye una medida de compensación.

Asimismo, con apoyo en los artículos 3, 8 y 46 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 65 fracciones I y II del Reglamento del Organismo, se resuelven los siguientes:

A C U E R D O S:

Primero. Se dicta **ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD**, por cuanto a la detención se refiere, en los términos expuestos en la conclusión sexta.

Segundo. Se dicta **ACUERDO DE NO ACREDITADOS LOS HECHOS,** en cuanto a la exhibición ante los medios de comunicación imputada, de acuerdo a lo expresado en la conclusión séptima.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, solicítese a la autoridad recomendada que dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la presente resolución, informe a este Organismo si acepta o no la recomendación formulada y, en su caso, enviar dentro de los 15 días siguientes las pruebas de que se ha iniciado su cumplimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

Así lo formuló el C. Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Doctor José Ramiro Roel Paulín, aprueba y emite el C. Doctor José Martín García Martínez, Presidente de esta Comisión.

Dr. José Martín García Martínez
Presidente

Dr. José Ramiro Roel Paulín
Secretario Técnico

Proyectó:

Lic. Octavio César González Ledesma.
Coordinador de Seguimiento
de Recomendaciones.

L'OCGL/l'pgh.

EXPEDIENTE N°: 287/2014
QUEJOSA: ******
RESOLUCION: RECOMENDACIÓN N°. 019/2015

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil quince.

Visto para resolver el expediente número 287/2014 motivado por la **C. ******,** en representación de ******, en contra de actos presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a elementos de la Policía Estatal y del personal del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad, los cuales fueron calificados como allanamiento de morada, lesiones, detención arbitraria, aseguramiento indebido de bienes y cobro indebido a reclusos; agotado que fue el procedimiento, este Organismo procede a emitir resolución tomando en consideración los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, radicó el 27 de agosto del 2014, la queja presentada por la **C. ******,** quien denunció lo siguiente:

> *"… Que el día sábado 23 de agosto del año en curso, aproximadamente a las 6 ó 6:30 de la mañana la suscrita me encontraba saliendo de mi casa, ubicada en el ejido Nuevo Dolores, en compañía de mi esposo *****, cuando llegaron como 8 ó 10 patrullas de la Policía Estatal rodeando toda la cuadra, y se bajaron los elementos vestidos de negro y completamente encapuchados, tapados de la cara, metiéndose a la casa de mi suegra que vive enfrente de mi casa, así como también, se metieron a mi terreno, dirigiéndose hacia mi esposo y hacia mi, ya que nosotros íbamos a subirnos a una camioneta porque mi esposo me iba a trasladar a la central de autobuses de Abasolo, llegaron hacia nosotros como 4 agentes agarrando a mi esposo y otros 2 hacia mi, pero yo me les zafé, ya que vi como le pegaban a mi esposo, con las cachas de las armas largas en la espalda y en la panza, poniéndolo boca abajo, yo primero les preguntaba qué era lo que pasaba y que por qué se lo llevaban de esa manera me zafé para que no me detuvieran y corrí hacia enfrente de la casa de mi suegra, gritándoles a los policías que lo soltaran y que no lo golpearan y por qué le hacían eso, ellos me gritaban bien feo, diciendo que me agarraran a mi, y que me subieran a la patrulla y me esposaran y que yo les diría lo que ellos querían saber, entonces*

*un elemento me agarró y me esposó, y agarraron también a mi concuña ******, atándome la esposa a una muñeca de ella, y nos subieron a una patrulla, entonces otros policías se quedaron enfrente de la casa de mi suegra con mi esposo y yo desde arriba de la patrulla veía que le estaban pegando con las armas, y que lo tenían a patadas, ya que lo tenían agachado sobre otra patrulla, y en ese lugar también se encontraba mi suegra ****** y que también estaban los vecinos viendo todo, uno de ellos, que al parecer era el Comandante les dijo a los elementos que fueran a asegurar mi casa ya que teníamos armas y droga y que todo lo que hallaran ahí lo sacaran, y muchos elementos corrieron hacia adentro de mi casa y se metieron, sin importarles que en el interior estaban mis hijos los cuales tienen 15, 16 y 18 años de edad y se encontraban dormidos, los asustaron y se metieron e hicieron muchos destrozos en el interior buscando supuestamente drogas y armas buscando todo en mi casa y revolviendo; después ya salieron, se subieron a las patrullas y nos trajeron a mi esposo, mi cuñada y a mi, trasladándonos a esta ciudad, nos llevaron a unas oficinas que no se exactamente donde era, ya que al llegar a esta ciudad nos taparon la cara, nos metieron como a unos baños que están muy amplios y estaba como un corredor con regaderas, lavabos y nos pusieron a mi concuña y a mi juntas y a mi esposo se lo llevaron y sólo escuchábamos que él gritaba bien feo, gritaba que le quitaran la bolsa, que ya no aguantaba y se escuchaba como que pegaba en la pared, yo creo que ya no aguantaba la respiración, también observamos como los policías con unos botes de agua y se los llevaban y se escuchaba como gritaba mi esposo, al parecer le echaban agua y le daban toques, a mi y a ****** nos tenían hincadas, y nos aventaron una cobija para que no viéramos nada, que no los viéramos a ellos, nos dijeron que si los veíamos nos iban a dar un cachazo por cada levantada de cabeza, y así nos tuvieron hincadas y pateándonos, y nos preguntaban que si éramos halcones, que qué hacíamos y que por qué encubríamos a mi esposo, y nosotros sólo les decíamos que no sabíamos nada de lo que estaban hablando, y ahí nos tuvieron hincadas hasta como a las 4 de la tarde que acabaron de golpear a mi esposo y creímos que se lo habían llevado porque ya no se escuchaba nada, ni que se quejara ni que gritara, tenía temor porque pensaba que ya me lo habían matado, nos dijeron que si teníamos hijos y que si los queríamos volver a ver que dijéramos que ellos se habían portado bien con nosotras, y ya en la tarde como que se fueron los elementos a comer y dejaron solo a uno al cual yo le suplicaba que me dejara ver a mi esposo, y que sólo quería hacer una oración por él porque no sabía en qué condiciones estaba por todas las horas de tortura y sólo oía que se quejaba y se quejaba, y ese elemento me permitió entrar a la otra parte del cuarto y pude ver a mi esposo que lo tenían esposado sobre una silla y todo mojado, completamente golpeado, me pidió que le cantara un coro porque tenía miedo de que lo mataran, y yo me puse a orar por él y ya le canté un coro y el guardia me dijo que ya me viniera porque se escuchaba que llegaron todos en las camionetas y me llevó a donde me tenían*

*hincada y me puso como estaba pidiéndome que no dijera nada que me había permitido verlo porque no quería tener problemas; después estuve ahí y se llevaron a mi esposo, el guardia que nos dejaron ahí nos dijo que ya no nos preocupáramos y que ya la habíamos librado y que nos iban a mandar para el pueblo de donde éramos, y nos subieron a ****** y a mi de nuevo a la patrulla vendadas de los ojos para que no supiéramos por donde íbamos y nos dejaron tiradas en una brecha de un ejido cerca de Abasolo, donde fuimos ayudadas por un señor que andaba cuidando chivas y nos sacó y nos llevó hacia el lado del camino que va al pueblo del Tío *****, en Abasolo, después un señor de los que andaban trillando, que es conocido de mi concuña, nos dio un raid y nos dejó en la orilla de Dolores, donde nosotros vivimos, y que íbamos caminando y venía mi hermano ****** por la orilla del canal, y él me llevó a la casa de mi mamá y a mi concuña la llevamos a la casa de mi suegra pero ahí ya no había nadie y ahí la dejamos, y ya desde entonces no se de ella. Después mi esposo le llamó a mi hijo por teléfono y le dijo que estaba en la ministerial, y le preguntó por mi, ya que los policías le habían dicho que ya me habían matado, pidiéndole que viniéramos a ver y que le trajéramos ropa limpia y unas pastillas de la presión porque se sentía mal, y nos venimos a esta ciudad, y yo pedí un raid, y me vine a esta ciudad, y fui a la ministerial y me dejaron ver a mi esposo como a las 7 de la noche, ya que solamente me dieron 5 minutos para verlo, y lo pude ver observando que estaba acostado sobre una cama de concreto y no se podía poner de pie, batallaba mucho para levantarse y como pudo se hizo a la orilla de la reja y me dijo que no lo dejara solo y que todo iba a estar bien, que no tuviera miedo, y enseguida entró la guardia y me dijo que me saliera que ya se me había acabado el tiempo, y yo me salí. Al día siguiente domingo, regresé a la visita a las 9 de la mañana, pero me dijeron que ya no estaba ahí y que lo habían trasladado al penal; como pude me fui al penal a preguntar por mi esposo y una licenciada me dijo que a las 12 le iban a tomar una declaración y ya se llegaron las 12 y lo trajeron al Juzgado, y estuvo declarando y lo pude ver; y que ya lo checó el médico del Doctor y le había dado pastillas para el dolor y para el azúcar, y se encuentra en el penal, y el día de hoy lo volví a ver y pude observar que está más golpeado, ya que trae una rajada en la frente y la cara bien golpeada, y él no me dijo quien lo golpeó en el interior pero al ir yo a la visita otros internos me dijeron que querían dinero para brindarle seguridad en el interior del penal, y he recibido llamadas donde me dicen que quieren $200.000.00 pesos para las 4 de la tarde del día de hoy para darle seguridad a mi esposo, por lo que, al no contar con nada de dinero tengo mucho miedo de que algo le pase a mi esposo, ya que él me dice que también tiene miedo de que lo maten y que ya no soporta más tanto golpe. Y que los policías le sembraron a mi esposo droga y poncha llantas, diciendo que las traían en la camioneta, pero eso no es cierto, y la camioneta de mi esposo es una Nissan Pick Up, de modelo viejito, se la trajeron los policías de la casa, pero en ella no había*

nada y cuando nos trajeron detenidos ellos los policías pasaron y la dejaron en la Comandancia de Abasolo".

2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo cual se admitió a trámite, radicándose con el número 287/2014, y se acordó solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe justificado, relacionado con los hechos denunciados, así como la exhibición de la documentación que se hubiera integrado sobre el caso.

3. Mediante oficio SSP/DJAIP/DAJI/DADH/001253/2014, de fecha 05 de septiembre del 2014, el C. Lic. ******, Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, rindió el informe correspondiente, en el que refirió lo siguiente:

*"…que no son ciertos los hechos imputados a esta Autoridad por parte de las quejosas, mas sin embargo, no omito señalar que integrantes de la Policía Estatal Acreditable, realizaron la detención del C. ******, el día 23 de agosto de 2014, siendo las 13:00 horas aproximadamente, al realizar recorrido de seguridad y vigilancia, desplazándose sobre la Calle Río Pánuco, como referencia está cerca de un campo deportivo, se percataron que se encontraba estacionada del lado derecho, una camioneta color amarillo y se observaba en su interior una persona del sexo masculino, quien al notar la presencia de los integrantes de la Policía Estatal Acreditable, abrió la puerta y trató de correr hacia el interior de una casa, motivo por el cual los elementos le dieron alcance, al tratar de abrir un portón pequeño metálico, realizándole una revisión corporal, en la cual se le encontró en la bolsa delantera izquierda de su bermuda, dos teléfonos celulares con las características siguientes: color rosa Marca NOKIA, Modelo 201.2, IMEI 355187/05/899638/6, con pila Marca NOKIA BL-5J, con chip de la compañía Movistar, con número 8952033810932430066F y otro teléfono celular color negro, sin Marca, ni modelo visible, con los datos siguientes FCC ID:RAD100 OT – 102ª, TCT MOBILE 020 3HAB 07 7JS, Hecho en China 011781002912790, con chip de la compañía Movistar con número 8952031810978544491F y al realizarle una revisión a la unidad motriz, de la cual descendió quien dijo llamarse ******, se localizó sobre el asiento una cartera al parecer de piel, color negro y debajo del asiento a la altura del chofer una bolsa de plástico la cual contenía dos bolsitas del mismo material y dentro de éstos una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana y ocho estrellas metálicas conocidas comúnmente como poncha llantas, manifestando*

*de forma voluntaria y sin coacción alguna que la marihuana la quería para su venta, que cada una le da en doscientos pesos y que sólo traía esas dos bolsitas porque en su domicilio tenía guardadas cincuenta bolsitas de pase, las cuales las tienen enterradas en la sala de su casa debajo de un sofá, motivo por el cual se realizó la detención de dicho sujeto, siendo puesto a disposición del Agente ***** del Ministerio Público Investigador, de esta ciudad. […]".*

4. Así mismo, mediante oficio SDJ/299/2014, el C. Lic. ******, Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Ejecución de Sanciones de ciudad Victoria, rindió el informe correspondiente, en el que refirió lo siguiente:

*"…que NO SON CIERTOS, los actos atribuidos a este CEDES, ya que esta Autoridad desconoce por completo los supuestos hechos narrados por la quejosa en su escrito de queja, tanto lo relacionado con la detención en contra de su esposo, como lo concerniente a los supuestos actos de extorsión y demás manifestaciones que refiere en la queja de mérito. Por otra parte no omito hacer mención que en atención a la medida cautelar número ******/2014, misma en el que denuncia diversos hechos supuestamente cometidos en contra de dicho interno, por parte de otros internos de este centro penitenciario, con los cuales se pudiera ver afectada su integridad física y/o vida, se aplicó una medida cautelar para salvaguardar la integridad física y/o la vida del mismo, habiendo sido ubicado en el área de enfermería, asimismo le informo que se le proporcionó de inmediato la atención médica que requería, en virtud de lo cual fue excarcelado al Hospital Civil de esta ciudad, lugar en donde actualmente se encuentra internado recibiendo los cuidados médicos que su estado de salud demanda".*

5. Los informes rendidos por las autoridades presuntamente responsables fueron notificados a la quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera, y por considerarse necesario, con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a esta Institución, se declaró la apertura de un período probatorio por el plazo de diez días hábiles.

6. Dentro del procedimiento se desahogaron las siguientes probanzas:

6.1. Pruebas aportadas por la quejosa.

6.1.1. Testimonial a cargo de la C. ******, quien en relación con la presente queja, manifestó lo siguiente:

*"… Que el sábado 23 de agosto del año en curso, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, yo me encontraba con mis tres hijos menores de edad dormida, llegando varios elementos de la Policía Estatal, aluzándome con unos focos y diciéndome que me levantara, preguntándome por Pancho, y que si él pertenecía a algún grupo, yo les contesté que ahí no vivía y que yo no sabía nada, ya que yo no tengo mucha comunicación con él, levantándome y prendiendo los focos, sacándome un elemento, diciéndole que ahí no vivía que él vivía para atrás, agarrándome un elemento y otro le dijo que me llevaran a la verga, diciéndoles que a mi por qué me llevaban, subiéndonos a la patrulla a mi cuñada de nombre ****** y a mi, esposándonos, ya estando arriba de la patrulla, yo les decía que me dejaran porque tenía que irme con mis niños, contestándome los elementos que me callara, trasladándonos para la Presidencia Municipal de Abasolo, Tamaulipas, permaneciendo ahí como unos 10 minutos, trasladándonos posteriormente a esta ciudad, llevándonos en el campo de tiro que se ubica en la Calzada Tamatán, bajándonos de la unidad y tapándonos con una cobija, metiéndonos a un baño, y sentí que me dieron un golpe en la cabeza, provocándome un esguince, permaneciendo en ese lugar varias horas, vendándonos de los ojos, subiéndonos a la unidad y dejándonos en un rancho que se ubica cerca de Abasolo hasta como las 4:00 de la tarde aproximadamente, diciéndonos que no nos moviéramos hasta que se retiraran las patrullas de la Policía Estatal, pidiéndole auxilio a una persona del sexo masculino que se encontraba por ahí, caminando por un camino de terracería y llegamos a un ejido que se llama El Tío******, pidiendo raid en la carretera a un señor que iba pasando, llevándonos en la orilla de la carretera cerca del ejido donde vivimos".*

6.1.2. Testimonial a cargo de ******, quien dijo lo siguiente:

*"… Que el sábado 23 de agosto del año en curso, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, golpearon la puerta de mi domicilio, preguntando que quien era, diciendo que Policía Estatal, y al abrir la puerta preguntaron por mi hijo******, a lo que yo les dije que no sabía donde estaba, introduciéndose a mi domicilio, revisando toda mi casa porque los elementos decían que teníamos armas, a lo que yo les juraba que ahí no había nada, en eso venían mi nuera ****** y mi hijo ***** de su casa, ya que viven dentro del mismo solar, y en eso los elementos agarraron a mi hijo, golpeándolo frente de mi, y yo les gritaba que no lo golpearan, pero los elementos no hicieron caso y lo seguían golpeando, subiendo a mi hijo a una unidad y a mis dos nueras ****** y ****** a otra unidad, llevándoselos detenidos y ya no supe nada, ya que yo me quedé a cuidar los niños de mi nuera".*

6.2. Pruebas obtenidas por esta Comisión.

6.2.1. Documental consistente en constancia de fecha 25 de agosto del 2014, elaborada por personal de este Organismo, en la cual se asentó lo siguiente:

*"… Que recibí llamada de quien dijo llamarse ******, quien habita en calle Río Tamesí s/n del poblado de Abasolo, Tamaulipas, con número de celular ******, con el fin de poner en conocimiento que sufrieron abuso de autoridad, allanamiento de morada y lesiones por parte de elementos de la Policía Estatal, hechos suscitados el día sábado 23 de agosto del presente año, aproximadamente como a las 6:00 ó 6:30 de la mañana, llevándose detenidos a ella, a su esposo de nombre ****** y una cuñada de este de nombre *******, argumentando la informante que tanto ella como la señora ****** fueron abandonadas y amordazadas con cinta en el monte de un ejido cercano al poblado de Abasolo, mismas que fueron primeramente golpeadas, mientras que su esposo fue detenido y acusado injustamente por unos delitos como portación de armas y droga; que se dieron cuenta de los hechos sus hijos ****** de 15 años, ****** de 16 años y ******, por lo que solicita que personal de este visite a su señor esposo y que ella acudiría a ratificar la queja el día de mañana, más sin embargo en un lapso de 15 minutos se volvió a comunicar la informante con el fin de informar que suspendiera todo el trámite que se pretendía hacer en esta Comisión, así mismo como ir a visitar al detenido en el Cedes, ya que temía represalias por parte de la autoridad".*

6.2.2. Declaración informativa del C. ******, quien declaró lo siguiente:

*"… Que el día 23 de agosto del año en curso, aproximadamente a las 6:30 minutos de la mañana, yo me encontraba en mi casa ubicada en el ejido Dolores del municipio de Abasolo, con mi esposa de nombre ******, y mi cuñada cuando llegó la Policía Estatal, preguntando por mí, ya que decía que yo era un soldado y les contesté que no, y siguieron tercos, señalándoles que yo trabajaba de intendente en una escuela especial, me esposaron y me subieron a la unidad, trasladándome a las oficinas de la Policía Federal de Caminos, me tomaron declaración, diciéndome que traía mota, cocaína, clavos para ponchar llantas, diciéndoles que todo eso era mentira y que yo no había amenazado a nadie, y me llevaron a las instalaciones que se ubican por la Calzada Tamatán, en donde tiene su destacamento, en donde me empezaron a golpear con las manos y con un palo en todo mi cuerpo, y me ponían una bolsa de plástico y un trapo en la cara húmedo, trasladándome a las oficinas de la Policía Ministerial en la noche de ese mismo día".*

6.2.3. Documental consistente en dictamen médico previo de integridad física del C. ******, emitido por el Dr. ****** de la Plaza, Perito Médico Forense adscrito a este Organismo de Derechos Humanos, el cual presenta: Herida contusa lineal de 2 cm de longitud, situada en la región frontal a la derecha de la línea media; equimosis palpebral inferior de ojo derecho; 7 equimosis circulares situadas en cara anterior del tórax; equimosis de 6 cm de diámetro, situada en hombro derecho; 2 excoriaciones dermoepidérmicas de 3 cm de longitud paralelas, situadas en región escapular izquierda; 2 equimosis circulares de 3 y 2 cm de diámetro, situadas en región escapular derecha; herida contusa de forma semicircular con equimosis circundante, situada en región infraescapular derecha; excoriación dermoepidérmica en tercio inferior de antebrazo derecho, 2 excoriaciones dermoepidérmicas de 3 y 2 cm de longitud, situadas en tercio inferior de antebrazo izquierdo; equimosis circular de 4 cm de diámetro, situada en cara anterior interna tercio medio de brazo derecho; equimosis de 2 cm de diámetro situada en cara interna tercio medio del brazo izquierdo.

6.2.4. Documental consistente en constancia elaborada por personal de esta Comisión, en la cual se asentó lo siguiente:

> *"…. Que comparece ante este Organismo la C. ******, quien manifiesta que solicita que se tomen las medidas necesarias debido a que su esposo ****** fue internado en el Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad el día domingo 24 del presente mes y año, y que al verlo se pudo percatar de que presenta más golpes de los que presentaba al ser detenido, por lo que solicita que sea dictaminado por parte del médico y se le tome su declaración informativa, asimismo, refiere que su esposo es amenazado por parte de otros internos, los cuales el día de hoy, al acudir a verlo le solicitaron para las 4 de la tarde les entregara la cantidad de $200,000.00 supuestamente para brindarle protección en el interior y para que no lo maten otros internos al ser ingresado con la población, sin embargo, no cuenta con dinero para realizar tal pago, por lo que tiene temor, solicitando la intervención para que le sea brindado el apoyo necesario para salvaguardar la salud y vida de su esposo en el interior del Centro Penitenciario".*

6.2.5. Oficio número 913/2014, de fecha 19 de noviembre del 2014, signado por la C. Lic. *****, Juez de Primera instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial en el Estado, con destacamento en Soto la Marina, Tamaulipas, mediante el cual remitió copia certificada de la causa penal número ******, instruida en contra de ******, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Atentados a la Seguridad de la Comunidad, Delitos contra Servidores Públicos y Narcomenudeo, en agravio de la Sociedad.

6.2.6. Documental consistente en constancia de fecha 8 de diciembre del año próximo pasado, elaborada por personal de este Organismo, en la cual se asentó lo siguiente:

> *"… Que me comuniqué a la Agencia ******del Ministerio Público Investigadora, siendo atendida mi llamada por el licenciado *****, oficial Ministerial de dicha Agencia, explicándole que el motivo de mi llamada era para que me informara el número de indagatoria que se le dio a los hechos narrados en su escrito de queja a la C. ***** en representación del señor ****** en contra de elementos de la Policía Estatal Acreditable, por lo que fui informado por dicho servidor público que efectivamente se dio inicio la Indagatoria Penal número ******/14 misma que se encuentra en trámite".*

6.2.7. Documental consistente en constancia de fecha 12 de diciembre del año próximo pasado, elaborada por personal adscrito a este Organismo, misma que se transcribe:

> *"… Que me constituí en la hora y fecha señalada a la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, siendo atendida por su titular licenciada ******, misma a quien se le informó que el motivo de mi visita era para que me informara sobre el trámite que se le dio al oficio número 5277/14 de fecha 27 de octubre del presente donde se le puso en conocimiento de la queja presentada por la C. ****** en representación de su esposo ******, a lo que me informó dicha servidora pública que efectivamente se dio inicio el procedimiento administrativo número DAI/PAI/******/2014, mismo que a la actualidad se encontraba en trámite".*

6.2.8. Documental consistente en constancia de fecha 15 de diciembre del 2014, misma que se transcribe:

*"… Que le comuniqué vía telefónica con la señora ******, quejosa dentro del expediente ******/2014, misma que le puse en conocimiento que derivado de la queja que interpusiera ante este Organismo, se había dado vista a la Procuraduría General de Justicia y a la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ya que en la primera de ellas se había iniciado ante la Agencia ****** del Ministerio Público la indagatoria número ******/2014 en contra de los policías estatales y que ante Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública se inició el Procedimiento Administrativo número DAI/PAI/******/14, por lo que se le exhortó acudiera a ambas para qué prosiguiera con los procedimientos, informando que se lo haría saber al abogado particular para que la acompañara, concluyó".*

Una vez concluido el periodo probatorio, el expediente quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis se desprenden las siguientes:

C O N C L U S I O N E S

VI. Este Organismo es competente para conocer la queja planteada por la C. ******, por tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a servidores públicos que prestan sus servicios dentro del territorio de nuestro Estado, lo anterior en plena observancia de lo dispuesto por los numerales 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, III y IV y 28 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

VII. Analizada la narración del escrito de queja presentada por la C. ******, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas en adelante identificada sólo como "la Comisión (CODHET)", desprendió la comisión de presuntas violaciones a los derechos humanos consistentes en el derecho a la privacidad, la integridad y libertad personal, propiedad y otros relativos a los del recluso o interno. Posteriormente, una vez que se analizaron los hechos y todas las evidencias que obran en el **Expediente N° 287/2014** de fecha 27 de agosto de 2014 sustanciado ante este Organismo, se tiene como

acreditada la vulneración del derecho humano a la integridad personal del **C. ******** cometida por elementos de la **policía Estatal Acreditable bajo** la responsabilidad de la **Secretaria de Seguridad Púbica del Estado.**

VIII. Con relación a las violaciones de los derechos humanos consistentes en la **privacidad**, **integridad** y **libertad personal**, así como el de **propiedad**, esgrimidas por la C. ********** tanto en su perjuicio como de los C.C. ********** y ********,** presuntamente realizadas por elementos de la Policía Estatal Acreditable, esta Comisión (CODHET) no encuentra suficientes elementos probatorios que de forma fehaciente le permitan acreditarlas y estar en aptitud para pronunciarse por la responsabilidad de la autoridad. Por lo tanto, decide emitir con fundamento en el artículo 65, fracción II del Reglamento interno de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, un **ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD,** no dejando sin hacer la precisión que de encontrarse nuevos elementos de convicción se podrá reabrir el expediente.

Lo anterior se realiza tomando en cuenta que ante esta Comisión (CODHET) sólo obran los testimonios de ******, ******, ****** y ****** (detenido), esposa, cuñada y madre respectivamente de este último, frente a la negación de la autoridad proporcionada mediante el informe de fecha 5 de septiembre de 2014 y el parte informativo policial.

Adicionalmente, los testimonios de ******, ***** y ****** resultan insuficientes porque presentan inconsistencias respecto a lo declarado por ******, la quejosa en esta vía (******) señala que los policías llegaron a su domicilio mientras se preparaban (ella y su esposo) para salir de su casa, siendo interceptados por elementos de la policía estatal que los detuvieron y en ese momento empezaron a golpear al señor ******, sin embargo, el susodicho no refiere esas agresiones afirmadas por su esposa y su madre sino hasta después (cuando lo llevaron a las oficinas de la Policía Federal de Caminos).

En este sentido, se transcriben los fragmentos de las declaraciones en comento:

C. ****** (escrito de queja de fecha 27 de agosto del 2014):

*[…] Que el día sábado 23 de agosto del año en curso, aproximadamente a las 6 ó 6:30 de la mañana la suscrita me encontraba saliendo de mi casa, ubicada en el ejido Nuevo Dolores, en compañía de mi esposo ******, cuando llegaron como 8 ó 10 patrullas de la Policía Estatal rodeando toda la cuadra, y se bajaron los elementos vestidos de negro y completamente encapuchados, tapados de la cara, metiéndose a la casa de mi suegra que vive enfrente de mi casa, así como también, se metieron a mi terreno, dirigiéndose hacia mi esposo y hacia mi,* ***ya que nosotros íbamos a subirnos a una camioneta porque mi esposo me iba a trasladar a la central de autobuses de Abasolo, llegaron hacia nosotros como 4 agentes agarrando a mi esposo y otros 2 hacia mi,*** *pero yo me les zafé,* ***ya que vi como le pegaban a mi esposo, con las cachas de las armas largas en la espalda y en la panza, poniéndolo boca abajo, yo primero les preguntaba qué era lo que pasaba y*** *que por qué se lo llevaban de esa manera me zafé para que no me detuvieran y corrí hacia enfrente de la casa de mi suegra,* ***gritándoles a los policías que lo soltaran y que no lo golpearan y por qué le hacían eso****, ellos me gritaban bien feo, diciendo que me agarraran a mi, y que me subieran a la patrulla y me esposaran y que yo les diría lo que ellos querían saber,[…].*

C. ****** (madre) 28 de agosto de 2014:

*[…] Que el sábado 23 de agosto del año en curso, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, golpearon la puerta de mi domicilio, preguntando que quien era, diciendo que Policía Estatal, y al abrir la puerta preguntaron por mi hijo Pancho, a lo que yo les dije que no sabía donde estaba, introduciéndose a mi domicilio, revisando toda mi casa porque los elementos decían que teníamos armas, a lo que yo les juraba que ahí no había nada, en eso venían mi nuera ****** y mi hijo ***** de su casa, ya que viven dentro del mismo solar****, y en eso los elementos agarraron a mi hijo, golpeándolo frente de mi, y yo les gritaba que no lo golpearan, pero los elementos no hicieron caso y lo seguían golpeando****, subiendo a mi hijo a una unidad y a mis dos nueras ****** y ****** a otra unidad, llevándoselos detenidos y ya no supe nada, ya que yo me quedé a cuidar los niños de mi nuera […].*

C. ****** (de fecha 26 de agosto de 2014):

[…] Que el día 23 de agosto del año en curso, aproximadamente a las 6:30 minutos de la mañana, yo me encontraba ***en mi casa ubicada en el ejido*** ****** ***del municipio de Abasolo, con mi esposa de nombre ******, y mi cuñada cuando llegó*** *la Policía Estatal, preguntando por mí, ya que decía que yo era un soldado y les contesté que no, y siguieron tercos, señalándoles que yo trabajaba de intendente en una escuela especial****, me esposaron y me subieron a la unidad, trasladándome a las oficinas de la Policía Federal de Caminos, me tomaron declaración, diciéndome que traía mota, cocaína, clavos para ponchar llantas,*** *diciéndoles que todo eso era mentira y que yo no había amenazado a nadie, y me llevaron a las instalaciones que se ubican por la Calzada Tamatán, en donde tiene su destacamento, en donde me empezaron a golpear con las manos y con un palo en todo mi cuerpo, y me ponían una bolsa de plástico y un trapo en la cara húmedo, trasladándome a las oficinas de la Policía Ministerial en la noche de ese mismo día […].*

Adicionalmente, de este testimonio se desprende que al momento de la detención se encontraba no sólo con su esposa sino con otra persona más a la que identifica como "*cuñada*", siendo dos mujeres las que según ****** lo acompañaban en ese momento, sin embargo, esta situación se contradice con lo dicho por ****** quien sólo refiere la suya y la de su esposo al momento de la detención (en su domicilio o solar). Bajo esta lógica, se infiere que dicha "*cuñada*" es ****** tomando como referencia el testimonio de ****** (madre de ******) quien refiere en su declaración a esta persona en compañía de su hijo y nuera, sin embargo, si esto fuera así el testimonio de ****** no guardaría relación con los hechos hasta ese momento relatados (detención en el domicilio o solar), pues ella sostiene que la detuvieron en su casa en compañía de sus menores hijos y no con ****** y ******.

C. ****** (28 de agosto de 2014):

[…] Que el sábado 23 de agosto del año en curso, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, ***yo me encontraba con mis tres hijos menores de edad dormida, llegando varios elementos de la Policía Estatal, aluzándome con unos focos y diciéndome que me levantara, preguntándome por ******, y que si él pertenecía a***

algún grupo*, yo les contesté que ahí no vivía y que yo no sabía nada, ya que yo no tengo mucha comunicación con él, levantándome y prendiendo los focos, sacándome un elemento, diciéndole que ahí no vivía que él vivía para atrás, agarrándome un elemento y otro le dijo que me llevaran a la verga,* ***diciéndoles que a mi por qué me llevaban, subiéndonos a la patrulla a mi cuñada de nombre ****** y a mi, esposándonos, ya estando arriba de la patrulla, yo les decía que me dejaran porque tenía que irme con mis niños****, contestándome los elementos que me callara, trasladándonos para la Presidencia Municipal de Abasolo, Tamaulipas, permaneciendo ahí como unos 10 minutos, trasladándonos posteriormente a esta ciudad, llevándonos en el campo de tiro que se ubica en la Calzada Tamatán, bajándonos de la unidad y tapándonos con una cobija, metiéndonos a un baño, y sentí que me dieron un golpe en la cabeza, provocándome un esguince, permaneciendo en ese lugar varias horas, vendándonos de los ojos, subiéndonos a la unidad y dejándonos en un rancho que se ubica cerca de Abasolo hasta como las 4:00 de la tarde aproximadamente, diciéndonos que no nos moviéramos hasta que se retiraran las patrullas de la Policía Estatal, pidiéndole auxilio a una persona del sexo masculino que se encontraba por ahí, caminando por un camino de terracería y llegamos a un ejido que se llama El Tío ******pidiendo raid en la carretera a un señor que iba pasando, llevándonos en la orilla de la carretera cerca del ejido donde vivimos".*

En este sentido, la Comisión (CODHET) no desestima *per se* el valor probatorio de las declaraciones anteriormente referidas, no obstante, considera que para acreditar las alegaciones planteadas en el escrito de queja (allanamiento, lesiones etc.) resultan insuficientes para tenerlas como acreditadas.

IX. No obstante, con relación a la vulneración del **derecho humano a la integridad personal** del señor ****** y la versión oficial de la misma, este Organismo observa una serie de irregularidades que se estudiaran tomando en cuenta la siguiente:

FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA

Derecho a la integridad personal

EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Articulo 1
[…]
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 19.
[…]
Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

Artículo 20.
[…]
A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS:

Artículo 7
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Artículo 10
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;
b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.

> 3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS:

> **Artículo 5.**
> Derecho a la Integridad Personal
> 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
> 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
> (…)
> 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
> 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
> 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

X. En primer término, este Organismo de Protección de Derechos Humanos estima necesario señalar un tema de relevancia sustancial para el caso concreto, ya que se advierte una vez más la necesidad de generar regulaciones más efectivas en cuanto a la elaboración de figuras como los **Partes Informativos Policiales,** así como de los mecanismos de supervisión para la realización de estos. Esta Comisión (CODHET) ha sostenido las implicaciones que tienen los partes informativos policiales para todo el proceso penal, ya que a través de estos se soporta en un primer momento la legitima transgresión del derecho humano a la libertad personal. Al respecto en la **Recomendación 09/2015** se sostuvo:

> […] En este orden de ideas, la Secretaria de Seguridad Pública del Estado debe tomar en cuenta que a través de la correcta elaboración de una figura como el **Parte Informativo Policial** se cumple en buena medida con las obligaciones previstas en el artículo 1, tercer párrafo de la Constitución mexicana y que a continuación se reproduce: *"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con*

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". Esto, ya que a la luz de estos informes se registran los hechos que eventualmente contribuyen a crear la ***verdad histórica*** en caso de que se lleguen a presentar procesos y/o procedimientos por violaciones de derechos humanos imputables a agentes del Estado (autoridades y/o servidores públicos). Además se tiene que entender que por principio, los órganos constitucionalmente autónomos de vigilancia, como lo es esta Comisión (CODHET), no debería enfrentar por regla general obstáculos como la postura de las autoridades consistentes en la negación automática de las acciones u omisiones presuntamente violatorios de derechos fundamentales, sin antes hacer un ejercicio previo sobre su posible responsabilidad en ellos, máxime cuando la negación automática se basa en documentos o registros de los cuales no se ha reglamentado adecuadamente y/o protocolizado su elaboración, tal es el caso de los ***partes informativos policiales.***

Si bien, la Comisión (CODHET) observa que esta figura se encuentra prevista en los artículos 52 a 53 del Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas del Estado y mencionada en el Reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública y el Reglamento del Desarrollo Policial de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, a juicio de esta resultan insuficientes tanto en su reglamentación como en su implementación efectiva. Del caso en comento y en relación a los artículos 52 y 53 del Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas del Estado, se desprenden diferentes obligaciones que para esta Organismo fueron incumplidas o por su carencia de especificación provocaron omisiones, un ejemplo de ello, son los artículos que refieren que los informes y partes de novedades deben estar firmados por los titulares de las corporaciones o jefes policiales, no obstante esto no se puede apreciar en el *parte informativo policial* rendido al C. Agente ******Investigador del Ministerio Público de Fuero Común de 22 de noviembre de 2013 […].

[…] En este sentido, si bien la Comisión (CODHET) *per se* no ve mal que todos los policías involucrados directamente en la detención expresen los hechos desde su individual perspectiva y de acuerdo a su participación concreta en ellos, lo cual totalmente no ocurrió de ese modo ya que los policías lo hicieron en conjunto, lo cierto, es que en este caso no se cumple en rigor con una disposición expresa que regula su elaboración y que a la letra dispone que: *"los informes y partes de novedades deberán estar firmados por los titulares de las corporaciones o jefes policíacos".* Por otro lado, se prevé que los partes informativos sean si bien

> "**sucintos",** también "**detallados"** con respecto a las acciones realizadas de vigilancia, patrullaje y cualquier otra de carácter policial, sin embargo, en el caso concreto esto no fue así. […]

Además debe señalarse que en el caso concreto el **informe policial** con el que se puso al C. ****** a disposición de autoridad ministerial, no llegó a manos de la Comisión (CODHET) producto de la diligencia que tuvo la Secretaria de Seguridad Pública al enviar su **informe justificado** el 5 de septiembre de 2014. En este sentido, debe tomarse en cuenta que todas las autoridades tienen una obligación constitucional en materia de protección de derechos humanos (artículo 1 de la Constitución General) y deben ser las principales interesadas en aclarar toda situación que implique semejantes acusaciones, por tal motivo, sorprende que para allegarse de este documento (el parte informativo policial) la vía haya sido otra autoridad y no la directamente involucrada en dichos hechos, además tenemos que partir de una premisa fundamental, si la autoridad afirma que su proceder fue apegado al marco normativo vigente, luego entonces debe enviar toda la información relacionada al caso concreto y no esperar *per se* a que la Comisión (CODHET) tenga que deducir de su dicho los documentos que tiene que solicitarle adicionalmente.

Es decir, aun cuando el artículo 36 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas prevé que es potestad de la autoridad decidir si envía o no más elementos relacionados con el caso concreto[15], también se debe entender que el procedimiento de queja sustanciado ante la Comisión (CODHET)

[15] Artículo 36 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.
En el informe que rinda la autoridad o servidor público señalado como presunto responsable deberá precisar si son ciertos o no los actos u omisiones que se le imputan y expresar los antecedentes, motivaciones y fundamentos que sirvieron de base para su actuación, así como los demás elementos que estime pertinentes.
La falta de presentación del informe o de la documentación que los apoye, así como el retraso injustificado en su entrega, además de la responsabilidad correspondiente, establecerá la presunción de ser ciertos los actos u omisiones que se reclaman, salvo prueba en contrario.

busca esclarecer la existencia o no de violaciones a los derechos humanos atribuibles a agentes del Estado (servidores y/o autoridades), los cuales están obligados por el mencionado artículo 1 de la Constitución General. Y por consiguiente no se debe asumir una dinámica de perdedores y ganadores dentro de estos procedimientos.

La Comisión (CODHET) no ve adecuado que en el **parte informativo policial** (*puesta a disposición)* de fecha 23 de agosto de 2014 y que obra en el expediente de queja 287/2014, no se hayan asentado las lesiones del señor ********** o en su defecto, las circunstancias que pudieron provocarlas, no obstante que estas quedaron registradas por el dictamen médico realizado por la Dra. ******, perito médico forense de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha 23 de agosto de 2014, y que se realizó en las instalaciones de la Dirección de Servicios Periciales en esta ciudad capital (más de seis horas después de la detención según el parte informativo), ya que si bien acompaña al parte informativo policial no tiene lógica con dicho documento. En este dictamen se señala lo siguiente respecto a las condiciones físicas en las que se recibió a la hoy víctima:

- Equimosis y edema en región de tabique nasal a los dos lados de la línea media.
- Equimosis en región de mucosa de labio superior e inferior a los dos lados de la línea media.
- Equimosis y edema en región de columna cervical a los dos lados de la línea media.
- Equimosis y edema en región de columna dorso lumbar a la derecha de la línea media.
- Equimosis y edema en región de abdomen superior e inferior a los dos lados de la línea media.
- Equimosis y edema en tercio proximal y tercio medio de ambos brazos y antebrazos.
- Equimosis y edema con interrupción de respiración en región de decimo a doceavo arco costal a nivel de línea media axilar a la derecha de la línea media.
- Equimosis y laceración en región de la columna lumbar a la derecha de la línea media.
- Excoriación y edema en tercio distal de ambos antebrazos.
- Equimosis en tercio medio de muslo izquierdo cara anterior.

- Equimosis en tercio medio de ambas piernas cara anterior.
- Equimosis con edema en región plantar de ambos pies lo cual disminuye la fuerza y movimientos propios de la dificultando su deambulación.

Observación: solicito estudio radiológico ya que si no se demuestra compromiso óseo la clasificación podría cambiar.
[…]
Conclusiones
Las lesiones que presenta el C. ******, por su naturaleza se clasifica en lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan más de 15 días en sanar. Observación: solicito estudio radiológico ya que si no se demuestra compromiso óseo calificación podría cambiar.

Sin embargo, sorprende que los Policías Estatales Acreditables no hayan señalado en el cuerpo del **parte informativo policial** (Puesta a disposición de fecha 23 de agosto de 2014) que el Señor ****** presentaba lesiones o al menos las circunstancias que pudieran justificar el uso de la fuerza. Por otro lado, esta situación tampoco se manifestó ante el Ministerio Público en la ratificación de dicho documento, ya que del expediente 287/2014 se desprende la confirmación a lo dicho por todos los que firmaron originalmente el parte (******, ****** y ******), sin hacer precisiones o adiciones de información que le pudieran dar sentido a la presencia de las mencionadas lesiones, sobre todo en relación al dictamen médico que Servicios Periciales (23 /agosto/2014) realizó en esta ciudad (más de 6 horas después de la detención, pues el oficio se recibió hasta las 19:50pm) a solicitud de la policía (oficio SSP/SSOP/CGOPEA/DI/0/2014).

Aunado a esto, del **parte informativo policial** se puede deducir que si bien se detuvo al señor ****** a la 13:00 horas., este fue trasladado a la ciudad capital hasta las 15:00 horas (sin contar el tiempo de trayecto Abasolo-Victoria) poniéndolo a disposición ante la autoridad ministerial hasta las 20:40 horas, ya que se estimó por los Policías la existencia de riesgo a su integridad, derivado de las presuntas amenazas recibidas por la hoy víctima, por lo que se esperaron en el destacamento policial de Abasolo. Por lo tanto, esto implica que al señor ****** se le retuvo en un lugar oficial (destacamento policía) en donde se tuvo la oportunidad de hacer un registro de las lesiones presentadas o al menos hacer constar una explicación lógica

de las mismas, sin embargo, esto no se hizo. Además es de destacar para esta Comisión (CODHET), el hecho que en Abasolo existen lugares públicos que prestan servicios de atención médica, tal como el Hospital Integral Abasolo que aparece en la página oficial del gobierno del estado[16], no obstante se prefirió realizar el examen médico en esta ciudad varias horas después de la detención. Por lo tanto, resulta inverosímil la postura de la autoridad al pretender quedar excluida de responsabilidad respecto a las lesiones presentadas por el C. ****** sólo con el hecho de presentar un examen médico realizado horas después, en un lugar diferente a donde se llevó a cabo la detención y sin brindar una explicación que contextualice la presencia de esas lesiones en el cuerpo del parte informativo policial.

Bajo esta lógica, se deben abordar dos temas fundamentales, en primer lugar, que debemos entender por un **parte informativo policial** y en segundo, si existe la obligación de expresar en dicho parte informativo policial el estado físico de la persona detenida.

La figura de los partes informativos policiales se encuentra regulada en varios cuerpos normativos aplicables a la POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE, no obstante, esta regulación la aborda de manera dispersa y poco clara, en gran medida por una manifiesta falta de armonización entre las disposiciones de carácter general y las concernientes a la esfera local. Por un lado, la autoridad (expediente 287/2014) se refiere a este documento como ***PUESTA A DISPOSICIÓN*** (23/agosto/2014) aunque en *stricto sensu* esta denominación no se encuentre en las diferentes disposiciones aplicables al funcionamiento de la Policía Estatal Acreditable, entre las que destacan:

- Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas
- Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública
- Reglamento del Desarrollo Policial de las Instituciones
- Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas del Estado
- Reglamento del Consejo Estatal de Seguridad Pública

16 http://salud.tamaulipas.gob.mx/infraestructura/hospital-integral/hospital-integral-abasol/

- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
- Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas

Ahora bien, en el Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas del Estado se contempla la figura genérica del **INFORME** (artículos 51 al 53), a través de esta se puede distinguir entre dos figuras "los informes" y "los partes de novedades", estos últimos son los que deben contener los detalles de una detención, ya que a la letra el artículo 52 señala:

> "Los PARTES DE NOVEDADES deberán redactarse en máquina de escribir o en computadora, debiendo contener una relación sucinta *de los hechos a que se refieren y la descripción del lugar, nombre, apellido, edad, ocupación y domicilio del o los participantes y testigos, indicando si se detuvo a persona alguna o se aseguraron objetos, documentos, armas o cualesquiera otro instrumento relacionado con los mismos; así como los demás datos que haya sido posible recabar."*[17]

En consecuencia, esta disposición deja claro el hecho que es un documento en el que se debe registrar toda actuación de los cuerpos de seguridad pública (policías estatales), entre ellas, la realización de una detención. El reglamento también habla de "*Informes*" solo que únicamente los refiere o relaciona a lo siguiente:

> […] informe mensual sobre los programas y actividades llevados a cabo en ese lapso, en el que se señalen avances, datos estadísticos, resultados y cualquiera otra información relevante; un informe semanal, en el cual darán cuenta de los logros y metas alcanzadas conforme al calendario de actividades de cada corporación; así como informes extraordinarios que les sean requeridos, sobre asuntos que revistan especial interés para la seguridad pública.

Por lo tanto, esta última no tiene tanta relevancia para el registro efectivo de las detenciones, es de notar que la denominación que también suele usar la autoridad es la de Parte Informativo Policial aunque esta también no se encuentre plasmada en la ley expresamente y la que claramente es una combinación de las

[17] Artículo 52 del Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas del Estado.

denominaciones revistas en los artículos 51, 52 y 53 del Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas del Estado. Además, debe destacarse que este reglamento data del año 2000 y hasta la fecha no ha sufrido modificaciones a pesar de ser una disposición reglamentaria de diferentes normas con rango de ley que han venido surgiendo (la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública la y Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas), y que necesariamente impactan en su elaboración.

Esta situación, destaca a la luz de otra figura denominada como INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, cuyo objetivo consiste en proporcionar una herramienta adicional para llevar a cabo un registro eficiente de la detención, y el cual cobró mayor relevancia a raíz de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal. Esta figura, que también es abordada por diversas normas y está relacionada con las detenciones que realizan los elementos de las policías, es distinta a la del artículo 52 del Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas del Estado (parte de novedades e informes), sin embargo, se encuentra estrechamente relacionada porque si bien dicho artículo no prevé la obligación explicita de reportar el estado físico de la persona en el PARTE DE NOVEDADES, esta si se prevé en la elaboración del INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, cuya regulación se encuentra en una serie de leyes a diferencia de un Reglamento. Por lo tanto, necesariamente obliga a la autoridad policial a cumplir con los requisitos de éste aunque se utilice la figura del PARTE DE NOVEDADES, ya que de no hacerse de este modo se estaría incumpliendo los requisitos que debe contener todo INFORME POLICIAL HOMOLOGADO cuya realización emana de un mandato legal.

Es decir, si la autoridad policial (policía estatal) o la propia Secretaria de Seguridad Pública están llevando a cabo el registro de las detenciones solo sobre la base legal que regula el PARTE DE NOVEDADES, no estarían cumpliendo con los requisitos que exige la ley para llevar acabo el INFORME POLICIAL HOMOLOGADO y con ello, un registro nacional. En este sentido, convienen hacer referencia a las siguientes porciones normativas:

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se establece:

Artículo 43.- La Federación, el Distrito Federal y los Estados, establecerán en las disposiciones legales correspondientes que los **integrantes de las Instituciones Policiales** deberán llenar un **Informe Policial Homologado** que contendrá, cuando menos, los siguientes datos:

I. El área que lo emite;
II. El usuario capturista;
III. Los Datos Generales de registro;
IV. Motivo, que se clasifica en;
a) Tipo de evento, y
b) Subtipo de evento.
V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos;
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos.
VII. Entrevistas realizadas, y
VIII. **En caso de detenciones:**
a) Señalar los motivos de la detención;
b) Descripción de la persona;
c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;
d) **Descripción de estado físico aparente;**
e) Objetos que le fueron encontrados;
f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y
g) Lugar en el que fue puesto a disposición.

El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.

El Código de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas:

Articulo 124 […] el **Informe Policial Homologado** que contendrá, cuando menos: el día, hora, lugar y modo en que fueren realizadas; las entrevistas efectuadas y, en caso de detenciones, señalará los motivos de la misma, la descripción de la persona; el nombre del detenido y el apodo, si lo tiene**; la descripción de su estado físico aparente;** los objetos que le fueron encontrados; la autoridad a la que fue puesto a disposición, así como el lugar en el que fue puesto a disposición. De igual manera, deberá contener los demás requisitos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El informe para ser válido debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante. No deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos

o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.

En la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas prevé:

DE LOS REGISTROS QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
SECCIÓN PRIMERA
DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE DETENCIONES
ARTÍCULO 99.- **Las policías estatales** que cumplan funciones de prevención y reacción, la policía ministerial y las policías preventivas municipales que realicen detenciones, deberán dar aviso administrativo de inmediato al Centro Nacional de Información, de la detención, a través del **Informe Policial Homologado.**
ARTÍCULO 100.- El registro administrativo de la detención deberá contener, al menos, los datos siguientes:
I.- Nombre y, en su caso, apodo del detenido;
II.- Descripción física del detenido;
III.- Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención;
IV.- Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, rango y área de adscripción, y
V.- Lugar a donde será trasladado el detenido.

Esta misma ley se establece que la autoridad obligada a realizar este informe:

ARTÍCULO 18.- Son obligaciones de los integrantes de las **instituciones de seguridad pública**:
[…]
XXVII.- Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice; […]

Posteriormente dicho ordenamiento precisa respecto a las *instituciones de seguridad pública* lo siguiente:

ARTÍCULO 4.- Para efectos de esta ley se entenderá por:
V**.- Instituciones de seguridad pública:** Las **instituciones policiales** y de procuración de justicia, así como los tribunales e instancias responsables de la reinserción social del sentenciado, al igual que la reintegración social y familiar del adolescente, estatales y municipales;

Finalmente, se precisa que **las instituciones policiales** son:

> ARTÍCULO 11.- Las instituciones policiales serán las siguientes:
> I.- **Las policías estatales** que cumplan funciones de prevención o reacción;
> II.- La Policía Ministerial;
> III.- Las policías preventivas y las de tránsito municipales;
> IV.- Los cuerpos de vigilancia, custodia y seguridad de los Centros de Ejecución de
> Sanciones y los del Centro de Reintegración Social y Familiar para Adolescentes; y
> V.- Las demás que se constituyan con apego a la Ley.

Por lo tanto, podemos deducir que bajo el marco normativo vigente la Policía Estatal Acreditable está obligada a manifestar en su PARTE DE NOVEDADES, PARTE INFORMATIVO POLICIAL o NO IMPORTANDO LA DENOMINACIÓN, mientras en ese acto haya efectuado una detención, todos los requisitos del INFORME POLICIAL HOMOLOGADO. En consecuencia, la descripción del estado físico aparente.

En el caso en comento, al no existir la manifestación tanto en el **parte informativo policial** (puesta disposición dentro del expediente 287/2014), como en la **diligencia de ratificación** ante Ministerio Público de las condiciones físicas que presenta el señor ****** al momento de su detención (lesiones) o en su defecto, la expresión de las causas que podrían justificar dichas alteraciones en su cuerpo (uso legítimo de la fuerza), mas allá de un dictamen médico que para este Organismo no es suficiente para cumplimentar esta obligación, pues se presenta más de seis horas después de la detención y no guarda relación con lo que se reporta en el parte informativo policial, se puede decir que este requisito no se satisface o simplemente no basta para justificar la presencia de lesiones al momento de la detención no atribuibles a la autoridad policial.

En este sentido, dado que también existe un informe médico solicitado por la autoridad ministerial (24 de agosto de 2014) en donde se sostiene la presencia de lesiones, y tomado en cuenta que el solicitado por la autoridad policial (dictamen presentado por en fecha 23 de agosto de 2014) no se puede tener como un elemento que los deslinde de su participación en las mismas, esta Comisión

(CODHET) asume que las lesiones sólo pudieron aparecer o producirse durante la detención y/o en el lapso que estuvo bajo la guarda y custodia los Policías Estatales.

Además, los Policías tuvieron la oportunidad de registrar dichas anomalías o en su defecto las causas de justificación para su presencia (uso legítimo de la fuerza), ya que la persona detenida estuvo bajo su guarda y custodia de la 1:00 pm hasta las 3:00pm, incluso lo llevaron a un destacamento policial en Abasolo, sin embargo, no se hizo señalamiento alguno del estado físico que mostraba el detenido, sino hasta que estuvieron en esta Ciudad Capital, para lo cual, adicionalmente se debe tomar en cuenta el tiempo que hicieron de Abasolo a Cd. Victoria ya que su traslado fue hasta las 3:00 pm. Estas circunstancias cobran mayor sentido porque obran en el expediente señalamientos que acusan directamente a la autoridad policial de haber infringido daños físicos al momento de la detención y durante la puesta a disposición ante la autoridad competente (Queja y declaraciones informativas de ******, ****** y ****** respectivamente).

Dichas lesiones fueron registradas por otras autoridades diferentes a la Policía, además de lo expresado por el propio afectado en sus declaraciones y lo señalado por su esposa en el escrito de queja interpuesto ante este Organismo, de la declaración del señor ****** (de fecha 24 de agosto de 2014) rendida ante el Agente del Ministerio Público en Ciudad Victoria y que obra en el expediente de queja 287/2014, se hizo constar por esa autoridad lo siguiente:

> […] Acto continuo esta representación social procede a cuestionar al compareciente en relación a las lesiones que presenta manifieste cómo y cuándo le fueron causadas por lo que se le da el uso de la voz y manifiesta: Que las lesiones que presento en mi cuerpo me fueron causadas por los policías estatales al momento de mi detención, pero me fueron causadas ya que me golpearon. De igual forma esta representación social en este acto HACE CONSTAR Y DA FE de las lesiones que presenta en su humanidad el indiciado siendo estas en: *enrojecimiento y excoriaciones en el abdomen, en la espalda se aprecian diversas hematomas, inflamación en ambos pies, al decir del compareciente refiere mucho dolor en el abdomen, siendo lo que se aprecia a simple vista. […]*

Por otro lado, de la copia del expediente 00025/2014 sustanciado en el Juzgado Mixto del ******Segundo Distrito Judicial en Soto la Marina, en el cual aparece como procesado el C. ********,** por los delitos de atentado contra la seguridad de la comunidad, delitos cometidos contra servidores públicos y narcomenudeo, el cual obra en el expediente de queja 287/2014, se observa que de la *declaración preparatoria del inculpado* con fecha 25 de agosto de 2014 el Juez registro las siguientes lesiones del inculpado:

> […] Que a simple vista se aprecia que en la cabeza, en la parte atrás del oído izquierdo presenta una lesión la cual se ve cubierta con sangre seca y telaraña, de aproximadamente cuatro centímetros de largo, asimismo, bajo del oído izquierdo se aprecia una lesión en forma de raspón, mismo que abarca hasta la mejilla, así como atrás del mismo oído en la parte baja se aprecia otra lesión semejante y en la misma magnitud. En ambos ojos se aprecian hematomas; en ambas muñecas de las manos, se aprecian alrededor diversas lesiones de forma irregular aparentemente provocadas por las esposas; en el abdomen, abajo de la tetilla derecha se aprecian dos raspones de forma irregular de aproximadamente cinco centímetros de largo, en antebrazo derecho, se aprecian igualmente raspones de forma irregular, asimismo, en la espalda se aprecia en la parte baja del cuello, diversos hematomas y equimosis de formas irregulares, observándose a la altura de las costillas del lado derecho se aprecia un hematoma en forma lineal de aproximadamente dos centímetros de ancho, de igual manera bajo las costillas derechos se aprecian diversos hematomas de forma irregular con un diámetro de aproximadamente 10 centímetros, en la planta del pie derecho se observa hematoma, así mismo refiere presentar dolor en el pecho siendo todo lo que se aprecia a simple vista.

Por otro lado, de la declaración informativa de ****** obtenida por este Organismo el 26 de agosto de 2014 se señala respecto a las lesiones:

> […] Me empezaron a golpear con las manos y con un palo en todo mi cuerpo, y me ponían una bolsa de plástico y un trapo en la cara húmedo, trasladándome a las oficinas de la policía ministerial en la noche de ese mismo día.

En este sentido, destaca lo señalado por la hoy víctima y lo descrito anteriormente por el perito médico forense de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado que realizó los dos dictámenes

médicos de integridad física, uno a solicitud de la Policía Estatal y otro del Ministerio Público de fechas 23 y 24 de agosto de 2014 respectivamente, toda vez que la mecánica de las lesiones son coherentes con lo señalado por el señor ******.

En este sentido, la interpretación del Poder Judicial Federal respecto a la responsabilidad de una autoridad que detiene a una persona resulta ilustrativa:

Época: Décima Época
Registro: 2005682
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: XXI.1o.P.A.4 P (10a.)
Página: 2355

DETENCIÓN DE UNA PERSONA POR LA POLICÍA. CUANDO AQUÉLLA PRESENTA LESIONES EN SU CUERPO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA CONOCER LA CAUSA QUE LAS ORIGINÓ RECAE EN EL ESTADO Y NO EN EL PARTICULAR AFECTADO.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios orientadores en el sentido de que el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia (Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141). Por lo que existe la presunción de considerar responsable al Estado por las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales, si las autoridades no han realizado una investigación seria de los hechos seguida del procesamiento de los que aparezcan como responsables de tales conductas (Caso "Niños de la Calle", Villagrán Morales y otros vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63). Estos criterios dan pauta objetiva para considerar que la carga de la prueba para conocer la causa que originó las lesiones que presenta en su cuerpo una persona que fue detenida por la policía, recae en el Estado y no en los particulares afectados; sobre todo, si a esos criterios se les relaciona directamente con los principios de presunción de inocencia -que implica que el justiciable no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, pues en él no recae la carga de probar su inocencia, sino más bien, es al Ministerio Público a quien incumbe

> probar los elementos constitutivos del delito y de la responsabilidad del imputado-; y, pro homine o pro personae -que implica efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales del ser humano-.
>
> PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
> Amparo en revisión 144/2013. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretario: Ernesto Fernández Rodríguez.

Si bien, es cierto que en el caso concreto existe una alegada flagrancia por parte de los elementos de la Policía Estatal Acreditable, aun así este criterio continúa siendo aplicable, toda vez que la premisa parte de considerar "*que la carga de la prueba para conocer la causa que originó las lesiones que presenta en su cuerpo una persona que fue detenida por la policía, recae en ellos y no en los particulares afectados*".

No obstante, la idea de la flagrancia cobra relevancia porque es una figura excepcional que puede utilizar la autoridad para restringir el derecho humano a la libertad personal sin tener una orden judicial (artículo 16 de la Constitución General), sin embargo, cuando decide utilizarla debe tener en cuenta que está obligada a acreditar las causas de la detención y las circunstancias en las que se dio esta. En este sentido, los elementos de la Policía Estatal Acreditable y la propia Secretaria de Seguridad Pública del Estado debieron tener en cuenta tal situación. Por lo tanto, en el caso concreto al no registrarse las lesiones o las causas que pudieran explicarlas, solo se puede entender que la persona no las tenía y que se le produjeron durante el tiempo que estuvo bajo la guarda y custodia de los Policías Estatales.

Por tal motivo, al no proporcionar la autoridad una explicación lógica de como aparecieron dichas lesiones en el detenido y tomando en cuenta otros indicios como las declaraciones de los afectados, este Organismo tiene por acreditada la responsabilidad de los elementos de **la Policía Estatal Acreditable** dependientes

de la **Secretaria de Seguridad Pública** por sus actuaciones en relación a la vulneración del derecho humano a la integridad personal del señor ******.

XI. Ahora bien, por lo que respecta al **Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria**, señalada como autoridad responsable por haber cometido violaciones al derecho humano a la integridad personal del señor ******, este Organismo de derechos humanos estima que también se acredita su responsabilidad en dicha vulneración a la luz de los siguientes argumentos.

XII. De las actuaciones que obran en el expediente de queja 287/2014, se advierten dos momentos en los que el señor ****** fue vulnerado en su derecho humano a la integridad personal, el primero, como ya se ha expuesto lo constituyeron las acciones realizadas por la autoridad policial y el segundo, se dio cuando el Ministerio Público decidió consignar ante el Juez y puso a la hoy victima bajo el resguardo y custodia del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria el 25 de agosto de 2014.

En el expediente penal número 000******/2014, obra un resumen médico de fecha 28 de agosto de 2014 en donde se hace constar que el C. ****** ingresó al Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria el día 25 de agosto de 2014, en este se asienta el estado físico que tenía y las condiciones en las que se encontró un día después (26 de agosto):

> **25 de agosto**
> […] Con antecedentes de DM tipo II con 1 año de evolución en tratamiento glibenclamida tabletas 1 cada 12 horas.
> A su ingreso presenta herida en cráneo en su parte parietal lado izquierdo, acompañado de mialgias, atralgias, en forma generalizado contusión en abdomen, espalda, ambos brazos y antebrazos y ambas muñecas con 293 MG/DL de glucosa.
> Alergias: negado adicciones: negado con
> En la exploración se observa herida en cráneo en su parte parietal lado izquierdo con un diagnóstico de ingreso de diabetes mellitus tipo II + policontundido.
> Se administró diclofenaco ampolletas intramuscular dosis única y ácido acetil tabletas, glibenclamida tabletas 1x2 pasa a las demás áreas para la secuencia de su ingreso.

> El **día 26 de agosto** del presente año acude al servicio médico a las 15:10 pm acompañado con representantes de derechos humanos, presentando herida reciente en región frontal, con dificultad a la marcha, con astenia, adinamia, y se observan contusiones recientes en el tórax, abdomen, cara, glúteos, se le checa la glucosa reportando 544MG/DL por lo que se decide su excarcelación para manejo intrahospitalario, con diagnóstico de diabetes mellitus descompensada y múltiples contusiones.
> Se solicita información vía telefónica de su reporte y refieren se encuentra en terapia intensiva del hospital civil de esta ciudad presentando insuficiencia renal, como complicación de contusiones múltiples, así como glucosa alta con estado de salud grave.

Para esta Comisión (CODHET), prácticamente resulta innecesario agregar más elementos de prueba toda vez que resulta claro la existencia del estado en que entró el señor ****** a las instalaciones del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria el 25 de agosto y como el día siguiente (26 de agosto) experimentó un claro detrimento en su integridad física, todo ello, producto de una golpiza propinada en el interior de dicho Centro de reclusión. En este sentido, resulta relevante el escrito de queja presentado ante este Organismo por la C. ******, esposa del señor ****** en donde señala lo siguiente:

> […] y se encuentra en el penal, y el día de hoy lo volví a ver y pude observar que está más golpeado, ya que trae una rajada en la frente y la cara bien golpeada, y él no me dijo quien lo golpeo en el interior del penal, pero al ir yo a la visita otros internos me dijeron que querían dinero para brindarles seguridad en el interior del penal, y he recibido llamadas donde me dicen que quieren $200,000.00 pesos para las 4 de la tarde del día de hoy para darle seguridad a mi esposo, por lo que al no contar con nada de dinero tengo mucho miedo de que algo le pase a mi esposo, ya que él me dice que él también tiene miedo de que lo maten y que ya no soporta mas tanto golpe […]

Adicionalmente, el dictamen médico realizado por este Organismo en fecha 26 de agosto de 2014, practicado en el área de enfermería del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria a las 14:30 horas por el M. C. ******, se estableció lo siguiente:

En el rubro de exploración física se asienta:

- Herida contusa lineal de 2 cm de longitud, situada en región frontal a la derecha de la línea media.
- Equimosis palpebral inferior de ojo derecho.
- 7 Equimosis circulares situadas en cara anterior del tórax.
- Equimosis de 6 cm de diámetro, situada en hombro derecho.
- 2 excoriaciones dermoepidermicas de 3 cm de longitud paralelas, situadas en región escapular izquierda.
- 2 Equimosis circulares de 2 a 3 cm de diámetro, situadas en región escapular derecha Herida contusa de forma semicircular con equimosis circundante, situada en región infraescapular derecha.
- Excoriación dermoepidermica en tercio inferior de antebrazo derecho.
- 2 Excoriaciones dermoepidermicas de 3 y 2 cm de longitud, situadas en tercio inferior de antebrzo izquierdo.
- Equimosis circular de 4 cm de diámetro, situada en cara anterointerna tercio medio de brazo derecho.
- Equimosis de 2 cm de diámetro situada en cara interna tercio medio del brazo izquierda.

Conclusiones

Primera. Las lesiones no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de 15 días.

Segunda. Las lesiones no son autoinfringidas

Tercera. Las lesiones son contemporáneas a los hechos por los elementos que las constituyen como lo son Equimosis, Excoriaciones y Heridas Contusas.

Cuarta. Las lesiones en comento fueron producidas con las manos y pies sobre el cuerpo de la persona.

Este dictamen, contribuye al fortalecimiento de la aparición de nuevas lesiones dentro del Centro de reclusión, pero sobre todo el establecimiento de que estas no son autoinfringidas y que el modo en que se produjeron fue con manos y pies. De tal forma, que para este Organismo de Protección de Derechos Humanos, esta situación revela una clara omisión de los servidores públicos (custodios) involucrados y que forman parte del **Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria,** pues no se proporcionó seguridad al señor ******, provocando que su integridad personal se viera comprometida, al grado de llegar a niveles como los descritos en el resumen medico de fecha 28 de agosto de 2014 que expidió la misma institución:

> […] Se solicita información vía telefónica de su reporte y refieren **se encuentra en terapia intensiva** del hospital civil de esta ciudad presentando insuficiencia renal como complicación de contusiones múltiples así como glucosa alta con **estado de salud grave.**

En esta misma línea de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en relación al caso concreto el siguiente criterio de interpretación:

> Época: Novena Época
> Registro: 163167
> Instancia: Pleno
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
> Tomo XXXIII, Enero de 2011
> Materia(s): Constitucional
> Tesis: P. LXIV/2010
> Página: 26
>
> **DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.**
>
> La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos.

> Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.
>
> El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LXIV/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.

Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 1.1, como base de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados partes:

> […] que éstos se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción […][18]

En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido que, "*de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre*"[19]. Tal es el caso de las personas privadas de libertad, las cuales mientras dure el periodo de su detención o prisión están sujetas al control efectivo del Estado. En efecto, el principal elemento que define la privación de libertad es la dependencia del sujeto a las decisiones que adopte el personal del establecimiento donde éste se encuentra recluido[20].

---

[18] Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[19] Corte I.D.H., Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 98; Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 111; Corte I.D.H., Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 243.
[20] ONU, Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/10/21, adoptado el 16 de febrero de 2009, Cap. III: Consideraciones temáticas, párr. 46.

Es decir, las autoridades estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia[21]. Por lo tanto, este particular contexto de subordinación del recluso frente a las autoridades penitenciarias constituye una relación de sujeción especial, en virtud de la cual éstas al tener la responsabilidad de personas privadas de sus libertad, se constituyen en garante de todos aquellos derechos que no quedan restringidos por el acto mismo de la privación de libertad; y el recluso, por su parte, queda sujeto a determinadas obligaciones legales y reglamentarias que debe observar.

Por lo que respecta a la Comisión Interamericana de derechos humanos, esta ha señalado a través de su Informe de Fondo No. 41/99 del caso de los Menores Detenidos que:

> […] El Estado, al privar de libertad a una persona, se coloca en una especial posición de garante de su vida e integridad física. Al momento de detener a un individuo, el Estado lo introduce en una "institución total", como es la prisión, en la cual los diversos aspectos de su vida se someten a una regulación fija, y se produce un alejamiento de su entorno natural y social, un control absoluto, una pérdida de intimidad, una limitación del espacio vital y, sobre todo, una radical disminución de las posibilidades de autoprotección. Todo ello hace que el acto de reclusión implique un compromiso específico y material de proteger la dignidad humana del recluso mientras esté bajo su custodia, lo que incluye su protección frente a las posibles circunstancias que puedan poner en peligro su vida, salud e integridad personal, entre otros derechos[22].

Por otro lado, la Corte Interamericana de derechos humanos también ha señalado que:

> […] En virtud de la responsabilidad del Estado de adoptar medidas de seguridad para proteger a las personas que estén sujetas a su

[21] Corte I.D.H., Asunto María Lourdes Afiuni respecto Venezuela, Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 2010, Considerando 11; Corte I.D.H., Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 126.

[22] CIDH, Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Cárcel de Challapalca, párr. 113; CIDH, Informe No. 41/99, Caso 11.491, Fondo, Menores Detenidos, Honduras, 10 de marzo de 1999, párr. 135.

> jurisdicción, la Corte estima que este deber es más evidente al tratarse de personas recluidas en un centro de detención estatal, caso en el cual se debe presumir la responsabilidad estatal en lo que les ocurra a las personas que están bajo su custodia[23].

XIII. Por lo tanto, esta Comisión (CODHET) estima acreditada la responsabilidad de los custodios involucrados del **Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria**, ya que con sus omisiones generaron la vulneración del derecho humano a la integridad personal del señor ******.

XIV. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Fracción II, 42, 43, 48 y 49 de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este Organismo, así como los numerales 63 fracción V, del Reglamento Interno. Se emite **RECOMENDACIÓN** al Secretario de Seguridad Pública como superior jerárquico de los elementos de la Policía Estatal Acreditable y el Director del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad, por haber incurrido con sus acciones y/u omisiones en la vulneración del derecho humano a la integridad personal del señor ******.

XV. Con fundamento en el artículo 48 y 49 de la Ley de la CODHET y 28, 29 y demás relativos previstos en la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Tamaulipas, toda persona víctima de violaciones de derechos humanos tiene el derecho a una reparación integral, en este sentido, la Comisión (CODHET) determina:

R E C O M E N D A R

AL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.

[23] Corte I.D.H., Asunto de la Cárcel de Urso Branco respecto Brasil, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002, Considerando 8.

PRIMERA: Se reconsidere la política de no registrar detalladamente los hechos en los cuales se generó una detención, sobre todo en el caso de las detenciones en flagrancia y tomando en cuenta aquellos casos en los que el parte informativo debe ser firmado por más de una persona.

SEGUNDA: Se proporcionen todas las garantías de seguridad al señor ****** mientras se encuentre bajo el resguardo y custodia de personal penitenciario, además de proveer lo necesario para proporcionar toda la asistencia médica para el tratamiento de sus lesiones y la regulación de la diabetes mellitus que padece.

TERCERA: Se solicita la apertura de una investigación para que se llegue al esclarecimiento de los hechos que generaron las lesiones del señor ****** en el interior de las instalaciones del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad capital.

CUARTO: Se informe la resolución definitiva que adopte la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública, desprendida del Procedimiento Administrativo número DAI/PAI/******/14 interpuestas contra los policías que participaron en la detención del señor ******. Y en su caso gire instrucciones para que sea resuelto por la autoridad competente.

QUINTA: Como medidas de no repetición. Se le pide a la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO informe de los mecanismos de supervisión para detectar la comisión de malas prácticas en la elaboración de Partes Informativos Policiales, así como la generación de protocolos o regulaciones que permitan establecer criterios objetivos para la elaboración de este tipo de documentos oficiales. Sobre todo, con relación a la descripción de hechos en los que cada policía participó, ya que si bien, el tema es abordado por algunos cuerpos normativos vigentes, lo cierto es que a la luz de lo argumentado en esta resolución se estima que es insuficiente. Bajo esta perspectiva, de no tenerlos deberá de

crearlos a la brevedad, pues su omisión puede seguir produciendo violaciones a derechos humanos.

SEXTA: La implementación de una intensa y periódica capacitación en materia de derechos humanos y sus esquemas de restricción legítima. Toda vez que para esta Comisión (CODHET), los Cuerpos de Seguridad Pública deben estar sometidos a un constante régimen de profesionalización con la finalidad de detectar a los elementos más capaces de los que no lo son. Finalmente, se estima necesario aclarar que la capacitación en materia de derechos fundamentales debe dirigirse no solo a los elementos policiales, sino también a los miembros administrativos de los Órganos de Supervisión que diseñan, crean e instrumentan las políticas o programas de combate y prevención en materia de seguridad pública.

SÉPTIMA: A fin de reparar la violación concreta al derecho humano que se cometió en perjuicio de la víctima, se estima necesario se proceda a gestionar la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios derivados de los hechos ocurridos el 23 y 25 de agosto de 2014 en el cual resultó lesionado el señor ******. Por otro lado, se deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la atención victimológica integral a la hoy víctima y su esposa la C. ****** en los términos de la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado.

OCTAVA: Se solicita la revisión de los protocolos de actuación en materia resguardo y custodia de las personas que se encuentran en los Centros de Ejecución de Sanciones, y en el caso de no tenerlos los creen a la brevedad, así como los mecanismos de supervisión para la vigilancia de las labores que se desempeña en dicho Centro de reclusión.

Dése vista a la Dirección General del Instituto de Atención a Víctimas del Delito para los efectos conducentes.

De conformidad con el artículo 49 de la Ley de esta Comisión, es procedente requerir a las autoridades recomendadas para que, dentro de un plazo de diez días hábiles, informen sobre la aceptación de esta recomendación y, en su caso, remitan dentro de los quince días siguientes las pruebas relativas a su cumplimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma establecida.

Así lo formuló el C. Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Doctor José Ramiro Roel Paulín, y aprueba y emite el C. Doctor José Martín García Martínez, Presidente de esta Comisión, en términos del artículo 22 fracción VII, 24 fracción VI, inciso c) y d), de la Ley que regula el funcionamiento de este Organismo, así como el 22 fracción VII, 26 y 69 fracción V de su Reglamento.

_____

Dr. José Martín García Martínez
Presidente

_____

Dr. José Ramiro Roel Paulín
Secretario Técnico

Proyectó

_____

Mtro. Orlando Javier Rosado Barrera
Visitador Adjunto

QUEJA: 60/2014-T
QUEJOSO: **********
AUTORIDAD: POLICIA ESTATAL ACREDITABLE DESTACAMENTADA EN ********, TAMPS.**
RECLAMACIÓN:VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD, A LA PRIVACIDAD Y AL DERECHO A LA LEGALIDAD.
RESOLUCIÓN:RECOMENDACIÓN No. 020/2015

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los trece días del mes de julio de dos mil quince.

Visto para resolver el expediente número 060/2104-T, iniciado con motivo de la queja presentada por la C. **********, en contra de actos presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a elementos de la Policía Estatal Acreditable destacamentados en **********, Tamaulipas, los que ante la Delegación de aquella ciudad, se calificaron como violación al derecho a la libertad, violación al derecho a la privacidad y violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, una vez agotado el procedimiento se resuelve de conformidad con los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. Los conceptos de violación de derechos humanos precisan:

"… *Interpongo formal y enérgica queja de hechos en representación de mi hermana y sobrina, de nombres mencionados en la parte principal de esta queja, en contra de Policías Estatales destacamentados en **********, Tamaulipas, toda vez que el día ********** del ********** año aproximadamente como a las *** y *** de la noche, llegaron al domicilio, hablándoles por la ventana, rompiendo la tela de mosquitero y abriendo las persianas interiores sin el permiso de mis familiares, argumentando que había una persona secuestrada dentro del domicilio, por lo que mi sobrina ********** o ***********

*abrió la puerta que da a la calle y los policías se metieron sin permiso al domicilio, y mi sobrina […] menor de edad se espantó y se desmayó, y los policías entraron a toda la casa y al patio de la misma, a mis familiares los tenían en la sala, en donde les pidieron sus pertenencias, llevándose celulares, revisando computadoras y demás pertenencias, metiendo las cosas a una camioneta blanca y regresaron los celulares posteriormente, tomando fotos de todos los lados y a todo el equipo que tenia mi sobrina hermana, revisando su computadora y burlándose de algunas actividades y trabajos escolares de mi sobrina **********, por estar en una universidad determinada, por que le preguntaron todo lo relacionado a sus estudios, pero el jefe de ellos estaba intimidando a mi sobrina ********** y en todo momento molestaron a mis familiares inclusive a mi sobrina menor […], le estuvieron diciendo que la pondrían como halcón que estaría como de halconeo, así mismo estos policías revisaron el patio de la casa porque dentro del domicilio no encontraron nada y revisaron todo lo habido en su interior, posteriormente en el patio de la casa estuvieron revisando todo lo que estaba ahí inclusive revisaron vehículos que estaban estacionados en la calle, observando después de esto, que voltearon un tanque de agua que estaba en la parte interior del terreno, volteándolo para después observar que sale del interior un objeto encintado, que dijeron ellos era marihuana; estando ahí esperando un aproximado como dos horas, y después dijeron que levantaría la autoridad correspondiente el hallazgo, llevándose ese paquete y el tanque de una camioneta, pero les estuve argumentando que sacaran huellas digitales al tanque y los paquetes para que comprobaran que ellas no tenían nada que ver y así deslindar responsabilidades de mis familiares sobre los objetos encontrados, del cual ellos no sacaron las huellas respectivas ni realizaron ninguna investigación en el lugar de los hechos específicamente en el tanque y en el paquete encontrado, pero contaminaron en todo momento los objetos encontrados y por consiguiente no sacaron las huellas digitales de dichos objetos, lo cual solicite en todo momento no me hicieron caso, y nunca me mostraron una orden de cateo, ante tales hechos, solo se dedicaron a decir que era una denuncia anónima; posteriormente a esto esposaron a mi sobrina menor de edad, en el interior de la casa, tiempo después entre ellos hablan y le quitan las esposas, pero como quiera la trasladaron a las oficinas de la PGR junto con mi hermana y sobrina **********, a ellas si las trasladaron esposadas, por lo que tuve que cerrar la casa e irme a buscarlas porque no me supieron decir a donde las trasladarían por que ellos manifestaron no ser de aquí y no sabían a donde las llevarían, encontrándolas en las oficinas de la procuraduría General de la República de **********, solicitando hablar con ellas y solo me informaron que estaban acusadas por el delito de daño a la salud, pero todo esto fue después de mas de una hora esperando la información porque no me dejaron hablar con mis familiares, que solo podía hablar con ellas hasta que declararan, después fui a ver lo de mi sobrina menor, pero esta fue trasladada al Consejo Tutelar para menores, llamado ahora Centro de Reintegración Social y Familiar, que esta en **********, Tamaulipas, siendo la tutora para que me la entregaran; pero a mi hermana y sobrina **********,*

*fueron trasladadas a las instalaciones de la Policía Estatal del ********** de **********, y cuando voy a visitarlas, me comentan que se las habían llevado a **********, a un centro federal femenil Noreste para ser procesadas, pero esta información la obtengo por una llamada del mismo penal federal, porque los estatales no me dieron información y en todo momento se negaban a darme la información de mis familiares y nunca me permitieron hablar con ellas, razón por la cual interpongo esta queja de hechos en contra de los policías estatales para que se inicie la investigación y en su oportunidad se resulta conforme a derecho…"*

2. Una vez analizado el contenido de la queja, esta se calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo cual se admitió a trámite, radicándose con el número 60/2014-T, y se acordó solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe justificado, relacionado con hechos denunciados, así como la documentación que se hubiese integrado sobre el caso.

3. Mediante oficio número **********, de fecha **********, la Coordinación Municipal de la Policía Estatal **********, a través del Coordinador Regional de la Zona **********, remite copia certificadas del parte informativo de los hechos ocurridos el día **********, el cual señala lo siguiente:

"… *El día de hoy **** de ****** del año ******, siendo aproximadamente las ****** horas, al encontrarnos realizando nuestro recorrido de Seguridad y Vigilancia sobre la Calle **********, de la Colonia ********** en **********, Tamaulipas, a bordo de la unidad ******, nos percatamos que tres mujeres se encontraban en la banqueta frente al domicilio marcado con el número *****, al percatarse ellas de nuestra presencia, una de ellas entro en crisis y se desmayo, observando que las otras dos mujeres le prestaron su ayuda, al observar nosotros nos acercamos para brindarles auxilio, manifestando una de ellas que se sentía mal su familiar por lo tanto pedimos el apoyo vía radio a la Cruz Roja, arribando la ambulancia número *** a cargo del socorrista ********** y otro, manifestando ellos que solo le había subido la presión recomendándole reposo, retirándose la unidad de la Cruz Roja; en ese momento les ofrecimos apoyo para introducirla a su domicilio, por lo cual ellas aceptaron el apoyo, al ingresar al patio del domicilio nos percatamos de un penetrante olor a hierba seca como el del narcotráfico denominado marihuana, por lo tanto pedimos permiso a la C. **********, de **** años de edad, quien dijo ser la propietaria del domicilio para realizar una inspección ocular en el*

*patio, percatándose el Suboficial **********, que dentro de un tinaco denominado **********, COLOR **********, CON CAPACIDAD DE ***** LITROS, se encontraban en el interior: DOS PAQUETES COMPACTADOS CON UN PESO APROXIMADO DE 8 KILOGRAMOS CADA UNO, CON LAS SIGUEINTES MEDIDAS 45 DE LARGO POR 25 DE ANCHO, ENVUELTOS CON CINTA CANELA Y PLASTICO ADHERIBLE, en tanto que el oficial **********, proporcionó seguridad en todo momento al interior del patio, por lo cual aseguramos a las tres personas que se encontraban en el lugar que es la C. **********, de **** años de edad, C. ********** de **** años de edad, y […] DE *** años de edad. Por lo anterior, nos trasladamos a las instalaciones de esta Subsede de la Procuraduría General de la República, a fin de elaborar la documentación de la puesta a disposición correspondiente y de lo asegurado, así mismo, que se certificó su integridad física a las aseguradas por parte del personal de la Cruz Roja, adjuntándose al presente el certificado médico respectivo, en el que consta el estado físico, en que son entregadas ante la autoridad de merito, cabe precisar que únicamente se utilizó el tiempo indispensable para trasladarlas a esta Fiscalía, por lo que se pone a su disposición, para conocimiento de esta Representación a su digno cargo, para los efectos a que haya lugar, por otra parte, es menester hacer mención que en todo momento les fueron respetados sus derechos humanos y no se le causo maltrato de ningún tipo.*

PERSONAS ASEGURADAS:

C.** *******, de **** de años de edad, originaria de **********, Tamaulipas, con domicilio en Calle **********, número ***, Colonia **********, **********, Tamaulipas.*

C.** *******, de *** años de edad, originaria de **********, Tamaulipas, con domicilio en Calle **********, número ***, Colonia ********** de **********, Tamaulipas.*

C. […],** de ** años de edad, originaria de *******, Tamaulipas, con domicilio en la Calle **********, número ***, Colonia **********, **********, Tamaulipas.*

NARCOTICO:

02 DOS PAQUETES COMPACTOS CON UN PESO APROXIMADO DE 8 KILOGRAMOS CADA UNO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 45 DE LARGO POR 25 DE ANCHO, ENVUELTOS CON CINTA CANELA Y PLASTICO ADHERIBLE.

OBJETOS:

1.- UN TINACO DENOMONADO ROTOPLAS, COLOR NEGRO, CON CAPACIDAD DE 450 LITROS.

Por lo anteriormente expuesto ante esta Representación Social de la Federación atentamente solicitamos:

PRIMERO.- Tenemos a través del presente escrito, interponiendo denuncia de hechos probablemente constitutivos de delitos y a la vez poniendo en este acto a su disposición a las mencionadas personas, el narcótico y el objeto asegurado.

SEGUNDO.- Se ordene la ratificación de la presente denuncia de hechos.

TERCERO.- Se ordene las diligencias necesarias a efecto de esclarecer a efecto de esclarecer los hechos que se narran, a fin de que se integre la averiguación previa correspondiente…"

4. Mediante oficio número **********, de fecha **********, el Delegado Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado ******, quien informa a la Delegación Regional de la Codhet, en **********, Tamaulipas, que se dio el debido seguimiento al presente caso, adjuntando al presente copia de la comparecencia de la C. **********, a quien se brindó el apoyo y asesoría solicitada, la cual señala lo siguiente:

*"…**COMPARECENCIA DE LA C.** **********. En **********, Tamaulipas, a ********** del mes de ********** del año **********.----------*

*El suscrito **LIC. **********, Agente del Ministerio Público Auxiliar Adscrito de la Delegación Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado,** quien actúa con Oficial Ministerial, que dan fe a lo previsto por los Artículos 19 del Código de Procedimientos Penales; Artículo 7 Inciso A numeral 30 del ultimo párrafo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia para el Estado de Tamaulipas. Presente en el local que ocupa esta Delegación Regional, la persona antes mencionada, dado generales dijo llamarse como ha quedado escrito de **NACIONALIDAD** Mexicana, **EDAD** **** años, **ESTADO CIVIL** *******, **OCUPACIÓN** **********, Domicilio Calle ********** No. **** de la Colonia ********** de**********, Tamaulipas, quien se identifica con **CREDENCIAL PARA VOTAR** con número de folio **********, que si sabe leer y escribir.*

*Acto continuo se le informa que su comparecencia deriva del oficio número **********, signado por el LIC. **********, Delegado Regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; por lo que en este mismo acto el LIC. **********, se impone del oficio y procede a: ----------*

*Enviar a la compareciente a la oficialía de partes de esta ciudad para que presente la denuncia correspondiente, la cual fue recepcionada por esa oficina misma que fue turnada a la **Agencia** ********** **del Ministerio Público Investigador** de ********** para su ratificación y el desahogo de las diligencias correspondientes, así mismo se le proporciono asesoría del asunto planteado; a lo que manifiesta que se da por satisfecho por la asesoría y apoyo jurídico que se le brindo en esta Dependencia, siendo todo lo que tiene que manifestar…".*

5. Comuníquese a las partes que se ha abierto un periodo probatorio de diez días hábiles a fin de que se presenten las pruebas de su intención, y

notifíquesele a la quejosa, girando citatorio a fin de que comparezca a este Organismo para desahogar la vista del informe de la autoridad presuntamente responsable.

6. Pruebas desahogadas en el procedimiento.

6.1 Pruebas aportadas por la autoridad presuntamente responsable:

6.1.1. Mediante oficio No. **********, del ********** del **********, el C. **********, Coordinador Regional de la Zona ********** del Estado de la Policía Estatal en **********, Tamaulipas, mediante el cual remite copias certificadas del parte informativo de los hechos ocurridos el día **********, y firmado por los elementos de la Policía Estatal Acreditable de **********.

6.1.2. Mediante diverso **********, del *********, el licenciado **********, Agente ****** del Ministerio Público en ******, Tamaulipas, quien informa que la Averiguación Previa Penal No. ******, su estado procesal es el de RESERVA dictado en fecha *** de ******** de ******, toda vez que hasta esa fecha obraba únicamente la imputación que realiza la denunciante, en contra de quien resulte responsable, cuya identidad hasta ese momento se desconoce. Sin embargo compareció ante esa Fiscalía la C. *********, quien presentó ante esa autoridad a las CC. ********* y su hija ********* a quienes se les recabó sus declaraciones en relación a los hechos que denunció, por tal motivo no se omite

manifestar que posterior a la comparecencia de las antes mencionadas y en la misma se dictó proveído ministerial mediante el cual se deja sin efectos la reserva dictada en autos, por lo que la indagatorio que nos ocupa se encuentra actualmente en trámite, teniendo pendiente el desahogo de diversas diligencias de los cuales se puede normar criterio y en su momento emitir la resolución que a derecho corresponda.

6.2. Pruebas obtenidas por este Organismo:

6.2.1. Desahogo de vista de la C. *********, en fecha *********, manifestando lo siguiente:

> *"…Presente en esta Delegación Regional de la C.D.H.E.T. la C. *********, de generales conocidas dentro del expediente de Queja Número 60/14-T, se le da vista del informe rendido a este Organismo por C. ********* (Gral. D.E.M. Coord. Regional de la Zona *** *********, Tamps.), por oficio No. *********, de fecha ***de ******* de ****, manifestando lo siguiente: Que no estoy de acuerdo con el informe de referencia, por lo que agradezco el valiosos apoyo de este Organismo en la investigación del caso de merito, ratificando en este acto en todas y cada una de sus partes la queja de merito por ser la verdad de los hechos, siendo importante señalar que la suscrita interpuse denuncia y/o querella por estos hechos ante la Agencia ********* del M.P.I. , *********, radicándose bajo el número de A.P.P. *********. No obstante lo anterior, **la suscrita fui puesta en libertad, tras una detención injusta, acreditando mi inocencia, anexo fotocopia de constancias relativas al Juicio de Amparo promovido por la suscrita.** Por otra parte, deseo agregar que ********* y […], ya no desean rendir declaración alguna sobre este caso. Es todo lo que quiero manifestar…".*

6.2.2. Declaración Informativa recabada al C. *********, el cual informo lo siguiente:

> "…*Que recuerdo que el *********, aproximadamente a las *** p.m. cuando llegaron aproximadamente *** camionetas con soldados **y se introdujeron al domicilio de la señora ********* , la cual es mi vecina, dos soldados me pidieron permiso de revisar mi domicilio y entraron por que si se los permití** y ya después de 15 minutos, se salieron, y después me percaté que los soldados subían en una de las camionetas a mis vecinas ********* y […] de apellidos *********. Deseo aclarar **que no eran soldados si no policías estatales los que***

catearon la casa de mis vecinas y se las llevaron detenidas. *Es todo lo que quiero manifestar…".*

7. Una vez agotado el período probatorio, el expediente quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis se obtuvieron las siguientes:

C O N C L U S I O N E S

Primera. Este Organismo es competente para conocer la queja presentada por la C. *********, por tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorias de derechos humanos imputados a servidores públicos estatales, al tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

Segunda. No se advierte que en la especie se actualice alguna causal de improcedencia, por lo que se procede realizar el estudio de los motivos de inconformidad planteados por la parte quejosa.

Tercera. La quejosa de esta vía reclama en concepto de agravio allanamiento de morada y detención arbitraria, contenida en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los que reconocen y tutelan que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, ni sufrir ataques a su honra o reputación, salvo por las causas y en las condiciones fijadas en la Constitución o en las leyes dictadas conforme a ella.

Cuarta. Fijado lo anterior, debe mencionarse que la impetrante de los Derechos Humanos expresó esencialmente en concepto de agravio que el día

*********, entre las **** **y ****** de la noche, ingresaron de manera violenta a su domicilio particular elementos de la Policía Estatal Acreditable, bajo el argumento que en el lugar se encontraba una persona secuestrada; que dicha situación provocó que su sobrina menor de edad se espantara provocándole un desmayo. Que los elementos policiacos sin autorización alguna revisaron todo el lugar y se llevaron diversas pertenencias; que posteriormente esposaron a la menor de edad, a su hermana y a su sobrina *********, llevándolas detenidas por que presuntamente en el patio habían encontrado una gran cantidad de marihuana.

Quinta. En principio, debe mencionarse que las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, no incluyen pronunciamiento alguno sobre la inocencia o responsabilidad penal de las agraviadas, sino que su único propósito es vigilar el respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades y servidores públicos del Estado, que se contemplan en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en nuestro derecho interno.

Sexta. En esa línea de pensamiento, la parte quejosa reclama inicialmente que sus dos sobrinas, entre éstas una menor de edad y su hermana fueron detenidas de manera injustificada por parte de elementos de la Policía Estatal Acreditable, siendo trasladadas las mayores de edad a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, mientras que la menor fue llevada al Consejo Tutelar para Menores.

Sobre las detenciones de cuenta, debe mencionarse que obra en el sumario, el informe de ********* que rinde el ********* Coord. Regional de la zona ****** de la Policía Estatal, al cual se anexa el parte informativo de *********, que rinden los CC. *********, ********* y *********, elementos de la Policía Estatal Acreditable, en el que refieren que el día *********, aproximadamente a las **** horas,

durante un recorrido de vigilancia que realizaban por la colonia *********, se percataron cuando tres mujeres se encontraban en la banqueta sobre la calle *********, esquina con *********, cuando de pronto y por su presencia, una de ellas entró en crisis y se desmayó, acercándose para prestarles apoyo y requiriendo el auxilio de la Cruz Roja, arribando al lugar la ambulancia con el número ***; que en ese momento les ofrecieron su ayuda a las mujeres para ingresar a la desmayada a su domicilio, apoyo que aceptaron las mujeres, sin embargo, que al ingresar al patio del domicilio se percataron de un fuerte olor penetrante a hierba seca como la marihuana, por lo que solicitaron autorización de la C. *********, para realizar una inspección ocular en el patio, encontrando dentro de un tinaco color negro de la marca "*rotoplas*", con capacidad de 450 litros, dos paquetes compactos con un peso aproximado de 8 kilogramos cada uno envueltos con cinta canela, procediendo asegurar a las tres personas que se encontraban en el lugar *********, ********* y a la menor de edad.

Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas estima que son erróneas e ilegales las acciones que tomaron los elementos de la Policía Estatal Acreditable, toda vez que estimar lo contrario implicaría convalidar cualquier intromisión de agentes policiacos que, sin orden de autoridad competente, decidan ingresar a cualquier edificio a realizar pesquisas con el pretexto de investigar la posible comisión de cualquier delito, lo cual, además de ilegal por disposición expresa de los artículos 61 y 284 del Código Federal de Procedimientos Penales, pugna con la inviolabilidad del domicilio y de la prohibición de los actos de molestia en las propiedades y posesiones que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los preceptos constitucionales en comento salvaguardan, en lo que aquí concierne, los derechos, propiedades o posesiones de los particulares, a fin de que sólo puedan ser molestados mediante orden expedida por autoridad competente en la que se funde y motive ese acto de molestia.

No se trata de proteger la impunidad o de impedir que la autoridad persiga los delitos o castigue a los delincuentes, sino de asegurar que las autoridades actúen siempre con apego a las leyes y a la propia Constitución, para que éstas sean instrumentos efectivos de paz y seguridad social y no de opresores omnímodos de los individuos. La exigencia de una orden escrita de cateo sirve justamente para esta alta función. Cierto es que el cateo ha sido definido como el '*registro y allanamiento de un domicilio particular por la autoridad, con el propósito de buscar personas u objetos que están relacionados con la investigación de un delito*', pero de ello no se sigue que sólo la casa-habitación del individuo tenga protección constitucional, pues los titulares de la inviolabilidad domiciliaria son toda persona física o moral, por lo que el concepto '*domicilio*' no sólo comprende el sitio o lugar en que el individuo tenga establecido su hogar, sino también el sitio o lugar establecidos de su despacho u oficina, bodegas, almacenes, etcétera y, en tratándose de personas morales el sitio o lugar donde tengan establecida su administración, incluyendo las sucursales o agencias con que cuentan. Si no fuera así, resultaría que las visitas domiciliarias, que también deben sujetarse a las formalidades exigidas para los cateos, no podrían ser practicadas por las autoridades administrativas para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, ni exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, si se atendiera al concepto histórico de domicilio, ni los militares en tiempo de guerra podrían exigir alojamiento en domicilios particulares que no fueran casas-habitación.

En la especie, se advierte que se violó en perjuicio de las agraviadas la garantía de legalidad y seguridad jurídica contenida en el artículo 14 Constitucional, en atención a que en la práctica de las diligencias de la presunta "i*nvestigación*" o "*inspección ocular*" que señalan los agentes estatales realizaron en el patio del domicilio, no se observaron las formalidades esenciales del

procedimiento. Se afirma lo anterior, en razón de que si los agentes de la policía habían advertido el "*olor a la marihuana*", no actuaron conforme a los preceptos legales antes citados, ya que no se aprecia de las constancias que hubiese levantado el acta correspondiente en la que hiciera constar la hora, fecha y modo en que tuvo conocimiento de los hechos –*olor a marihuana*-, tampoco comunicaron ello de inmediato al representante social, para que éste a su vez ordenara el desahogo de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos; cuando no se cumplen estos requisitos, la diligencia o actuación policial carecerá de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar.

Por tanto, la persona, su familia, su domicilio, papeles o posesiones no pueden ser objeto de pesquisas, cateos, registros o secuestros sin observar los requisitos contenidos en el artículo 16 Constitucional a fin de asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes, proteger la libertad individual y garantizar la seguridad jurídica. Sobre esto, el artículo 14 Constitucional establece la obligatoriedad de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para privar a una persona de sus derechos, de donde se sigue que la certeza del juzgador sobre la veracidad de la imputación sólo puede ser obtenida como consecuencia de la actividad probatoria desplegada en la averiguación o en el proceso con apego a las formalidades esenciales del procedimiento.

Sirve como sustento a la anterior determinación, por analogía y por las razones que la informan la tesis Constitucional, Penal XXI.2o. P.A.2P, publicada en la página 2606, Tomo IV, de Octubre de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, que dice:

> ***INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. LA EXCEPCIÓN A DICHA GARANTÍA CONSISTENTE EN LA FLAGRANCIA PARA JUSTIFICAR LA INTROMISIÓN EN AQUÉL SIN LA ORDEN DE CATEO CORRESPONDIENTE, NO SE ACTUALIZA SI LOS ELEMENTOS***

APREHENSORES SE INTRODUJERON AL INMUEBLE PORQUE UN DETECTOR MOLECULAR REGISTRÓ QUE EN SU INTERIOR SE ENCONTRABAN DROGA Y ARMAS, AUN CUANDO MANIFIESTEN QUE SU HABITANTE LES AUTORIZÓ EL PASO, SI ELLO NO CONSTA EXPRESAMENTE EN AUTOS.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 21/2007, publicada en el Semanario ***Judicial*** *de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 224, de rubro: "****INTROMISIÓN*** *DE LA* ***AUTORIDAD*** *EN UN* ***DOMICILIO*** *SIN* ***ORDEN JUDICIAL****. EFICACIA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS, CUANDO ES MOTIVADA POR LA COMISIÓN DE UN DELITO EN FLAGRANCIA.", determinó que tratándose del allanamiento de un* ***domicilio*** *en caso de flagrancia, la* ***autoridad*** *policial debe contar con datos ciertos o válidos que motiven su* ***intromisión*** *sin la* ***orden*** *de cateo correspondiente, así como que de no acreditarse tal situación, las pruebas recabadas durante dicha intervención carecen de eficacia probatoria. En ese sentido, si en el parte informativo y narrativa de hechos consignado por los elementos aprehensores únicamente se señala que "al utilizar un detector molecular, arrojó como resultado que en el interior del* ***domicilio*** *registrado se encontraban droga y armas", esta circunstancia no actualiza el supuesto de excepción relativo a la flagrancia como justificación para la* ***intromisión*** *del* ***domicilio*** *intervenido, pues dicha información no encuadra en los supuestos que determinan la flagrancia y que justifiquen la* ***intromisión*** *al inmueble sin la* ***orden*** *de cateo correspondiente, aun cuando dichos captores manifiesten que el habitante de éste les autorizó el paso, si ello no consta expresamente en autos.*

Asimismo, tiene aplicación al caso la tesis Constitucional 1ª CVI/2012, publicada en la página 1101, Tomo 1, Decima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto literal siguiente:

INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. LA AUTORIZACIÓN DEL HABITANTE, A EFECTO DE PERMITIR LA ENTRADA Y REGISTRO AL DOMICILIO POR PARTE DE LA AUTORIDAD, NO PERMITE LA REALIZACIÓN DE CATEOS DISFRAZADOS.

*La entrada a un **domicilio** por parte de los agentes de policía, puede estar justificada ya sea: 1) por la existencia de una **orden judicial**; 2) por la comisión de un delito en flagrancia; y, 3) por la autorización del ocupante del **domicilio**. Respecto a este último supuesto, es necesario partir de la idea de que la autorización del habitante, como excepción a la inviolabilidad del **domicilio**, no se constituye en un supuesto que deje sin efectividad a la **orden judicial** de cateo. Es decir, esta excepción se actualiza en escenarios distintos al de la **orden judicial** de cateo y al de la flagrancia. La autorización del habitante no puede ser entendida en el sentido de permitir cateos "disfrazados" que hagan inaplicables las previsiones constitucionales. Conforme al artículo 16 constitucional, se requerirá la existencia de una **orden** de cateo para cualquier acto de molestia que incida en la esfera jurídica de una persona, su familia, **domicilio**, papeles o posesiones. La expedición de dichas órdenes es imperativa para que la **autoridad** pueda realizar cualquier acto de molestia. Por lo mismo, el mencionado artículo constitucional establece los requisitos que las órdenes de cateo necesariamente deben satisfacer para que el acto de **autoridad** realizado con fundamento en las mismas sea constitucional, a saber: (i) sólo pueden ser expedidas por la **autoridad judicial** a solicitud del Ministerio Público; (ii) en la misma deberá expresarse el lugar a inspeccionar, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan; (iii) al concluir la diligencia se debe levantar un acta circunstanciada de la misma en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o, en su ausencia o negativa, por la **autoridad** que haya practicado la diligencia. La autorización del habitante, como excepción a la inviolabilidad del **domicilio**, sólo podrá entrar en acción en aquellos supuestos que no se correspondan a los de la necesaria existencia de una **orden judicial** o de la comisión de un delito en flagrancia, como por ejemplo, en los casos en los que la policía responde a un llamado de auxilio de un particular. En esta lógica, la **autoridad** no puede pasar por alto la exigencia constitucional de la **orden judicial** de cateo con una simple solicitud al particular para que le permita ingresar a su **domicilio**, sino que el registro correspondiente debe venir precedido de una petición del particular en el sentido de la necesaria presencia de los agentes del Estado a fin de atender una situación de emergencia. Así las cosas, y partiendo de lo anteriormente expuesto, esta autorización o consentimiento voluntario se constituye en una de las causas justificadoras de la **intromisión** al **domicilio** ajeno. Esto es así, ya que si el derecho a la inviolabilidad del **domicilio** tiene por objeto que los individuos establezcan ámbitos privados que excluyan la presencia y observación de los demás y de las autoridades del Estado, es lógico que los titulares del derecho puedan abrir esos ámbitos privados a quienes ellos deseen, siempre y cuando esta decisión sea libre y consciente.*

Séptima. "*De la Reparación del daño"*. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, han establecido la obligación que tienen los Estados de reparar el daño a las víctimas de violaciones a derechos humanos. En el Sistema Universal de Protección a Derechos Humanos se han desarrollado los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional, mientras que en el Sistema Interamericano la propia Convención Americana dispone este compromiso en su artículo 63.1, al señalar la obligación de garantizar al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados, y al establecer la obligación de reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la violación de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

En relación al derecho que tienen las víctimas de violaciones a derechos humanos de recibir una reparación integral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que:

> *"Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido."*

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto a la obligación de reparar, y ha manifestado que ésta se regula en todos sus aspectos por el derecho internacional, invocando disposiciones de derecho interno. El Máximo Tribunal Interamericano ha establecido que "*la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere plena*

restitución, lo que consiste en el restablecimiento de la situación anterior, y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo, así como el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados". No se debe olvidar que en el tema de reparaciones de violaciones a derechos humanos, "*se debe de pensar desde la perspectiva de la integralidad de la personalidad de la víctima, y teniendo presente su realización como ser humano y la restauración de su dignidad*".

En el derecho interno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo tercero de su artículo 1° señala:

> "*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley*".

Sirve de apoyo además, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 257, Tomo 1, 10ª época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen:

> ***"DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA.***
> *Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, que los derechos humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental y los tratados internacionales suscritos por México, y que la interpretación de aquélla y de las disposiciones de derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las mejores condiciones para las personas. Asimismo, del párrafo tercero de dicho precepto destaca que todas las autoridades, en el ámbito de*

sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, lo cual conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas las personas por igual, con una visión interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de aquéllos."

Octava. *"De la calidad de víctima (s)".* De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º., párrafo tercero, 17, y 20 Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley General de Víctimas, 1º., 2º, 3º. y 5º. de la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Tamaulipas, se consideran víctimas aquellas personas que directamente hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, física, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Conforme a las disposiciones legales que se precisan, las CC. *********, ********* y la menor de edad, detenidas indebidamente en la fecha de los hechos, adquieren la calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos, de acuerdo con los motivos y fundamentos que son advertidos en esta recomendación.

En congruencia de lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 3, 8, 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se emite la siguiente:

R e c o m e n d a c i ó n:

Al Secretario de Seguridad Pública del Estado:

Primero. Gire sus instrucciones escritas a quien corresponda, para que se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los CC. *********, ********* y *********, elementos de la Policía Estatal Acreditable, por la prestación indebida del servicio público en que incurrieron.

Segundo. Con el fin de abonar en la profesionalización de los agentes de la Policía Estatal Acreditable implicados en este asunto, se lleve a cabo la implementación de un programa de capacitación sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, especialmente, los relacionados con la detención de las personas.

Tercero. Se provea lo necesario para restituir a las agraviadas la pérdida de los ingresos que justifiquen haber erogado derivado de la conducta violatoria de Derechos Humanos, considerando los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso.

La interpretación integral de los artículos 4º., párrafo cuarto, 101, fracción II y III del quinto párrafo, y 110 de la Ley General de Víctimas, conceden a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, la facultad para reconocer a las CC. *********, ********* y a la menor de edad, detenidas indebidamente, como víctimas de violaciones a derechos humanos para efectos del ordenamiento mencionado.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, solicítese a la autoridad recomendada que dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la presente resolución, informe a este Organismo si acepta o no la recomendación formulada y, en su caso, enviar dentro de los 15 días siguientes las pruebas de que se ha iniciado su cumplimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, y con copia de esta recomendación, dese Vista al Instituto de Atención a Víctimas del Delito en el Estado.

Así lo formuló el C. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Doctor José Martín García Martínez, en los términos del artículo 22 fracción VII de la Ley que regula nuestra actuación y funcionamiento.

Dr. José Martín García Martínez
Presidente

Proyectó:

Lic. Octavio César González Ledesma.
Coordinador de Seguimiento
de Recomendaciones.

L'OCGL/l'memr

Expediente núm.: 285/2014
Quejosa: ****
Resolución: Recomendación núm.: 021/2015

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los catorce días del mes de julio del año dos mil quince.

Visto para resolver el expediente número 285/2014 motivado por la ******, en contra de actos presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a elementos de la Policía Estatal de esta ciudad, los cuales fueron calificados como violación del derecho a la Libertad e Integridad Personal; agotado que fue el procedimiento, este Organismo procede a emitir resolución tomando en consideración los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, radicó el día 22 de noviembre del 2014, la queja presentada por la ******, quien denunció lo siguiente:

*"…Deseo señalar que mi esposo de nombre ******, desde el día de ayer en la noche se encontraba desaparecido, no teniendo comunicación en toda la noche, le marcaba a su teléfono celular y le mandaba mensajes no tenía respuesta alguna, acudiendo a buscarlo a su trabajo ya que es Policía Estatal, adscrito a la Casa de Gobierno, eso fue el día de hoy a las 8:30 horas, observando que ahí estaba su camioneta Ford-150, retirándome del lugar ya que pensé que todavía seguía trabajando, siendo las 9:15 horas acudí a las instalaciones del PRI ubicadas en el 13 Conrado Castillo y Alejandro Prieto, lugar en donde no había ninguna persona, esperando unos minutos para ver si teníamos comunicación con él ya que le seguí marcando a su celular y además le mandaba mensajes, retirándonos de dicho lugar, siendo las 11:30 a.m. regresé a Casa de Gobierno, percatándome que ya no se encontraba su camioneta estacionada en donde la había observado horas antes, por lo que preguntamos por él y un guardia que se encuentra en la puerta me informó que él ayer había terminado su guardia en la noche sin mencionar hora, y que el día de hoy lo estaban esperando para trabajar y que no se había presentado, ante lo informado decidí acudir de nueva cuenta a las oficinas del PRI lugar en donde me recibieron y me dijeron que no sabían nada de él, posteriormente me trasladé a las oficinas del 2 Zaragoza, lugar en donde tampoco estaba detenido, ante esa situación me*

retiré a mi domicilio y siendo las 17:05 horas recibí una llamada de la Procuraduría General de la República y me comunicaron con él, diciéndome que le llevara agua, ropa cómoda porque estaba detenido y que además no había comido nada, ante esa situación me trasladé a las instalaciones de la Procuraduría General de la República lugar en donde tardaron un momento en recibirme, cuando pasé me percaté que estaba todo golpeado, diciéndome él que lo habían detenido y esposado desde el día de ayer cuando disponía a subirse a su camioneta la cual tenía en el estacionamiento de la casa de Gobierno, que no observó quien lo detuvo que solamente estaban encapuchados, que después lo subieron a un vehículo ignorando a donde lo habían llevado, pero que después lo introdujeron a un baño en donde lo habían empezado a golpear, después lo sacaron de dicho baño y lo introdujeron a otro cuarto desconociendo a donde ya que lo llevaban cubierto de la cara esposado y arrastrando, estando en dicho lugar cada persona que entraba lo pateaba el abdomen y en la espalda, que le habían quitado sus zapatos y que le habían quebrado el dedo del pié, además diciéndome que le habían robado su teléfono celular, además su cartera con todas sus identificaciones así como su porte de arma del trabajo, siendo todo lo que me comentó, yo observé que mi pareja tiene la cara hinchada y sus manos, además tiene unas marcas en las mismas al parecer son quemaduras, sus piernas tiene varias marcas, se le complica sentarse, se duele de sus costillas".

2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo cual se admitió a trámite, radicándose con el número 285/2014, y se acordó solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe justificado, relacionado con los hechos denunciados, así como la exhibición de la documentación que se hubiera integrado sobre el caso.

3. En virtud de que la autoridad fue omisa en rendir su informe, por acuerdo de fecha uno de octubre del 2014, esta Comisión decretó la presunción de tener por ciertos los actos u omisiones reclamados por la quejosa, salvo prueba en contrario, y por considerarse necesario, con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a esta Institución, se declaró la apertura de un período probatorio por el plazo de diez días hábiles.

4. Dentro del procedimiento se desahogaron las siguientes probanzas:

4.1. Pruebas obtenidas por esta Comisión.

4.1.1. Constancia de fecha veintiuno de agosto del 2014, elaborada por personal de esta Comisión, en la cual se asentó lo siguiente:

*"Que me constituí a las instalaciones que ocupa la Procuraduría General de la República con la finalidad de indagar qué Agente del Ministerio Publico de la Federación se encontraba en turno, al paso de unos minutos fui atendido por quien dijo llamarse ******, y ser el titular de la Agencia Primera Investigadora, ante quien me identifiqué y le expliqué el motivo de mi visita la cual consistía en solicitarle autorización para recepcionarle la declaración testimonial al C. ******, quien a versión de la C. ****** señaló que se encontraba detenido en esas instalaciones, manifestando que no había ningún inconveniente para que personal de este Organismo se entrevistara con el detenido y que daría todas las facilidades, señalando que dicha persona había sido puesto a su disposición en el transcurso de la tarde por parte de elementos de la Policía Estatal por la portación de un arma de fuego de uso exclusivo del ejército y fuerza armada, por lo que se dio inicio a la indagatoria penal ****** la cual se está integrando".*

4.1.2. Declaración informativa del C. ******, quien manifestó lo siguiente:

*"Que el día de hoy a las 00:00 horas yo me encontraba en el domicilio del Contador ******, con el cual desempeño la función de chofer-escolta, el cual se ubica en el fraccionamiento Las Villas calle cerradas del Borbón, cuando recibí vía frecuencia un llamado por parte de la Casa de Gobierno por parte del elemento de apellido ******, quien me dio la orden que me presentara lo más rápido posible en casa de gobierno y que ordenaba el comandante ******, por lo que me trasladé a casa de gobierno en el vehículo oficial que traigo a mi cargo una suburban blindada con placas ******, presentándome con el comandante ****** quien me ordenó que me desarmara porque lo iba a acompañar a un lugar, procediendo a dejar mis armas las cuales era una R-15 y una 9 mm. Pietro Bereta, recibiéndomelas el depositario de nombre ****** quien es elemento auxiliar, posteriormente saliendo de casa de gobierno abordando el vehículo que traía a mi cargo así como también el Comandante ******, así mismo el comandante ****** quien es encargado del personal comisionado a casa de gobierno, trasladándonos al fraccionamiento Naranjos el cual se ubica a un costado de la casa de gobierno, dirigiéndonos al estacionamiento habilitado al parque vehicular del gobernador donde me dijo el comandante ****** que le entregara los radios y las llaves de la camioneta porque iba a acompañar a unas personas y que era orden de arriba, en ese instante llegaron 2 patrullas de la policía acreditable (Estatal) así como una tahoe blanca de la cual descendieron varias personas uniformadas con uniforme de la policía estatal todos con pasa montañas dándome la orden de que pusiera mis manos en la nuca porque los iba a acompañar procediendo a esposarme y subirme a una de*

*las unidades y colocándome boca abajo, trasladándome al campo de tiro antiguas instalaciones de la Policía Estatal Preventiva, en donde me bajaron de la unidad no sin antes vendarme los ojos con cinta gris y diciéndome que cooperara porque de lo contrario me iba a cargar la chingada, empezando a golpearme con pies y manos en diferentes partes del cuerpo diciendo que ya tenían toda mi información y que yo era el encargado de la plaza de victoria, a lo que yo le respondí que trabajaba para el señor gobernador y que desconocía a las personas que me nombraban, posteriormente me introdujeron a los dormitorios de dicha instalación en donde me hicieron desnudarme y posteriormente colocarme un trapo sobre la nariz y boca en repetidas ocasiones y echándome agua por la nariz y boca mientras otras personas dos me golpeaban en el cuerpo, así estuvieron por espacio de 2 ó 3 horas torturándome hasta que por fin me esposaron en un baño en donde me tiraron y en ese lugar esporádicamente entraban personas las cuales me golpeaban y me decían que ya cantara quien era o que me iba a cargar la chingada ya que tenía el dedo bien puesto, así mismo preguntando que de donde sacaba el dinero el gobernador que yo sabía quien lo patrocinaba, al igual que al contador ******, que cartel les daba dinero, a lo que yo le respondí que yo desconocía todo tipo de situaciones ya que yo siempre los vi trabajar honestamente, al amanecer me volvieron a decir que me vistiera cambiándome a otro baño de dichas instalaciones en donde me esposaron a una silla en donde continuaron golpeándome y diciéndome que yo vendía oro y que les dijera donde sacaba el oro y que también les dijera que con qué armero había llevado las cachas de una pistola para que les reparara la cual pertenecía al encargado de la plaza de victoria que ya tenía toda la información, así mismo, continuaron golpeándome a lo que yo les respondí que desconocía todo ese tipo de información ya que mi trabajo no me permitía ya que era todo el día, siguiendo agrediéndome hasta las 13:00 horas y continuando con el mismo tipo de preguntas, dejándome después encerrado en el baño aproximadamente 2 horas, diciéndome un elemento que como me sentía y que si traía golpes internos, deseo señalar que ya no era el mismo tono de voz a los elementos que me torturaron anteriormente, diciéndome dicho elemento que ya me iba a sacar de ahí, al paso de 30 minutos me trasladaron a las instalaciones de la PGR poniéndome a disposición ante el Agente del Ministerio Público por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército manifestando que antes de ingresar a las instalaciones de la PGR yo le pregunté a los elementos de la Policía Estatal que me trasladaban que cual era el motivo de mi puesta a disposición respondiéndome que desconocían pero que eran instrucciones del General desconociendo cual ya que sólo así manifestaron".*

4.1.3. Documental consistente en dictamen médico previo de integridad física del C. ******, de fecha 21 de agosto del 2014, emitido por el Dr. José Humberto Cárdenas de la Plaza, Perito Médico Forense adscrito a este Organismo

de Derechos Humanos, el cual a la exploración física, presentó las siguientes lesiones: Eritema y Edema circunscrito en la región malar y cigomática a la izquierda de la línea media; 2 excoriaciones dermoepidérmicas de 6 y 4 cm de longitud, situadas en la cara anterior tercio medio inferior de antebrazo izquierdo; edema consecutivo a presión en cara anterior de la mano izquierda; escoriación dermoepidérmica circular, situada en tercio inferior de antebrazo izquierdo; 12 escoriaciones dermoepidérmicas de 8, 6, 4 y 3cm de longitud, situadas en la región lumbar a la izquierda y derecho de la línea media; equimosis de 8 cm de diámetro situada en codo izquierdo; equimosis situada en el hombro inferior de la rodilla derecha; equimosis y excoriación dermoepidérmica de 2 cm de longitud, situada en el bordo inferior de la rodilla izquierda; contusión y equimosis en quinto dedo del pie derecho; excoriación dermoepidérmica de 3 cm de longitud, situada en la cara anterior tercio inferior de la pierna derecha.

4.1.4. Diez impresiones fotográficas del C. ******, donde se le observan lesiones en diferentes partes del cuerpo.

4.1.5. Mediante oficio SSP/DJAIP/SJ/DHMJ/1552/2014, de fecha 14 de octubre de 2014, el Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública, rindió informe en los siguientes términos:

> *"…En relación a los actos manifestados por la quejosa informo a Usted que son parcialmente ciertos: Efectivamente el día 21 de agosto en un rondín de patrullaje y vigilancia a la altura del Boulevard Tamaulipas (8) realizado por las unidades 483, 494 y 524, aproximadamente a las 08:20 horas el C.******, sí fue detenido, pero en flagrancia y no sin motivo alguno como infiere en el oficio de cuenta conforme a los hechos que conforman la puesta a disposición del Agente del Ministerio Público Federal en turno, el día de los hechos, mismos que fuera remitido por la Dirección de Investigaciones de la Coordinación General de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable…La quejosa señala que su esposo el C. ****** fue detenido sin motivo alguno, como es de observarse fue encontrado flagrante en la comisión de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito por el cual fue puesto a disposición en esa propia fecha veintiuno de agosto de 2014 ante la Agencia del Ministerio Público Federal en Turno con las evidencias que fueron encontradas en posesión del C. ****** y debidamente procesadas en cadena de custodia. Conforme a lo manifestado por la quejosa en relación a que el C.****** le fuera robado su celular, no es cierto, toda vez que el*

*aparato de telefonía celular que ha quedado descrito en la transcripción del parte informativo con el que fuera puesto a disposición, indica su entrega a dicha autoridad ministerial. En cuanto a las lesiones, al realizar la puesta a disposición del C. ******, es requisito indispensable presentar certificado médico para que sea recibido por dicha autoridad, por lo que esta autoridad se deslinda de cualesquier acto de tortura, lesiones ocurridas después de su entrega a dicha autoridad."*

4.1.6. Declaración informativa de la C. ******, quien manifestó lo siguiente:

*"Que el día 21 de agosto del presente año, a las 8:00 de la mañana recibí una llamada telefónica por parte de la C. ******, quien me informó que mi hermano ******* no llegó a dormir y que perdió comunicación con él toda la noche, optando por dirigirnos a su trabajo a la casa de gobierno, y siendo las 8:30 de la mañana pase por casa de gobierno y observé que en el "potrero" se encontraba la camioneta de gobierno, a ese lugar se le denomina así y es donde estacionan los vehículos de los trabajadores, y se localiza a un costado de la casa de gobierno entre avenida del valle y la casa de gobierno, y posteriormente veo a la C. ******, quien es mi cuñada y ya comentamos de que si estaba ahí la camioneta probablemente se encontraba trabajando mi hermano y decidimos no llegar a preguntar por él considerando de que si estaba trabajando lo íbamos a perjudicar, y optamos por retirarnos del lugar, y fuimos a las oficinas ubicadas en el 13 Alejandro Prieto y Conrado Castillo, ya que ahí es la oficina del jefe de mi hermano ******, pero en virtud de que no había ninguna persona en tal lugar, no pudimos preguntar por él. A las 11:30 de ese mismo día, acudimos mi cuñada y yo, nuevamente a casa de gobierno, llegando por avenida del Valle, y nos percatamos que la camioneta ya no se encontraba estacionada, y nos metimos al estacionamiento de Grande Campestre y fuimos con los guardias que están en la entrada de la casa de gobierno y les preguntamos por mi hermano ******, y uno de ellos entra según a pedir información y nos dice a mi cuñada a mi padre que también nos acompañaba y a la suscrita lo siguiente: "el día de ayer él entregó sus armas y firmó su salida, diciéndome que no tenía hora, y el día de hoy lo esperábamos que se presentara y no llegó a su trabajo"; ante tal situación, y toda vez que mi cuñada y mi padre se pusieron muy mal por la noticia, la suscrita pedí hablar con el jefe inmediato de mi hermano, o con el gobernador ya que necesitaba que me dijeran en donde estaba mi hermano, y dicha persona me señaló que no se encontraban, ya que si firmó la salida de ahí debía dirigirse a su camioneta y si en ese trayecto le ocurrió algo deberían de saber ya que dicha casa está blindada de cámaras y no me dio ninguna información, por lo que le señalé que ellos sabían en donde estaba mi hermano y que la camioneta no podía haber desaparecido, ya que la habíamos visto estacionada a las 8:30 de la mañana y que ellos sabían quien se la había llevado, sin que me dieran*

mayor información, y nos retiramos, manifestándole que ahí me iba a tener todo el día preguntando por mi hermano hasta que me dijeran donde estaba; y hasta después de las 5:00 de la tarde nos enteramos por medio de una llamada que le realizaron al teléfono celular de mi cuñada, que estaba detenido en las celdas de la Procuraduría General de la República, a donde solamente entró mi cuñada a verlo y me dijo que estaba muy golpeado".

4.1.7. Declaración informativa del C. ******, elemento de la Policía Estatal Acreditable, quien refirió lo siguiente:

*"…En relación con los hechos denunciados en agravio del C. ******, deseo manifestar que si participé en la detención de dicha persona, la cual ocurrió en la calle 8 Michoacán, no recuerdo exactamente el día, eran como las 8:30 de la mañana aproximadamente, fue en el transcurso de la mañana, pero esa detención ocurrió toda vez que el quejoso circulaba en una camioneta color rojo, sin recordar la marca, y portaba un arma larga en su camioneta (cuerno AK 47), y en virtud de que el suscrito me encontraba en rondín de vigilancia, no recuerdo tampoco en que unidad, se detectó a dicho vehículo, al momento de aparearse con la patrulla en la que viajaba, junto con los elementos Daniel y Elva, no recordando más datos, ni tampoco cuantos elementos andábamos, se le marcó el alto a la persona, y se procedió a su detención, tampoco recuerdo si opuso resistencia, éste se encontraba sólo; inmediatamente de su detención dicha persona fue trasladada a las instalaciones de la Procuraduría General de la República a disposición del Ministerio Público Federal. En cuanto a lo denunciado por el quejoso en el sentido de que fue trasladado a un lugar distinto en donde fue golpeado y torturado, quiero manifestar que ello es completamente falso ya que del lugar de la detención se remitió a las instalaciones de la PGR, por lo que desconozco dichas imputaciones; de igual forma, no recuerdo si dicha persona presentaba alguna lesión al momento de su detención, tampoco recuerdo que unidad lo trasladó ya que andaban tres unidades puesto que como ya lo señalé nos encontrábamos en un rondín de vigilancia…".*

4.1.8. Declaración informativa del C. ******, elemento de la Policía Estatal Acreditable, quien manifestó lo siguiente:

*"Una vez que se me ha hecho del conocimiento de los hechos denunciados en agravio del C.******, deseo manifestar que no recuerdo de los mismos, ya que todos los días hay puestas a disposición, y salidas fueras de la ciudad y también fuera de la ciudad, hay puestas a disposición".*

4.1.9. Declaración informativa de la C. ******, agente de la Policía Estatal Acreditable, quien dijo lo siguiente:

*"En relación con los hechos denunciados en agravio del C******, deseo manifestar que si participé en la detención de dicha persona, la cual ocurrió en la calle 8 a la altura de la tienda HBE, no recuerdo exactamente el día, eran como las 8:30 de la mañana aproximadamente, fue en el transcurso de la mañana, pero esa detención ocurrió toda vez que de la patrulla observamos que circulaba una camioneta Ford lobo color rojo, sin recordar la marca, y portaba un arma en su camioneta, al lado derecho del conductor, era un arma larga con las características de una cuerno de chivo, motivo por el cual ratifico lo señalado en el parte informativo rendido respecto a dicha detención. Respecto a lo señalado por el quejoso de que fue violentado físicamente y trasladado a un lugar distinto posterior a su captura, deseo manifestar que ello es totalmente falso, ya que una vez que se interceptó se le hizo una revisión detectando el arma que señalo y al cuestionarlo sobre la misma refirió primeramente que era de él y posteriormente con actitud ya nerviosa dijo que pertenecía a otra persona, que describió como ALFA METRO y que éste le había encargado el arma y que dicha persona trabajaba para los Zetas, razón por la cual se procedió a su detención. La camioneta fue revisada por la suscrita, y la persona físicamente la revisó uno de mis compañeros, y una vez asegurado fue remitido ante las instalaciones de la Procuraduría General de la República, así como su camioneta, no recuerdo si fue con apoyo de la grúa o por los mismos elementos, pero fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal posterior a la captura, por lo que desconozco las imputaciones sobre los golpes de que se duele el quejoso y no recuerdo si dicha persona presentaba lesiones visibles al momento de su captura, tampoco recuerdo si opuso resistencia al arresto".*

4.1.10. Mediante oficio SSP/DAI/INT/000064/2015, la Directora de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, remitió copias fotostáticas certificadas del Procedimiento Administrativo de Investigación número DAI/PAI/172/2014 en contra de los integrantes de la Policía Estatal Acreditable que resulten responsables.

4.1.11. Constancia de fecha 27 de abril del 2015, elaborada por personal de este Organismo, en la cual se asentó lo siguiente:

*"Que se encuentra presente en el local que ocupa este Organismo el C. ******, agraviado dentro del expediente 285/2014, quien se identifica con credencial para votar 0000118754411 y manifiesta que con fecha 23 de abril del presente año obtuvo su libertad por parte del Juzgado Primero de Distrito de esta ciudad, al haber dictado a su favor auto de libertad por falta de elementos para procesar dentro del expediente 46/2014, y agrega que en este momento no tiene copia de la resolución emitida, pero que con*

posterioridad la agregará a fin de que sea valorada en autos al momento de emitir la resolución que conforme a derecho proceda".

4.1.12. Constancia de fecha 05 de mayo del 2015, elaborada por personal de esta Comisión, en la cual se asentó lo siguiente:

*"Que se encuentra presente en el local que ocupa este Organismo la C. ******, quejosa dentro del expediente al rubro señalado, quien acude a ofrecer copia fotostática certificada de la resolución emitida dentro del Toca Penal 433/2014-I, por el Primer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, de fecha 22 de abril de 2015, por el cual se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de ******, mismas que solicita sean agregadas en autos a fin de que sean valoradas al momento de emitir la resolución que proceda".*

4.1.13. Dictamen médico definitivo de integridad física del C. ****** , de fecha 05 de mayo del dos mil quince, emitido por el M.C. José Humberto Cárdenas de la Plaza, perito Médico Forense adscrito a este Organismo, el cual a la exploración física presentó: dos excoriaciones dermoepidérmicas cicatrizadas la primera de 3 centímetros de longitud y la segunda de 4 centímetros de longitud, paralelas entre si, situadas en región del metacarpo de la mano derecha; excoriación dermoepidérmica de 4 centímetros de longitud situada en tercio inferior de antebrazo izquierdo; dos equimosis circulares de 1 centímetro de diámetro situadas en el tercio inferior de la rodilla derecha; equimosis circular de 1 centímetro de diámetro situada en rodilla izquierda.

4.1.14. Seis impresiones fotográficas tomadas al C. ******, donde aún se le observan algunas lesiones en diferentes partes del cuerpo.

4.1.5. Constancia de fecha 29 de junio de 2015, en la que se asienta que personal de esta Comisión se comunicó vía telefónica a la Agencia Quinta del Ministerio Público Investigador de esta ciudad a fin de conocer el estado actual que guarda la indagatoria previa penal 642/2014, iniciada en contra de elementos de la Policía Estatal Acreditable por el delito de Abuso de Autoridad cometido en agravio de ******, habiéndonos informado que está en TRÁMITE.

De lo anteriormente expuesto se deducen las siguientes

:

C O N C L U S I O N E S

Primera. Este Organismo es competente para conocer la queja planteada por la ********** por tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a servidores públicos estatales, al tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

Segunda. En la presente queja se denunciaron violaciones a los derechos humanos a la libertad e integridad personal agravio ******, imputados a elementos de la Policía Estatal Acreditable.

Tercera. En primer orden analizaremos respecto a la violación al derecho humano a la libertad personal.

Cabe señalar que dicho derecho humano se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 14 y 16; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9; Convención Americana sobre Derechos Humanos, numeral 7, que prevén lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

> **Artículo 1o.**
> En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
> Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 14.
[…]
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.
[…]

Artículo 16.
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
[…]
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.
[…].

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

Artículo 9

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Artículo 7.

Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre

> la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
> 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

En armonía con los anteriores dispositivos legales, se deduce que solo en casos excepcionales y siguiendo los procedimientos establecidos en las leyes, está permitido privar de la libertad a una persona.

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estipulado la necesidad de hacer un examen de varios aspectos de la detención, los cuales son la compatibilidad con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; la idoneidad de la medida; su necesidad, y su proporcionalidad. En concreto, se ha determinado que:

> […] no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan a efecto de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido, entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto; *por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional*, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación

suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención[24].

En el caso que nos ocupa se desprende que si se vulneró el derecho a la libertad personal en perjuicio del señor ******.

Lo anterior toda vez que si bien la autoridad implicada al rendir su informe relativo a los presentes hechos señaló que el aquí agraviado fue detenido en flagrancia delictiva, habiendo relatado en su informe los elementos de la Policía Estatal ******, ******y ******que al ir circulando a bordo de las unidades 493, 494 y 524 de dicha corporación, realizando un rondín de patrullaje y vigilancia por el Boulevard Tamaulipas, observaron un vehículo el cual era tripulado por el hoy quejoso, percatándose que llevaba un arma a un costado del chofer, por lo que de inmediato le hicieron la señal para que detuviera su marcha y proceder a revisar su vehículo y que la C. ****** revisó la unidad del quejoso encontrando en su interior un arma larga de las conocidas como cuerno de chivo, misma que se encontraba abastecida, así como la bolsa de su pantalón se encontró un chip celular de la compañía Telcel, refiriendo que además dicha persona les señaló que trabajaba para un grupo delictivo, por lo que se procedió a su detención.

Contrario a ello, consta lo vertido por el agraviado referente a que se encontraba desempeñando su trabajo de chofer-escolta, recibiendo a las 00:00 horas del día 21 de agosto de 2014, un llamado indicándole que se presentara en Casa de Gobierno por lo que acudió, y un comandante de apellido ******le ordenó que entregara las armas que portaba, para que lo acompañara a un lugar, trasladándose al estacionamiento del fraccionamiento Los Naranjos de esta ciudad, en donde el comandante ****** (encargado del personal) le solicitó los radios y las

[24] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21, párr. 93. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 128, Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 98 y Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187. párr. 62.

llaves que traía, diciéndole que tenía que acompañar a unas personas, y en ese momento fue interceptado por elementos con uniformes de la Policía Estatal Acreditable, con pasamontañas que viajaban en dos patrullas, así como en una camioneta Tahoe blanca, remitiéndolo al campo de tiro en donde lo estuvieron interrogando y golpeándolo, y hasta el siguiente día después de las 13:00 horas que lo presentaron a la Procuraduría General de la República, a disposición del Ministerio Público Federal por el delito de Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército.

Aunado a la versión del agraviado consta lo manifestado por la esposa de éste de nombre ******, quien al efecto relató que no tuvo comunicación en toda la noche del día 20 de agosto de 2014, ya que le enviaba mensajes y éste no los respondía, por lo que a las 8:30 horas del día 21 del mismo mes y año, acudió a la Casa de Gobierno ya que trabajaba como Policía Estatal adscrito a la Casa de Gobierno, observando que se encontraba estacionada su camioneta Ford F-150, retirándose del lugar al considerar que aún estaba trabajando; y que a las 11:30 regresó de nueva cuenta a Casa de Gobierno, percatándose que ya no estaba la camioneta de su esposo en el lugar que la había observado horas antes, y que fue hasta las 17:05 horas que recibió una llamada de la Procuraduría General de la República donde lo comunicaron con él y éste le informó que estaba detenido, pidiéndole que le llevara agua y ropa.

De igual forma, la C. ****** refirió que el 21 de agosto de 2014, acompañada de la C. ****** acudió a casa de Gobierno a fin de buscar a su hermano ******, observando que su camioneta estaba estacionada a un costado de la casa de gobierno, por lo que decidieron no preguntar por él, al estimar que estaba trabajando, y que hasta después de las 5:00 de la tarde de ese día se enteró de que su hermano estaba detenido en la Procuraduría General de la República.

En ese tenor se estima que el dicho del agraviado se encuentra sustentado con lo vertido por las CC. *****, quienes fueron coincidentes en

manifestar que el día 21 de agosto de 2014, la camioneta del aquí agraviado se encontraba estacionada a un costado de Casa de Gobierno, en el estacionamiento destinado a los empleados, por lo que resulta inconcuso lo vertido por la Policía Estatal Acreditable referente a que la detención del señor ****** ocurrió en los primeros minutos de la fecha antes señalada en razón de que el antes referido fue sorprendido circulando por una arteria de esta ciudad, y que en el interior de su vehículo llevaba un arma larga.

Al recabar las declaraciones informativas de los policías estatales que participaron en la detención del hoy quejoso se desprende que ****** y ****** refirieron no recordar mayores datos de los hechos, solamente que detuvieron al hoy quejoso en virtud de que circulaba por la calle 8 y Michoacán, y que portaba un arma larga en su vehículo, el cual era una camioneta roja.

Es de manifestar también que consta en autos que dentro del Toca Penal ******, el Primer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, mediante sentencia de fecha 22 abril de 2015, se revocó el auto de formal prisión dictado en contra de ******, por el ilícito de portación arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, dictando en su lugar, auto de libertad por falta de elementos para procesar al concluir que no se demostraron en su totalidad los elementos del cuerpo de dicho ilícito, por lo que se ordenó la inmediata libertad del procesado, en donde llama la atención de esta Comisión que al valorar las probanzas que obran en autos, refieren que se valoró videograbación de lo ocurrido en la vialidad del día 21 de agosto de 2014, a partir de las 8:00 horas, ello derivado de las cámaras colocadas en avenida Tamaulipas con avenida del Valle, las cuales fueron aportadas por el Director del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en donde concluyen que habiendo analizado las grabaciones de las tres cámaras colocadas en dicho lugar, a partir de las 08:00 horas, hasta las 08:33 horas, no se observó el momento en que los captores efectuaron la detención del inculpado en las circunstancias de modo, tiempo y lugar asentados en el informe policial, así como el hallazgo del arma

asegurada; indicio que al ser adminiculado con la versión del agraviado, relativo a que fue detenido a las 00:00 horas del día 21 de agosto de 2014, así como con lo referido por las CC. ****** y ******, quienes aseguraron haber observado la unidad motriz del agraviado el día 21 de agosto de 2014, aproximadamente a las 8:30 de la mañana de ese día, estacionada a un costado de casa de Gobierno, en el lugar donde estacionan los vehículos de los empleados; por lo que ante tales probanzas se estima que los hechos descritos por los agentes de la Policía Estatal Acreditable en el parte informativo por el cual pusieron a disposición del Ministerio Público Federal al hoy quejoso no se encuentran plenamente demostrados.

Cuarta. Ahora bien, consta en la queja que nos ocupa que el agraviado ****** denunció haber sido violentado físicamente por sus aprehensores, refiriendo que posterior a su captura lo trasladaron a bordo de una de las unidades al campo de tiro antiguas instalaciones de la Policía Estatal Preventiva, en donde lo bajaron de la unidad no sin antes vendarle los ojos con cinta gris y diciéndole: "que cooperara porque de lo contrario lo iba a cargar la chingada", empezando a golpearlo con pies y manos en diferentes partes del cuerpo y lo estuvieron amenazando; que lo ingresaron en unos dormitorios en donde le hicieron desnudarse y posteriormente colocarle un trapo en la nariz y boca en repetidas ocasiones, echándole agua por la nariz y boca, mientras otras dos personas le golpeaban en el cuerpo, lo que hicieron por espacio de dos o tres horas, hasta que lo esposaron en un baño donde lo tiraron en ese lugar y esporádicamente entraban personas y lo golpeaban; que al amanecer le ordenaron que se vistiera y lo llevaron a otro baño de dichas instalaciones en donde lo esposaron en una silla y continuaron golpeándolo hasta las 13:00 horas; que después lo dejaron encerrado en el baño dos horas, llegando un elemento con una voz distinta a los que lo habían agredido quien le informó que ya lo iban a sacar de allí, y lo trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República.

Aunado al dicho del quejoso existe lo narrado por la C. ******, (su esposa) consistente en que a las 17:05 horas del día 21 de agosto de 2014, recibió una llamada de la PGR en donde le comunicaron a su esposo, diciéndole entre otras cosas que estaba detenido, por lo que al acudir a verlo se percató que estaba todo golpeado, observándole la cara hinchada, sus manos en donde también traía unas marcas al parecer de quemaduras, así como que en las piernas tiene varias marcas, que se le complicaba sentarse y se dolía de sus costillas.

De igual forma, consta dictamen médico de fecha 21 de agosto de 2014, efectuado por Perito Médico Forense adscrito a esta Comisión de Derechos Humanos, en el que se asienta que a las 10:50 horas en las instalaciones de la Procuraduría General de la República examinó al señor ******, encontrando que presentaba las siguientes lesiones:

- *Eritema y Edema circunscrito en la región malar y cigomática a la izquierda de la línea media;*
- *2 excoriaciones dermoepidérmicas de 6 y 4 cm de longitud, situadas en la cara anterior tercio medio inferior de antebrazo izquierdo;*
- *Edema consecutivo a presión en cara anterior de la mano izquierda;*
- *Escoriación dermoepidérmica circular, situada en tercio inferior de antebrazo izquierdo;*
- *12 escoriaciones dermoepidérmicas de 8, 6, 4 y 3cm de longitud, situadas en la región lumbar a la izquierda y derecho de la línea media;*
- *Equimosis de 8 cm de diámetro situada en codo izquierdo;*
- *Equimosis situada en el hombro inferior de la rodilla derecha;*
- *Equimosis y excoriación dermoepidérmica de 2 cm de longitud, situada en el bordo inferior de la rodilla izquierda;*
- *Contusión y equimosis en quinto dedo del pie derecho;*
- *Excoriación dermoepidérmica de 3 cm de longitud, situada en la cara anterior tercio inferior de la pierna derecha…".*

Las anteriores probanzas demuestran que el agraviado presentaba alteraciones físicas en su salud, y a fin de pronunciarnos respecto a la responsabilidad de las mismas es de señalar que se cuentan con las siguientes probanzas:

1. Imputación directa del agraviado quien categóricamente atribuyó la autoría de dichas lesiones a los agentes que lo aprehendieron y remitieron a un lugar que identifica como el campo de tiro de esta ciudad, en donde lo estuvieron golpeando.
2. Informe de autoridad (Oficio SSP/DJAIP/SJ/DHM/1152/2014), en el que en lo que aquí interesa se señala literalmente lo siguiente: *"…En cuanto a las lesiones, al realizar la puesta a disposición del C. ******, es requisito indispensable presentar certificado médico para que sea recibido por dicha autoridad, por lo que esta autoridad se deslinda de cualesquiera acto de tortura, lesiones ocurridas después de su entrega a dicha autoridad…".*
3. Declaración informativa del elemento Policial ******, quien al efecto refirió que no recuerda si el detenido opuso resistencia; afirmó que del lugar de la detención se remitió a las instalaciones de la PGR, por lo que desconoce las imputaciones de que fue golpeado y torturado, así como que no recuerda si éste presentaba alguna lesión al momento de su detención.
4. El elemento ****** dijo no recordar los hechos.
5. Y la C. ****** quien participó en la detención adujo es totalmente falso lo señalado por el quejoso de que fue violentado físicamente y trasladado a un lugar distinto posterior a su captura, así como que no recordaba si el detenido presentaba lesiones al momento de su captura, o si éste opuso resistencia al arresto.
6. En el dictamen médico de lesiones practicado al agraviado se asentó que las lesiones que presentaba no son autoinfringidas, así como que son contemporáneas a los hechos y fueron producidas con las manos, pies y objeto contuso sobre el cuerpo de la persona, solicitando el médico forense radiografía de pie derecho para descartar fractura de falanges.

Es de referir que la autoridad implicada no allegó al presente expediente certificado médico alguno realizado al hoy quejoso con motivo de su detención, ya que si bien señalan en su informe que es requisito indispensable certificar a la persona a fin de que sea recibida por la autoridad a quien se le deja a disposición, fue omisa en adjuntar dicha probanza.

De igual forma, analizados los testimonios de los elementos policiales que tuvieron participación en los hechos que nos ocupan, éstos negaron haber infringido lesiones al quejoso, señalando así mismo el policía ****** no recordar los hechos, mientras que los CC. ****** y ******, adujeron no recordar si el detenido opuso resistencia al arresto, así como si presentaba lesiones al momento de su captura.

En ese tenor concluimos que los servidores públicos implicados no justificaron la presencia de lesiones en la humanidad del quejoso, por lo que atendiendo a que los golpes que refirió señor ****** haber recibido cuando estuvo detenido por elementos de la Policía Estatal, son coincidentes con las lesiones asentadas en el dictamen médico realizado a dicha persona por parte de personal profesional de esta Comisión, por lo que estimamos procedente darle valor probatorio preponderante al dicho del agraviado, tomando en cuenta la siguiente tesis jurisprudencial:

> *"…OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACIÓN DEL. Es inatendible el argumento que niega valor probatorio a la declaración del paciente del delito, pues tanto equivaldría a sostener que era innecesario en la investigación judicial, el examen de la víctima de la infracción. En estas condiciones, la prueba de responsabilidad de determinados delitos que, por su naturaleza, se verifican casi siempre en ausencia de testigos, se dificultaría sobremanera, pues de nada serviría que la víctima mencionara el atropello, si no se le concediera crédito alguno a sus palabras. La declaración de un ofendido tiene determinado valor, en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario; por sí sola podrá tener valor secundario, quedando reducido al simple indicio, pero cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción, adquiere validez preponderante.*

Quinta Época:
Amparo directo 7108/37. SusvillaLerín Alberto. 2 de marzo de 1938. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Amparo directo 6771/37. Dorantes García Lauro. 8 de abril de 1938. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Amparo directo 2883/38. Ramos J. Refugio. 13 de julio de 1938. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Amparo directo 7952/39. Márquez Gumersindo. 10 de enero de 1940. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Amparo directo 9132/41. Estrella Felipe. 17 de marzo de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos L. Ángeles. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación. Tomo II. Primera Sala. Primera Parte. Página 129.
Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación. Tomo II. Penal, Jurisprudencia SCJN. Página 163.

Atendiendo a ello, y tomando en cuenta que si bien es cierto los policías implicados negaron haber infringido lesiones al hoy quejoso, también lo es que no demostraron el estado de salud en que se encontraba el mismo al momento de que se puso a disposición del Ministerio Público Federal, y al cuestionárseles a los servidores públicos por parte de personal de esta Comisión cuando rindieron sus declaraciones en torno a los hechos que nos ocupan, señalaron no recordar si el detenido traía lesiones, así como si opuso resistencia a la detención; y por otra parte, el C. ****** no refirió haber sido violentado físicamente en las instalaciones de la Procuraduría General de la República a donde ingresó por la tarde del día 21 de agosto de 2014, obrando el dicho de la quejosa quien señaló que a las 17:05 se enteró de que su esposo estaba detenido en la PGR, por lo que acudió a verlo y se percató que estaba muy golpeado.

En virtud de lo expuesto concluimos que la responsabilidad de dichas lesiones recae sobre los elementos de la Policía Estatal que efectuaron la detención de dicha persona y lo custodiaron hasta que fue puesto a disposición de la autoridad competente, incumpliendo con su obligación de proporcionar resguardo y custodia

efectiva a las personas detenidas, desprendiéndose del dictamen médico realizado respecto a la integridad física de dicha persona que éste presentaba múltiples lesiones, asentándose que las mismas tardaban más de quince días en sanar; es decir no eran lesiones simples; amén de ello obra dictamen médico definitivo de fecha 5 de mayo del presente año, en el que se asienta que el agraviado a la exploración física presentaba lo siguiente:

> *"…Dos excoriaciones dermoepidérmicas cicatrizadas la primera de 3 centímetros de longitud, paralelas entre sí, situadas en región del metacarpo de la mano izquierda;*
> *Excoriación dermoepidérmica de 4 centímetros de longitud situada en tercio inferior de antebrazo izquierdo.*
> *Dos equimosis circulares de 1 centímetro de diámetro situadas en el tercio inferior de la rodilla derecha.*
> *Equimosis circular de 1 centímetro de diámetro situada en rodilla izquierda…".*

Es decir, las lesiones de que se duele el quejoso le fueron producidas por agentes de la Policía Estatal, dejaron huellas en su integridad física, según se desprende del dictamen médico definitivo realizado a dicha persona.

De acuerdo con el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación toda persona privada de su libertad tiene derecho a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, los cuales tienen vigencia independientemente de las conductas que hayan motivado tal privación de la libertad, lo que se deduce del siguiente criterio jurisprudencial:

> Época: Novena Época
> Registro: 163167
> Instancia: Pleno
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
> Tomo XXXIII, Enero de 2011
> Materia(s): Constitucional
> Tesis: P. LXIV/2010
> Página: 26
>
> **DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES**

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos.

Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.
El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LXIV/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.

Adicionalmente, la interpretación del Poder Judicial Federal respecto a la responsabilidad de una autoridad que detiene a una persona también ha señalado:

Época: Décima Época
Registro: 2005682
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: XXI.1o.P.A.4 P (10a.)
Página: 2355

DETENCIÓN DE UNA PERSONA POR LA POLICÍA. CUANDO AQUÉLLA PRESENTA LESIONES EN SU CUERPO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA CONOCER LA CAUSA QUE LAS ORIGINÓ RECAE EN EL ESTADO Y NO EN EL PARTICULAR AFECTADO.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios orientadores en el sentido de que el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia (Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141). Por lo que existe la presunción de considerar responsable al Estado por las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales, si las autoridades no han realizado una investigación seria de los hechos seguida del procesamiento de los que aparezcan como responsables de tales conductas (Caso "Niños de la Calle", Villagrán Morales y otros vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63). Estos criterios dan pauta objetiva para considerar que la carga de la prueba para conocer la causa que originó las lesiones que presenta en su cuerpo una persona que fue detenida por la policía, recae en el Estado y no en los particulares afectados; sobre todo, si a esos criterios se les relaciona directamente con los principios de presunción de inocencia -que implica que el justiciable no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, pues en él no recae la carga de probar su inocencia, sino más bien, es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la responsabilidad del imputado-; y, pro homine o pro personae -que implica efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales del ser humano-.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 144/2013. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretario: Ernesto Fernández Rodríguez.

En tal virtud se concluye que se encuentra acreditada la violación del derecho humano a la integridad personal del agraviado ******, cometido por elementos de la Policía Estatal Acreditable dependientes de la Secretaria de Seguridad Pública; derecho humano que se encuentra protegido por las siguientes disposiciones normativas:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 19.
[…]
Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

Artículo 20.
[…]
A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 7
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Artículo 10
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;
b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.
3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Artículo 5.
Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
(…)

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

Quinta. Del análisis del caso que nos ocupa se deduce que el agraviado fue retenido ilegalmente por elementos de la Policía Estatal Acreditable con motivo de su detención.

Lo anterior considerando la manifestación del C. ******consistente en que fue detenido desde las 00:00 horas del día 21 de agosto de 2014, así como el dicho de la esposa de éste consistente en que durante la noche del 20 de agosto de 2014 y el siguiente día no logró tener comunicación con el aquí agraviado, de quien se enteró hasta las 5:00 p.m. del día 21 de agosto de dicha anualidad que se encontraba privado de su libertad en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, amén de que como quedó establecido en el apartado tercero de conclusiones de esta resolución, no se acreditó de manera plena en autos que la detención del C. ****** se haya llevado a cabo en los términos que señalaron los elementos de la Policía Estatal Acreditable en parte informativo relativo a su detención, nos conlleva a establecer que efectivamente dicha captura ocurrió en los primeros minutos del día 21 de agosto de 2014, y que fue hasta posterior a las 17:00 horas de esa fecha en que dicho detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, según se acredita con la constancia practicada por personal de esta Comisión, en la que se asienta que siendo las 22:10 horas del día 21 de agosto de 2014, se constituyó en las instalaciones de la Agencia Primera del Ministerio Público Federal, entrevistándose con el titular de dicha fiscalía quien sobre a lo que aquí se analiza adujo que el señor ****** le fue puesto a su disposición en el transcurso de la tarde por parte de elementos de la Policía Estatal; con lo que se denota que es falso lo arguído por los elementos policiales que signaron el parte informativo relativo a la detención de dicha persona quienes señalaron que

inmediatamente después de que se llevó a cabo la captura del agraviado, se llevó a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, siendo importante recordar que éstos señalaron que dicha detención ocurrió entre 8:00 y 8:30 horas de esa fecha, por lo que suponiendo sin conceder que si dicha detención se llevó a cabo en los términos que estos señalan, transcurrió tiempo en exceso entre la hora de la detención y la puesta a disposición del mismo, que como se ha señalado ocurrió por la tarde, amén de que consta lo narrado por el agraviado, en su queja presentada ante esta Comisión, misma que conviene traer a colación al advertirse lo siguiente:

> *[…] así mismo continuaron golpeándome a lo que yo les respondí que desconocía todo ese tipo de información ya que mi trabajo no me permitía ya que era todo el día, siguiendo* ***agrediéndome hasta las 13:00 horas y continuando con el mismo tipo de preguntas, dejándome después encerrado en el baño aproximadamente 2 horas, diciéndome un elemento que como me sentía*** *y que si traía golpes internos, deseo señalar que ya no era el mismo tono de voz a los elementos que me torturaron anteriormente,* ***diciéndome dicho elemento que ya me iba a sacar de ahí, al paso de 30 minutos me trasladaron a las instalaciones de la PGR poniéndome a disposición ante el Agente del Ministerio Público*** *por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército […]*

Es decir la narrativa expuesta por el quejoso coincide con la hora en que refiere la quejosa que recibió una llamada telefónica por parte de la Procuraduría General de la República en donde se enteró que su esposo estaba detenido, la cual ocurrió alrededor de las 17:00 horas.

Por ello se estima irregular la actuación de los elementos de la Policía Estatal Acreditable, misma que es violatoria del derecho a la seguridad jurídica y legalidad que le asiste a la quejosa, contenidos en los artículos 1º, 14, párrafo segundo, así como 16, párrafos primero y quinto, y 20,de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 9, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9.1 y 9.3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 9, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; I y XXV, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así

como, 4 y 11.1, del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, los cuales establecen que toda persona detenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales.

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada 1ª. CLXXV/2013 (10ª); de la Décima Época; número de registro 2003545; emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Materias, Constitucional, Penal; página 535, la cual señala:

> DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO.
>
> *ELEMENTOS QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR EL JUZGADOR A FIN DE DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN. El derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, se encuentra consagrado en el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que señala que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Asimismo, dicha disposición señala que debe existir un registro inmediato de la detención. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es necesario señalar, en primer término, que el análisis en esta materia debe partir de la imposibilidad de establecer reglas temporales específicas. Por el contrario, resulta necesario determinar, caso por caso, si se ha producido o no una vulneración del derecho reconocido a la persona detenida. Así las cosas, se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Tales motivos razonables únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos. Además, estos motivos deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades. Lo anterior implica que los agentes de policía no pueden retener a una*

persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a disposición, donde deben desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes e inmediatas, que permitan definir su situación jurídica -de la cual depende su restricción temporal de la libertad personal-. La policía no puede simplemente retener a un individuo con la finalidad de obtener su confesión o información relacionada con la investigación que realiza, para inculparlo a él o a otras personas. Este mandato es la mayor garantía de los individuos en contra de aquellas acciones de la policía que se encuentran fuera de los cauces legales y que están destinadas a presionar o a influir en el detenido, en un contexto que le resulta totalmente adverso. En esta lógica, el órgano judicial de control deberá realizar un examen estricto de las circunstancias que acompañan al caso, desechando cualquier justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de la verdad o en la debida integración del material probatorio y, más aún, aquellas que resultan inadmisibles a los valores subyacentes en un sistema democrático, como serían la presión física o psicológica al detenido a fin de que acepte su responsabilidad o la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la investigación, entre otras.

Dicha conducta violatoria de derechos humanos, constituye igualmente una desobediencia a las obligaciones y principios con que deben conducirse los elementos de las corporaciones policiales, de acuerdo a lo siguiente:

Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas.

"Artículo 18. *Son obligaciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública:*
I. Conducirse con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución;
XXXVII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Se reitera que esta Comisión de Derechos Humanos reconoce las labores de prevención, investigación y persecución de delitos por parte de las autoridades, empero, consideramos que es elemental que con motivo de tales funciones, sean respetados los derechos humanos, por lo que se hace patente la

necesidad de que los elementos de las corporaciones policiacas cumplan con el deber jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas e investigar con los medios a su alcance los ilícitos que se cometen en el ámbito de su competencia, a fin de identificar a los responsables y lograr que se les impongan las sanciones legales correspondientes.

En razón de las consideraciones asentadas en esta resolución, se reconoce la calidad de víctima al C. ******, atento a lo señalado por el artículo 110 fracción III inciso c) de la Ley General de Víctimas; en consecuencia y toda vez que el tercer párrafo del artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Estado Mexicano la obligación de prevenir las violaciones de derechos humanos, y de ejercer las acciones de investigación, sanción y reparación de éstas.

Así también en el ámbito local, la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Tamaulipas, en el capítulo relativo a la Reparación Integral del Daño, establece que se deben comprender los siguientes aspectos:

> **I.**La restitución que busque devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus Derechos Humanos;
>
> **II.** La rehabilitación que facilite a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de Derechos Humanos;
>
> **III.** La indemnización o compensación que se otorgue a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de Derechos Humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de Derechos Humanos;
>
> **IV.** La satisfacción que reconozca y restablezca la dignidad de las víctimas; y
>
> **V.** Las medidas de no repetición que persigan la no reiteración del hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima.

En tal virtud y con fundamento además en los artículos 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Fracción II, 42, 43, 48 y 49 de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este Organismo, así como los numerales 63 fracción V, del Reglamento Interno, es procedente emitir al Secretario de Seguridad Pública como superior jerárquico de los elementos de la Policía Estatal Acreditable por haber violentado los derechos humanos a la integridad y libertad personal del C. ******, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA: Se provea lo necesario para resarcirle los daños y perjuicios que en su caso le correspondan al agraviado ******.

SEGUNDA: Se implemente capacitación en materia de detenciones a todos los elementos policiales que se encuentran bajo su mando.

TERCERA: Ordene a quien corresponda se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias a que haya lugar en contra de los elementos policiales responsables de las violaciones a derechos humanos aquí destacadas, cometidas en perjuicio del C. ******.

De conformidad con el artículo 49 de la Ley de esta Comisión, es procedente requerir a la autoridad recomendada para que, dentro de un plazo de diez días hábiles, informen sobre la aceptación de esta recomendación y, en su caso, remitan dentro de los quince días siguientes las pruebas relativas a su cumplimiento.

Dése VISTA de la presente resolución al C. Procurador General de Justicia del Estado, solicitándole que gire instrucciones a la Agencia Quinta del Ministerio Público Investigador de esta ciudad, a fin de que se brinde el trámite

correspondiente a la averiguación previa penal número *****, instaurada con motivo de la vista que diera este Organismo de los hechos denunciados por la quejosa, y que a la brevedad posible se emita la determinación ministerial que conforme a derecho proceda.

Igualmente, se ordena dar VISTA a la Dirección General del Instituto de Atención a Víctimas del Delito de la presente resolución, para que de acuerdo a su competencia se proceda conforme a lo establecido en la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Tamaulipas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma establecida.

Así lo formuló y firma el C. Doctor José Martín García Martínez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, en términos de los artículos 22 fracción VII de la Ley que nos rige, así como 23 fracción VII y 69 fracción V de su Reglamento Interno.

Dr. José Martín García Martínez
Presidente

Proyectó

Lic. María Guadalupe Uriegas Ortiz
Visitadora Adjunta

L'MGUO/mlbm.
Queja núm. 285/2014.